CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ESPERANZA AGUIRRE
GIL DE BIEDMA

Sesión del Pleno

celebrada el miércoles, 15 de noviembre de 2000

ORDEN DEL DÍA

Primero

Preguntas:

- De D. JOSÉ CASTRO RABADÁN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la justificación del retraso en la disponibilidad de las inversiones para el Año Europeo de la Cultura de 2002, en la ciudad de Salamanca (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 91, de fecha 13 de noviembre de 2000)(Número de expediente 680/000166).
- De D. CÉSAR AJA MARIÑO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas que tiene en estudio el Gobierno para fomentar la formación profesional (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 91, de fecha 13 de noviembre de 2000) (Número de expediente 680/000172).
- De D. AGUSTÍN DÍAZ DE MERA Y GARCÍA CONSUEGRA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las principales actuaciones del Plan de Impulso de Bibliotecas Públicas Españolas (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 91, de fecha 13 de noviembre de 2000) (Número de expediente 680/000175).
- De Dña. MARÍA ISABEL FLORES FERNÁNDEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si ratifica el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación su afirmación acerca de que hay que utilizar el regadío como a las mujeres (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 91, de fecha 13 de noviembre de 2000) (Número de expediente 680/000170).

- De D. FRANCISCO GRANERO GRANADOS, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración que hace el Gobierno del proyecto de reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) de azúcar, recientemente presentado por la Comisión Europea (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 91, de fecha 13 de noviembre de 2000) (Número de expediente 680/000173).
- De Dña. JUANA BORREGO IZQUIERDO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la fecha prevista para el comienzo de las actuaciones de las sociedades estatales del riego (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 91, de fecha 13 de noviembre de 2000) (Número de expediente 680/000176).
- De D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si tiene constancia el Gobierno de la compraventa de textos de exámenes de ascensos en la Guardia Civil (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 91, de fecha 13 de noviembre de 2000) (Número de expediente 680/000168).
- De D. DIMAS MARTÍN MARTÍN, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las previsiones del Gobierno acerca del cumplimiento de la solicitud del Gobierno de Canarias para que se proponga a la Comisión Europea que se incluyan como puestos de inspección fronteriza los puertos de las islas de Lanzarote (Las Palmas) y La Palma (Santa Cruz de Tenerife), con el fin de que funcionarios del Estado puedan ejercer las labores de inspección en los mismos (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 91, de fecha 13 de noviembre de 2000) (Número de expediente 680/000160).
- De D. JOSÉ IGNACIO PÉREZ SÁENZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si coincide el Gobierno con las conclusiones del Informe de Comunidades Autónomas 1999, del Instituto de Derecho Público, relativas a la paralización del Estado autonómico (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 91, de fecha 13 de noviembre de 2000) (Número de expediente 680/000169).
- De D. VICENT BEGUER I OLIVERES, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la fecha prevista para realizar las obras de derribo del puente sobre el torrente del Lluch, en El Vendrell (Tarragona) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 91, de fecha 13 de noviembre de 2000) (Número de expediente 680/000161).
- De D. JOSÉ LUIS PERESTELO RODRÍGUEZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la vigilancia de la actividad sísmica y volcánica en la isla de La Palma (Santa Cruz de Tenerife) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 91, de fecha 13 de noviembre de 2000) (Número de expediente 680/000162).
- De D. ARTURO GONZÁLEZ LÓPEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si tiene previsto el Gobierno alguna modificación en el proyecto actual del tramo de la autopista de peaje A-6 correspondiente a la provincia de Segovia, para evitar posibles conflictos y procesos judiciales (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 91, de fecha 13 de noviembre de 2000) (Número de expediente 680/000165).
- De Dña. INMACULADA LOROÑO ORMAECHEA, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las previsiones del Gobierno de dotar a los Consejos de Residentes Españoles en el Extranjero de una partida económica específica, en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001, que permitan abordar los correspondientes procesos electorales (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 91, de fecha 13 de noviembre de 2000) (Número de expediente 680/000147).
- De D. FROILÁN GERMÁN RODRÍGUEZ DÍAZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre los planes del Gobierno con respecto a las peticiones formuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y el Consejo General del Poder Judicial en relación con las necesidades judiciales de la isla de Gran Canaria (Las Palmas) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 91, de fecha 13 de noviembre de 2000) (Número de expediente 680/000163).
- De D. JERÓNIMO SAAVEDRA ACEVEDO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones que han llevado al Gobierno a desautorizar la fusión de las empresas de transporte regular Utinsa y Salcai en la isla de Gran Canaria (Las Palmas) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 91, de fecha 13 de noviembre de 2000) (Número de expediente 680/000167).
- De D. AMADOR VÁZQUEZ VÁZQUEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las actuaciones que se están realizando o está previsto realizar por la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE), en relación con los terrenos que posee la empresa en el apeadero de San Francisco en Ourense, en

los que la Junta de Galicia quiere construir el nuevo colegio público Hermanos Villar (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 91, de fecha 13 de noviembre de 2000) (Número de expediente 680/000171).

- De D. MANUEL ARQUEROS OROZCO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la medida en que puede verse afectado el contingente español desplazado a Kosovo, ante la nueva situación política de Yugoslavia tras las recientes elecciones presidenciales (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 91, de fecha 13 de noviembre de 2000) (Número de expediente 680/000174).
- De D. CARLES JOSEP BONET I REVÉS, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre los planes del Ministerio de Fomento en relación al trazado de la línea férrea y las estaciones del tren de alta velocidad (AVE), a su paso por la Comunidad Autónoma de Cataluña (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 91, de fecha 13 de noviembre de 2000) (Número de expediente 680/000164).

Segundo

Interpelaciones:

- De D. RICARDO GATZAGAETXEBARRÍA BASTIDA, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre la política que va a desarrollar el Gobierno en relación con la actualización, modernización y codificación del Derecho Marítimo Español para adaptarlo a la realidad y necesidades actuales de la navegación marítima (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 91, de fecha 13 de noviembre de 2000) (Número de expediente 670/000026).
- De D. RAMÓN ESPASA I OLIVER, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre la política que piensa adoptar el Gobierno para asegurar que la información genética no pueda ser utilizada en menoscabar la intimidad y dignidad de los ciudadanos españoles, y disminuir su autónoma capacidad relacional y contractual ante cualquier entidad privada o pública (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 91, de fecha 13 de noviembre de 2000) (Número de expediente 670/000032).
- De D. JOAN LERMA BLASCO, del Grupo Parlamentario Socialista, con el fin de que el Gobierno corrija su política en relación con los contratos temporales (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 91, de fecha 13 de noviembre de 2000) (Número de expediente 670/000029).
- De D. JOSÉ CARRACAO GUTIÉRREZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las definiciones de la política hidráulica del Gobierno ejemplificada en el fracaso de aquella que afecta a la regulación del río Guadiaro y de sus afluentes, así como en los proyectos previstos para la cuenca cedente en la Ley del Traspase del río Guadiaro al Guadalete (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 91, de fecha 13 de noviembre de 2000) (Número de expediente 670/000034).
- De D. ANXO MANUEL QUINTANA GONZÁLEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas diseñadas por el Gobierno para dar cumplimiento al Plan de Fomento de las Energías Renovables (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 91, de fecha 13 de noviembre de 2000) (Número de expediente 670/000031).

Tercero

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

- Dictamen de la Comisión de Hacienda en relación con el Proyecto de Ley por el que se aprueban medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa (procedente del Real Decreto-Ley 3/2000, de 23 de junio). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 2, de fecha 13 de noviembre de 2000) (Número de expediente S. 621/000002) (Número de expediente C. D. 121/000004).

SUMARIO

Se abre la sesión a las nueve horas y cuarenta y cinco minutos.

PREGUNTAS Página
940

De D. JOSÉ CASTRO RABADÁN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la justificación del retraso en la disponibilidad de las inversiones para el Año Europeo de la Cultura de 2002, en la ciudad de Salamanca 940

El señor Castro Rabadán formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Castro Rabadán. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera).

De D. CÉSAR AJA MARIÑO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas que tiene en estudio el Gobierno para fomentar la formación profesional 941

El señor Aja Mariño formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Aja Mariño.

De D. AGUSTÍN DÍAZ DE MERA Y GARCÍA CONSUEGRA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las principales actuaciones del Plan de Impulso de Bibliotecas Públicas Españolas 942

El señor Díaz de Mera y García Consuegra formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Díaz de Mera y García Consuegra.

De Dña. MARÍA ISABEL FLORES FERNÁNDEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si ratifica el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación su afirmación acerca de que hay que utilizar el regadío como a las mujeres 943

La señora Flores Fernández formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Flores Fernández. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete).

De D. FRANCISCO GRANERO GRANADOS, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración que hace el Gobierno del proyecto de reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) de azúcar, recientemente presentado por la Comisión Europea. 945

El señor Granero Granados formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Granero Granados.

De Dña. JUANA BORREGO IZQUIERDO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la fecha prevista para el comienzo de las actuaciones de las sociedades estatales del riego 946

La señora Borrego Izquierdo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete).

De D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si tiene constancia el Gobierno de la compraventa de textos de exámenes de ascensos en la Guardia Civil. 947

El señor Barranco Gallardo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el el señor Ministro del Interior (Mayor Oreja). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Barranco Gallardo. En turno de dúplica, lo hace el el señor Ministro del Interior (Mayor Oreja).

De D. DIMAS MARTÍN MARTÍN, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las previsiones del Gobierno acerca del cumplimiento de la solicitud del Gobierno de Canarias para que se proponga a la Comisión Europea que se incluyan como puestos de inspección fronteriza los puertos de las islas de Lanzarote (Las Palmas)

<p>y La Palma (Santa Cruz de Tenerife), con el fin de que funcionarios del Estado puedan ejercer las labores de inspección en los mismos 948</p>	<p>Página</p>	<p><i>El señor Rodríguez Díaz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el el señor Ministro de Justicia (Acebes Paniagua). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Rodríguez Díaz. En turno de dúplica, lo hace el el señor Ministro de Justicia (Acebes Paniagua).</i></p>
<p><i>El señor Martín Martín formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Administraciones Públicas (Posada Moreno). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Martín Martín. En turno de dúplica, lo hace el el señor Ministro de Administraciones Públicas (Posada Moreno).</i></p>		
<p>De D. JOSÉ IGNACIO PÉREZ SÁENZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si coincide el Gobierno con las conclusiones del Informe de Comunidades Autónomas 1999, del Instituto de Derecho Público, relativas a la paralización del Estado autonómico 949</p>	<p>Página</p>	<p>De D. JERÓNIMO SAAVEDRA ACEVEDO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones que han llevado al Gobierno a desautorizar la fusión de las empresas de transporte regular Utinsa y Salcai en la isla de Gran Canaria (Las Palmas).</p> <p><i>Esta pregunta ha sido aplazada.</i></p> <p>De D. AMADOR VÁZQUEZ VÁZQUEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las actuaciones que se están realizando o está previsto realizar por la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE), en relación con los terrenos que posee la empresa en el apeadero de San Francisco en Ourense, en los que la Junta de Galicia quiere construir el nuevo colegio público Hermanos Villar.</p> <p><i>Esta pregunta ha sido retirada.</i></p> <p>De D. MANUEL ARQUEROS OROZCO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la medida en que puede verse afectado el contingente español desplazado a Kosovo, ante la nueva situación política de Yugoslavia tras las recientes elecciones presidenciales.</p> <p><i>Esta pregunta ha sido retirada.</i></p>
<p><i>El señor Pérez Sáenz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Administraciones Públicas (Posada Moreno). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Pérez Sáenz. En turno de dúplica, lo hace el el señor Ministro de Administraciones Públicas (Posada Moreno).</i></p>		
<p>De Dña. INMACULADA LOROÑO ORMAECHEA, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las previsiones del Gobierno de dotar a los Consejos de Residentes Españoles en el Extranjero de una partida económica específica, en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001, que permitan abordar los correspondientes procesos electorales 951</p>	<p>Página</p>	<p>De D. RICARDO GATZAGAETXE-BARRÍA BASTIDA, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre la política que va a desarrollar el Gobierno en relación con la actualización, modernización y codificación del Derecho Marítimo Español para adaptarlo a la realidad y necesidades actuales de la navegación marítima 954</p> <p><i>El señor Gatzagaetxebarría Bastida realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Justicia (Acebes Paniagua). Vuelve a intervenir el señor interpelante. En turno de portavoz</i></p>
<p><i>La señora Loroño Ormaechea formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio Pérez). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Loroño Ormaechea. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio Pérez).</i></p>		
<p>De D. FROILÁN GERMÁN RODRÍGUEZ DÍAZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre los planes del Gobierno con respecto a las peticiones formuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y el Consejo General del Poder Judicial en relación con las necesidades judiciales de la isla de Gran Canaria (Las Palmas) 952</p>	<p>Página</p>	<p>INTERPELACIONES 954</p>

ces, hacen uso de la palabra los señores Arroyo Hodgson, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Ganyet Solé por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Capdevila i Bas, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; González Príncipe, por el Grupo Socialista y la señora España Moya, por el Grupo Popular. Cierra el debate el señor Ministro de Justicia (Acebes Paniagua).

Página

De D. RAMÓN ESPASA I OLIVER, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre la política que piensa adoptar el Gobierno para asegurar que la información genética no pueda ser utilizada en menoscabar la intimidad y dignidad de los ciudadanos españoles, y disminuir su autónoma capacidad relacional y contractual ante cualquier entidad privada o pública 962

El señor Espasa Oliver realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Justicia (Acebes Paniagua). Vuelve a intervenir el señor interpelante. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Ríos Pérez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Cardona i Vila, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; López Carvajal, por el Grupo Socialista, y Bellido Muñoz, por el Grupo Popular. Cierra el debate el señor Ministro de Justicia (Acebes Paniagua).

Página

PREGUNTAS (Continuación) 971

Página

De D. VICENT BEGUER I OLIVERES, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la fecha prevista para realizar las obras de derribo del puente sobre el torrente del Lluch, en El Vendrell (Tarragona) 971

El señor Beguer i Oliveres formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Álvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Beguer i Oliveres. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Álvarez-Cascos Fernández).

Página

De D. JOSÉ LUIS PERESTELO RODRÍGUEZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la vigilancia de la actividad sísmica y volcánica en la isla de La Palma (Santa Cruz de Tenerife) 972

El señor Perestelo Rodríguez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Fomento (Álvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Perestelo Rodríguez. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Álvarez-Cascos Fernández).

De D. CARLES JOSEP BONET I REVÉS, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre los planes del Ministerio de Fomento en relación al trazado de la línea férrea y las estaciones del tren de alta velocidad (AVE), a su paso por la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Esta pregunta ha sido retirada.

Página

De D. ARTURO GONZÁLEZ LÓPEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si tiene previsto el Gobierno alguna modificación en el proyecto actual del tramo de la autopista de peaje A-6 correspondiente a la provincia de Segovia, para evitar posibles conflictos y procesos judiciales 974

El señor González López formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Álvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor González López. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Álvarez-Cascos Fernández).

Página

IINTERPELACIONES (Continuación) 976

Página

De D. JOAN LERMA BLASCO, del Grupo Parlamentario Socialista, con el fin de que el Gobierno corrija su política en relación con los contratos temporales 976

El señor Lerma Blasco realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio Pérez). Vuelve a intervenir el señor interpelante. Asimismo lo hace el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio Pérez). En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cámara Fernández, por el Grupo Mixto; Rodríguez Díaz, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Aurrekoetxea Bergara, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Molas i Batllori, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Servià i Costa, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Lerma Blasco, por el Grupo Socialista, así como la señora Do Campo

Piñeiro, por el Grupo Popular. Cierra el debate el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio Pérez).

Se suspende la sesión a las quince horas.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.

Página

De D. JOSÉ CARRACAO GUTIÉRREZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las definiciones de la política hidráulica del Gobierno ejemplificada en el fracaso de aquella que afecta a la regulación del río Guadiaro y de sus afluentes, así como en los proyectos previstos para la cuenca cedente en la Ley del Tránsito del río Guadiaro al Guadalete 987

El señor Carracao Gutiérrez realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou). En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Ganyet Solé, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Servià i Costa, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Carracao Gutiérrez, por el Grupo Socialista, así como la señora González Rodríguez, por el Grupo Popular. Cierra el debate el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou).

Página

De D. ANXO MANUEL QUINTANA GONZÁLEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas diseñadas por el Gobierno para dar cumplimiento al Plan de Fomento de las Energías Renovables 994

El señor Quintana González realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma la señora Ministra de Ciencia y Tecnología (Birulés Bertrán). Vuelve a intervenir el señor interpelante. Asimismo lo hace la señora Ministra de Ciencia y Tecnología (Birulés Bertrán). En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Rodríguez Díaz, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Albistur Marin, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Aleu i Jornet, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Marimon i Sabaté, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Romero Calero, por el Grupo Socialista, y Rodado Fernández, por el Grupo Popular. Cierra el debate la señora Ministra de Ciencia y Tecnología (Birulés Bertrán).

Página

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 1005

Página

Dictamen de la Comisión de Hacienda en relación con el Proyecto de Ley por el que se aprueban medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa (procedente del Real Decreto-Ley 3/2000, de 23 de junio). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA 1005

Se abre debate de totalidad.

No se hace uso del turno a favor. El señor Lerma Blasco consume un turno en contra. No se consume el turno de portavoces.

Comienza el debate del articulado.

El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 22 a 58, presentadas por él mismo y el señor Cabrero Palomares. El señor Quintana González, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 12 a 21. El señor Albistur Marin defiende las enmiendas números 1 a 3, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Gibert i Bosch defiende una propuesta de modificación del dictamen, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Cambra i Sánchez defiende las enmiendas números 59 a 86, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Lerma Blasco defiende las enmiendas números 87 a 104, del Grupo Socialista. El señor Sánchez Sánchez-Seco defiende la enmienda número 121, del Grupo Popular, a la vez que consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Albistur Marin, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Gibert i Bosch, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Lerma Blasco, por el Grupo Socialista, y Sánchez Sánchez-Seco, por el Grupo Popular.

Se procede a votar.

Se rechazan las enmiendas números 12 a 21, del Grupo Mixto, por 9 votos a favor, 130 en contra y 50 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 22 a 58, del Grupo Mixto, por 3 votos a favor, 129 en contra y 58 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 1 a 3, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 57 votos a favor, 124 en contra y 9 abstenciones.

Se rechaza la propuesta de modificación del dictamen con relación al artículo 11, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 58 votos a favor y 131 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 61, 64, 68, 69, 77, 83 y 85, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 59 votos a favor, 124 en contra y 9 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 67, 79, 80, 84 y 86, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 6 votos a favor, 124 en contra y 62 abstenciones.

Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió por 7 votos a favor, 176 en contra y 9 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 96, 98, 100, 101, 102 y 104, del Grupo Socialista, por 58 votos a favor, 131 en contra y 3 abstenciones.

Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Socialista por 59 votos a favor, 124 en contra y 8 abstenciones.

Se aprueba la enmienda número 121, del Grupo Popular, por 129 votos a favor y 62 en contra.

Se aprueba el texto del dictamen, con la incorporación de la enmienda del Grupo Popular, por 128 votos a favor, 56 en contra y 7 abstenciones.

La señora Presidenta anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.

Se suspende la sesión a las veintiuna horas.

Se abre la sesión a las nueve horas y cuarenta y cinco minutos.

La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.

PREGUNTAS:

— DE DON JOSÉ CASTRO RABADÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA JUSTIFICACIÓN DEL RETRASO EN LA DISPONIBILIDAD DE LAS INVERSIONES PARA EL AÑO EUROPEO DE LA CULTURA DE 2002, EN LA CIUDAD DE SALAMANCA (680/000166).

La señora PRESIDENTA: Punto Primero. Preguntas. Las preguntas del señor Vázquez Vázquez y del señor Arquerros Orozco han sido retiradas.

La pregunta del Senador Saavedra ha sido aplazada.

La primera pregunta es del excelentísimo señor don José Castro Rabadán, del Grupo Parlamentario Socialista: ¿Cómo justifica el Gobierno el retraso en la disponibilidad

de las inversiones para el Año Europeo de la Cultura de 2002, en la ciudad de Salamanca?

Tiene la palabra el Senador Castro Rabadán.

El señor CASTRO RABADÁN: Muchas gracias, señora Presidenta.

Queda reproducida la pregunta en los términos expuestos por la señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Castro.

Tiene la palabra la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Muchas gracias, señora Presidenta.

Señoría, no me consta que haya ningún retraso en la disponibilidad de las inversiones para la capitalidad cultural europea de Salamanca para el año 2002. Como seguramente sabrá su señoría, el pasado 8 de noviembre el Ayuntamiento de Salamanca y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte han firmado un convenio diseñando los compromisos de inversión de mi Departamento en este proyecto, y, con independencia de la subvención nominativa de 100 millones de pesetas otorgada al Consorcio de Salamanca 2000, en los Presupuestos Generales del Estado del año 2000, subvención vigente que se dirige a sufragar actividades, no inversiones, los compromisos de mi Departamento que figuran en el convenio con el Ayuntamiento de Salamanca se ejecutarán los años 2001 y 2002. En este sentido, las cantidades correspondientes al año 2001 figuran en el presupuesto del próximo año, por lo que a mí me parece que no hay razones para afirmar que exista algún tipo de retraso.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.

Tiene la palabra el Senador Castro Rabadán.

El señor CASTRO RABADÁN: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señora Ministra, hace cerca de dos años Salamanca fue designada como capital cultural europea para el año 2002. La Ministra de Cultura, hoy Presidenta del Senado, aquí presente, ya prometió ante la prensa en Salamanca, en el año 1998, que ese mismo año se suscribiría un convenio y se cuantificaría la aportación del Gobierno, y dos años después, el 11 de enero pasado, el Gobierno anunció su intención de asumir el 60 por ciento de las inversiones culturales para el año 2002.

Es cierto que el convenio se firmó el 8 de noviembre, es decir, hace cuatro días; el ayuntamiento envió el convenio firmado a vuelta de correo, y ustedes dicen que lo han ratificado el día 8. Dicho convenio debe garantizar el presupuesto de las inversiones para el Centro de Artes Escénicas, para el Centro de Arte y para el edificio de multiusos, así como otras edificaciones menores, como el Colegio de Santo Domingo y el Parque Arqueológico de San Vicente, por un total de 3.600 millones, según constaba en el borrador. El retraso que existe en la tramitación del convenio ha

quebrado todas las previsiones y plazos de las obras que ya debían haber comenzado en el mes de junio, y así se anunció en la prensa con grandes titulares.

Las obras de infraestructuras mencionadas son clave para garantizar el éxito de la programación del 2002, cuya elaboración se ve cada vez más condicionada por el retraso. El desinterés mostrado por el Gobierno durante dos años en la tramitación de este tema, se une a la desidia del Ayuntamiento de Salamanca, que roza la abulia por lo público, lo que hace saltar por los aires las previsiones más optimistas que confiaban en comenzar las obras en el mes de junio del año 2000.

A medida que pasa el tiempo, parece cada vez más difícil que la ciudad de Salamanca pueda tener a punto los nuevos contenidos culturales para la capitalidad cultural del 2002, las obras llevan un tiempo, porque se ha calculado que se alargarán en el tiempo unos meses. La imposibilidad de conocer el inicio y conclusión de las obras de los nuevos inmuebles culturales hace muy difícil al consorcio cerrar los contratos para las actividades concretas a realizar, así como conocer qué artistas deben participar. Todo esto está retrasado y paralizado.

A pesar de que el 6 de octubre el Consejo de Ministros dio el visto bueno a la inversión de Salamanca en 2.607 millones, ratificado luego por el convenio, las obras no comenzadas no se terminarán en principio, y así ha sido anunciado ya por el señor alcalde, hasta más allá del segundo semestre del 2002. Y yo me pregunto ¿Cómo se va a realizar el año cultural europeo en España y en Salamanca?

Por otra parte, no se conocen aún los, reglamentos que deben regular los beneficios fiscales para las inversiones privadas culturales que se aprobarán en diciembre de 1999 en esta Cámara. Se aprobó la posibilidad de incentivos fiscales a las inversiones y todavía los reglamentos no se han publicado y no se conocen. Todo esto demuestra la desidia y el abandono de la política cultural en general, y en este caso en particular, que el Gobierno sigue respecto a Salamanca.

Señora Ministra, las actuaciones sobre las infraestructuras culturales para la celebración de la capitalidad europea en Salamanca están hipotecadas. No obstante esperamos aún que el Gobierno evite el fracaso que se cierne, pues ésta es una crónica ya anunciada, no por mí sino todos los días los titulares de prensa de la ciudad de Salamanca, y aunque algunos hagan actos de fe, yo creo que no son avales para la política.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Castro.

Tiene la palabra la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Muchas gracias, señora Presidenta.

Señoría, yo estoy convencida de que Salamanca va a afrontar este evento de capital de la cultura europea no sólo

a tiempo sino con esplendor. Es frecuente, y yo no conozco ninguna situación similar, exposición, exhibición, año o acontecimiento de cualquier carácter que se haya afrontado en otras capitales en los que no haya habido muy frecuentemente problemas de este tipo, y al final se han resuelto y bien. Estoy convencida de que finalmente Salamanca va a poder afrontar este evento no sólo bien, sino con esplendor, y para ello están puestos los medios, y no vamos a hablar ahora de problemas de gestión, en cuyo detalle no podríamos entrar.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.

— DE DON CÉSAR AJA MARIÑO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE TIENE EN ESTUDIO EL GOBIERNO PARA FOMENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL (680/000172).

La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don César Aja Mariño, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas que tiene en estudio el Gobierno para el fomento de la formación profesional.

Tiene la palabra el Senador Aja Mariño.

El señor AJA MARIÑO: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señora Ministra, ¿qué medidas tiene en estudio el Gobierno para fomentar la formación profesional?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

Tiene la palabra la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Muchas gracias, señora Presidenta.

Señoría, el Ministerio tiene el objetivo de dar a la Formación Profesional un impulso decisivo para situarla en el lugar que le corresponde en esta sociedad del conocimiento que se va conformando. En este sentido, vamos a hacer todo lo necesario para desterrar definitivamente la idea de que optar por la Formación Profesional equivale a una declaración de incapacidad para cursar estudios superiores, sentimiento que con frecuencia tienen las familias y los jóvenes implicados.

En consecuencia, uno de nuestros propósitos en esta legislatura —y adelanto que el cumplimiento de este objetivo está previsto para la primavera del próximo año— es enviar a las Cortes Generales un proyecto de ley de Formación Profesional que regule todos los aspectos que afectan al sistema de formación y cualificación profesional; es uno de los objetivos más importantes propuestos por el Ministerio en materia educativa para esta legislatura. Realmente, es un tema pendiente y existe una enorme demanda por parte de todos los sectores sociales y económicos, ade-

más de las propias familias, para que se le dé una nueva orientación y consigamos tener una Formación Profesional a la altura que exigen los niveles actuales de desarrollo económico y social de nuestro país.

Los objetivos de esta futura ley son, de manera muy sintetizada, los siguientes. Articular e integrar eficazmente las necesidades del mercado de trabajo con las ofertas de formación y facilitar el acceso y la movilidad en el mercado de trabajo a todos, tanto desde la formación como desde la experiencia laboral. Asimismo, dicho proyecto establecerá las bases que permitan hacer efectiva la integración de los tres subsistemas de la Formación Profesional: la específica, la ocupacional y la continua. Esto tiene una importancia extraordinaria y hay que hacerlo tal y como se concibe en el Programa nacional de Formación Profesional aprobado por el Gobierno el 13 de marzo de 1998.

La meta, en definitiva, es conseguir una mejor inserción laboral de los jóvenes y una recualificación permanente de los trabajadores en activo, lo cual favorecerá la movilidad laboral. Pero también es importante establecer los requisitos para el registro de las cualificaciones: tipo de título, certificado profesional, certificado de competencia, etcétera, aspecto que en estos momentos atraviesa una situación de difícil gestión.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra. El Senador Aja tiene la palabra.

El señor AJA MARIÑO: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señora Ministra, me alegra que por fin se adopten medidas que den solución a la demanda que la sociedad de hoy exige a la Formación Profesional.

No voy a entrar a debatir aquí las grandes lagunas que hoy padece la Formación Profesional, pero sí quiero concluir diciendo que es indispensable una reforma importante en este campo; reforma que, tanto el colectivo educativo como el laboral, le agradecerá.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

— DE DON AGUSTÍN DÍAZ DE MERA Y GARCÍA CONSUEGRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES DEL PLAN DE IMPULSO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS ESPAÑOLAS (680/000175).

La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Agustín Díaz de Mera y García Consuegra, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las principales actuaciones del Plan de impulso de bibliotecas públicas españolas.

Tiene la palabra el Senador Díaz de Mera y García Consuegra.

El señor DÍAZ DE MERA Y GARCÍA CONSUEGRA: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señora Ministra, el Presidente del Gobierno en la presentación de la iniciativa estratégica del Gobierno para el desarrollo de la sociedad de la información, Info XXI, fijó los objetivos básicos para garantizar el derecho de todos los ciudadanos a acceder a Internet y a las tecnologías de la información y comunicación sin discriminaciones de ningún tipo.

Por otra parte, el Plan de Impulso de Bibliotecas Públicas se orienta a la vertebración de un espacio bibliotecario nacional que integre los sistemas bibliotecarios autonómicos y que esté vinculado con el sector bibliotecario internacional. Además, el Parlamento Europeo en su resolución del 23 de octubre de 1998, sobre el rol de las bibliotecas públicas en la sociedad moderna, considera que es posible vincular a las bibliotecas en redes cercanas a todos los ciudadanos con el fin de transmitir conocimientos y cultura, haciéndola accesible a todos con independencia del lugar de residencia, el nivel de formación o la situación social. La resolución a la que me refiero recomienda a los Estados miembros que doten a las bibliotecas de instrumentos modernos, en particular conexiones con Internet, y fondos suficientes para que puedan afrontar los retos a los que se enfrentan los ciudadanos en la sociedad de la información.

Por otra parte, no conviene olvidar nuestra realidad nacional y cultural, que se resume así: la casi exclusiva dedicación de la biblioteca pública en España al fomento de la lectura, y ello en detrimento de su función como centro de información. Esta referencia la he tomado del plan que nos ocupa, que se relata en su página ocho. Estamos, pues, en presencia de un nuevo modelo de biblioteca pública para la sociedad de la información. Estamos en presencia también de un nuevo y valioso instrumento para contribuir a recorrer el camino de la igualdad de oportunidades en el acceso a la información y la cultura de todos los ciudadanos.

Por eso, señora Presidenta, cobra un interés especial la evaluación de los objetivos del plan al finalizar el año 2000 y con la mirada puesta en el 2003. Por eso, señora Ministra, conviene escucharle algunas palabras relativas al grado de ejecución de las medidas y de los proyectos incluidos en el plan. Por eso, señora Presidenta, señora Ministra, como Senador, pero en este caso, singularmente también como alcalde, estoy deseando participar y asumir el papel que nos pueda corresponder como administraciones locales, como ayuntamientos, en la ejecución de los puntos que nos conciernen en el mencionado plan. Por eso, señora Ministra, pregunto cuáles son las principales actuaciones del plan de impulso de bibliotecas públicas con referencia al período 2000-2003.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Díaz de Mera.

Tiene la palabra la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Muchas gracias, señora Presidenta.

Señorías, las medidas y proyectos que inicialmente están incluidos en este plan están agrupadas en torno a dos grandes líneas estratégicas. La primera de ellas engloba lo que podríamos llamar acciones de información, que tienen como objetivo modernizar la imagen social y las prestaciones de las bibliotecas públicas españolas como centros de información, mediante el empleo de las nuevas tecnologías. En esas líneas hemos previsto actuaciones como las siguientes: un plan de comunicación sobre bibliotecas públicas para el período 2000-2001 y la conexión a Internet de las bibliotecas públicas durante el período 2000-2004, así como la creación de un portal y la puesta en marcha de un servicio cooperativo de información en la red.

La segunda de las líneas es la que podríamos denominar acciones de desarrollo de las bibliotecas públicas, con la participación de las distintas administraciones implicadas. En esta segunda línea de actuaciones de desarrollo destacan entre otras la realización de un estudio sobre las bibliotecas públicas de España mediante un convenio, en este caso con la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, y la elaboración de unas pautas o exigencias mínimas para las bibliotecas públicas españolas.

Todas estas medidas y actuaciones tienen como finalidad última contribuir al desarrollo de las bibliotecas públicas españolas en un marco de cooperación, independientemente de su ubicación geográfica, con las Comunidades Autónomas. En este sentido, el plan de impulso a las bibliotecas públicas se justifica en la necesidad ineludible de mantener una política bibliotecaria de Estado, que contribuya a garantizar el derecho y la libertad de acceso a la información y a la cultura de todos los españoles.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra.

Senador Díaz de Mera, ¿quiere intervenir? (*Asentimiento.*)

Tiene su señoría la palabra.

El señor DÍAZ DE MERA Y GARCÍA CONSUEGRA: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señora Ministra, no haré uso del turno de réplica porque me complace plenamente la respuesta dada por la señora Ministra. (*Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

— DE DOÑA MARÍA ISABEL FLORES FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI RATIFICA EL MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN SU AFIRMACIÓN ACERCA DE QUE HAY QUE UTILIZAR EL REGADÍO COMO A LAS MUJERES (680/000170).

La señora PRESIDENTA: Pregunta de la excelentísima señora María Isabel Flores Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si ratifica el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación su afirmación acerca de que hay que utilizar el regadío como a las mujeres.

Tiene la palabra la Senadora Flores Fernández.

La señora FLORES FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.

Doy por formulada la pregunta en los términos expresados por su señoría.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Muchas gracias, señora Presidenta.

Formulada literalmente así la pregunta, la respuesta es no.

Señoría, creo que la frase ha sido del todo mal interpretada, sacada de contexto. (*Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*) En ningún momento mis palabras han querido ser descalificatorias para las mujeres y, en todo caso, señorías, pido disculpas a cualquier persona que se haya podido sentir ofendida por el tenor literal de una expresión que en absoluto representa el concepto que como persona tengo de la mujer. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.*)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra la Senadora Flores Fernández.

La señora FLORES FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señor Ministro, si hubiera sido un hecho aislado podríamos decir que se equivocó y se disculpó, pero usted sabe como yo que no es así.

Cuando las palabras se adelantan al pensamiento el que habla es el subconsciente y a usted fue eso lo que le ocurrió, que habló su subconsciente. Y su subconsciente es misógino, es un subconsciente de derechas y un subconsciente autoritario... (*Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.—Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

Lo suyo, señor Arias, no fue un desliz verbal. Ayer mismo conocíamos otras lindezas suyas que confirman lo que sabíamos ya. Y el pasado la verdad es que es difícil negarlo, y no se puede contar como uno quiera o le pueda convenir. Sin embargo, cuando uno se halla en un ambiente relajado, informal es cuando se dice lo que de verdad se piensa y que ustedes intentar ocultar.

A usted, señor Ministro —reconózcalo—, le salió la vena machista que aparece en cuanto se le suelta la lengua, algo más propio, desde luego, de un señorito de cortijo que de un responsable público. (*Protestas en los escaños del*

Grupo Parlamentario Popular en el Senado.—Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

Pero no contento con sus ocurrencias, señor Ministro, no se le ha ocurrido nada mejor que explicarnos a todos lo que, por lo visto, dice el señor Presidente del Gobierno en las deliberaciones del Consejo de Ministro, por cierto en la misma línea de finura democrática y afán de consenso. Parece, señoría, que en el Consejo de Ministros más que deliberar para tratar de resolver los problemas que todavía tiene este país lo que están haciendo son méritos para ganar unos juegos florales en versión «garrula».

Y hablando de méritos, le tengo que reconocer uno y es que la próxima encuesta del CIS le va a ser a usted bastante más favorable. Va a pasar de ser uno de los Ministros más desconocidos por su nula gestión a disfrutar de una triste celebridad gracias a sus chistes fáciles y a sus cotilleos, producto, desde luego, de esa mentalidad reaccionaria.

Y le aseguro que hablar vamos a hablar y hablarán de usted, aunque sea mal. No se va a distinguir por un trabajo serio y riguroso al frente de su Ministerio, pero sí va a pasar a ser el gracioso oficial. Lo malo, señor Arias, es que escoge usted muy mal el objeto de sus chistes: el agua, las mujeres, etcétera. Mal, muy mal, aunque, la verdad —y es el segundo reconocimiento—, gracias a esa ligereza verbal suya por nuestra tierra que denominaríamos como boca floja.

Nos hemos enterado de cómo se las gastan ustedes a puerta cerrada. Nos hemos enterado, por fin, de qué es lo que habla detrás de esas magníficas campañas de publicidad que hacen, detrás de esos planes rimbombantes pero vacíos de contenido y, desde luego, sin dotación presupuestaria. Había y hay un doble lenguaje. Había y hay lo mismo de siempre, pero, eso sí, centrado en el pasado.

La señora PRESIDENTA: Le ruego que termine, señora Senadora.

La señora FLORES FERNÁNDEZ: Acabo inmediatamente.

Parece, señor Arias, que a ustedes no les gusta la democracia sin adjetivar y hemos pasado de la democracia orgánica, de la que, por cierto, a algunos les costó bastante salir, a la democracia de la testosterona.

La señora PRESIDENTA: Ha terminado su tiempo. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Muchas gracias, señora Presidenta.

Le agradezco la sesión de psicoanálisis, pero creí que veníamos a hablar en serio de cuál podía ser mi aproximación al concepto de la mujer. Me parecía un tema muy importante. Y su señoría ha sacado los temas de contexto.

Pero le voy a explicar a usted, en el contexto de su pregunta, mi posición.

Las actitudes hacia la mujer no se demuestran con mensajes, sino con hechos. Y puede usted seguir mi trayectoria —a la que usted califica de irrelevante en cuestiones de agricultura—, y si no, pregúntele a los agricultores.

Pues bien, desde mi nombramiento, usted puede ver por mi manera de trabajar cuál ha sido mi actitud hacia las mujeres. De los altos cargos de mi Departamento, la política de nombramientos ha sido la siguiente: de los altos cargos de subsecretarios, secretarías generales y Secretaría General Técnica, el 50 por ciento están ocupados por mujeres. En las direcciones generales, el 30 por ciento de los altos cargos están ocupados por mujeres. (*Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*) De los cargos de confianza, el 62 por ciento están ocupados por mujeres. (*Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*) Habrá visto, por tanto, que este Ministro jamás ha hecho ningún tipo de distinción de género. He buscado mis colaboradores sin distinguir entre hombres y mujeres, he buscado buenos profesionales capaces de trabajar eficazmente en un proyecto.

Y puede su señoría ver políticas más objetivas. Por ejemplo, puede usted analizar cuál es la actitud de mi Departamento hacia la integración de la mujer en el medio rural, donde se plasma realmente cuál es mi aproximación al tema. Aquí puede ver usted lo que ha pasado en períodos anteriores, y no quiero comentar más allá del año 1995 porque el apoyo a la integración de la mujer en el núcleo rural era prácticamente nulo. (*Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*) Son hechos, señorías. Y si en el período 1995-99 la participación en los programas no llegaba al 13 por ciento, sólo en el año 2000 la participación en los programas plurirregionales de formación para apoyar a la mujer sobrepasan ya el 23 por ciento. (*Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

Ésa es mi aproximación: tratar de dignificar el papel de la mujer en el núcleo rural, tratar de apoyar aquellas asociaciones que quieren que la mujer tenga un protagonismo en el núcleo rural. Ése es mi concepto: no distinción de géneros en absoluto, sino respeto máximo a la condición de la mujer.

Y, desde luego, señoría, no trate usted de mezclar temas. Estábamos discutiendo esta cuestión, y con toda seguridad tendremos ocasión de hablar de otros temas. (*Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*) Pero lo que le puedo garantizar es que en el seno del Consejo Ministros nunca se ha utilizado un tema de forma peyorativa en relación a las mujeres, ni tampoco nos dedicamos a esas cosas que usted hace. Nos dedicamos a intentar gestionar los intereses de España con el máximo nivel de dignidad. (*Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.—Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.

— DE DON FRANCISCO GRANERO GRANADOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA VALORACIÓN QUE HACE EL GOBIERNO DEL PROYECTO DE REFORMA DE LA ORGANIZACIÓN COMÚN DE MERCADO (OCM) DE AZÚCAR, RECIENTEMENTE PRESENTADO POR LA COMISIÓN EUROPEA (680/000173).

La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Francisco Granero Granados, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración que hace el Gobierno del proyecto de reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) de azúcar, recientemente presentada por la Comisión Europea.

Tiene la palabra el Senador Granero Granados.

El señor GRANERO GRANADOS: Señora Presidenta, señor Ministro, la pregunta que se plantea en estos momentos no es cuestión baladí. Con ella, señor Ministro, se pretende dar respuesta a la gran preocupación y zozobra que hoy viven todas las organizaciones agrarias y cooperativas implicadas en el sector azucarero.

Tradicionalmente las reformas de la OCM del azúcar se han realizado porque caducaba el régimen anterior, como es también este caso, y casi siempre el nuevo régimen ha sido una mera prórroga del anterior. El azúcar no consume dinero del presupuesto de la Unión Europea, ya que los gastos que se derivan de su OCM, ayudas a la exportación fundamentalmente, los cubre el propio sector mediante cotizaciones. La protección del azúcar se basa en unos elevados aranceles que hacen que sea prácticamente imposible que entre azúcar de países terceros.

El Colegio de Comisarios de la Unión Europea ha aprobado la propuesta de reforma de la OCM del azúcar. En dicha propuesta se recogen fundamentalmente los siguientes aspectos: se prorroga la actual OCM para dos campañas, de 2001 a 2003. Se reducen las cuotas de producción en 115.000 toneladas métricas respecto de las que contemplaba el reglamento de base actual. El régimen de cuotas establece por un período de dos campañas las cantidades de base de producción «a» y «b» de azúcar, de isoglucosa y de jarabe de insulina. Se suprimen los sistemas de cotización y reembolso de los gastos de almacenamiento y de la obligatoriedad de un stock mínimo para garantizar el abastecimiento normal de la Comunidad. Los precios se congelan y se fija el de intervención de las zonas no deficitarias para dos campañas, así como el precio derivado de las zonas deficitarias anualmente por la Comisión. Asimismo, se congela y fija el precio base de la remolacha, y los precios mínimos «a» y «b» de la misma para las zonas no deficitarias. Se suprimen todas las ayudas nacionales tanto para la remolacha como para la caña de azúcar.

Ante el sombrío panorama que tenemos en escena, algunos comisarios de la Unión Europea se han opuesto al actual borrador de propuesta de reforma de la OCM del azúcar, por lo que le pregunto, señor Ministro, lo siguiente: ¿Qué valoración hace el Gobierno del proyecto de reforma

de la OCM del azúcar que ha presentado recientemente la Comisión?

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Gracias, Presidenta.

Como conoce su señoría, en el Consejo de Ministros celebrado el 23 de octubre en Luxemburgo, se presentó la propuesta de la Comisión para reformar la actual OCM del azúcar. España, como la mayoría de países, rechazó la propuesta presentada, y las razones son varias. En primer lugar, respecto a la duración, España es partidaria de que la nueva OCM tenga una duración de cinco campañas en lugar de dos; respecto de los precios, España considera importante que los precios de intervención derivados sigan siendo fijados por el Consejo en lugar de por la Comisión, como prevé la propuesta; respecto a la compensación de los gastos de almacenamiento, España no acepta la supresión de la compensación por gastos de almacenamiento del azúcar de cuota A+B, que comporta la supresión de los reembolsos por el azúcar almacenado y de la cotización a la salida de la fábrica, y en lo relativo al régimen de cuotas, España considera que sería aceptable la reducción global de 115.000 toneladas porque hay que cumplir los compromisos del GATT; no obstante, lo que no se puede aceptar es que se reduzca la cuota española en ninguna cantidad, porque es el único Estado miembro realmente deficitario: contamos con una cuota de un millón de toneladas, en tanto que nuestro consumo se sitúa en la órbita de 1.350.000 toneladas de azúcar, y las Islas Canarias se vienen abasteciendo con azúcar comunitaria no española. Por eso queremos una solución netamente española que se base en el incremento de la cuota necesaria para el abastecimiento en Canarias del orden de 60.000 toneladas.

Podemos aceptar la propuesta de suprimir la obligación de mantener existencias mínimas y queremos mantener una ayuda nacional a la caña de azúcar. En este momento se discute la reforma en los grupos dependientes del Consejo de Agricultura y no hay todavía conclusiones definitivas que permitan al Gobierno hacer una valoración concluyente de la misma.

En resumen, el Gobierno considera que la prórroga de la OCM propuesta por la Comisión es muy corta, hay que aprobar cinco años y solicitar incremento de cuota para España.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el Senador Granero.

El señor GRANERO GRANADOS: gracias, señora Presidenta.

Señor Ministro, únicamente quiero agradecerle su intervención porque, sin duda, trae la tranquilidad y el sosiego necesario al sector.

Muchas gracias. (*Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

— DE DOÑA JUANA BORREGO IZQUIERDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA FECHA PREVISTA PARA EL COMIENZO DE LAS ACTUACIONES DE LAS SOCIEDADES ESTATALES DE RIEGO (680/000176).

La señora PRESIDENTA: Pregunta de la Excelentísima señora doña Juana Borrego Izquierdo, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la fecha prevista para el comienzo de las actuaciones de las sociedades estatales de riego.

Tiene la palabra la Senadora Borrego Izquierdo.

La señora BORREGO IZQUIERDO: Gracias, señora Presidenta.

Señor Ministro, podría recordar comentarios de dirigentes políticos del PSOE sobre la violencia contra la mujer, pero no voy a hacerlo porque debo atenerme a la pregunta.

En el Plan Nacional de Regadíos presentado por Jesús Posada, su antecesor y aquí presente hoy como Ministro de Administraciones Públicas, pero siguiendo la línea anunciada por su predecesora Loyola de Palacio como uno de los puntos de innovación, se constituyó a finales del año 1999 la figura de las sociedades de infraestructuras agrarias, las SEIASA. Estas sociedades han sido creadas para facilitar las obras de consolidación y mejora de los regadíos existentes, con un presupuesto previsto para el subprograma 531B.3 para inversiones en varios años de 250.781 millones de pesetas, de los cuales 119.720 millones corresponden al MAPA. Este presupuesto, seguramente, hará disminuir las aportaciones de las Comunidades Autónomas y agilizará las obras para facilitar el regadío de las explotaciones agrarias. Señor Ministro, el pasado mes de octubre firmó un convenio entre el Ministerio de Agricultura y las sociedades estatales de infraestructuras agrarias con el fin de establecer unos criterios de actuación que permitan la ejecución de proyectos de modernización y consolidación de los regadíos.

Por todo ello, tengo el honor de formularle la siguiente pregunta: ¿Cuándo van a comenzar las actuaciones de las sociedades estatales de riego?

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Gracias.

Señorías, agradezco esta pregunta sobre el comienzo de las actuaciones de las SEIASA que, como sabe su señoría, precisan con carácter previo de una tramitación administrativa que permita establecer convenios con mi Departamento para la puesta en marcha de proyectos y, posterior-

mente, celebrar convenios con las comunidades de regantes para la ejecución de las obras.

El pasado 18 de octubre se firmaron los cuatro convenios de colaboración con los presidentes de las sociedades estatales de infraestructuras agrarias del norte, sur y este, meseta sur y noroeste, para establecer criterios de actuación para la modernización y consolidación de regadíos y garantizar la mejora de actuaciones agrarias a través de un ahorro y gestión eficiente del agua.

En dichos convenios han quedado establecidos los criterios generales de actuación de las sociedades en relación con la promoción, contratación y explotación de las obras de consolidación y modernización por realizar, obras previstas en el plan nacional de regadíos e inversiones declaradas de interés general. Las zonas regables objeto de estas acciones ocuparán una extensión próxima a las 400.000 hectáreas. Quiero recordar a su señoría que la Ley 55, del año 1999, incluye 72 actuaciones de modernización y consolidación susceptibles de tramitarse y ejecutarse por estas sociedades.

Cada una de las SEIASA ha realizado gestiones con las Comunidades Autónomas y las comunidades de regantes. Así, la del sur y el este ha iniciado los contactos con la Comunidad de Murcia, consecuencia de los cuales son las negociaciones con las comunidades de regantes del heredamiento de regantes de Molina del Segura para formalizar un convenio con un presupuesto de 2.731 millones de pesetas.

En Andalucía, se ha constituido la mesa de negociación con la Comunidad de Regantes del Guadalquivir, y se espera que sean recibidos por el Consejero de la Comunidad, don Paulino Plata.

La SEIASA de la meseta sur ha mantenido contactos con 11 comunidades de regantes, y están en estudio los de las comunidades del Provencio, usuarios el Alto Vinalopó y de Castellón, y se encuentra constituida la mesa con esta última Comunidad.

La SEIASA del nordeste ha comenzado visitando todas las zonas de interés general y estudiando técnicamente los proyectos disponibles, cinco que afectan a 13.539 hectáreas, con 8.000 millones de pesetas.

La SEIASA del norte ha iniciado contactos con todas las comunidades de regantes y se han celebrado sesiones de trabajo con las confederaciones del Duero y del Ebro y la Consejería de Castilla y León, Diputación de Álava, Principado de Asturias, estando pendiente esta fase de ser abordada con la Junta de Galicia y la Comunidad de Cantabria.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.

Senadora Borrego, ¿quiere intervenir? Tiene su señoría la palabra.

La señora BORREGO IZQUIERDO: Gracias, señora Presidenta.

Deseo agradecer al señor Ministro la información que nos ha dado, pues creo que ha sido bastante clara y precisa pero, sobre todo, ha demostrado una vez más la

buena voluntad y la sensibilidad del Gobierno y del Ministerio de Agricultura por empezar rápidamente las actuaciones de consolidación y mejora de los regadíos existentes.

Además, todos nosotros y la mayoría de los españoles creemos en el Ministro y en el Gobierno.

Gracias. (*Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.—Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Borrego.

— DE DON JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI TIENE CONSTANCIA EL GOBIERNO DE LA COMPRAVENTA DE RESTOS DE EXÁMENES DE ASCENSOS EN LA GUARDIA CIVIL (680/000168).

La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Juan Antonio Barranco Gallardo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si tiene constancia el Gobierno de la compraventa de textos de exámenes de ascenso en la Guardia Civil.

Tiene la palabra el Senador Barranco Gallardo.

El señor BARRANCO GALLARDO: Gracias, señora Presidenta.

Doy por reproducida la pregunta tal como la acaba usted de formular.

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Barranco. Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señora Presidenta.

Señoría, no sólo tiene conocimiento el Gobierno de esos hechos, sino que fue la propia Dirección de la Guardia Civil, a través del Servicio de Asuntos Internos, la que inició una investigación interna sobre ellos; fue este Servicio el que los judicializó, y fue la propia Guardia Civil la que llevó a cabo la detención de tres miembros del Cuerpo por imputados en estos hechos.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro. Tiene la palabra el Senador Barranco Gallardo.

El señor BARRANCO GALLARDO: Gracias, señora Presidenta.

Señor Ministro, como todo el mundo sabe, la Guardia Civil es uno de los Cuerpos de Seguridad del Estado que goza de mayor admiración y respeto entre los ciudadanos españoles. Por eso, a nuestro Grupo le parece importantísimo que se aclaren todos los extremos de esta confusa historia, que surgió hace varios meses sin que hasta ahora conozcamos ninguna información ni versión oficial sobre cómo sucedieron los hechos, sus consecuencias y, sobre

todo, las responsabilidades que se van a asumir por parte de los altos cargos de su Ministerio.

Es preciso aclarar muchas dudas y muchos interrogantes que en estos momentos están arrojando sombras de sospecha sobre la limpieza de los exámenes, no solamente de ascenso a sargento o alférez de la Guardia Civil, sino también de ingreso en dicho Cuerpo, porque afectan a cientos de guardias civiles y posiblemente a miles de aspirantes.

Por tanto, señor Ministro, me gustaría saber cuántas personas han sido detenidas o están detenidas en estos momentos, y cuántas de ellas son miembros del Cuerpo de la Guardia Civil o son ex cargos públicos de algún partido político; concretamente, en la provincia de Pontevedra.

Me gustaría saber si esos exámenes se han impugnado, si se van a anular las pruebas y se van a repetir las mismas, y si los ascensos que se han producido tras dichos exámenes bajo sospecha se van a mantener o anular.

Me gustaría saber si se ha producido algún cese en la Jefatura de Enseñanza, si se ha expulsado o se ha separado a algún agente de su servicio, o si será expulsado del Cuerpo de la Guardia Civil. Y me gustaría saber también por qué el General de Brigada, don José Pardo Aldea, ha cesado en la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil.

Creemos que son muchísimas las dudas que todavía existen sobre esta cuestión, y nos parece importante y urgente aclarar todas ellas. Por ello, señor Ministro, ya le anuncio que el Grupo Socialista en el Senado solicitará una comparecencia del Director General de dicho Cuerpo para aclarar hasta el final todos los extremos relacionados con este tema.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Barranco. Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señora Presidenta.

Señoría, yo le preguntaría por qué se anticipa a las conclusiones de una investigación interna y de una investigación judicial hablando de posibles cientos y miles de guardias civiles implicados en un asunto de estas características. (*Protestas desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*) No se precipite su señoría, porque, con toda la buena fe y la buena voluntad que usted quiere demostrar hacia la Guardia Civil, con su intervención es sólo usted quien genera desconfianza hacia la propia Institución. (*Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.—Algunos Senadores desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista pronuncian palabras que no se perciben.*)

Por tanto, espere usted a que las actuaciones judiciales abiertas en el Juzgado de Instrucción n.º 1 de Lalín y en el Juzgado de Instrucción n.º 7 de Las Palmas lleguen a sus conclusiones, y espere también a que las investigaciones internas del servicio correspondiente de la Guardia Civil determinen sus conclusiones.

En estos momentos sólo podemos decir que hay tres guardias civiles imputados y detenidos por estos hechos, y sólo en el momento de la conclusión de esas investigacio-

nes podremos determinar el alcance de las actuaciones fraudulentas en los exámenes de la Guardia Civil. Y será en ese momento, y sólo en ese momento, cuando podremos adoptar las medidas pertinentes para quienes hayan actuado fraudulentamente.

Y en cuanto al cese por corrupción del General responsable de Enseñanza de la Guardia Civil, nada de nada. El General Pardo, cuatro años después de haber sido nombrado General de Brigada, cesó en sus responsabilidades porque había finalizado su período de mandato.

Por tanto, en lugar de hablar de desconfianza debemos conjugar el verbo confiar, es decir, debemos tener confianza en las investigaciones judiciales y en la Guardia Civil, porque es la Institución que en mayor medida que usted y que yo tiene la voluntad inequívoca de que se esclarezca todo lo que ha sucedido en este tema. Quiero terminar diciéndole que sólo hay razones para la confianza en las investigaciones judiciales, así como en la que está haciendo la Guardia Civil: en primer lugar, porque hasta la fecha sólo se ha imputado a tres guardias civiles de un colectivo de 70.000 y, en segundo lugar, porque la actitud de la Institución alrededor de unas pocas personas que han cometido un fraude es, una vez más, un ejemplo para toda la sociedad española.

Ha sido la propia Guardia Civil la que ha puesto a disposición de la Justicia —sin que apareciese antes en los medios de comunicación— a esos guardias civiles, ha sido la Institución la que ha detenido a esos guardias civiles, señoría, y para que todos los colectivos e instituciones españolas sepan que su modelo es la Guardia Civil hay que desear que todos los que han tenido fraude y corrupción en sus filas imiten el comportamiento de la Guardia Civil en este caso.

Muchas gracias, señoría. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro del Interior.

— DE DON DIMAS MARTÍN MARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DE LA SOLICITUD DEL GOBIERNO DE CANARIAS PARA QUE SE PROPONGA A LA COMISIÓN EUROPEA QUE SE INCLUYAN COMO PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZA LOS PUERTOS DE LAS ISLAS DE LANZAROTE (LAS PALMAS) Y LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE), CON EL FIN DE QUE FUNCIONARIOS DEL ESTADO PUEDAN EJERCER LAS LABORES DE INSPECCIÓN EN LOS MISMOS (680/000160).

La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Dimas Martín Martín, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las previsiones del Gobierno acerca del cumplimiento de la solicitud del Gobierno de Canarias para que se proponga a la Comisión Europea que se incluyan como puestos de inspección fronteriza los puertos de las

islas de Lanzarote (Las Palmas) y La Palma (Santa Cruz de Tenerife), con el fin de que funcionarios del Estado puedan ejercer las labores de inspección en los mismos.

Tiene la palabra el Senador Martín Martín.

El señor MARTÍN MARÍN: Gracias, señora Presidenta.

Señor Ministro, doy por formulada la pregunta en los términos que ha expuesto la señora Presidenta.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas. (*El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.*)

El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno): Gracias, señor Presidente.

El Ministerio de Administraciones Públicas es consciente de la importancia de las funciones de los puestos de inspección fronteriza, de su trascendencia para el sector productivo y del interés especial que adquieren estos puestos cuando nos encontramos, como en el caso de esta pregunta, con un tema de doble insularidad.

En este momento, como muy bien conocen el Senador y la Cámara, y según la normativa aplicable, las islas de Lanzarote y La Palma tienen autorizados sus puertos y aeropuertos como recinto para la realización de controles de sanidad exterior, para los productos procedentes de terceros países, con la excepción —y ésta es la cuestión— de los productos de origen animal. Sin embargo, puedo decirle que antes de que finalice el año va a ser estudiada, junto con otras propuestas de este tipo, la solicitud del Gobierno de Canarias de creación de dos puestos de inspección fronteriza en las islas de Lanzarote y La Palma.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor Ministro de Administraciones Públicas.

En turno de réplica, tiene la palabra el Senador Martín Martín.

El señor MARTÍN MARTÍN: Gracias, señor Ministro.

La verdad es que nos llevamos una alegría por el hecho de que, al fin, su Ministerio —o usted personalmente— asuma la solicitud que llevó a cabo el Gobierno de Canarias allá por el año 1996 y, precisamente, a raíz de una propuesta del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias en la que solicitaba estos puestos de inspección fronteriza para los puertos de Lanzarote y de La Palma. Asimismo, espero que usted, teniendo en cuenta ese hecho de doble insularidad, también extienda la propuesta a la isla de Fuerteventura porque los puertos de Canarias, especialmente los de las islas menores —y, en este caso concreto, el de Lanzarote— es el primer puerto que encuentran los barcos en su recorrido cuando vienen del continente europeo y, sin embargo, tienen que ir a Las Palmas a pasar la inspección, para después descargar en la isla de Lanzarote. Esto significa que, debido a la falta de acuerdo todavía con

Marruecos, las industrias pesqueras que se ven en la necesidad de importar materia prima, tienen que inspeccionarla en Las Palmas antes de arribar definitivamente a nuestra isla.

Por ello, espero que todo esto no se quede en un mero estudio y que antes de finalizar el año podamos conseguir su compromiso de que Lanzarote y La Palma, inicialmente, o conjuntamente con Fuerteventura, dispongan de este puesto de inspección sanitaria, tan necesario y que tanto está encareciendo la cesta de la compra.

Muchas gracias, señor Ministro.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Martín Martín.

Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.

El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno): En efecto, creo que lo que usted ha manifestado es la realidad.

Tanto el Gobierno de Canarias como la Administración del Estado y este Ministerio somos conscientes de esa necesidad; necesidad que comparten los grupos políticos porque —como muy bien ha dicho el Senador— fue una propuesta que se hizo a iniciativa, precisamente, del Partido Popular y que aprobó el Parlamento canario. Y me consta que en el Congreso de los Diputados algún diputado canario del Partido Popular también está planteando una proposición no de ley en esta misma dirección.

Hemos creado una comisión interministerial entre los ministerios de Administraciones Públicas, Sanidad y Agricultura, Pesca y Alimentación. Este grupo ha planteado una reunión el 7 de noviembre próximo y se celebrarán otras dos antes de final de año.

En primer lugar, pretendemos conocer a fondo cuál es la situación para aportar nuestras experiencias en común. En segundo lugar, vamos a hacer un diagnóstico real de la situación de los PIF fronterizos que existen en España, y he de decirle que no todos tienen la misma condición de necesidad ni de utilidad y, en tercer lugar, hay que establecer un cauce único para poder determinar en base a criterios técnicos la necesidad de creación de nuevos puestos fronterizos. Por poner varios ejemplos, puedo decirle que se encuentra en estudio el puerto seco de Madrid, en Coslada; también los que ha propuesto su señoría; el aeropuerto de Girona, el Puerto de Barbate, y algunos más que se estudiarán a fondo.

No le puedo garantizar, señoría —y se lo digo con toda sinceridad—, que estos dos puestos fronterizos que usted propone vayan a ser elegidos porque sería una paradoja crear una comisión interministerial para que realice un esfuerzo técnico, serio y riguroso y que yo me adelantara a sus conclusiones. Lo que sí le puedo asegurar es que las observaciones y argumentos de su pregunta e intervención serán tenidos en cuenta por dicha comisión interministerial.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor Ministro de Administraciones Públicas.

— DE DON JOSÉ IGNACIO PÉREZ SÁENZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI COINCIDE EL GOBIERNO CON LAS CONCLUSIONES DEL INFORME DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1999, DEL INSTITUTO DE DERECHO PÚBLICO, RELATIVAS A LA PARALIZACIÓN DEL ESTADO AUTONÓMICO (680/000169).

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): A continuación, pasamos a la pregunta del excelentísimo señor don José Ignacio Pérez Sáenz, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si coincide el Gobierno con las conclusiones del Informe de Comunidades Autónomas 1999, del Instituto de Derecho Público, relativas a la paralización del Estado autonómico.

Tiene la palabra el Senador Pérez Sáenz.

El señor PÉREZ SÁENZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, el pasado mes de octubre se presentó en el Palacio del Senado el Informe anual del Instituto de Derecho Público para el año 1999. Es un informe de prestigio, solvente e independiente que recoge como una de sus conclusiones que el desarrollo autonómico está paralizado. Todo aquel que se ha pronunciado ha coincidido en el diagnóstico. No conocemos la opinión del Gobierno y por ello la requerimos. Queremos saber qué opinión le merece, si es o no coincidente y por qué; es decir, si piensa que el desarrollo autonómico está paralizado como manifiesta el citado Informe.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Pérez Sáenz.

Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.

El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno): Gracias, señor Presidente.

Señoría, si me permite le diré que su pregunta, sobre todo tal como está redactada —explicada algo menos— es una trampa saducea. Usted dice que la conclusión del estudio afirma que está paralizado el proceso autonómico. ¿Qué opina el Gobierno? ¿Está o no de acuerdo? Por tanto, se trata de que damos por hecho que está paralizado. Pienso que no es así. Basta ver este estudio, que estoy leyendo con mucho interés, y quiero decirle que hay puntos de este informe, realizado por una pluralidad de catedráticos, de personas con diferentes opiniones, en los que el Gobierno coincide plenamente, en otros parcialmente y con otros está en desacuerdo.

Por tanto, respetando todo lo escrito porque me parece muy interesante, y desde luego yo estoy reflexionando sobre el mismo, debo decirle que el Gobierno no piensa que el proceso autonómico esté paralizado. Personalmente no creo que la conclusión más importante que pueda extraerse de este estudio es que exista una paralización del proceso autonómico. Se señalan puntos en los cuales se podría haber ido más deprisa, es verdad, pero afirmar que de este informe se deriva la paralización del proceso autonómico es un poco apresurado.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor Ministro de Administraciones Públicas.

Tiene la palabra el Senador Pérez Sáenz.

El señor PÉREZ SÁENZ: Señor Ministro, es indiscutible que una de las conclusiones del informe es que el desarrollo del Estado autonómico está paralizado. Esto no quiere decir que en otras conclusiones del informe pueda prestar usted un mayor grado de acuerdo.

Señor Ministro, lo señalara o no el informe del Instituto Público, es un clamor que el desarrollo del Estado autonómico está paralizado, y estoy convencido de que incluso participa de esa opinión buena parte del Grupo Parlamentario Popular que apoya al Gobierno.

La pregunta la podía haber formulado de una u otra manera, pero el fondo de la misma es la siguiente: ¿Es consciente el señor Ministro de que nuestro Estado se encuentra todavía sin construir, que falta vertebrar, que faltan algunas reformas institucionales básicas? Y, si es consciente de ello, ¿no considera que ha llegado el momento de afrontar esas reformas? (*La señora Presidenta ocupa la Presidencia.*)

Esto es lo que quiero transmitir a través de la pregunta. No quiero ni voy a entrar —no es el momento— en si ha habido una traslación de las competencias —por ejemplo, en el año noventa y nueve ha habido transferencias en educación universitaria y básica—, pero esto no constituye el desarrollo autonómico. Llegar y negociar el coste efectivo de las transferencias no es exactamente lo que queremos plantear en la pregunta.

Le advertimos —y quiero que se lo tome en serio— que estamos observando algunas señales de involución en el ámbito del desarrollo autonómico. No avanzamos para nada en la reforma del Senado; no avanzamos en la participación de las Comunidades Autónomas en la Unión Europea; tampoco avanzamos en un acuerdo de financiación —que vamos a tener que acometer inevitablemente en el año 2001, pero incluso se niega que esta Casa constituya el foro de debate—; no avanzamos tampoco en las relaciones horizontales entre Comunidades Autónomas ni en las verticales entre las Administraciones, y en lo único que parece que avanzamos son en las relaciones oblicuas.

Por lo tanto, tengo que transmitir un grado de preocupación.

La señora PRESIDENTA: Senador Pérez Sáenz, le ruego que vaya terminando.

El señor PÉREZ SÁENZ: Terminó diciendo algo que nosotros consideramos importante. Usted llegó al Senado y manifestó que necesitaba un consenso para las reformas institucionales. Yo le digo que efectivamente el Grupo Parlamentario Socialista mantiene esa actitud de consenso, pero se está acabando el tiempo para las buenas palabras.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Pérez Sáenz.

Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.

El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno): Gracias, señora Presidenta.

Ya que ha formulado la pregunta de una forma tan clara, debo señalar que no puedo estar de acuerdo con esa apreciación. Reconozco que puedo compartir algunos aspectos que su señoría ha señalado, que ahora indicaré—. Ahora bien, tenemos que hacer un cuadro objetivo de la situación. No se puede decir de unos trasposos de un billón de pesetas, funcionando perfectamente, como ha reconocido —por ejemplo en educación— que es una cosa de pequeña importancia. No lo es, ¿cómo va a serlo? Tampoco lo es que tengamos preparados los trasposos que quedan de políticas activas de empleo, medios de justicia y sanidad. Es una continuidad, una actuación adecuada del proceso autonómico.

Ahora bien, ¿hay dificultades y hay algunas reformas que hacer? Sí, lo he reconocido desde el primer momento. Pero vamos a hablar de las tres que usted ha señalado.

Financiación autonómica. No puedo admitir que se diga que está paralizado el proceso autonómico por el problema de la financiación autonómica cuando hay un sistema, rechazado ciertamente por tres Comunidades Autónomas pero que está funcionando perfectamente para las demás, y hay una disposición que todos tenemos de comenzar en enero unas discusiones a fondo con las Comunidades Autónomas, con los partidos políticos y, como he dicho y he reiterado, el Senado es un buen foro para esa discusión.

Participación en los asuntos europeos. Ahí vamos a distinguir entre lo que es un proceso de lo que es una posición. Yo creo que se está avanzando mucho a través de las conferencias sectoriales —que están funcionando mucho mejor—, y ésa es la colaboración de la Administración General del Estado con las Comunidades Autónomas: llevar esos asuntos que afectan a las Comunidades Autónomas y que se tratan en Europa a su conocimiento y a su intervención. Se está incrementando la participación en los comités de gestión.

¿Cuál es el punto que, digamos, no está resuelto? El de la participación de los consejeros de las Comunidades Autónomas en los Consejos de Ministros de la Unión Europea. Pero es que en este punto yo mantengo una discrepancia clara, y lo digo: a mí no me parece conveniente esa posición.

Y, en tercer lugar...

La señora PRESIDENTA: Señor Ministro, está fuera de tiempo.

El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno): Lamento no poder explicarle algún otro punto.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.

— DE DOÑA INMACULADA LOROÑO ORMAECHEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO DE DOTAR A LOS CONSEJOS DE RESIDENTES ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO DE UNA PARTIDA ECONÓMICA ESPECÍFICA EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2001 QUE PERMITA ABORDAR LOS CORRESPONDIENTES PROCESOS ELECTORALES (680/000147).

La señora PRESIDENTA: La pregunta del excelentísimo señor don Vicent Beguer i Oliveres, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, es para el señor Ministro de Fomento, y teniendo en cuenta que el señor Ministro de Fomento está en este momento presentando el Presupuesto en el Congreso de los Diputados y sabiendo que el Gobierno pidió a la Junta de Portavoces flexibilidad para alterar el orden del día, pasamos a la pregunta que el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos dirige al señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. En concreto, es la pregunta de la excelentísima señora doña Inmaculada Loroño Ormaechea, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las previsiones del Gobierno de dotar a los Consejos de Residentes Españoles en el Extranjero de una partida económica específica en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 que permita abordar los correspondientes procesos electorales.

Tiene la palabra la Senadora Loroño Ormaechea.

La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señora Presidenta.

Buenos días, señor Ministro, la verdad es que tengo que agradecerle por segunda vez la deferencia que tiene usted al responder a la pregunta formulada por esta Senadora. Le garantizo, señor Ministro, que la próxima pregunta que formule esta Senadora irá dirigida a su señoría para que no se convierta en una costumbre el que se aplacen las preguntas y tenga que responder usted. Muchas gracias y la pregunta queda formulada en los términos expresados desde la Presidencia.

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Loroño.

Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Muchas gracias, señora Presidenta.

Señora Senadora, con mucho gusto contesto a las preguntas aunque vayan dirigidas al Ministro de Asuntos Exteriores. Conoce su señoría que son compromisos internacionales de España los que impiden que hoy se encuentre en esta sesión, pero no es menos cierto que las materias propias de emigración y de atención al colectivo de emigrantes españoles vienen siendo tradicionalmente compartidas por el Ministerio de Asuntos Exterio-

res y por el propio Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales.

Me preguntaba concretamente sobre la previsión de dotación económica a los Consejos de Residentes Españoles en el Extranjero, los llamados CREE. Le puedo informar que de cara al año 2001 se mantiene una dotación importante —creo que importante es hablar de 100 millones de pesetas— y proporcionada a la importancia que se concede desde el Gobierno a este tipo de Consejos. Son 51 los que actualmente están en funcionamiento. Creemos que son, sin duda alguna, un foro de encuentro de los propios emigrantes que, por otro lado, permiten tomar las iniciativas y aquellas sugerencias que puedan redundar en una mejor atención a una población especialmente querida por el Gobierno español —y entiendo que por el conjunto de la sociedad española—, como es la que reside habitualmente en el extranjero.

Pero me permitirá decirle que a la hora de diseñar las atenciones presupuestarias también estamos intentando el máximo esfuerzo posible de cara a la población de carácter eventual —esto es, los españoles que acuden esporádicamente o en visitas de carácter breve al extranjero— y piense también en la necesidad de dotar de asistencia social a quienes lo necesitan, o simplemente dar asistencia jurídica a españoles que se encuentran fuera de nuestras fronteras. Esta misma mañana conocía el dato de que son más de 1.200 los españoles que requieren asistencia jurídica por estar detenidos en el extranjero. Dentro de lo que, sin duda, es una necesidad, se está atendiendo, insisto, con una cantidad que entendemos proporcionada y que se mantendría en cualquier caso para el próximo ejercicio.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra la Senadora Loroño Ormaechea.

La señora LOROÑO ORMAECHEA: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señor Ministro, por supuesto que desde el Gobierno se está haciendo el esfuerzo de dotar a esos Consejos de una partida económica anual para el mantenimiento y el funcionamiento de los mismos.

Usted hablaba de la existencia de 51 Consejos de Residentes Españoles en el extranjero. En estos momentos y por lo que manifestaban a nuestro Grupo los propios consejeros de emigración representantes de estos españoles en el Consejo General de la Emigración, que depende de su Ministerio, éstos mostraban la inquietud por distintas situaciones, por distintos planteamientos y distintas necesidades que ellos consideraban urgentes.

Incluso, en la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso de los Diputados se aprobó en su día el dictamen de la subcomisión que se creó al efecto para analizar la situación de estos españoles, sus necesidades sociales, sus necesidades jurídicas y todo tipo de intervención necesaria para mejorar su situación. De hecho, se plantearon 97 propuestas fruto de ese dictamen, que se aprobó por unanimidad en la Cámara del Congreso.

Sin embargo, estos consejeros trasladaban a nuestro Grupo la inquietud referida a la necesidad de llevar a cabo los procesos electorales de renovación de los propios consejos con garantías; garantías que debe reunir todo proceso electoral, como puede ser el informar debidamente a los españoles dependientes de dicho Consejo del proceso electoral abierto, de la fase de renovación y, por supuesto, garantizarles la participación en la designación de los nuevos representantes de dicho Consejo, porque de él posteriormente se designan los consejeros para el Consejo General de Emigración.

Dado que están en la lejanía, en la distancia y, sin embargo, quieren participar activamente en el desarrollo de su país de origen, creo que debemos garantizarles que esa participación sea activa, al tiempo que los procesos electorales de renovación de los propios Consejos se lleven a cabo con garantías. Y la verdad, señor Ministro, 100 millones de pesetas para el mantenimiento y funcionamiento de 51 Consejos de Residentes Españoles en el extranjero me parece una cantidad, aunque se hagan esfuerzos en otros sentidos, bastante limitada y ajustada.

Muchas gracias, señor Ministro.

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Loroño. Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Muchas gracias, señora Presidenta.

Señoría, coincido en la importancia de los CREE. Sin duda alguna, creo que son un órgano necesario. Entiendo que toda dotación o cuantía puede entenderse suficiente o insuficiente. Creo que en este caso es suficiente.

Piense también que de los 51 Consejos no son todos los que van a celebrar durante el próximo ejercicio sus procesos electorales, que creo que es una de las causas que, sin duda alguna, puede obligar a mayores esfuerzos económicos, pero admítame también que, a la hora de atender necesidades y dentro del marco de prioridades, hayamos creído que la atención directa a colectivos y personas en situaciones de auténtica necesidad prevalecía. Insisto, a la hora de fijar los mayores incrementos, porque, indudablemente, tampoco me gustaría que quedase la imagen de que no se han hecho esfuerzos también en la dotación a los Consejos de Residentes.

Se han hecho esfuerzos. Trataremos también de mejorarlos. Si hay nuevas necesidades, tenga la certeza de que serán atendidas, bien sean necesidades de funcionamiento ordinario, bien de atención a sus procesos electorales, pero la filosofía de este Gobierno será antes que nada la referente a la atención directa a las personas en situación de mayor necesidad. Y estoy seguro de que a este respecto su señoría piensa conmigo que todo dinero es poco y que todo esfuerzo va a ser, lógicamente, deseado y compartido por la Cámara.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.

— DE DON FROILÁN GERMÁN RODRÍGUEZ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LOS PLANES DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LAS PETICIONES FORMULADAS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS Y EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN RELACIÓN CON LAS NECESIDADES JUDICIALES DE LA ISLA DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS) (680/000163).

La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Froilán Germán Rodríguez Díaz, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre los planes del Gobierno con respecto a las peticiones formuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y del Consejo General del Poder Judicial en relación con las necesidades judiciales de la isla de Gran Canaria.

Tiene la palabra el Senador Rodríguez Díaz.

El señor RODRÍGUEZ DÍAZ: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señor Ministro, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en la Memoria de actividades de los órganos judiciales de dicho territorio correspondiente a 1999, elevó al Consejo General del Poder Judicial una relación de demandas de nuevos órganos y plazas judiciales para diferentes islas canarias y en concreto para la de Gran Canaria, demandas que también han sido recogidas por el Consejo General del Poder Judicial en su Memoria de este año.

En lo que concierne a Gran Canaria, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Canarias como el Consejo General del Poder Judicial coinciden en la creación de una plaza de magistrado para la Sala de lo Social de Las Palmas de Gran Canaria, cinco plazas de magistrado, una para cada sección, para la Audiencia Provincial, así como la creación del Juzgado de lo Penal número 6, el Juzgado de Menores número 2, el Juzgado de lo Social número 7 y el Juzgado de Instrucción número 8 de las Palmas de Gran Canaria.

Otra de las peticiones hace alusión a la creación de un nuevo partido judicial desgajado del de San Bartolomé de Tirajana y con sede en Vecindario, que comprendería los municipios de Santa Lucía de Tirajana, Agüimes e Ingenio. Algunas de estas iniciativas requieren ser aprobadas en una modificación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial. Por todo ello, le formulo la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los planes del Gobierno con respecto a las peticiones formuladas tanto por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias como por el Consejo General del Poder Judicial en cuanto a las necesidades judiciales de la isla de Gran Canaria?

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.

El señor **MINISTRO DE JUSTICIA** (Acebes Pania-gua): Muchas gracias, señora Presidenta.

Señoría, en la programación del desarrollo de la Planta Judicial para el año 2000 en lo que se refiere, en primer lugar, a la provincia de Gran Canaria, se han recogido un total de ocho unidades judiciales que comprenden cuatro plazas de magistrado en órganos colegiados que ya han sido creadas y en funcionamiento y cuatro juzgados cuya entrada en funcionamiento tendrán lugar el próximo 20 de diciembre.

Concretamente, en lo que se refiere a su pregunta a la isla de Gran Canaria, se ha previsto la creación de una plaza de magistrado para la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas, así como tres plazas de magistrado en la Audiencia Provincial de Las Palmas. Éstas fueron dotadas por Real Decreto de 11 de febrero del año 2000 y tuvo su efectividad, como su señoría conoce, el 2 de mayo del año 2000, según la orden del Ministerio de Justicia.

Asimismo, en la isla de Gran Canaria se ha creado el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Telde. En cuanto al Juzgado de lo Penal número 6 de Las Palmas, al que su señoría alude, sabe que hubo un acuerdo con el Gobierno de Canarias para que se incluyera, como efectivamente así ha ocurrido, en la programación del año 2000, es decir que esta petición ha sido atendida por parte del Ministerio de Justicia. Igualmente se encuentra previsto en la programación para el año 2001 la creación del Juzgado de Menores número 2 de Las Palmas.

En lo relativo a la creación del nuevo partido judicial, que estaría configurado por los municipios de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía, los parámetros de población y de superficie de los municipios afectados por la eventual creación del partido judicial, así como las cargas medias de trabajo que hemos estudiado de sus juzgados, están entre los permitidos por la Ley de Demarcación y Planta y el Consejo General del Poder Judicial. El momento de abordar la posible creación será cuando se acometa la revisión general de modificación y creación de partidos judiciales de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, entonces es cuando evaluaremos todos estos datos que ya hemos recabado, todos los factores que concurren, se pedirá el informe preceptivo y lo haremos de acuerdo con la Comunidad Autónoma.

Gracias.

La señora **PRESIDENTA**: Gracias, señor Ministro de Justicia.

Tiene la palabra el Senador Rodríguez Díaz.

El señor **RODRÍGUEZ DÍAZ**: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señor Ministro, le agradezco tanto el tono como el contenido de su intervención, y en concreto la respuesta a muchas de las demandas formuladas en esta pregunta.

Creo que habría que aumentar, según la misma demanda tanto del Consejo General del Poder Judicial como del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, las plazas de

magistrado para todas las secciones de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, así como del Juzgado de Menores número 2 y del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.

Hay que tener en cuenta algunas consideraciones que avalan esta petición. Por un lado, la revisión de los módulos de carga de trabajo que prevé el Libro Blanco de la Justicia, se contemplaron como máximos totales para impedir el bloqueo del funcionamiento de los distintos órganos y hay que irlos atemperando a la realidad efectiva que se está produciendo. Por otro, las expectativas de crecimiento en distintos ámbitos, como los cambios en las atribuciones competenciales de la jurisdicción penal o los cambios legislativos que afectarán a los Juzgados de Menores. Por eso seguimos manteniendo esa petición, así como ciertos cambios cualitativos, por la mayor complejidad de determinados asuntos que ya han sido previstos y vienen definidos en la Memoria del Consejo General Poder Judicial. En la exigencia de esta última demanda coincide también el Colegio de Abogados.

Me gustaría referirme, aunque lo dejaré para otra ocasión, a algunas intervenciones realizadas con respecto a la demanda que existe en otras islas canarias. En tono de sumo respeto, como usted lo ha hecho, sí le diré que sería conveniente, aunque comprendo que es algo complejo, definir bien el concepto de isla, provincia, capital de la provincia, etcétera, pero de eso ya podremos hablar fuera de este debate.

Muchas gracias, señor Ministro.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora **PRESIDENTA**: Muchas gracias, señoría. Señor Ministro de Justicia, tiene la palabra.

El señor **MINISTRO DE JUSTICIA** (Acebes Pania-gua): Muchas gracias, señora Presidenta.

Efectivamente, como se deduce de la respuesta y de la réplica que ha realizado su señoría, se está haciendo un esfuerzo para la dotación de medios personales y materiales. Lógicamente, hay que hacerlo de manera rigurosa porque la creación de plazas tiene que ir acompañada con la posibilidad de cubririrlas con jueces profesionales y de carrera. Estamos intentando dar respuesta a las necesidades más inmediatas, como son la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores o la Ley de Enjuiciamiento Civil, en función de los requerimientos de todas las islas de la Comunidad Autónoma.

Además, tengo que decirle que, en colaboración con el Gobierno de la Comunidad Autónoma, la semana pasada mantuvimos una reunión con el Consejero con competencias en la materia, el señor don Julio Bonis, para estructurar, coordinar y trabajar de manera conjunta dando respuesta a las necesidades que tienen las islas.

Muchas gracias.

La señora **PRESIDENTA**: Muchas gracias, señor Ministro de Justicia.

Señorías, el Congreso de los Diputados continúa a esta hora debatiendo la Sección correspondiente al presupuesto

del Ministerio de Fomento y el señor Ministro se encuentra allí. Por tanto, al amparo del artículo 71.4 del Reglamento, que dice que una vez iniciada la sesión correspondiente, el orden del día sólo podrá modificarse por acuerdo de la mayoría de Senadores presentes, a propuesta del Presidente de la Cámara o del de la Comisión o de un Grupo parlamentario, propongo a sus señorías que pasemos al siguiente punto del orden del día, de forma que se tramiten ahora las dos interpelaciones dirigidas al señor Ministro de Justicia y dejemos para luego las cuatro preguntas formuladas al señor Ministro de Fomento y el resto del orden del día.

¿Está de acuerdo la Cámara con esta alteración del orden del día? (*Asentimiento*)

Muchas gracias, señorías, por su flexibilidad.

INTERPELACIONES:

— DE DON RICARDO GATZAGAETXEBARRÍA BASTIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LA POLÍTICA QUE VA A DESARROLLAR EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA ACTUALIZACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CODIFICACIÓN DEL DERECHO MARÍTIMO ESPAÑOL PARA ADAPTARLO A LA REALIDAD Y NECESIDADES ACTUALES DE LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA. (670/000026).

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto segundo del orden del día: Interpelaciones. Del excelentísimo señor don Ricardo Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre la política que va a desarrollar el Gobierno en relación con la actualización, modernización y codificación del Derecho Marítimo español para adaptarlo a la realidad y necesidades actuales de la navegación marítima.

Para exponer la citada interpelación, tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría Bastida.

El señor GATZAGAETXEBARRÍA BASTIDA: Muchas gracias, señora Presidenta.

Efectivamente, nuestro Grupo Parlamentario presenta esta interpelación al Gobierno para conocer —como usted bien decía— la política adoptada por el mismo en relación a la actualización, modernización y codificación del Derecho Marítimo español.

Señor Ministro, en sus recientes declaraciones en diversos medios de comunicación ha anunciado un ambicioso paquete de reformas legislativas —entre ellas, cabe citar la Ley concursal, la Ley de arbitraje, la Ley de responsabilidad del menor, la modificación del Código Penal, la reforma del Tribunal del jurado, la reforma de la Ley de vigilancia penitenciaria, la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, la reforma de la Ley de asociaciones, la reforma de la Ley de fundaciones—, pero en ninguna de sus intervenciones públicas ha hecho referencia a la modificación y actualización del Derecho

Marítimo español. Es un asunto que están trabajando en el Ministerio, y nos ha llamado poderosamente la atención que no se haya hecho referencia pública a ello en ninguna de sus intervenciones de presentación de iniciativas legislativas.

Como nos preocupaba esta cuestión, hemos presentado esta iniciativa parlamentaria, que es una iniciativa de impulso, de sensibilización, señor Ministro, porque usted es el que tiene la potestad política dentro del Ministerio para acelerar los trabajos. Nosotros tenemos información de lo que se está haciendo desde hace mucho tiempo, porque hemos hecho un seguimiento de toda la actividad de actualización del Derecho Marítimo de los últimos años, pero el objeto de la interpelación es impulsarle para que usted incite y promueva dentro del Ministerio la aceleración de todos los trabajos. Si no lo hace usted, tendremos una nueva legislatura en la que la reforma del Derecho de la navegación va a dormir el sueño de los justos. Se han elaborado trabajos durante muchos años, pero es necesario que usted se sensibilice en este tema, lo mismo que está sensibilizado respecto a otros ámbitos de la justicia. Éste es el objeto de la interpelación, que el impulso no venga desde abajo, que ahí sí hay especialistas que están trabajando en este asunto, sino que venga desde arriba, en la medida en que usted mandate a sus subordinados de la Secretaría General Técnica y de la Comisión de Codificación para que los trabajos se presenten, y éste es el momento político propicio. Además, usted tiene una buena situación, tiene mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado, y está al inicio de la legislatura. Hay unos trabajos ya muy adelantados y preparados desde hace años, incluso resoluciones parlamentarias aprobadas, pues en noviembre del año pasado nuestro Grupo parlamentario presentó una moción al respecto.

La interpelación tiene una finalidad constructiva y también la de suscitar un debate sobre la problemática que actualmente existe en España en relación con el Derecho Marítimo, ya que nos encontramos con una legislación muy anquilosada, muy antigua y ubicada en el ordenamiento jurídico de una manera muy asistemática, lo cual origina una serie de disfunciones a los diferentes operadores de la navegación marítima, así como a todos los que tienen que aplicar el ordenamiento jurídico.

Señor Ministro, el Derecho Marítimo privado español se contiene fundamentalmente en el Código de Comercio, aprobado por las Cortes en 1885. Es un texto legal con 115 años de vigencia, que ha sido modificado puntualmente a través de reformas parciales a lo largo de su existencia y que, evidentemente, desde el mundo de la navegación y del Derecho Marítimo español siempre se ha mirado con mucho cariño. Podríamos decir que son pocas las normas jurídicas que con posterioridad a las reformas parciales lo hayan modificado en profundidad, lo que motiva que la rica problemática que modernamente plantean las diversas instituciones marítimas en la práctica mercantil encuentre difícil encaje o ubicación en una legislación que está acusada de tanta vetustez como el Libro III del Código de Comercio, que, como digo, data de 1885, y que no ha sido objeto de modificación alguna.

Señor Ministro, la legislación de la navegación marítima tiene un carácter eminentemente internacional, que es la base del negocio marítimo. Esto hace que esté regulado por una serie de reglas, de costumbres, de usos uniformes, que en muchos casos encuentran difícil encaje en el texto base actualmente vigente —es decir, la piedra angular del ordenamiento jurídico marítimo español, que es el Código de Comercio de 1885—, lo cual está suscitando una inseguridad jurídica a la hora de su aplicación por parte de los diferentes operadores del Derecho Marítimo español.

Así, a lo largo de los últimos años el Gobierno español ha suscrito y ratificado un gran número de convenios internacionales en materia de Derecho Marítimo, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado, y ha ido incorporando al derecho estatal tales disposiciones de derecho internacional de una manera asistemática, sin que exista un corpus jurídico legislativo que sea la espina dorsal del Derecho Marítimo español. Y digo que lo ha hecho de manera asistemática, puesto que en el derecho estatal la integración del derecho internacional se ha realizado sin que tengamos un texto único en la materia, lo que está originando que nos encontremos con un ordenamiento jurídico, a veces, de difícil interpretación. Incluso el Tribunal Supremo en diferentes sentencias que sientan jurisprudencia en la aplicación del Derecho Marítimo, entra en contradicciones y hace un mandato al legislador, a las Cortes —pero las Cortes operan siempre bajo la iniciativa del Gobierno, sobre todo en estas materias tan especializadas— para que se proceda a la actualización del Derecho Marítimo y a la sistematización del derecho de la navegación.

Quiero señalarle, señor Ministro, que por la información que tiene nuestro Grupo Parlamentario, que le ha sido suministrada por los anteriores gobiernos, fruto del control parlamentario efectuado sobre esta materia, conocemos los trabajos que sobre esta cuestión se encuentran ubicados en un organismo del Gobierno, del Ministerio de Justicia, como es la Comisión General de Codificación, organismo técnico de juristas, en cuya Sección Segunda, de Derecho Mercantil, se han venido realizando tradicionalmente estos trabajos, hasta que la Ministra Mariscal de Gante el año pasado creó una sección especial sobre el derecho de la navegación, a la que luego haré referencia. Se han venido estudiando diferentes textos relativos al Derecho Marítimo español; en concreto, según las informaciones que el Gobierno nos ha ido suministrando, existen diferentes técnicas y posibilidades para esta actualización.

En primer lugar, el texto que más avanzado se encuentra, según los datos de que disponemos, es el borrador de proyecto de ley relativo al contrato de seguro marítimo, que no se encuentra regulado en la ley principal que disciplina el seguro en España, que es la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, que no entró en el ámbito del seguro marítimo. La práctica y el incremento del tráfico marítimo internacional en los últimos años ha supuesto la existencia de cláusulas contractuales surgidas en el ámbito internacional, que se aplican como usos y costumbres aceptadas, pero que no tienen una plasmación concreta en el derecho contractual del seguro marítimo es-

pañol. Por eso éste es uno de los borradores del proyecto de ley, según la información que ha suministrado el Gobierno, que más avanzado se encuentra, ya desde la etapa del Partido Socialista.

En segundo lugar, nos encontramos con la problemática que se suscita por la explotación de los buques, fundamentalmente en el transporte marítimo mercantil, en cuanto a los modelos y tipos de contrato utilizados, por el carácter marcadamente internacional, y a través de soluciones prácticas y de la casuística de la interpretación clausular, que ha llevado a una regulación por costumbre y por usos internacionales de esta materia. Al respecto también tenemos información de que existe un borrador sobre el anteproyecto de ley de contratos de utilización de buques.

En tercer lugar, se encuentra la problemática relativa a la responsabilidad del titular del transporte marítimo, o sea, la figura del naviero, y la relativa a los accidentes originados por la navegación marítima, tan de actualidad en nuestros días, en la medida en que afectan tanto a la integridad física de las personas, de la vida, como al dominio público marítimo, terrestre, incluso a la protección de los espacios marítimos afectados por los accidentes de navegación marítima, materias sobre las cuales, en fases más prematuras, por la información que tenemos, también existen dos borradores sobre el anteproyecto de ley de delimitación de la responsabilidad de las reclamaciones y sobre accidentes de navegación marítima.

En cuarto lugar, señor Ministro, está la cuestión relativa a la legislación procesal marítima. La legislación marítima internacional, plasmada en los convenios internacionales, atribuye a los estados suscribientes y ratificantes de los mismos la competencia para disciplinar la materia procesal, en este caso la marítima, en definitiva, el instrumento, el cauce, el camino a través del cual los diferentes operadores de la navegación marítima puedan reclamar, bien en materia de seguro, de responsabilidad, de accidentes, a las diferentes administraciones o a través de las reclamaciones judiciales. Esta legislación procesal se encuentra ya elaborada en un anteproyecto de borrador, según los datos que recientemente nos ha suministrado el Gobierno, pero requeriría de una actualización.

En quinto lugar, nos encontramos con la cuestión relativa a la modificación del Libro III del Código de Comercio, que es lo que, en términos coloquiales de la navegación, se denomina la regulación de la maritimidad; es decir, aquellas cuestiones relativas a la figura del naviero, su régimen jurídico, su «status», el concepto, la naturaleza y la definición de lo que se entiende por esta figura en el Derecho Marítimo. Sería necesaria, señor Ministro, la adaptación de este Libro III del Código de Comercio, que data de 1885, en lo que atañe a las estructuras empresariales actualmente vigentes, que nada tienen que ver con aquellas que se regularon hace ciento quince años. La regulación que contiene del naviero, como titular empresarial que desarrolla una actividad de navegación, no tiene nada que ver con lo que hoy es la marina mercante y lo que regula el Libro III del Código de Comercio: las figuras de los agentes consignatarios, de los transitarios y, en definitiva, lo que es el estatuto jurídico del buque. Todo ello requiere una mo-

dificación que sería la más profunda, que es la actualización del concepto contenido en este Libro III, que es el de la maritimidad, y que abarcaría todos estos subconceptos o definiciones a las que he ido haciendo referencia.

Desde nuestro punto de vista, éstas son las cuestiones que habría que actualizar en el Derecho Marítimo español, y se pueden acometer a través de dos técnicas, señor Ministro: a través de diferentes procedimientos que se vayan presentando a la Cámara, leyes especiales en estos cinco ámbitos, o a través de otra técnica, que es la que doctrinalmente en este momento se está defendiendo más —incluso en la sección creada en su propio Ministerio, la Sección Especial del Derecho de la Navegación—, que es la de hacer un código general de navegación, que no se llamaría así sino ley general de navegación, y que a nosotros nos parecería la solución más adecuada; una ley de navegación marítima de nueva planta que integrara el Derecho Marítimo privado y la legislación pública básica de la navegación, porque intervienen dos aspectos: la regulación de la actividad marítima propiamente, es decir, tanto la actividad marítima de transporte como de recreo o de pesca, y las actividades marítimas que actúan en el ámbito de la esfera de las relaciones contractuales entre los diferentes agentes que intervienen en el tráfico marítimo, como pueden ser la construcción, los fletamentos, los arrendamientos, los suministros o el seguro. En definitiva, una integración del ordenamiento jurídico público marítimo con el ordenamiento jurídico privado marítimo. Desde nuestro Grupo Parlamentario votaríamos por esa segunda alternativa puesto que nos parece más correcta.

Es necesario, señor Ministro, abordar pronto esta problemática, porque los operadores de la navegación marítima española están demandando que exista esta actualización, ya que nos encontramos, repito, con una legislación muy dispersa, asistemáticamente incardinada en el ordenamiento jurídico y, sobre todo, caracterizada por su enorme vetustez. Por un lado está la antigua técnica de ir por reformas parciales, como he dicho antes, y, por otro, ir al Código General de la Navegación, que es lo que nosotros defenderíamos.

Señor Ministro, su antecesora en el cargo, la ex Ministra Mariscal de Gante, por Orden Ministerial de 18 de mayo de 1999, constituyó, en el seno de la Comisión General de Codificación, la Sección Especial para la Reforma del Derecho de la Navegación, en el uso de las facultades que le reconocía el artículo 22 de los estatutos de la Comisión General de Codificación, Real Decreto 160/1997, de 7 de febrero, y la crea cuando ya había habido trabajos importantes en el ámbito de la Sección Segunda del Derecho Mercantil. Pero, señor Ministro, nos llama la atención una cosa importante en la Orden Ministerial que dicta la señora Mariscal de Gante, y es que aunque crea la sección sobre el Derecho y la navegación, no la vemos ajustada al Estatuto de la Comisión General de Codificación, al Decreto 160/1997. ¿Por qué? Porque, señor Ministro, si usted ve lo que dicen los estatutos generales de esa Comisión, comprobará que en el artículo 22 se dice que el Ministro —en este caso la Ministra, su antecesora— puede proceder a la

constitución de secciones especiales para casos concretos como es éste, pero fijando un plazo.

Yo tengo delante la Orden firmada por la ex Ministra Mariscal de Gante, y no atribuye plazo para la realización de los trabajos. Ese dato es importante, porque los trabajos que se están realizando van muy lentos, lo que conocemos por las reuniones que hemos tenido con gente que trabaja en ese ámbito. Por ello nos preocupa que se mandara la creación de esa sección sin plazo concreto, con lo que, por otra parte, se infringe el artículo 22 de los estatutos de la Comisión General de Codificación que dice que se creará la sección, pero indicando los componentes, el trabajo a realizar y el plazo para la realización del mismo, cosa que aquí no se determina. Por ello, queremos transmitirle esta preocupación en relación a que no se fijó ningún plazo y a que se está trabajando sin plazo concreto.

Éste es, pues, el objeto de esta interpelación: sensibilizarle a usted puesto que es la cabeza de mando de toda la cadena de trabajo del Ministerio —valga el símil—, y en la medida en que usted pueda dirigir e impulsar esos trabajos de la Sección Especial para Reforma del Derecho de Navegación es cuando se podrá presentar en esta legislatura un proyecto de ley que pretenda la actualización del Derecho de la navegación española a la realidad del transporte y de la actividad pesquera que exigen estos tiempos de entrada en el siglo XXI.

Nada más y muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Gatzagaetxebarría.

Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Panagua): Gracias, señora Presidenta.

Señoría, señoras y señores Senadores, respondiendo a la interpelación sobre la política que va a desarrollar el Gobierno en relación a la actualización, modernización y codificación del Derecho marítimo español, diré que, como saben todos ustedes, tiene una doble vertiente. Por una parte, está la regulación básica en los preceptos que el mismo dedica al Código de Comercio de 1885, como se acaba de recordar desde esta tribuna, que se ocupa del fenómeno de la navegación marítima como actividad comercial, complementados, entre otras leyes, por la de Hipoteca Naval así como por numerosos convenios internacionales y por los denominados usos del mar, que tienen una importancia indudable en esta materia. Por otra parte, está la regulación contenida en diversas disposiciones administrativas que se ocupan básicamente de todos los aspectos jurídicos públicos de la navegación.

Se puede afirmar que las normas administrativas, entre las que destaca la Ley 27 de 1992, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que son de carácter reciente, están adaptadas a las necesidades actuales de la sociedad y, además, están en constante evolución, siendo buena prueba de ello, por ejemplo, que el pasado viernes se aprobara en el Consejo de Ministros el Reglamento de inspección y certificación de buques civiles.

A este cuerpo normativo hay que sumar las disposiciones que, desde su marco competencial, puedan dictar las Comunidades Autónomas, como la reciente Orden de 7 de julio de 2000, del Gobierno catalán, sobre ordenación del transporte en aguas marítimas y continentales.

Si esto es así en lo que se refiere a los aspectos jurídico-públicos del Derecho Marítimo, lo cierto es que, como se ha recordado, las disposiciones del Código de Comercio de 1885, y más concretamente su Libro III, que constituye la base reguladora en esta materia, aun a pesar de las importantes normas posteriores, no se han adaptado a las necesidades que plantea la evolución de la sociedad y de las comunicaciones en el tráfico jurídico moderno, máxime cuando dicha regulación centenaria era ya tributaria del Código de Comercio de 1829.

Ello ha motivado que el Libro III sea el más criticado de todos los que componen el Código de Comercio y que incluso se haya planteado que más que una reforma del Código resultaba ya procedente la aprobación de una ley especial de navegación, al igual que ocurrió en 1980 con el contrato de seguro o en 1985 con la letra de cambio, el cheque y el pagaré.

La importancia de las actividades marítimas en España está fuera de toda duda. El desarrollo de sus actividades pesqueras, las necesidades de comunicación con territorios españoles en alta mar, la creciente importancia de sus cauces fluviales, la expansión de la actividad deportiva y recreativa, en consonancia con el desarrollo turístico, o la actividad de nuestros astilleros, son simples muestras de la destacada presencia de la actividad marítima en nuestra economía. Es preciso, por tanto, y en ello coincidimos, señoría, una actuación legislativa que nos ofrezca un adecuado marco de desarrollo de todas estas actividades.

Por otra parte, nos encontramos —y es muy importante que esto no lo perdamos de vista cuando hablamos de agilización y de tiempos— ante un sector del ordenamiento jurídico muy complejo, en el que junto a la regulación legal de carácter escrito, el uso tiene una gran trascendencia, así como la normativa internacional. Estos hechos son los que determinan, señoría, que cualquier proceso de reforma deba basarse, atendiendo a todas estas circunstancias y complejidades, en una regulación general y homogénea que comprenda y aborde los distintos aspectos de lo que se conoce como el Derecho Marítimo español y que, a su vez, sea capaz de conciliar la gran cantidad de legítimos intereses que se encuentran en juego en esta materia.

Si bien esta necesidad de reforma y actualización del Derecho Marítimo se había puesto de manifiesto —como ha recordado también su señoría— desde hace tiempo, fue en noviembre de 1998 cuando la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones de esta Cámara aprobó por asentimiento una enmienda transaccional a una moción por la que se instó al Gobierno en aquel momento a presentar a las Cortes un proyecto de ley de actualización del Derecho Marítimo español. Con el objetivo de cumplir dicha moción parlamentaria, se dictó la Orden de 18 de mayo de 1999 en la que se constituye la Comisión General de Codificación y en ella la Sección Especial para la Reforma del Derecho de Navegación. Esta

sección, como también se ha recordado, tiene encomendada la elaboración de una propuesta de anteproyecto de ley para la navegación y de modificación, en su caso, del Código de Comercio y de cuantas normas resulte necesario para abordar, como decíamos, desde un punto de vista global, la reforma de todo el Derecho Marítimo. Por tanto, recoge los aspectos esenciales en cuanto al mandato y en consonancia con las prioridades que se manifestaban en la interpelación, es decir, una ley para la navegación, reforma del Código de Comercio y cuantas leyes sean precisas para armonizar y que haya un cuerpo jurídico en esta materia de nuestro ordenamiento jurídico global.

Le aseguro, señoría, que los vocales de esta sección especial, todos ellos de reputada cualificación científica y profesional, vienen realizando un esfuerzo extraordinario considerando y atendiendo a la gran complejidad de esta materia, tal y como se nos ha explicado desde esta tribuna. Por eso es difícil y complicado poner una fecha concreta. Creo que debemos seguir dando prioridad a la calidad y al rigor del resultado final antes que a la celeridad. Es verdad que tenemos que impulsar —estoy de acuerdo con ello, señoría— la necesaria agilidad de los trabajos, que no se produzca una paralización, pero debemos acompañarlo con la necesidad de rigor que los miembros de la sección especial vienen realizando en este trabajo.

Según los últimos datos de los que disponemos, se encuentran ya en una fase muy avanzada y presididos por esa idea de lograr un texto riguroso y comprensivo de todas las materias relacionadas con el Derecho Marítimo.

Para llevar a cabo los trabajos de reforma, se está estudiando toda la normativa existente, así como los proyectos que, en relación con aspectos concretos, se han ido elaborando en distintos momentos. De forma especial se están analizando e incorporando los convenios internacionales en los que ha participado España, aunque no estuvieran en vigor, como ocurre con las Reglas de Hamburgo, ya que el Derecho Marítimo se encuentra presidido, como sabemos, por la idea de la unificación internacional.

Finalmente, se ha intentado conjugar la tradición española, en particular la reflejada en las Ordenanzas de Bilbao y en los códigos de comercio, y la práctica marítima actual, especialmente la reflejada en los contratos tipo o en condiciones generales de contratación.

El marco previsto para la normativa que se va a proponer estará basado en el principio de flexibilidad. Se incorporará la libertad de contratación, de forma que las normas de Derecho necesarias sólo se impongan a los sectores en los que lo demande la seguridad del tráfico, como es el caso de la responsabilidad y la seguridad de los buques.

Si pasamos a destacar con brevedad algunos aspectos de los trabajos realizados, debemos señalar previamente que el ámbito objetivo del texto es el Derecho de la navegación, que supera el reducido Derecho del comercio marítimo, pero también es cierto que no pretende abarcar todo el Derecho dedicado a la regulación del mar.

De este modo, se propone definir el régimen jurídico del buque, distinguiendo entre buques propiamente dichos, embarcaciones menores y artefactos navales. Se dispone que se regule por primera vez con rango de ley aspectos

como la nacionalidad y abanderamiento del buque, la adquisición y baja del pabellón español, los efectos de la nacionalidad, el régimen del pasavante y de la patente de navegación o la prohibición de la doble nacionalidad. También se está tratando con atención especial la actualización de los libros documentos más importantes.

Otra información de la que disponemos y que nos han facilitado los que están trabajando en la sección es la relativa a la seguridad del buque. Ésta es objeto de regulación desde la perspectiva tanto del Estado, del pabellón, como del Estado rector del puerto, a cuyo efecto se establecen los principios rectores de las inspecciones e inmovilizaciones de los buques.

En tercer lugar, la ordenación de los registros persigue los objetivos de mantener un registro de carácter jurídico a través del Registro Mercantil y un registro de carácter administrativo existente en las capitanías marítimas, regular sus funciones e imponer su coordinación.

En relación con los contratos de utilización de buque, se aborda una regulación completa y moderna de los contratos que se emplean en la actividad naviera, singularmente los de arrendamiento, las diferentes modalidades de fletamento, pasaje marítimo y remolque.

Se han estudiado los principales casos de accidentes marítimos, sus consecuencias patrimoniales y el alcance de las mismas, sobre todo en lo referente a la indemnización de daños y perjuicios. Respecto del salvamento marítimo, se han incorporado todos los principios orientadores del Convenio Internacional de 1989.

Finalmente, el contrato de seguro marítimo, que queda excluido de la legislación general de seguros, se regula bajo el principio general de libertad de las partes, salvo cuando se establece con un carácter obligatorio, como es lógico.

En definitiva, como puede advertir su señoría, los trabajos se encuentran muy adelantados, y aunque es cierto que quedan algunos aspectos por tratar en la sección, si nos atenemos a la relación de asuntos comentados que ya han sido abordados y sobre los que ya se ha trabajado, creo que es justo reconocer la importantísima labor que está realizando la sección, que no se había acometido desde hacía muchísimo tiempo y que se venía demandado desde la fecha a que hemos hecho referencia.

Por otro lado, no se puede decir que se haya actuado de forma lenta, sino de manera rigurosa y pormenorizada, abordando esta cuestión con muchísima seriedad, por lo que esperamos que el fruto de este trabajo sea lo más positivo posible desde la garantía que a todos nos ofrecen los miembros de la sección, y el Gobierno tiene la intención de que se culmine de una forma seria y que se adapten y resuelvan los problemas de la realidad del tráfico marítimo en España.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría, por tiempo de cinco minutos.

El señor GATZAGAETXEBARRÍA BASTIDA: Gracias, señora Presidenta.

Señor Ministro, en mi opinión el objeto principal de esta interpelación ha quedado satisfecho; no obstante, tenemos la intención de presentar una moción en la línea de lo que tanto usted como yo hemos indicado, es decir, para impulsar este tema.

Como le he dicho en mi primera intervención, en sus comparecencias públicas usted nunca había hablado de este tema; por ello, como digo, el objeto principal de esta interpelación, que consistía en que el Ministro quedara enterado de que hay un asunto muy importante pendiente de resolver en su Ministerio, se ha cumplido. Como ni en los periódicos ni en las editoriales se publica nada sobre esta materia, usted no tiene la presión de los comentaristas y tertulianos sobre la misma, y es lógico que a su señoría no le llegue. ¿Y qué cauce parlamentario hay para que eso ocurra? Evidentemente, mejor que formular una pregunta es presentar una interpelación al respecto para que usted se informe sobre este asunto, le tengan que elaborar un informe, y ponga usted en marcha toda la cadena desde arriba, es decir, la Subsecretaría, el Secretario General Técnico y la sección especial. Ése es nuestro objetivo.

Queremos que esa Comisión trabaje y lo haga con celeridad, y llevaremos a cabo un seguimiento sobre la marcha de los trabajos. En este sentido, el Gobierno, en documento presentado a la Cámara el 5 de febrero de 1999, en expediente 661/126, indica que desde el mes de noviembre de 1994 el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, don Iñaki Anasagasti, viene efectuando un seguimiento de los trabajos que el Gobierno tiene previsto realizar respecto de la realidad y la actualización del Derecho Marítimo español. Es decir, el Grupo Nacionalista Vasco ya viene haciendo un seguimiento de esta materia desde la época del anterior Gobierno socialista. Y con esta iniciativa pretendemos sensibilizarle sobre esta cuestión. Usted es Diputado por Ávila y yo soy Senador por Vizcaya, y obviamente nuestras vivencias de los problemas del ordenamiento jurídico marítimo no pueden ser las mismas, pero sí pueden serlo para un representante público de los litorales vasco, valenciano, catalán, andaluz, canario o gallego, y puedo asegurarle que existe una gran preocupación en el sector marítimo español para que se produzca esta actualización.

Su señoría también ha dicho que el origen del Derecho Marítimo español está en las reglas del Consulado del Mar y en las Ordenanzas de Bilbao de 1737, que estuvieron vigentes hasta la aprobación del Libro III del Código de Comercio en 1885. Por eso, tenemos la obligación de traer a debate a esta Cámara esta materia con el fin de que el Gobierno presente una iniciativa que tenga por objeto la actualización del Derecho Marítimo.

Coincido con las líneas generales de su exposición, así como usted coincidía conmigo en que es necesario una concreción, por ejemplo, del régimen jurídico del buque, de la utilización de los contratos, porque fíjese, señor Ministro, que no existe una regulación del contrato de construcción naval y tenemos que acudir al arrendamiento de obra del Código de Comercio, con toda la problemática de la construcción naval por los empleos directos e indirectos tanto en astilleros públicos como privados.

Estamos funcionando, como también decía usted, a través de los usos, las costumbres y la interpretación de las cláusulas internacionales sobre el tráfico marítimo, pero ello no da seguridad muchas veces, y tanto es así que hasta el propio Tribunal Supremo ha sufrido contradicciones, llegando a mandar que haga algo el legislador porque, en definitiva, se está complicando la aplicación del ordenamiento jurídico y la judicialización, en definitiva, del Derecho de la navegación.

Ése es el objeto de nuestra iniciativa parlamentaria, que usted esté imbuido de que existe un problema importante —no de esos que salen en los medios de comunicación y sobre los que normalmente le interpelan— que afecta a la gente normal que vive en el día a día y que tiene que navegar a través de los mares, porque España tiene una gran tradición marítima y está necesitada de esta actualización.

Nada más y muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Gatzagaetxebarría.

Comienza el turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (*Pausa.*)

Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Arroyo Hodgson.

El señor ARROYO HODGSON: Gracias, señora Presidenta.

Señorías, quiero decir en nombre de Coalición Canaria que nos parece muy oportuna la iniciativa del Senador Gatzagaetxebarría.

El tráfico marítimo en Canarias —como ya se ha hecho referencia— tiene una importancia extraordinaria y habiendo sido consultado el sector de la navegación marítima en Canarias, así como algunos expertos en Derecho marítimo se nos ha informado de que la Asociación de Navieros Vascos (Anavas) pasa por ser la más ágil y competente de todas las asociaciones españolas del sector.

Por otra parte, las conclusiones del Congreso Nacional de Derecho Marítimo, celebrado en Madrid en octubre de 1999, en esencia, coinciden con la línea expositiva del Senador Gatzagaetxebarría. Por tanto, desde nuestro punto de vista está muy claro que es necesario abordar urgentemente la reforma del Libro III del Código de Comercio, que data de 1885; y, sobre todo, es necesario destacar el auge que ha tenido el comercio internacional y, en consecuencia, la internacionalización de los intercambios comerciales.

Los antecedentes de que dispongo, para no remontarnos más atrás, son del 17 de noviembre de 1994, cuando el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco presentó ante la Mesa del Congreso de los Diputados una proposición no de ley instando al Gobierno a la actualización de la ley en cuestión y, en concreto, del Libro III del Código de Comercio. Esta iniciativa parlamentaria dio lugar a que se aprobase una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados instando al Gobierno a que en el segundo período de sesiones del año 1995 presentase un proyecto de la ley reguladora del contrato de seguro marítimo y otro

sobre el contrato de utilización del buque. Sin embargo, la finalización anticipada de la V Legislatura impidió que el Gobierno cumpliera dicho compromiso parlamentario del 21 de junio de 1995.

Por tanto, nosotros insistimos en que está claro que hay un trabajo pendiente de realizar, que afecta a todo el tráfico marítimo y a la navegación marítima española y que los trabajos que ha relatado el Ministro que se están realizando en el seno de la Comisión General de codificación son muy importantes.

En conclusión, felicitamos al Senador proponente, señor Gatzagaetxebarría, por su iniciativa, y nos alegramos de que el señor Ministro esté sensibilizado con esta cuestión.

Gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Continúa el turno de portavoces. ¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (*Pausa.*)

Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el Senador Ganyet.

El señor GANYET SOLÉ: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señorías, a la vista de los términos en que se ha sustanciado la interpelación formulada por el Senador Gatzagaetxebarría, contestada por el Ministro señor Acebes, el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés considera urgente que el Gobierno actualice, modernice y codifique el Derecho Marítimo español para adaptarlo a las necesidades actuales de la navegación marítima; que acelere los estudios en curso a los que se ha referido hace un momento el señor Ministro y que se comprometa en plazos razonables, pero cortos, a la presentación del proyecto de ley para la navegación y a la reforma del Código de Comercio.

No se nos escapa la complejidad de los temas a los que se han referido tanto el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos como el señor Ministro; complejidad que tiene relación directa con el volumen del tráfico marítimo en nuestro país. Efectivamente, una legislación que data de 1885, mucho antes por tanto del Titanic, debe ser revisada, aunque se hayan introducido a lo largo de los años varias modificaciones y «addendas», como no podía ser de otra manera.

España ocupa un lugar destacado en las rutas marítimas comerciales del mundo, así como en la pesca marítima; no en vano su posición geográfica entre el Atlántico y el Mediterráneo ha condicionado a lo largo de los siglos el desarrollo de la navegación marítima. Quedamos pues a la espera de la presentación de la moción anunciada.

Muchas gracias, señora Presidenta, señorías.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Capdevila.

El señor CAPDEVILA I BAS: Gracias, señora Presidenta.

En primer lugar, quiero agradecer al Senador Gatzaga-etxebarría la presentación de esta interpelación y, a su vez, voy a dejar constancia de que es un placer poder intervenir en este tipo de interpelaciones cuando el señor Ministro responde que efectivamente se está trabajando en este menester, en la reforma del Libro III del Código de Comercio y que, tal como nos ha anunciado incluso con algunos aspectos ya concretos, los trabajos están prácticamente ultimados.

Evidentemente, la sociedad clama ya desde hace años una reforma del citado Libro III del Código de Comercio español. El señor Ministro ha definido el Derecho Marítimo como el derecho mercantil que regula estas relaciones jurídico privadas que derivan del comercio marítimo y de la navegación marítima en general. A estas alturas, y después de lo que se ha dicho, queda constatado que el Derecho Marítimo actual no satisface todas las necesidades, como sostiene el profesor Garrigues en su obra «Curso de Derecho Mercantil» cuando afirma que el Código de Comercio y en especial el Libro III refleja un cuadro de la navegación marítima de principios de siglo pasado. Está empleando incluso una terminología de aquella época cuando en realidad está todo actualmente desfasado.

Las lagunas del Código de Comercio están cubiertas, como ha dicho el señor Ministro, por los usos. La vida ha creado un derecho vivo, al margen del derecho codificado. Precisamente la concentración de las empresas navieras y aseguradoras con estas relaciones contractuales es lo que ha hecho este Derecho de navegación del comercio marítimo. De ahí pues la complejidad de la reforma de este Libro tercero del Código de Comercio, que tendrá que abarcar no solamente estos convenios internacionales, sino también estos usos particulares que son de vital importancia.

No voy a extenderme en los convenios internacionales que han primado en el transcurso de los últimos años, que abarcan prácticamente la vigencia del Código de Comercio, pero sí hay una serie de recomendaciones, como sería, por ejemplo, que la legislación de cada país miembro tendiera a unificar los criterios de estos convenios internacionales. Incluso algún autor se ha inclinado por adaptar los criterios de legislación de estos países monstruos en la navegación a los diversos Estados miembros, respetando siempre, claro está, las particularidades propias de cada país.

Por consiguiente, nos congratulamos de que la reforma se esté llevando a cabo con la celeridad que ha indicado el señor Ministro, y esperaremos a la moción que presente el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos para adoptar una posición más concreta, bajando al ruedo, como se dice en términos taurinos.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Capdevila.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador González Príncipe.

El señor GONZÁLEZ PRÍNCIPE: Gracias, señora Presidenta.

En primer lugar, quisiéramos felicitarnos por el ambiente cordial que ha habido entre el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y el Gobierno. Sería bueno que este clima de colaboración pudiéramos extenderlo a otras facetas de la vida política, porque sería mejor para España y para el pueblo vasco.

Dentro de este ambiente de colaboración, querría fijar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nuestra posición.

El Libro tercero del Código de Comercio, que data de finales del siglo XIX, por fuerza está pidiendo una actualización. En ese sentido, los Socialistas somos partidarios de ir hacia una redacción integral de lo que llamaríamos un código de navegación marítima. Ese código debería incluir forzosamente la parte de Derecho marítimo privado y la parte de Derecho público.

A partir de ahí, ¿cómo contemplamos en este momento los trabajos de la Sección de la Comisión General de Codificación sobre esta materia? Señor Ministro, los tomamos como punto de partida. Los Socialistas consideramos que los trabajos de los expertos y técnicos es fundamental, pero es el punto de partida. Dentro de esta línea de oposición, al servicio de los ciudadanos y al servicio de la sociedad, quiero ofrecer solemnemente a todos los Grupos Parlamentarios y al Gobierno la colaboración de los Socialistas para incorporar las demandas de la sociedad civil y de la sociedad española en general en la nueva legislación marítima.

Señor Ministro, hay problemas que nos preocupan. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la contaminación, con la responsabilidades de los distintos agentes económicos: armadores, empresas navieras, etcétera, debe hacerse, en nuestra opinión, no sólo con una buena regulación técnica, sino poniendo los intereses generales, los intereses de la sociedad, por encima de los intereses económicos de cualquier colectivo.

En esta dirección, el anteproyecto que se elabore en la Sección especial será, insisto, un documento de partida que deberá ser enriquecido con las aportaciones de los distintos agentes económicos y sociales implicados. He puesto de relevancia el problema de la contaminación porque es uno de los debates que en este momento está polarizando más a la opinión pública, de un país hermano como Francia, con los siniestros en la zona del Canal de la Mancha, que también preocupan en la costa de Galicia.

Por lo tanto, ahí tienen nuestra mano tendida para alcanzar el mayor grado de consenso posible para hacer un nuevo Código que no sirva sólo al sector, sector que cada día va a tener más importancia desde el punto de vista económico en la tarta nacional, en el PIB, dada la relevancia del sector marítimo, no sólo del pesquero, sino de todo lo que tiene que ver con el transporte, que en una economía globalizada tiende a crecer por encima del crecimiento normal de la economía. Es una actividad económica que necesita que le demos un marco de seguridad, de regulación, que permita la fluidez del desarrollo de ese sector económico, por eso los socialistas quisiéramos —y ésta es nuestra aportación— que se incorporase la defensa de los intereses generales así como las propuestas de otros secto-

res sociales que son sujetos pacientes y no activos de la actividad marítima.

En esa dirección, con absoluta cordialidad y con absoluta lealtad, tienen ustedes nuestra mano tendida y, por lo tanto, esperamos que en esta legislatura, entre todos y tomando como texto base lo que elabore la sección especial, podamos culminar ese nuevo Código de la navegación marítima, que es una petición unánime del sector marítimo español pero que, sobre todo, es una petición —creo que hoy unánime— de todos los grupos parlamentarios porque tenemos una legislación que no sirve en este momento para los retos y las demandas de la sociedad española.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, la Senadora España tiene la palabra.

La señora ESPAÑA MOYA: Señora Presidenta, señor Ministro, señorías.

Estamos debatiendo la necesidad de actualización, modernización y codificación del Derecho marítimo como consecuencia de una interpelación presentada por el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, el señor Gatzagaetxebarría.

Señor Ministro, como usted ha dicho, la importancia del Derecho marítimo en España y del Derecho marítimo internacional está fuera de toda duda, y hablo de Derecho marítimo internacional porque no olvidemos que la navegación trasciende las propias fronteras. Constantemente saltan a la actualidad —como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista— asuntos relacionados con el Derecho marítimo —a veces por desgracia, como el caso de los temas de contaminación del mar por vertido de hidrocarburos y otras sustancias nocivas— y de su regulación se encargan convenios internacionales, normas comunitarias, etcétera; normas que intentan prevenir, paliar o establecer responsabilidades y solucionar problemas que afectan a toda la comunidad.

Pero cuando hablamos de Derecho marítimo ¿a qué nos estamos refiriendo? Seguimos una concepción dualista que defiende la separación del Derecho de la navegación marítima del Derecho de la navegación aérea, que se regula por la Ley de la navegación aérea y es un Derecho fundamentalmente escrito, a diferencia del Derecho marítimo cuya base de regulación —como ya se ha dicho aquí— es el Código de Comercio. Pero he de comentar que también ha sufrido una evolución y una modernización posterior al Código con leyes como las que se han nombrado ya de Costas de 1988, Ley de Puertos y de la Marina Mercante de 1992 y modificada en 1997 y Ley de transporte de mercancías en régimen de conocimiento de embarque, así como por convenios internacionales y por el Derecho comunitario europeo. Pero este panorama normativo hay que completarlo con los usos mercantiles marítimos, que son expresión de un Derecho vivo y que cumplen una función importante, especialmente en el ámbito contractual, incluso el propio Código se remitía a ellos.

Independientemente de lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular es partidario de una profunda reforma del Derecho marítimo; es necesario elaborar una ley de la navegación marítima que sustituya al Código de Comercio en esta regulación. Esa reforma es laboriosa y compleja, y de su estudio se está encargando —como ha dicho ya el Ministro— la Comisión de Codificación que, como nos ha informado el señor Ministro, está elaborando un anteproyecto con la información facilitada por él mismo, teniendo en cuenta los trabajos anteriores de seguro marítimo, de contratos de utilización del buque, etcétera.

Igualmente, se están teniendo en cuenta las valoraciones que se han hecho de estos trabajos, lo cual es muy importante, así como los trabajos hechos en congresos y revistas de la especialidad.

Como dijo Garrigues y también recordaba el portavoz de Convergència i Unió, el Código de Comercio de 1885 prácticamente nació viejo. Pero, señorías, si nos encontramos ante este Código de Comercio del que se dice que ya nació viejo y es de 1885, dejemos un tiempo prudencial para elaborar un nuevo código de comercio que, en vez de durar 115 años, dure 200 años o más.

¿Cuáles deben ser los principios inspiradores de esta reforma? En primer lugar, la ampliación del tradicional Derecho del comercio de la navegación marítima a navegaciones que no tienen carácter comercial y no se desarrollan exclusivamente por el mar sino por aguas interiores. Otro de los principios —y con esto queremos dejar tranquilo al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista— es que se tengan en cuenta las normas de origen interno, las internacionales, las comunitarias y se respeten las normas emanadas por las Comunidades Autónomas, así como que se contemple la realidad de la navegación actual, que no se remita sólo al buque sino que contemplen las embarcaciones actuales.

¿Y cómo se puede efectuar esta reforma? Hay varias opciones. En primer lugar, una ley especial de Derecho marítimo que integre relaciones privadas y públicas del modo en que lo hace la Ley de Navegación Aérea, pero eso incluiría la derogación del Código de Comercio y la Ley de Puertos, si bien consagraría la autonomía legislativa de la disciplina. No obstante, parece ser que la Comisión de Codificación sigue en la línea de mantener la separación de normas administrativas y privadas y promulgar una ley de la navegación marítima especial de sustitución del Código de Comercio.

Sólo me resta agradecer al señor Ministro de Justicia su exposición sobre el camino que está siguiendo la reforma del Derecho Marítimo y decirle que estamos seguros de que por parte del Ministerio se va a impulsar la reforma para llegar a fructificar en una efectiva ley de la navegación marítima acorde con la realidad actual.

Nada más. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora España. El señor Ministro tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Panagua): Muchas gracias, señora Presidenta.

Señorías, intervendré con toda brevedad, en primer lugar, para agradecer las intervenciones tanto del Senador interpelante como del resto de los portavoces de los Grupos Parlamentarios, sus aportaciones y el ánimo constructivo y de colaboración mostrados, así como la oferta de consenso, que es absolutamente mutua, incluso, respecto del sistema y el procedimiento que se han apuntado.

Lógicamente, lo que hace la Comisión de Codificación es una propuesta básica que posteriormente los Grupos Parlamentarios tendrán que debatir, reformar, presentar aportaciones y, finalmente, si se considera oportuno, aprobar.

Senador Gatzagaetxebarría, no tiene que hacer ninguna justificación sobre la necesidad y oportunidad de esta interpelación. El tema es de gran trascendencia, de una enorme importancia y el que se genere un debate y vayamos dando información sobre cómo se encuentran estos trabajos me parece de una enorme oportunidad y no precisa ninguna otra justificación. Es más, el Ministro de Justicia está absolutamente encantado de venir cuantas veces su señoría considere oportuno para hablar de este tema.

No tenga ninguna preocupación por la sensibilidad sobre el Derecho marítimo respecto a nuestro lugar de nacimiento o de origen. Estoy absolutamente convencido de que el Derecho marítimo tiene una enorme trascendencia para los intereses generales de España y para nuestra economía como sector de primer orden, y una regulación que tenga la suficiente seguridad jurídica y que abarque todos sus aspectos es imprescindible para los intereses generales.

Yo creo, por las intervenciones que han tenido todos los grupos parlamentarios, que la complejidad y la ambición del proyecto sobre el que estamos debatiendo es una consideración común. Es cierto que he intentado pormenorizar algunos de los aspectos trascendentales que ya han sido debatidos y discutidos dentro del equipo técnico que está elaborando la propuesta básica inicial, pero tanto de cara a la redacción y a la elaboración de la moción consecuencia de esta interpelación como de la adecuada información a sus señorías, que pretendo siempre que sea absolutamente rigurosa y en términos estrictos, he manifestado y relatado las cuestiones que ya han sido debatidas y en las que existe un grado de acuerdo dentro de la sección en la Comisión de Codificación, pero todavía existen temas, algunos de ellos complicados y conflictivos, sobre los que en estos momentos se está acordando, se está trabajando y se está debatiendo.

Sin ánimo de cansar a sus señorías, pero para que vean la enjundia que este tema tiene y, en cuanto a las urgencias, comprendamos los trabajos de la Comisión, me van a permitir que relate algunos sobre los que en estos días y durante los próximos meses se está trabajando, algunos tan complicados en su regulación como los relativos al Estatuto jurídico del naviero y, particularmente, a su régimen de responsabilidad, para separar la que corresponde al naviero del propietario que no utiliza el buque en la navegación y unificar la que en la actualidad se regula en el Derecho español y en convenios internacionales.

Asimismo se está trabajando sobre las formas colectivas de explotación del buque; la redefinición de la figura

del capitán y del sobrecargo y de las empresas especializadas en funciones de comisionista, consignatario y transitario.

En cuanto a los contratos de utilización de buque, se plantea la inscripción del contrato de arrendamiento y sucesión y la consideración del contrato de fletamento y de transporte de mercancías como un mismo contrato; la redefinición del sistema de fuentes del contrato de seguro marítimo; la regulación del abordaje, estableciendo el principio de responsabilidad proporcional a la culpa de los sujetos causantes, y el de solidaridad sobre los daños causados a terceros; o toda la reelaboración de la prelación de los créditos marítimos y revisiones del embargo del buque para la ejecución de créditos privilegiados.

Haciendo esta simple relación, que podría ser más amplia, o dando por citados algunos de los que he manifestado en mi anterior intervención, quienes conocen —como todos ustedes— el tema comprenden la complejidad de tomar decisiones a la hora de hacer una propuesta y un texto articulado que recoja no sólo la abundante doctrina, como ha dicho su señoría, sino también convenios internacionales, usos, peculiaridades y particularidades que sobre muchos de estos aspectos ya están recogidos y que deben influir en la propuesta final que podamos someter a la deliberación del Senado o del Congreso, de los grupos parlamentarios y de todos los afectados.

Por eso, sí a la agilización, sí a que no haya pausas en los trabajos, que no las está habiendo, pero seamos también conscientes a la hora de elaborar las propuestas que salgan del Senado, de su complejidad. El Derecho marítimo español que preparemos para el siglo XXI es un tema de enorme trascendencia, y debemos ser conscientes de que lo importante es que acertemos en su regulación, más allá de urgir en los tiempos. Agilidad, sí, pero les pido su colaboración —que ya han manifestado y que les agradezco—, para lograr un texto serio y riguroso que prepare nuestro Derecho marítimo español para el siglo XXI.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro de Justicia.

— DE DON RAMÓN ESPASA I OLIVER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE LA POLÍTICA QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA ASEGURAR QUE LA INFORMACIÓN GENÉTICA NO PUEDA SER UTILIZADA EN MENOSCABAR LA INTIMIDAD Y DIGNIDAD DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES, Y DISMINUIR SU AUTÓNOMA CAPACIDAD RELACIONAL Y CONTRACTUAL ANTE CUALQUIER ENTIDAD PRIVADA O PÚBLICA (670/000032).

La señora PRESIDENTA: Siguiete interpelación: Del excelentísimo señor don Ramón Espasa i Oliver, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre la política que piensa adoptar el Gobierno para asegurar que la información genética no pueda ser utilizada en menos-

cabar la intimidad y dignidad de los ciudadanos españoles, y disminuir su autónoma capacidad relacional y contractual ante cualquier entidad privada o pública.

Tiene la palabra el Senador interpelante, señor Espasa, por tiempo de quince minutos.

El señor ESPASA I OLIVER: Muchas gracias, señora Presidenta.

Como verá su señoría, se trata de una interpelación de impulso al Gobierno, aunque también contiene alguna dosis de crítica. Pero, básicamente, repito, se trata de una interpelación de impulso. Todas las interpellaciones son justas, necesarias e importantes —no pienso decir que la mía lo es más, ni mucho menos—, pero, señorías, están sucediendo cosas importantísimas en el campo de la biotecnología en cuanto a su repercusión en la salud humana y en la economía.

Estos días, por ejemplo, se ha suscitado el gran problema de las vacas locas, por decirlo simplísimamente; hemos recibido el Dictamen del grupo europeo de ética en ciencias y nuevas tecnologías, que aboga por la utilización de los embriones sobrantes en investigaciones, pero convenientemente regulado; hemos sabido del revuelo que se creó en Islandia, donde una compañía privada de Estados Unidos experta en investigaciones genéticas compró todos los datos genéticos de una población muy endogámica del Estado de Islandia para realizar estudios científicos. Éstos son algunos ejemplos que revelan la enorme importancia de una legislación positiva en materia de biotecnología y bioética, del progreso de las ciencias biológicas y médicas y del conocimiento del genoma humano como último hito de este continuado y acelerado progreso de las ciencias.

Simplemente, quiero dar una pincelada para recordar qué se ha dictado en España sobre legislación de biotecnología. Comprobarán sus señorías que hay dos períodos clarísimos: de 1979 a 1996 y de 1997 al 2000. De la primera etapa —un período más largo, lo reconozco— hay mucha legislación positiva que voy a enumerar: Ley de Transplantes (1979), Ley General de Sanidad (1986), Ley de Despenalización del Aborto (1985), Ley de Reproducción Asistida (1988), Ley de Donación y Utilización de Embriones (1988) y Ley de Organismos Modificados Genéticamente (1994). Es decir, se abordó una gran producción de legislación positiva dando respuesta a los problemas jurídicos, éticos y científicos que planteaba el progreso de las ciencias humanas y, en general, biomédicas. Dimos respuesta —la que supimos dar— a los trasplantes, a la interrupción voluntaria del embarazo, a la reproducción asistida y al derecho a la autonomía del paciente, algo que cada vez está tomando más importancia. La persona implicada tiene derecho a decidir sobre ser o no ser informada y, en su caso, a disponer de su información médica, sanitaria y genética, así como a otorgar su consentimiento a que ésta pueda ser utilizada en beneficio propio o en el de cualquier otro; en todo caso, siempre hay que contar con su consentimiento previo. Por lo tanto, se hizo un progreso muy importante.

En cambio, la producción legislativa del segundo período, el que va de 1997 al 2000, es mucho más limitada.

La más importante sea quizá la actualización de la Ley de Datos, la Ley 15/1999; el real decreto de desarrollo de la Comisión nacional de reproducción asistida, la Ley 15/1997; y también cabe citar la ratificación del convenio de bioética, en vigor en nuestro país desde el 1.º de enero de 2000, elaborado por el Consejo de Europa.

Esto es así, pero, señor Ministro, aunque tenemos elementos antiguos, no anticuados, de legislación positiva hasta el período 1996-1997 y algún elemento nuevo en el segundo período, y disponemos de criterios sobre los que regirnos para adoptar posiciones, no tenemos legislación positiva sobre los últimos avances de biotecnología y genética humana. Tenemos la Constitución española, por supuesto, la Declaración de Derechos Humanos de 1948, el Convenio de Bioética en vigor, que obliga a España desde el 1.º de enero, la Declaración sobre el Genoma Humano de 1998 y la Ley de Protección de Datos, pero éstos son de alguna forma principios de actuación. Exceptuando la Ley de Protección de Datos, el resto de normas que he citado nos dan criterios o principios de actuación, pero no nos acaban de resolver soluciones o problemas concretos —de los que pondré algún ejemplo después—, que vienen a poner de manifiesto la necesidad que tendríamos de producir más legislación positiva española en temas que empiezan a ser objeto de debate, que preocupan y que pueden ser utilizados, con su enorme carga de potencial positivo por el hecho del descubrimiento científico, en contra de las propias personas, aumentando la discriminación entre ellas o la asimetría de las relaciones entre las personas y los organismos, sean públicos o privados.

No quisiera ser sarcástico, pero de alguna forma podría decirse que en cuanto a producción legislativa están ustedes casi tan congelados como un preembrión. Se ha parado aquel impulso de producción de legislación positiva prototecnológica, y yo diría progresista, que hizo de España un país pionero en algunas cosas. Por ejemplo, la Ley de Reproducción Asistida ha sido reconocida prácticamente en todo el mundo como una ley muy buena, muy positiva, muy avanzada, y casi pionera no sólo en Europa, sino en todo el mundo. Me gustaría que nuestro país volviese a tener actuaciones pioneras y punteras en este difícil y complejo campo, que requiere la complicidad de juristas, científicos, técnicos, biólogos y, al final, de políticos para producir legislación positiva.

Por ejemplo, cómo participamos hoy en la profundización e internacionalización de este debate en bioética, sobre el genoma, sobre los transgénicos, sobre la clonación de embriones o la utilización de embriones sobrantes para la investigación, sobre la creación de células madres y clonación de las mismas para experimentar, sobre la posibilidad de congelar óvulos —cosa prohibida en nuestra Ley de Reproducción Asistida y que el progreso tecnológico hoy permite—, que quizá nos evitaría tener tantos preembriones congelados. En cambio, por no producir nueva legislación positiva estamos aún sin resolver un problema: ¿Qué hacemos con los preembriones congelados? ¿Los utilizamos para investigación, los tiramos, qué estatuto jurídico les damos? Pues bien, quizá podríamos prevenir problemas aceptando que hoy ya sabemos que se pueden conge-

lar óvulos con tanta seguridad como se congelan espermatozoides y, por lo tanto, la reproducción asistida podría tomar otro cariz completamente distinto, sin tener que recurrir tanto al tema de los preembriones.

Voy a dar ejemplos de por qué esta interpelación y esta reflexión sobre la falta de legislación positiva en materia de bioética y biotecnología. Por ejemplo, la Ley del Contrato de Seguro en su artículo 10 establece que el asegurado tiene obligación de informar a la compañía de todos los datos de su salud que puedan ser valorables como riesgo. ¿Entiende el señor Ministro, el Grupo Parlamentario Popular, y toda la Cámara que la información genética o del genoma humano es un dato importante, que en el futuro se tendrá que aportar para minimizar el riesgo de las compañías de seguros; o acabaremos con el riesgo, no para las personas, sino para las compañías de seguros? ¿Estamos dispuestos a que las compañías de seguros puedan algún día en nuestro país exigir información genética antes de firmar pólizas? Se me puede decir que el contrato de seguro es un contrato privado, un contrato voluntario de adhesión. Bien, pero saben ustedes que en España se hacen muchas hipotecas, y que éstas llevan anejo un contrato de seguro de vida; por tanto, no se trata de una relación libre y voluntaria entre dos partes, sino que muchas veces es una relación necesaria entre dos partes, que no son iguales, sino asimétricas. ¿Vamos a permitir que las compañías de seguros puedan algún día recabar información genética a un particular? Yo creo que no, pero deberíamos discutirlo, estudiarlo y producir legislación.

El artículo 22 de la Ley de Relaciones Laborales prevé los cribados de salud para los trabajadores. ¿Vamos a permitir que a este cribado pueda incorporarse la información genética, con o sin el consentimiento del trabajador? Son cosas que, no es que estén mal legisladas, sino que no están previstas en la legislación, porque no podían estar, pero sí deben estarlo en el futuro, y por eso reclamamos este plus de legislación positiva.

La Ley de Protección de Datos da muchas pistas, incluso en el artículo 7 ya prevé la prohibición de ficheros sobre determinados datos de salud, pero quizá en este mismo artículo 7, en el apartado 4 faltaría añadir también el mapa genético. Hay cantidad de ejemplos, señorías, que nos vienen a demostrar que hemos de adelantarnos, que hemos de meditar, que hemos de incorporar todos los conocimientos bioéticos y biotecnológicos que está produciendo el continuo progreso de la ciencia en el mundo, y hemos de transformarlo, primero en reflexión, y después en legislación positiva en nuestro país.

Como decía, en la Ley de Protección de Datos están muy claros los límites que se imponen a las Administraciones Públicas, a las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los entes privados, a la hora de utilizar ficheros que contengan datos que afectan a la salud de las personas y, dentro de la salud, estaría la información de su dotación genética, de su mapa genético, como se dice vulgarmente; pero no está suficientemente especificado o no está incorporado este nuevo avance de la ciencia, que es el conocimiento del genoma humano, la utilización que de él se puede hacer y, por tanto, las prevenciones que deberían

tomarse en una línea progresista, de aceptar el progreso y de fomentarlo, de no mirarlo como una amenaza «in toto», pero sí de delimitar aquellos aspectos que pudieran afectar a la dignidad de la persona humana, como recuerda y proclama el artículo 18 de nuestra Constitución Española.

Hay, por tanto, multitud de ejemplos que nos llevarían a decir que aparecen nuevos problemas políticos, éticos, de información y de poder, de autonomía de la persona. Se ha dicho que la información genética, que permite la ingeniería genética, va a tolerar que, en el futuro, gobernemos nuestro futuro biológico. Esto es importante para los científicos, para la ciencia, pero más importante que eso es que desde la democracia política gobernemos nuestro futuro como personas, no sólo nuestro futuro biológico, sino que este futuro biológico esté subordinado a nuestro futuro democrático, convivencial, como personas. Por todas estas razones nosotros queremos oír la respuesta del señor Ministro. Tenemos planteada una posible moción, pero nos reservamos al segundo turno para precisarla un poco más, en función de la respuesta del señor Ministro. Queríamos llamar su atención y la de la Cámara sobre la necesidad de descongelar el debate en bioética y en biotecnología en nuestro país, ponernos otra vez al día y, si es posible, ser pioneros, porque las cuestiones son muchas y distintas, son importantes y demandan reflexión ética, jurídica, moral, pero al final decisión política y democrática, en forma de normas, de leyes, de reglamentos, que permitan que gobernemos nuestro futuro como personas de plena dignidad.

Nada más y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno, de nuevo tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Panagua): Muchas gracias, señora Presidenta.

Señorías, intervengo de nuevo para responder a la interpelación sobre una cuestión que sin duda es de enorme importancia: asegurar que la información genética no pueda ser utilizada para menoscabar la intimidad y dignidad de los ciudadanos y disminuir su autónoma capacidad relacional y contractual ante cualquier entidad, sea ésta pública o privada.

Estoy de acuerdo con su señoría en que la importancia de la información genética en la sociedad actual es cada vez mayor, y es un hecho que los avances en investigación y tecnología genética se están produciendo a una gran velocidad. Además, las aplicaciones derivadas del genoma humano, como se ha recordado, van penetrando sin cesar en la vida personal y en las relaciones de los seres humanos: sanidad, medicina legal, industria farmacéutica, los seguros, así como la propia investigación policial y la Administración de Justicia.

En cuanto al uso de la información genética, si bien es cierto que nos permite un mayor desarrollo científico y nos dota de un importante instrumento médico para luchar contra todo tipo de enfermedades, también lo es que tiene importantes implicaciones éticas, morales y jurídicas. Nos

encontramos, por tanto, ante una materia multidisciplinar por definición, de la que se ocupa fundamentalmente, como se ha recordado aquí, la llamada bioética, es decir, la ética aplicada a la ciencia de la vida. Sin embargo, el Derecho tiene sus propios cometidos, aunque, lógicamente, están íntimamente relacionados con la llamada bioética. Así, en nuestro ordenamiento jurídico encontramos diversas normas relacionadas con la manipulación genética, entre las que cabe destacar la Ley 35/1988 sobre técnicas de reproducción asistida, y la Ley 42, de 28 de diciembre de ese mismo año, de donación y utilización de embriones y fetos humanos o de sus células, tejidos u órganos, sobre las que, además, ha tenido la oportunidad de pronunciarse el Tribunal Constitucional.

Pero atendiendo a los términos de la interpelación, y desde el punto de vista estrictamente jurídico, que es el que hoy nos corresponde analizar, es necesario que nos detengamos en los medios de que el Derecho dispone para evitar un uso inadecuado de la información genética, la cual, indudablemente, puede conllevar riesgos para los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre los que cobran una especial importancia los constitucionalmente protegidos, como son, el derecho a la intimidad personal y al honor así como el derecho a no sufrir discriminación.

Evidentemente, constituye una obligación de los poderes públicos dotar a la sociedad de los instrumentos que le permitan protegerse contra las intromisiones ilegítimas en la esfera de su intimidad, ya sea en sus relaciones privadas o públicas, y asimismo conseguir que estos instrumentos tengan carácter general y permanente de tal forma que puedan utilizarse cualesquiera sean las nuevas situaciones que puedan llegar a generarse.

El sistema de protección de los ciudadanos frente a la utilización inadecuada de cualquier clase de información se ha estructurado en la Unión Europea a través de la protección de los datos de carácter personal para proteger la denominada privacidad, entendida ésta en un concepto más amplio que el de intimidad, como aquella información que, aisladamente considerada no revela ningún aspecto esencial del individuo, pero permite, poniendo una información en relación con otras, afectar a unas facetas de la personalidad que el individuo tiene legítimo derecho a mantener reservadas.

En mi opinión es claro que la información genética de los seres humanos forma parte del concepto de dato personal protegido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal al tratarse de una información concerniente a personas físicas identificadas e identificables.

A estos efectos, la Directiva 95/46, relativa al tratamiento de los datos de carácter personal, aclara que se considerará identificable a toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social. Por tanto, la legislación de protección de datos ya concede, con carácter general, una importantísima protección en cualquier esfera de la actividad personal y profesional del individuo, ya que

los datos —y esto es muy importante— sólo podrán usarse cuando el individuo haya prestado su expreso consentimiento o aparezca expresamente establecido en una ley.

Además, señorías, la información genética debe ser considerada como dato de salud con las consecuencias jurídicas que ello conlleva. El Consejo de Europa, en su recomendación del Comité de Ministros del año 1997, relativa a la protección de los datos médicos, definió éstos como los datos de carácter personal relativos a la salud de una persona, añadiendo que dicha expresión afecta igualmente a los datos manifiesta y estrechamente relacionados con la salud, así como —y expresamente lo recoge— las informaciones genéticas.

Esta recomendación señala que la expresión «datos genéticos» se refiere a todos los datos de cualquier tipo relacionados con los caracteres hereditarios de un individuo o que, vinculados a dichos caracteres, compongan el patrimonio de un grupo de individuos emparentados.

Además, se indica que este concepto también se refiere a todos los datos que afecten a cualquier intercambio de información genética de un individuo o de su línea genética con relación a cualquier aspecto de la salud o de una enfermedad, constituyan o no constituyan un carácter identificable.

En consecuencia, cualquier dato personal de carácter genético deberá ser considerado como un dato que afecta a la salud de las personas y, por tanto, sujeto a las disposiciones específicas aprobadas para la regulación de este tipo de datos de carácter personal.

Por ello, en mi opinión, se puede afirmar con carácter general que los datos genéticos son datos de salud que, en consecuencia, deben ser considerados datos especialmente protegidos de acuerdo con la Ley Orgánica 15, de Protección de Datos, por lo que solamente podrán ser recabados, tratados automatizadamente, cedidos, cuando por razones de interés general así lo disponga una ley o el interesado lo consienta expresamente.

Nuestro ordenamiento, señorías, ofrece un marco jurídico adecuado para la protección de la información genética, si bien es cierto que, como es una característica propia de la legislación de la protección de los datos de carácter personal, es necesario, como bien decía su señoría —y yo creo que éste es un aspecto muy importante—, ponerlo en relación con una adecuada regulación en el resto de la normativa sectorial.

En consecuencia, debe tenerse presente que esta materia presenta muchísimas implicaciones que hay que regular adecuadamente: las investigaciones científicas, las relaciones laborales, las personales, y poniendo todas esas normas en relación con las disposiciones de protección de los datos de carácter personal.

En lo que afecta al Ministerio de Justicia, existe un anteproyecto de ley reguladora de las bases de datos de ADN que está siendo objeto de estudio para la aplicación de los procedimientos de investigación criminal que requieran la identificación de personas por medio del estudio de ADN. Existen también otros proyectos relacionados de otros departamentos ministeriales entre los que ahora me gustaría destacar el anteproyecto de ley por la que se modifica la

Ley 11 de 1986, de patentes para la incorporación al Derecho español de la Directiva 98/44, del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. Por tanto —insisto—, las regulaciones sectoriales tiene que enmarcarse y coordinarse con la legislación que protege la intimidad del individuo ya que, en este empeño, el Gobierno pone y pondrá todo su esfuerzo, en colaboración con los grupos parlamentarios de las Cámaras.

Pienso que es razonable que afirmemos que disponemos de un marco jurídico adecuado. Somos conscientes de los riesgos que las innovaciones genéticas pueden conllevar, y tenemos que asumir el compromiso de hacer compatibles los desarrollos científicos, las regulaciones sectoriales y la protección de los derechos de todos los individuos.

Muchas gracias. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro de Justicia.

¿Quiere hacer uso de la palabra el Senador Espasa? Tiene un turno al amparo del artículo 87, y puede utilizarlo ahora o bien después, como quiera su señoría, y dispone también del turno de portavoces. Ya sabe que tiene dos turnos. ¿Los acumula en uno? (*Asentimiento.*) De acuerdo.

Tiene su señoría la palabra.

El señor ESPASA I OLIVER: Gracias, señora Presidenta.

Para agilizar el debate voy a acumular los dos turnos en esta intervención.

El Ministro ha venido a coincidir bastante con nuestra propuesta. Ya he dicho que era básicamente una interpelación de impulso, aunque existía un punto de crítica en el sentido de recordar cómo, durante un período, ha tenido lugar una gran producción de legislación positiva en materia de biotecnología, de bioética y de regulación de los procesos de las ciencias médicas, y he dado ejemplos que no voy a repetir. Y ahora hay una producción ligeramente menor que debe correlacionarse con un aumento cada vez mayor de los progresos científicos. No se trata tanto de criticar —y lo hago— que quizá el Gobierno haya producido menos legislación positiva de la que debía, sino que, además, el avance de los conocimientos científicos es tan rápido que hace que aun el gobierno o las Cámaras más diligentes puedan quedar atrasadas respecto a los progresos que se van sucediendo.

Respecto a la ley de protección de datos, comparto lo que ha dicho el señor Ministro. La Ley 15/1999 nos pone bastante al abrigo de esta intimidad que garantiza la dignidad de la persona. Pero yo he señalado un par de ejemplos por los que quizá debería hacerse una legislación positiva o sectorial, como decía el Ministro. He hablado del artículo 10 de la Ley del Seguro y del artículo 22 de la Ley de Relaciones Laborales. Es cierto que, por remisión a la ley de protección de datos y por entender que los datos genéticos son datos de salud, tenemos ya una respuesta, pero quizá sería mejor modificar o mejorar el contenido textual actual de estas dos leyes que acabo de

mencionar: la Ley del Seguro y la Ley de Relaciones Laborales.

También sería bueno actualizar otras leyes como, por ejemplo, la Ley de Reproducción Asistida. He citado el ejemplo del cambio de conocimientos respecto a la posibilidad que hoy existe de congelar óvulos, y esto ya está haciendo cambiar la línea de actuación en reproducción asistida, recurriéndose mucho menos a la creación de embriones para producir fecundaciones «in vitro», pudiendo hacerse a base de óvulos congelados. Es una línea de actuación que, además, elimina problemas éticos y jurídicos.

Nuestra Ley de Reproducción Asistida, ley antigua que no anticuada, prohíbe expresamente la utilización de óvulos congelados. Quizá sería el momento de legislar, dados los nuevos conocimientos científicos, y permitir la utilización de óvulos congelados al igual que se está permitiendo la utilización de esperma congelado, porque sabemos que al espermatozoide no le sucede nada si se congela, y ahora también sabemos que al óvulo tampoco. Pues bien, legislemos sobre esto, señor Ministro.

Hay una serie de cuestiones como es la utilización de los embriones para investigación. El Parlamento Europeo se ha pronunciado en un sentido y el grupo de ética de la Comisión Europea acaba de pronunciarse en otro, y nosotros deberíamos decidir legislativamente qué hacer con los preembriones congelados que hay en nuestro país, porque ya ha transcurrido el tiempo previsto por la Ley de Reproducción Asistida.

No podemos esconder la cabeza bajo el ala, sino que debemos dar una salida, en primer lugar, política, y después, científica, a las demandas de utilización de esos embriones para la investigación. No podemos ignorar la cuestión, porque está ahí y hay que darle una respuesta. Por tanto, apelo a la responsabilidad de todos: a la de ustedes, como Gobierno, y a la nuestra, como oposición, para responder a este interrogante, como a otros muchos. Por ejemplo, cada vez es más acuciante, y está preñado de posibilidades de futuro, el tema de la utilización de las denominadas células-madre y su clonación, lo que incluso podría evitar la clonación de embriones. Así pues, creo que deberíamos producir legislación positiva sobre todas estas cuestiones.

Le he dicho que reservaba para mi segunda intervención, tras escuchar la suya, el anuncio del sentido de nuestra moción. A este respecto, nos ha dicho el señor Ministro que hay dos proyectos de ley en elaboración sobre esta materia, y yo creo —y he dado ejemplos de ello— que debería haber algunos más para que fuesen discutidos en las Cámaras.

Por tanto, nuestra moción probablemente irá en la línea de proponer —si el resto de los grupos parlamentarios estuviera de acuerdo; sobre todo, el grupo mayoritario, el Grupo Popular— la creación de una Comisión especial en el Senado para poner en común todo este debate bioético y de biotecnología, y en colaboración con el Gobierno implementar y acelerar la producción de esa legislación positiva, que el señor Ministro y yo mismo hemos venido en reconocer que sería necesaria. Ello ha de hacerse con el sosiego, la profundidad y el rigor requeridos, ya que estamos

tratando de cuestiones que afectan a derechos fundamentales de la persona y que cambian en función del progreso científico. Así pues, no pido una actuación inmediata, pero sí un ámbito de reflexión —el cual, como digo, podría ser una Comisión especial del Senado— para acuciar al Gobierno en el sentido de que produjera la citada legislación, a la vez que apuntaríamos algunas propuestas inmediatas de modificación o de enriquecimiento de la legislación positiva para asegurar lo que el señor Ministro y yo mismo decíamos defender: que de ninguna forma los progresos científicos puedan ser utilizados en detrimento de la autonomía y la dignidad de la persona humana, como proclaman nuestra Constitución y buena parte de nuestro ordenamiento positivo. Repito que esta materia requiere una actualización, que ya sabemos que nunca será definitiva, sino siempre provisional, pero no por ello hemos de dejar pasar el tiempo sin hacer nada al respecto.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Espasa. Su señoría ya ha consumido el turno de portavoces.

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (*Pausa.*)

Por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Ríos.

El señor RÍOS PÉREZ: Gracias, señora Presidenta.

Señor Ministro, señorías, hay que agradecer al Senador Espasa la oportunidad que nos ha brindado para que en esta Cámara se pueda hablar de temas que, con seguridad, marcarán la impronta del nuevo siglo y de este milenio.

El mundo apasionante de lo genético comienza a abrirse con luces y sombras. Para cualquier científico sin duda se abre con muchas más luces que sombras, al igual que para cualquier político progresista, y espero y deseo que prácticamente todos los que estamos en esta Cámara lo seamos, porque eso no está en absoluto divorciado de la necesaria prudencia y previsión para que podamos dar más lustre, si cabe, a las luces e iluminar en algo las sombras que todo avance terriblemente revolucionario, como éste, conlleva necesariamente, pero sobre todo si afecta intrínsecamente al concepto de la vida, que es lo más trascendental de nuestra propia existencia.

La genética no es de hoy ni de este siglo y, por ello, no voy a describirla en este lugar ni tampoco a relatar su historia; pero no seríamos justos si dejáramos pasar una ocasión como ésta para recordar que a mediados del siglo XIX dejaron su huella indeleble genios como Mendel, con su transmisión hereditaria, las nociones básicas del genotipo y del fenotipo y las ideas de Darwin con los conceptos evolutivos del determinismo genético. Estas ideas fueron revolucionarias en su tiempo, y su impacto se proyectó hasta las creaciones filosóficas y literarias. Quiero citar aquí como curiosidad de lectura juvenil el recuerdo de aquella novela, luego conocida por «nívola», de nuestro escritor más crítico y recio de la Generación del 98, Miguel de Unamuno, que en su obra «Amor y Pedagogía» satirizaba con la herencia biológica los genes de las parejas para la

búsqueda cómica del hijo perfecto. «¡Que inventen ellos!» ironizaba nuestro literato.

Todas estas cuestiones son alguna de las luces a las que antes me refería, pero deseo expresar —de pasada— alguna de las sombras que oscurecieron el horizonte al filo del final del primer tercio del siglo XX, como el racismo y el nazismo.

Sin embargo, volviendo a las luces, en estos últimos años la bioquímica, la biología molecular, la genética, la medicina, la citología, la ingeniería, la información, el derecho, las ciencias sociales, etcétera, convergen hacia un proyecto que está siendo ya realidad: el proyecto del genoma humano. Ha sido un esfuerzo gigantesco de todas estas ciencias, que han hecho que se adelante en el tiempo de forma considerable, sobre todo por el apoyo —desgraciadamente, no del todo desinteresado— de investigadores de muchas naciones, no exclusivamente controlados por las iniciativas oficiales, lo que pudiera llevar a que ese juego de luces y sombras pudiera quedar, de alguna forma, desequilibrado. De ahí se derivan los esfuerzos de los países más desarrollados en defensa y protección de los derechos humanos con respecto a las aplicaciones de estos avances de la biología y de la medicina y, como consecuencia, la aprobación del convenio de los Estados miembros del Consejo de Europa y otros, que España ratificó definitivamente en julio de 1999 —y que apareció publicado en el «Boletín Oficial del Estado» del 20 de octubre de 1999—, aunque algunos países aún no lo hayan firmado y otros mantengan alguna reserva.

El proyecto del genoma humano comenzó —como se sabe— en 1985, se pensó que se terminaría entre 2005 y 2010 y se calculó que existirían alrededor de 100.000 genes en el ser humano. Este proyecto se ha acelerado hasta el punto de que ya puede decirse que faltan pocos meses a partir de ahora, noviembre de 2000, para su terminación y, al parecer, se ha reducido el cálculo a la mitad del número de genes previsto, todo ello por el acicate y el poderoso argumento de la posibilidad de que, por esa vía, se lleguen a dominar los factores desencadenantes de graves enfermedades hereditarias. Esto ha provocado una gran carrera —en beneficio de la humanidad— para descifrar primero las luces, de las que hablábamos antes, y otras sombras, como la economicista.

En síntesis, los resultados que se esperan principalmente —y de ahí su importancia— son: futura predicción de enfermedades hereditarias y/o curaciones determinadas por anomalías genéticas, como diabetes, cáncer, etcétera; evitar angustias familiares frente a las enfermedades hereditarias; posible mayor longevidad con genes implicados en el envejecimiento humano; reconocer huellas genéticas de delincuentes a través de la saliva, la sangre o el cabello; investigación de nuestros antepasados, y la búsqueda de nuestros orígenes.

Hay luces, pero también hay sombras tan inquietantes como la característica de versatilidad de la dotación genética humana, es decir, que la propia raza humana podría ir desapareciendo cuando, por ejemplo, un futuro hijo no fuera todo lo perfecto que desearan sus padres o, en el futuro, se hicieran diferentes valoraciones de un determinado gen.

Por todo ello, me parecen muy importantes los planteamientos derivados de la información genética, tanto individual como colectiva. Esto nos lleva al debate acerca de la posibilidad de patentes sobre organismos vivos desde el punto de vista de la biotecnología, ya que el concepto de que la naturaleza es un patrimonio universal inapropiable y, por tanto, no patentable, comienza desgraciadamente a ser modificado.

Todo ello nos conduce a una pregunta que va más allá de la biología y entra de lleno en el campo jurídico, filosófico y ético. El hombre ha dominado la naturaleza pero ¿puede dominar también a la propia naturaleza humana? Esto nos conduce al gran problema de la manipulación genética: ¿podríamos quizá inventar nuevos animales? Por fin nos encontraríamos con el gran éxito y la tentación del genoma humano que se enfrenta claramente a los cinco grandes derechos que el hombre del final del segundo milenio enarbola como sus éxitos más preciados: el derecho a la vida; el derecho a la dignidad humana; el derecho a la igualdad y a la no discriminación y, por último, el derecho a la libertad. Para los ciudadanos españoles actuales todos estos derechos están globalmente amparados en la Constitución de 1978. El derecho a la vida se consagra en su artículo 15, que concretamente dice: Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral. El artículo 10 señala que el derecho a la dignidad de la persona es un fundamento del orden político y de la paz social.

La señora PRESIDENTA: Senador Ríos, le ruego concluya.

El señor RÍOS PÉREZ: En este último orden, con respecto al derecho a la dignidad vemos que en el ámbito laboral la capacidad laboral puede convertirse en un simple objeto sirviendo para la eliminación de candidatos a un determinado trabajo o menospreciándolos económicamente debido a simples factores hereditarios.

En la mencionada Convención de Asturias, como convenio del Consejo de Europa, en aspectos predecibles de enfermedades genéricas y genéticas, así como en la utilización terapéutica del genoma se abre un campo legislativo que será necesariamente afrontado en los años inmediatos, tanto a nivel estatal como a nivel europeo y mundial.

En España tenemos mucha legislación positiva sobre la bioética pero aún falta mucho por hacer; igualmente hemos de actualizar la ya existente porque el fuerte dinamismo del sector necesita un sistema ético capaz de guiarnos a través de un territorio totalmente inexplorado hasta la fecha. Pongámonos entre todos manos a la obra.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Ríos.

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Cardona.

El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señorías, en primer lugar quiero manifestar en nombre de mi Grupo Parlamentario la oportunidad de la interpelación presentada por el Senador Espasa. En efecto, en los últimos años los avances científicos se van desarrollando a gran velocidad, y gracias a ello se están consiguiendo nuevos logros, positivos para el tratamiento de patologías, que hace relativamente pocos años comportaban la muerte de los pacientes.

Esto es así y no hay quien lo pare. No se pueden poner puertas al campo; además, entendemos que es positivo para el conjunto de la sociedad. Pero, frente a ello, el hombre siempre ha tenido un cierto miedo a cualquier avance, a cualquier modificación, y sobre todo si afecta a asuntos importantes; miedo en general a lo desconocido, aún más si toca a lo más íntimo, es decir, a la vida. La genética, la biología molecular producen cierta inquietud porque afectan a lo más íntimo del ser humano. Y no deberíamos tener miedo a los avances científicos, en todo caso nos debería preocupar el uso que de los mismos pueda hacerse. Es a lo que se refería el Senador Ríos cuando hablaba de luces y sombras. Por tanto, hay que buscar el refugio y la seguridad en la legislación, que no haya un vacío legal que permita que esta cuestión se nos escape de las manos.

Sin embargo, quisiera poner en consideración de sus señorías una reflexión del doctor don Marcelo Palacios, Presidente de la Sociedad Internacional de Bioética. Decía: Creo que no tardando mucho los avances biotecnológicos o biocientíficos y tecnológicos serán tantos y tan vertiginosos que los estamentos legitimados para ello, de un cierto lento metabolismo interno, no podrán seguirlos ni adoptar a tiempo la legislación estrictamente precisa, por lo que la humanidad —y subrayo lo que viene— se proveerá de unos pactos cívicos, acuerdos o consensos éticos universales más que de leyes, motivo por el cual se podrá denominar el siglo XXI como el siglo de la bioética.

Efectivamente, desde nuestro punto de vista, entendemos que la legislación y la bioética nos han de marcar el camino. En este contexto, el progresivo conocimiento del genoma humano permitirá una información genética, una información relativa a las previsiones de salud del individuo, como la predisposición a padecer a lo largo de su vida, casi con una predicción exacta, algunas enfermedades.

De hecho, la presentación hace unos meses del mapa del genoma humano marcó el inicio de una nueva era en la historia de nuestra especie. El desciframiento de lo que se ha llamado el «Libro de la vida» hará posible tener una información de unos datos relativos a la salud del individuo, de manera que su utilización podría afectar a su dignidad en tanto que persona, que tiene un derecho a la confidencialidad de los mismos porque le pertenecen, y no sean utilizados en contra de su voluntad por cualquier finalidad.

Hemos escuchado al interpelante, señor Espasa, con la atención que el tema merece, así mismo hemos atendido a las contestaciones del señor Ministro y estaremos atentos a la moción que se ha anunciado se va a presentar en su momento para fijar en concreto la posición de nuestro Grupo Parlamentario.

Nada más y muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador López Carvajal.

El señor LÓPEZ CARVAJAL: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señor Ministro, quiero fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista haciendo unas consideraciones que, dado el carácter un tanto ideológico con el que se está revisando este debate, yo las calificaría de materialistas, y me parecen realmente importantes porque esta perspectiva no se ha teniendo en cuenta hasta este momento.

Señor Ministro, este debate es enormemente importante, pero todavía se está centrando sobre los riesgos derivados de la manipulación genética. Esos riesgos han ocupado durante mucho tiempo la atención pública e incluso han dado lugar a una cierta literatura fantástica sobre la posibilidad de que la ingeniería genética nos depara seres superdotados, seres con cualidades volitivas determinadas, incluso la discriminación sexual de los embriones. En primer lugar, no cabe la menor duda de que todo esto está regulado perfectamente en nuestro Código Penal y, en segundo lugar, desde el punto de vista de la ingeniería genética, se encuentra bastante lejos de nuestro alcance.

Por el contrario, hay otros riesgos —que es la lectura que hace mi grupo de esta interpelación presentada por el Senador Espasa— en los que quiero llamar la atención, fundamentalmente porque no ha tenido lugar un gran debate sobre ellos y existe un distanciamiento de la opinión pública sobre el particular. Voy a permitirme decir que estos riesgos están mucho más próximos y, sin embargo, repito, existe una menor sensibilidad sobre ellos. Voy a exponer algunos casos.

Aproximadamente son 10.000 el número de enfermedades que se considera que tienen un origen hereditario. En este momento no existen test genéticos nada más que para unas pocas enfermedades hereditarias o con carácter hereditario; estos test genéticos lo que hacen es medir la predisposición o la susceptibilidad de los seres humanos a padecerlas. Sin embargo está ocurriendo que, desde el punto de vista estrictamente empresarial, en países concretos como los Estados Unidos o Inglaterra se están produciendo lecturas absolutamente discriminatorias de estos test genéticos. En el caso específico de los Estados Unidos, el Consejo Nacional para la Genética ha contabilizado que un 13 por ciento de los encuestados ha perdido su puesto de trabajo, y la Asociación de Médicos americanos determina con precisión que el 20 por ciento de los clientes con riesgo han sido rechazados por las compañías de seguros. Esta realidad no sale en los periódicos, no se debate, no ha salido hoy todavía en esta interpelación, y para los socialistas es enormemente importante porque el principal riesgo que puede depararnos la información genética, el mal uso, el uso abyecto de la información genética, es la limitación del derecho de igualdad. Por eso creemos que éste es un debate enormemente importante.

Apoyamos la posición del interpelante, y lo hacemos porque consideramos que si bien es cierto que en España hasta este momento no tenemos documentados, no ha sa-

lido a la luz pública ningún caso de discriminación laboral ni de discriminación contractual para poder realizar contratos de seguros —como usted los llama, contratos de adhesión—, no es menos cierto que ese peligro existe, y existe porque estamos hablando de un campo económico de un poder impresionante: 54 billones de pesetas mueven las primas de seguros únicos en los Estados Unidos; 2 billones de pesetas es el montante de las primas de seguros de vida en este país. Y ése es un poder que tenemos que tener controlado, que no podemos dejar que se mueva estrictamente por las leyes económicas y por las del mercado.

Para eso hace falta tener presente, señor Ministro, que los test genéticos pueden llevarse a cabo por las empresas antes, como condición previa al empleo, para poder aceptar las condiciones de trabajo y finalmente, incluso, en el peor de los casos, para dar por finalizado el contrato de trabajo. Asimismo, es cierto que una persona realiza un seguro de vida o de salud de una forma voluntaria, pero no es menos cierto que el ideal de las compañías de seguros es poder predecir cuándo un cliente va a morir para fijar el importe de la prima, y es también el ideal de una compañía de seguros de enfermedad poder definir a partir de qué momento puede salir o exteriorizarse una enfermedad que genéticamente está más o menos anunciada. De ahí se puede derivar, indiscutiblemente, una discriminación planificada y nosotros tenemos que evitar que eso ocurra.

Finalmente, estoy de acuerdo con usted en que éste es un debate que debe abordarse teniendo en cuenta que la información genética es parte de la información médica. Con lo que no estoy de acuerdo es, posiblemente, con sus consecuencias, porque la primera consecuencia de ese debate y de esa premisa que usted plantea aquí es que tendríamos que conocer en este Pleno la opinión de la Ministra de Sanidad, porque estamos hablando de que la información genética es parte de la información relativa a la salud, y cuando una persona revela parte de su información genética al médico lo hace estrictamente a los fines de su posible curación. Éste es un dato fundamental que tenemos que tener en cuenta y que debe invadir el conjunto general del Derecho que se impregna de este principio.

Por eso quiero decirle —ya para terminar, señora Presidenta— que el Grupo Parlamentario Socialista se pronuncia en la línea en la que ya se pronunció el primer congreso internacional que se celebró en Bilbao respecto al genoma humano, donde expresamente se prohibió la utilización de los datos genéticos que pudieran ocasionar cualquier tipo de discriminación laboral o, en la esfera contractual.

Y acabo expresando, señorías, una consideración, en opinión de los socialistas, profundamente importante. De todas las posibles discriminaciones que puede sufrir el ser humano no hay ninguna más cruel que la que se deriva de la enfermedad o de la posibilidad de padecerla. Es por eso por lo que defendemos todos estos principios.

Muchas gracias. (*Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador López Carvajal.

Para finalizar el turno de portavoces, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Bellido.

El señor BELLIDO MUÑOZ: Muchas gracias, señora Presidenta.

Ante todo, quiero agradecer la cualificación profesional y política del Ministro de Justicia al participar en este debate, como estoy seguro de que también la tienen otros miembros del Gobierno, que ha resultado realmente gratificante, para mí en particular, y creo que también para el proponente, Senador Espasa. Para el Senador Espasa porque, conociendo como conozco su rigor científico y político, entiendo que su papel de control al Gobierno ha quedado hoy suficientemente justificado con unos argumentos que han sido para todos nosotros de gran interés, al tiempo que justificado por la respuesta del señor Ministro de Justicia, quien, desde ese mismo rigor, ha venido a plantear la posición del Ejecutivo sobre una cuestión que todos reconocemos como compleja y que no cabe duda que a todos nos preocupa.

Por mi parte, y como portavoz del Grupo que sustenta al Gobierno, he de manifestar mi satisfacción tanto por el contenido de la iniciativa socialista como por la posición del Gobierno que entiendo que es lo necesariamente prudente en un asunto como éste, con claras interrogaciones científicas, jurídicas y sociales y sin una base legislativa a nivel internacional que nos invite a dar nuevos pasos, pasos que pueden ser arriesgados y que en este plano nunca son recomendables.

Ya lo reconocía un grupo de trabajo creado en 1993, compuesto por distintos premios Nobel, por el Magistrado don Rafael de Mendizábal y por el Profesor Romeo Casabona, cuando al elaborar la Declaración de Bilbao, en el primer punto de la misma, demandaban una detenida reflexión —y hago hincapié en la expresión detenida reflexión— por parte de los juristas para dar respuesta a los problemas que plantea la utilización del conocimiento genético en el ser humano, una reflexión no reñida con la afirmación expresada en el punto séptimo de dicha Declaración en el sentido de rechazar frontalmente la utilización de los datos genéticos que originen cualquier discriminación en el ámbito de las relaciones laborales, de los seguros, o de cualquier otro.

Por tanto, detenida reflexión y rechazo categórico al uso de esos datos con efectos discriminatorios marcan lo que entiendo que son los dos polos de un debate todavía polarizado en exceso y que precisan de un proceso informativo mucho más extenso a fin de lograr moderar los criterios hasta alcanzar un punto de encuentro entre todos que, sin limitar los avances científicos de la investigación, no lesione tampoco derechos fundamentales de los individuos contemplados, como ya se ha dicho, en los artículos 14 y 18.1 y 18.4 de la Constitución.

En su intervención, el Senador Espasa sólo ha manifestado una crítica sobre lo que, a su juicio, es la congelación legislativa por parte del Gobierno. Ha puesto como ejemplo la congelación de embriones, pero él y yo, que somos médicos, sabemos que un embrión se descongela cuando

se tienen garantías suficientes sobre su viabilidad futura y creo que tan irresponsable sería congelar sin un fin concreto legislaciones positivas como activarlas sin las garantías suficientes para que estas legislaciones produjeran una acción también positiva sobre la sociedad y, hoy por hoy, entiendo que esas totales garantías todavía no se producen.

Por tanto, como ya se ha señalado, partimos de una garantía jurídica suficiente que, sin duda, habrá que ampliar, como también ha reconocido el Ministro de Justicia, si las circunstancias así lo exigen, algo sobre lo que estoy convencido de que será sensible el Gobierno desde su responsabilidad de conciliar el marco legislativo español con la realidad social de nuestro país.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Bellido.

El señor Ministro de Justicia tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Muchas gracias, señora Presidenta.

Señorías, intervengo con brevedad para agradecer las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios y sus aportaciones, y para celebrar la coincidencia en los asuntos de fondo, que son los realmente importantes y en los que es preciso que estemos de acuerdo, como afortunadamente creo que lo estamos, a tenor de lo que hemos oído aquí esta mañana.

Esos puntos de crítica —como así los ha llamado el Senador interpelante— hay que encuadrarlos en el contexto de la oposición. Por responderle con la máxima cordialidad y brevedad, le diré que yo he contestado, y sirve para la respuesta al Grupo Parlamentario Socialista, en los términos de la formulación de la interpelación. No se trataba de hablar de la genética en todos sus aspectos sino de la protección al derecho de la intimidad en nuestro ordenamiento jurídico, y por tanto, lo que he intentado con todo rigor es ceñirme a ello, no abriendo el debate a otras consideraciones que no venían al caso.

En ese marco, no creo que deba producirse la crítica legislativa al peso; es decir no se debe criticar al Gobierno por el número de iniciativas legislativas que haya planteado respecto a una cuestión determinada. Si nosotros, afortunadamente, tenemos en nuestro ordenamiento jurídico —no sé si el americano lo tiene, Senador del Grupo Parlamentario Socialista— una protección suficiente al derecho a la intimidad, no tendremos que remitir a las Cámaras todas las legislaturas una legislación para proteger el derecho a la intimidad, puesto que ya lo tenemos suficientemente protegido. Es significativo que el único ejemplo que se ha traído para aportar a esa crítica por parte del Grupo Parlamentario Socialista haya sido lo que está ocurriendo en Estados Unidos.

Dicho esto, en los asuntos de fondo estamos de acuerdo. Yo creo que el Ministro de Justicia tiene algo que manifestar al respecto al derecho a la intimidad en nuestro ordenamiento jurídico, y la Ministra de Sanidad estará encantada de venir a esta Cámara cuantas veces quiera, Senador del Grupo Parlamentario Socialista, para tratar aque-

llos aspectos de genética o cualquier otro que su señoría tenga por conveniente, pero me parece que, hablando de ordenamientos jurídicos y del derecho a la intimidad, algo tengo que decir desde el punto de vista del derecho de la justicia y de la protección de los derechos y libertades fundamentales de los individuos.

Soy consciente, respecto al asunto sobre el que han incidido más, de que la información genética conlleva indudables riesgos y uno de los más importantes o evidente es el posible uso por las compañías aseguradoras sin el consentimiento de su titular, que es el aspecto en el que debemos concretar los supuestos que nos preocupan a todos.

Su consideración, como he dicho en mi intervención, como dato de salud según he explicado, impide en nuestro ordenamiento cualquier uso que no esté expresamente previsto en la ley si no existe consentimiento de los ciudadanos en idénticos términos al resto de los datos de salud. Ello, sin embargo, no excluye que puedan adoptarse las precauciones necesarias para evitar un uso torticero de datos de carácter personal de los clientes, tanto en el caso de las compañías aseguradoras como en cualquier otro tipo de empresas. Nuestra obligación común, así lo hemos asumido, es la de proteger los derechos del individuo frente a cualquier uso inadecuado que les pueda lesionar en sus derechos fundamentales.

Aparte de las referencias legislativas que lo justifican y que les he explicado en mi intervención anterior, debemos destacar que España es parte del Convenio del Consejo de Europa sobre la Protección de Derechos Humanos y de la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y de la medicina, que fue firmado, como ustedes seguramente conocen, en Oviedo el día 4 de abril de 1997 y ratificado el 23 de julio de 1999, es decir el año pasado, habiendo entrado en vigor, por tanto es Derecho, en nuestro ordenamiento desde el día 1 de enero de este año.

Señoría, el artículo 11 de este convenio señala que está prohibida toda forma de discriminación hacia una persona en razón de su patrimonio genético. Y el artículo 12 restringe la realización de pruebas predictivas de enfermedades genéticas con fines médicos o de investigación médica y con un asesoramiento genético apropiado.

En consecuencia, podemos y debemos afirmar, para transmitir la confianza necesaria, que nuestro ordenamiento jurídico recoge los planteamientos más avanzados; basta asistir a las reuniones internacionales de todo tipo para comprobar que el Derecho español es uno de los más avanzados de los países de nuestro entorno en cuanto a la protección del derecho a la intimidad y del genético. Por ello, tenemos que transmitir la confianza de que nuestro ordenamiento jurídico garantiza una protección adecuada de los derechos fundamentales, entre los que se encuentra el derecho a la intimidad.

Seguimos trabajando muy atentos para que ningún otro aspecto relacionado con esta cuestión pueda escapársenos. Por eso, en mi primera intervención hacía referencia a la legislación sectorial relacionada con el ADN —sobre la que el Gobierno está trabajando—, o a la relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, que saben que se encuentra como anteproyecto de ley.

Me parece que mi contestación en este debate responde a los términos estrictos de la interpelación presentada por sus señorías. Es cierto que hemos buscado la colaboración, discusión y cooperación en esta Cámara, pero debemos saber que nuestro ordenamiento jurídico protege los derechos fundamentales de los españoles en todos sus ámbitos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro de Justicia.

Conforme a la alteración del orden del día antes acordada por la ausencia del señor Ministro de Fomento, que se encontraba defendiendo la Sección correspondiente al presupuesto del Ministerio de Fomento en el Congreso de los Diputados, procede pasar a la contestación de las preguntas dirigidas a su señoría.

PREGUNTAS (Continuación):

— DE DON VICENT BEGUER I OLIVERES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE LA FECHA PREVISTA PARA REALIZAR LAS OBRAS DE DERRIBO DEL PUENTE SOBRE EL TORRENTE DEL LLUCH, EN EL VENDRELL (TARRAGONA) (680/000161).

La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Vicent Beguer i Oliveres, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la fecha prevista para realizar las obras de derribo del puente sobre el torrente del Lluch, en El Vendrell.

Tiene la palabra el Senador Beguer i Oliveres.

El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señor Ministro, señorías, el pasado 10 de junio, a consecuencia de las lluvias torrenciales sobre diversas comarcas de Cataluña, en la ciudad de El Vendrell se produjeron importantes inundaciones que afectaron a empresas, viviendas bajas y comercios de forma considerable, debido a que el puente situado sobre el torrente del Lluch actuó a modo de dique. Inmediatamente, se acordó la demolición de este puente para la posterior construcción de uno nuevo más adecuado, pero hasta el momento no se ha presentado el proyecto correspondiente.

Mi pregunta es: ¿Cuándo se van a realizar las obras de demolición y reconstrucción de este puente? Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Beguer.

Tiene la palabra el señor Ministro, de Fomento.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señora Presidenta.

Señorías, la redacción del proyecto de construcción del nuevo puente al que hace referencia en su pregunta está

previsto que finalice a finales de este mes de noviembre. A continuación, se procederá a la licitación de las obras correspondientes.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro. Tiene la palabra el Senador Beguer i Oliveres.

El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señor Ministro, le agradecería que en la medida de lo posible me concretase algo más sobre este asunto. Como su señoría sabe, en aquel momento la Delegada del Gobierno en Cataluña se comprometió a que la realización del proyecto se llevara a cabo durante el mes de octubre y a que la ejecución y finalización de las obras fuese en otoño. El otoño está muy avanzado y parece difícil, toda vez que el proyecto no ha sido presentado todavía, que el plazo previsto para la ejecución y finalización de las obras pueda cumplirse. Como el señor Ministro sabe, existe una gran preocupación en la población de El Vendrell ante la posibilidad de que pueda ocurrir un hecho similar y, por tanto, le agradecería que me concretase, lo máximo posible, sobre este período de ejecución de las obras y su finalización aproximada.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría. Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Gracias, señora Presidenta.

Señor Senador, ésta no es una obra que se pueda hacer por un procedimiento de reparación o de emergencia. Este puente va a costar 300 millones de pesetas, necesita ensanchar su luz para que, manteniendo la rasante con una luz mayor, pueda desaguar la capacidad de avenida que ha causado el desbordamiento provocado por las lluvias del pasado mes de junio y, por tanto, requiere un proceso de definición técnica que, lamentablemente, no es tan rápido como todos deseáramos. Cuanto más importante es la solución, y el carácter definitivo en este caso me parece que es la respuesta más adecuada al problema que se ha planteado, se requieren una serie de pasos ineludibles dentro del procedimiento de urgencia.

Renfe ya ha facilitado al Ministerio, puesto que no puede asumir directamente la reconstrucción del puente, todos los datos relativos a la topografía, a los cálculos hidráulicos y al cálculo de estructuras. Sobre esta documentación básica el Ministerio está ultimando la redacción del proyecto constructivo que va a sustituir al existente en el torrente del Lluch. La estimación que en estos momentos me transmiten los servicios es que se procederá a la construcción de dos tableros metálicos paralelos, de 34 metros de luz cada uno, con un coste estimado de 300 millones de pesetas, que estarán apoyados en unos estribos, sostenidos a su vez en una pantalla de pilotes. En cuanto esté finalizado este proyecto se podrá pasar a la licitación de las obras, con ellas se puede incrementar de una manera significativa la capacidad de desagüe de la estructura existente

sobre el torrente y, de esta manera, garantizar definitivamente la evacuación de avenidas de forma satisfactoria.

Creo que en el ánimo de todos está, como lo estaba en el ánimo de la Delegada del Gobierno y en el de las autoridades locales, agilizar las obras, pero espero que también el sentido de la responsabilidad de todos permita aceptar que sin buenos proyectos no se pueden hacer buenas obras, y que proyectos y soluciones definitivas necesitan unos estudios técnicos básicos que se concluirán este mes de noviembre.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro de Fomento.

— DE DON JOSÉ LUIS PERESTELO RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LA VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA Y VOLCÁNICA EN LA ISLA DE LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE) (680/000162).

La señora PRESIDENTA: La siguiente pregunta ha sido presentada por el excelentísimo señor don José Luis Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la vigilancia de la actividad sísmica y volcánica en la isla de La Palma.

Tiene la palabra el Senador Perestelo.

El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señor Ministro, el pasado viernes 6 de octubre, la isla de La Palma despertaba con una noticia que publicaban dos grandes periódicos de difusión estatal: La isla de La Palma se desplomará y arrasará El Caribe; es geológicamente inestable y su caída provocará una ola gigante. Éstos eran los titulares de esos medios de comunicación. En días posteriores algunos medios de comunicación internacional se hicieron eco de la noticia, con lo que esto puede significar en una isla que depende de una manera importante del sector turístico.

Entre las repercusiones de esta noticia, los palmeros —aunque estamos curados de espanto, hemos tenido en los últimos cincuenta años dos erupciones volcánicas— echamos en falta la conocida versión oficial del Gobierno. Nos parece que lo importante ahora es preocuparnos por el futuro, destacar lo positivo de todo esto y plantearle la pregunta respecto a las previsiones del Gobierno en cuanto a la vigilancia de la actividad sísmica y volcánica en la isla de La Palma y, a ser posible, además, señor Ministro, le agradecería que nos pudiera plantear qué medios materiales y humanos dedica su Gobierno a esta investigación.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Perestelo. Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señora Presidenta.

Señoría, efectivamente los medios de comunicación nacionales se hicieron eco de unas noticias procedentes fundamentalmente de Gran Bretaña, que eran realmente alarmistas y que causaron el correspondiente impacto en la sociedad canaria. Pero creo que la mayor tranquilidad, en relación con la alarma social que generaron estas noticias, la transmitieron, con carácter inmediato, los científicos expertos en volcanología, tanto de la comunidad investigadora de la península como de la comunidad canaria, debido a que esas informaciones se dieron con carácter inmediato y dejaban bien a las claras que la supuesta base científica, en virtud de la cual se trasladaba como riesgo inminente para La Palma el procedimiento de desplome o los correspondientes fenómenos de deslizamientos, carecía de fundamento; que en el mejor de los casos podrían ser interpretados en base a incorrectas utilizaciones de los lenguajes científicos, porque entre otras cosas, por ejemplo, en el lenguaje científico de la volcanología la escala de tiempo geológico no tiene nada que ver con la escala de tiempo normal, de tiempo biológico con el que se manejan en nuestro lenguaje habitual las cuestiones de riesgos en la sociedad moderna. Y también porque, sobre la base de los supuestos estudios científicos, había serias dudas sobre el rigor con el que estaban hechos.

Ése creo que es el elemento más importante para disipar cualquier intranquilidad que pueda existir en el archipiélago o en la isla de La Palma, y, en todo caso, quiero decirle que la voz más autorizada, dependiente del Ministerio de Fomento, a través del Instituto Geográfico Nacional, que es la del Presidente de la Sección de Volcanología, de la Comisión Española de Geodesia y Geofísica, don Vicente Araña, ratifica la escasa solvencia, el escaso rigor y desde luego lo infundado de los riesgos y de las alarmas transmitidas.

En cuanto a lo que, en términos políticos, digamos, es posible contestar al hilo de la pregunta, yo quiero informarle con detalle a su señoría de que para el seguimiento de la actividad volcánica actual y de la actividad volcánica previsible en el territorio español, y muy particularmente en las Islas Canarias, desde hace mucho tiempo el Instituto Geográfico Nacional cuenta con una red de sismógrafos; ocho de ellos, de carácter analógico, en este momento están instalados en Canarias, y uno de ellos en la isla de La Palma.

En estos momentos el Gobierno, como he anunciado en mis comparecencias parlamentarias, está desarrollando una nueva red sísmica de carácter digital, que es la última versión tecnológica, que también en el archipiélago va a permitir la instalación de siete estaciones, que estarán en funcionamiento todas ellas antes del año 2002 y, en particular, la de La Palma estará en funcionamiento a lo largo del año 2001.

Creo que sobre la base del seguimiento de los trabajos del Instituto Geográfico Nacional y de esta red de sismógrafos se puede ratificar que en los tiempos normales, con los análisis actuales y en los horizontes previsible, tampoco sobre la base de estos estudios volcanológicos, existe

ningún riesgo ni ninguna alarma potencial que pueda preocupar a la sociedad canaria.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro. Tiene la palabra, Senador Perestelo.

El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señor Ministro, gracias por el tono de su respuesta; en definitiva, lo que nos interesaba a los palmeros en este momento, independientemente de esa versión del señor Araña, era fundamentalmente tener conciencia clara de que entendíamos que desde su Gobierno se planteaban respuestas inmediatas a estas manifestaciones de la comunidad científica internacional. No olvidemos que el propio científico experto en vulcanología, del Consejo Superior en Canarias, expresaba que esta teoría era difícilmente rebatible en el campo internacional, sobre todo cuando hacemos referencia a la influencia negativa que pueda tener en el sector turismo, porque él decía que el escaso esfuerzo inversor que hacíamos en investigación originaba poca confianza internacional en nuestras investigaciones científicas.

Quisiera darle un dato, señor Ministro. Hace aproximadamente un año se produjeron movimientos sísmicos en la isla de La Palma, y sólo fueron detectados por una estación que se ha puesto en marcha gracias a la colaboración del Cabildo de Tenerife y el Cabildo de la isla de La Palma. Precisamente este sismógrafo del Consejo no estaba operativo en ese momento, y eso genera esa desconfianza. Por tanto, entiendo que su respuesta nos va a dar la satisfacción de que en los primeros meses del año próximo podamos tener esas nuevas estaciones digitales en la isla de La Palma.

Y hay un dato importante. En el año 1971, siete meses antes de producirse la erupción del Teneguía, técnicos de la CIA americana que tenían su estación de seguimiento de submarinos en la isla de La Palma predijeron esa erupción, la cual fue anunciada a las autoridades españolas muy pocos días antes de que la misma tuviera lugar. En ese momento todas las manifestaciones públicas se centraban en que nunca más se volvería a dar que se enterasen antes los extranjeros que nosotros de lo que ocurría en Canarias. La verdad es que para que no nos pase esto en el futuro el tener esos mecanismos en marcha sería interesante. Ya le he dicho antes que en La Palma sabemos donde vivimos, sabemos que hemos tenido erupciones volcánicas —dos de ellas en los últimos 50 años—, y que realmente jamás ha habido ningún peligro para la vida humana.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Perestelo. Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señora Presidenta.

Señor Senador, quiero insistirle en que del conjunto de los análisis que ha emitido la comunidad científica española y canaria, y de los datos que maneja el Gobierno a tra-

vés de sus especialistas del Instituto Geográfico Nacional, y desde la perspectiva de la actividad volcánica actual y de la previsible, esa situación es bien conocida y no ofrece motivos de especial preocupación. Como Ministro de Fomento eso es lo que quiero subrayarle.

Me cuesta un poco más de trabajo entrar a detallar las razones por las cuales tampoco desde el punto de vista del rigor de las informaciones científicas surgidas debería de existir esa preocupación. Quiero también aclararle que, desde el punto de vista de nuestro país, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas tiene en su plantilla personal adscrito a las tareas de estudio de la volcanología, y en cambio no existen departamentos ni cátedras en ninguna universidad española a ese respecto, según nuestra información. Quizá esta preocupación lleve a una reflexión más trascendente en el campo académico.

En otros organismos, por ejemplo, como el Instituto Geográfico Nacional, tenemos especialistas en aspectos científicos que son sismólogos, y también hay otros casos, como el del Cabildo de Tenerife, donde por iniciativa propia de dicho Cabildo se están desarrollando técnicas de vigilancia como el proyecto denominado Iter. Pues bien, todo esto tendremos que mejorarlo probablemente, pero tampoco conviene decir que no se ha hecho nada. La modernización de nuestra red de sismógrafos creo que será muy útil para mejorar las capacidades predictivas y para homologarnos con la capacidad de investigación de otros centros internacionales, pero creo que el análisis de los científicos sobre la falta de rigor de estos informes que han creado incertidumbre es la clave de todo.

No sé el tiempo que me queda, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA: Señor Ministro, está fuera de tiempo. Le ruego concluya.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Gracias. Enseguida termino, señora Presidenta.

Se han utilizado dos elementos de referencia para trasladar esta grave inquietud. El primero, un mecanismo focal que se inventaron los autores de este informe a partir de una erupción que hubo en la isla de La Palma en 1949, cuando el sismógrafo más cercano era el de Málaga. Por tanto, ya comprenderá usted que la extrapolación de unos datos obtenidos en Málaga a los fenómenos ocurridos en La Palma en el año 49 dejan bastante margen a la incertidumbre.

Y otro grupo de trabajos han tenido su origen en el análisis de sedimentos y avalanchas tomados en un buque a 100 kilómetros de la isla de La Palma. Por tanto, la capacidad de extrapolación sobre las avalanchas que afectan propiamente al territorio de La Palma tampoco parece que estén muy traídas en razón. Pero, repito, prefiero que los científicos hablen en el lenguaje científico y que los responsables de las administraciones hagamos lo que está en nuestra mano, y creemos responsablemente que con lo que está en nuestras manos en los tiempos reales que vivimos, podemos transmitir tranquilidad a los ciudadanos de La Palma y a todos los canarios.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.

La pregunta del Senador Carles Bonet Revés ha sido retirada del orden del día.

— DE DON ARTURO GONZÁLEZ LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI TIENE PREVISTO EL GOBIERNO ALGUNA MODIFICACIÓN EN EL PROYECTO ACTUAL DEL TRAMO DE LA AUTOPISTA DE PEAJE A-6 CORRESPONDIENTE A LA PROVINCIA DE SEGOVIA, PARA EVITAR POSIBLES CONFLICTOS Y PROCESOS JUDICIALES (680/000165).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a la pregunta de don Arturo González López, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si tiene previsto el Gobierno alguna modificación en el proyecto actual del tramo de la autopista de peaje A-6 correspondiente a la provincia de Segovia, para evitar posibles conflictos y procesos judiciales.

Tiene la palabra el Senador González López.

El señor GONZÁLEZ LÓPEZ: Gracias, señora Presidenta.

Doy por formulada la pregunta en los términos expresados por la Presidencia.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Gracias, señora Presidenta.

Señor Senador, la iniciativa para plantear un litigio no está en manos del Gobierno, pero lo que sí puede garantizar es que en todo el procedimiento seguido para la construcción de esta autopista se han seguido las exigencias regladas de nuestra normativa y, además, y de manera muy precisa, se han incorporado todas las medidas preventivas y correctoras medioambientales previstas en los estudios de impacto ambiental sometidos a información pública.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el Senador González López.

El señor GONZÁLEZ LÓPEZ: Gracias, señora Presidenta.

Señor Ministro, en enero de 1997, de la noche a la mañana, casi con nocturnidad, el Gobierno del Partido Popular cambió un proyecto muy avanzado y ya presupuestado de dos autovías que unirían Segovia y Ávila con la carretera nacional N-VI por dos proyectos de autopistas de peaje, en una clara discriminación de estas provincias respecto a otras, sobre todo las del entorno.

Ninguna de las justificaciones que se dieron entonces se sostiene hoy de pie. No era por falta de recursos económicos, argumento que, como se ha visto después, es falso, además de haber comprobado cómo otras infraestructuras de la misma categoría que éstas de Segovia y

Ávila, y mucho menos avanzadas, sí que han tenido o van a tener financiación pública y, por lo tanto, sin coste para los usuarios.

Tampoco era porque el proyecto de autopista se fuera a hacer inmediatamente mientras que la autovía se retrasaría unos años. El propio tiempo desmiente este argumento, ya que han pasado más de cuatro años y todavía no han comenzado las obras.

Menos válido todavía es el argumento de una hipotética parada del tren de alta velocidad en Segovia en compensación por la autopista de peaje, cuestión que yo creo que no se debe mezclar.

Señor Ministro, con sinceridad, tiene que reconocer que aquellos argumentos sirvieron para justificar el cambio y retraso de unas infraestructuras en contra de la opinión pública mayoritaria de los segovianos y de las segovianas, pero hoy resultan falsos o, cuando menos, resultan argumentos peregrinos.

Independientemente de lo que acabo de decirle, y como usted sabe o debe saber, hace poco tiempo la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción al Estado español por el proyecto de la autopista Segovia A-6, que puede acabar con España sentada en el Tribunal Europeo al no respetar directivas de obligado cumplimiento, como son las directivas Hábitats y Aves.

También sabe que la Fiscalía de Medio Ambiente ha iniciado investigaciones judiciales por un presunto delito ecológico, por el grave impacto medioambiental que produce y, además, hay que recordar que el antiguo Ministerio de Medio Ambiente emitió una declaración de impacto ambiental negativa sobre este proyecto.

Si a esto añadimos los recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto de 5 de noviembre por el que se adjudica la concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la autopista de Segovia y Ávila y explotación del tramo Villalba-Adanero, por entender que este Real Decreto es lesivo para los intereses de los ciudadanos al producirse un enriquecimiento injusto de la empresa Iberpistas, dado el desequilibrio entre los beneficios que se obtendrían y la inversión a la que se obliga a la empresa, sin olvidar tampoco las miles de alegaciones que han presentado los ciudadanos de estas provincias, así como el propio ayuntamiento de Villacastín para salvar su fresneda histórica, comprobamos que hay argumentos suficientes, señor Ministro, para que usted y su Ministerio sean sensibles a la revisión y modificación que se solicita.

Extraña mucho el empecinamiento más allá de lo razonable y la política de hechos consumados por mantener este proyecto, el más impactante de todos. Su antecesor, el señor Arias-Salgado, desde luego no va a pasar a la historia por la brillante gestión en el Ministerio que usted ahora dirige, sobre todo en Segovia, provincia con la que, no sé por qué, se cebó paralizando, descafeinando y empeorando muchos proyectos anteriores.

La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que concluir.

El señor GONZÁLEZ LÓPEZ: Ahora mismo termino.

En bien de los ciudadanos, señor Ministro, usted no debe ser cómplice de los desaguisados de su antecesor. Tiene la obligación de cambiar lo que está mal hecho o mal planificado. Va a ser difícil volverse atrás de algunas de las decisiones tomadas, como es la reconversión de autovía en autopista.

La señora PRESIDENTA: Por favor, señoría.

El señor GONZÁLEZ LÓPEZ: ... pero todavía estamos a tiempo de modificar el trazado y corregir las irregularidades en la adjudicación, que no encubren más que una ampliación desde el año 2000 al 2055 de...

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Señora Presidenta, señor Senador, en su intervención no he entendido muy bien algunas de las cuestiones fundamentales. No he entendido muy bien cómo interpreta usted la opinión mayoritaria de la sociedad. No sé si existen sistemas de sondeo que maneja su Grupo Parlamentario o si le parece que los resultados de las elecciones reflejan de manera bastante poco objetiva lo que piensa la opinión pública de los programas de los distintos partidos. (*Aplausos en el Grupo Parlamentario Popular.*)

En segundo lugar, señor Senador, cuando le estaba escuchando he cogido el mapa de la provincia de Segovia y me he dicho: Vamos a ver qué es lo que han hecho los gobiernos socialistas en Segovia en materia de autovías a lo largo de trece años. Y me encuentro con que no han trazado ni una raya, señoría. (*Protestas en el Grupo Parlamentario Socialista.—El señor González López pronuncia palabras que no se perciben.—Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*) Creo que lo que sucede es que su señoría es muy joven y todavía no conoce toda la perspectiva de la gestión anterior, pero conviene que la vaya conociendo. Porque fíjese, señor Senador: cuando yo le he dicho que vamos a cumplir todas las exigencias medioambientales de los estudios de impacto ambiental realizados como respuesta a las informaciones públicas y al estudio de las alegaciones, quiero recordarle que la declaración de impacto ambiental por el corredor de la N-603 la hizo el Gobierno que tenía las responsabilidades en febrero de 1996. ¿Recuerda usted cuál era ese Gobierno? Pues ese Gobierno aprobó una declaración de impacto ambiental recomendando el corredor y aprobando la viabilidad medioambiental de la alternativa que discurría por la N-603. Seguramente usted cree que ahora eso es denunciante ante Europa, lo que ocurre es que hay cosas que no se pueden inventar todos los días, y nosotros somos consecuentes con lo que hay que hacer en un proceso muy largo de elaboración de infraestructuras, entre otras cosas, los estudios medioambientales. Modere su tono, por lo tanto, y reflexione sobre algunas de sus afirmaciones no vaya a ser que la crítica se convierta en autocrítica y las críticas a las exigencias medioambientales insuficientes que pueden conducir a una denuncia europea sean autocríticas a quienes, en

aquel momento, pudieron hacerlo y lo hicieron mal, en el supuesto de que lo hayan hecho mal, de acuerdo con sus palabras.

La señora PRESIDENTA: Señor Ministro, concluya, por favor.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Sí, señora Presidenta. (*El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.*)

Sepa, por último, que la declaración de zonas protegidas corresponde a los países, y en el caso de España a las Comunidades Autónomas. En este caso concreto la Comunidad de Castilla y León ha propuesto para este corredor una ZEPA en la que se establece un corredor de paso a lo largo de la N-603 por donde discurre la autopista de peaje debido a que es una franja de terreno muy urbanizada y no supone una merma de los valores de las áreas que hay que proteger, por lo tanto, no creo que esté fundada la denuncia medioambiental enviada a la Comisión Europea.

Muchas gracias. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor Ministro de Fomento.

INTERPELACIONES (Continuación):

— DE DON JOAN LERMA BLASCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, CON EL FIN DE QUE EL GOBIERNO CORRIJA SU POLÍTICA EN RELACIÓN CON LOS CONTRATOS TEMPORALES (670/000029).

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Continuamos con el orden del día establecido: Interpelación del excelentísimo señor don Joan Lerma Blasco, del Grupo Parlamentario Socialista, con el fin de que el Gobierno corrija su política en relación con los contratos temporales.

Para exponer la interpelación, tiene la palabra el Senador Lerma por tiempo de quince minutos.

El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor Presidente, señor Ministro, señoras y señores Senadores.

No he salido a esta tribuna a hacer una intervención demagógica en torno a los problemas del empleo, y en concreto en torno a los problemas de la temporalidad. Creo que éste es un problema muy serio que afecta a la economía española, y no sólo en los últimos años, sino ya desde hace tiempo. Quiero decir de antemano que mi visión sobre la creación de empleo en España no es catastrófica. Si lo dijera perdería con toda seguridad la credibilidad. Se está creando empleo, y se está haciendo de manera notable. Podríamos hablar sobre si se podría generar más, pero creo que no es difícil discutir acerca de si se puede crear un mejor empleo. Y a eso me voy a referir durante mi intervención: a intentar explicar la forma en que el Gobierno puede contribuir a generar un empleo

mejor, un empleo de mayor calidad del que actualmente se está creando.

Voy a ser muy breve, porque sé que el señor Ministro conoce perfectamente las cifras relativas al empleo y a la temporalidad, pero creo importante recordar que la temporalidad en España se encuentra en cotas muy elevadas. Lo estaba a finales del anterior Gobierno; lo estaba también en mayo de 1997, cuando entró en vigor la actual reforma laboral, y en estos momentos prácticamente se encuentra en las mismas cotas. Con lo dicho no quiero que se piense que despreciamos una mejora de la tasa de temporalidad, pero es evidente que estábamos en algo más del 34 por ciento en 1994 —creo recordar—, en el 33 por ciento a partir de 1997, y casi en el mismo porcentaje en el momento actual. Y no se trata de que no se haya hecho nada para luchar contra la temporalidad. Han sucedido muchas cosas, entre otras, la reforma laboral de 1994, y una nueva reforma laboral pactada con los sindicatos y la patronal en 1997, como ya he dicho.

Esta última reforma laboral supuso un nuevo tipo de contrato, un contrato estable que reducía las condiciones del despido improcedente de 45 a 33 días por año, como ustedes saben perfectamente. Uno de los pretextos fundamentales que argüían las organizaciones empresariales a la hora de explicar por qué existía una elevada tasa de temporalidad se refería a la anterior reforma laboral. Los sindicatos aceptaban reducir el coste del despido a cambio de mejorar la temporalidad. Pero, además, el Gobierno subvencionaba ese tipo de contratación, y lo hacía con una cantidad muy importante de recursos: se destinaban casi 300.000 millones de pesetas a subvencionar la contratación estable con el fin de mejorar la tasa de temporalidad. Esa subvención tuvo su efecto en la reforma laboral, que se tradujo en la transformación de contratos temporales en contratos estables; sin embargo, la tasa de temporalidad no disminuyó, o lo hizo en muy pocas décimas. Y si, como he dicho, antes en España uno de cada tres trabajadores por cuenta ajena era temporal, la situación en la actualidad sigue siendo prácticamente la misma después de tres ejercicios de aplicación de la reforma laboral y de conceder unas subvenciones a la contratación estable muy elevadas. No parece, pues, que con esta reforma laboral y la subvención citada la temporalidad haya mejorado sustancialmente.

Insisto en que la temporalidad en España es muy elevada —a pesar, repito, de esa subvención y de los esfuerzos del Gobierno—, y podría ser que las circunstancias de la producción, el nuevo modelo económico, tuviera alguna influencia especial que hiciera posible que, de repente, como hemos podido oír en muchas ocasiones a mucha gente, esas nuevas circunstancias del mercado impusieran nuevas condiciones, de forma que el hecho de tener un empleo fijo no fuera ya una posibilidad. En este sentido, hemos escuchado muchas veces opiniones —empresariales, especialmente— en el sentido de decir: Ya no hay empleos fijos en la nueva economía. Ya no existe esa seguridad.

En principio esa falta de seguridad debería afectarnos a todos por igual si las nuevas circunstancias del mercado fueran las que condicionaran la elevada temporalidad española. Sin embargo, no es así, y si analizamos lo que pasa

en el resto de los países de la Unión Europea nos daremos cuenta de que la elevada temporalidad española es sólo una circunstancia de nuestro país. Mientras nosotros estamos por encima del 32 por ciento, la media de los países de la Unión Europea es —creo recordar— algo menos del 13 por ciento y la media de los países del euro es un punto más elevada, aproximadamente, pero no más.

Por tanto, ¿por qué la temporalidad es en España de más del doble de la media de los países de la Unión? Podemos pensar que hay países tecnológicamente mucho más desarrollados y que, lógicamente, la competitividad se traduce en menor temporalidad, y se puede comprobar que, efectivamente, hay países más desarrollados, con una renta per cápita más elevada que España, que tienen menor temporalidad. Alemania y Francia, por ejemplo, tienen una temporalidad de menos de la mitad; pero también hay países de la Unión Europea menos desarrollados que España, en principio, con una renta per cápita menor, como Portugal o Grecia, que también tienen menos de la mitad de temporalidad que España. Asimismo, Italia con una economía teóricamente informal, tiene una temporalidad que no llega al 10 por ciento.

Con todo esto quiero decir que en España se dan una serie de circunstancias, que no dependen precisamente del mercado, que imponen una elevada tasa de temporalidad. ¿Cuáles son esas circunstancias especiales? Podríamos aducir, como siempre hacen los empresarios, que hay una mayor estacionalidad de nuestras actividades, pero tampoco es cierto si lo comparamos con otros países europeos y, en cualquier caso, la estacionalidad —como todo el mundo sabe perfectamente— no debería cubrirse, en principio, con contratos temporales sino con contratos fijos discontinuos, que es lo legal.

Al mismo tiempo, hay actividades, como la turística, que también podrían condicionar nuestra situación pero, naturalmente, esa situación es la misma de algunos otros países europeos y, además, las tasas de temporalidad en el turismo son bien dispares entre las propias Comunidades Autónomas españolas. Hay más de diez puntos de diferencia en la temporalidad entre Canarias y Baleares, por ejemplo, que son dos destinos turísticos importantes y dos zonas donde el turismo juega un papel fundamental.

¿Cuál es, por tanto, la justificación de la mayor temporalidad española frente a la de cualquier otro país europeo en, su conjunto? Creo que es muy difícil de justificar, pero, quiero decir —sin alargarme ni actuar demagógicamente— que la causa que se aduce principalmente para justificar la actual situación de la elevada temporalidad es el elevado coste del despido español ¿Es esto cierto? Lo podemos comparar con cualquier otro país europeo y, desde luego, no saldríamos perdiendo siempre. Además, hay experiencias concretas que demuestran que el elevado coste del despido no va a cambiar la temporalidad española. Por ejemplo, en la crisis de destrucción de empleo del año 1990, se destruyó masivamente empleo fijo y no empleo temporal, como sería lo razonable si funcionara el modelo al que patronal y Gobierno se están acogiendo para justificar la próxima reforma laboral. Si el problema fundamental de la temporalidad fuera el coste del despido, lo primero que se

habría destruido en la crisis de empleo de principios de los noventa hubiera sido el empleo temporal para, a continuación, empezar a destruir empleo fijo. No fue así: masivamente se destruyó empleo fijo y fue sustituido por empleo temporal. Una segunda razón para justificar también que no va a funcionar el modelo de rebajar el coste del despido es muy clara, la tenemos a la vista y es muy reciente. Si hemos disminuido el coste del despido de 45 días por año a 33 y a pesar de ello y de subvencionar los contratos estables no hemos modificado prácticamente la temporalidad ¿por qué hemos de suponer que volviendo a bajar el coste del despido va a funcionar la reducción de la temporalidad? No hay ninguna razón técnica que lo avale, como estamos poniendo de manifiesto.

Quiero insistir no solamente en que el hecho de abaratar el coste del despido no mejorará —porque no lo ha hecho ya— la temporalidad, sino que además ésta afectará de manera importante a muchos otros sectores de la economía y, en particular, a nuestra competitividad. Una razón fundamental por la que hay que combatir la temporalidad no es sólo disminuir la incertidumbre de los ciudadanos que tienen un contrato temporal que, como digo, son uno de cada tres, sino también porque afecta de una manera muy clara a nuestra capacidad de competir, ya que los empresarios siempre buscan la flexibilidad, y es verdad que es necesaria y que puede mejorar la competitividad, pero la flexibilidad que se busca es siempre la cuantitativa y desde luego la conseguida actualmente con la contratación temporal afecta de una manera clara a la competitividad de nuestras empresas, y de forma negativa. Digo esto porque está basada en todo este mecanismo de ajuste de la temporalidad y hace que la innovación se resienta en las empresas, ya que ésta no puede aplicarse con una plantilla mayoritariamente de trabajadores temporales, como sucede con muchas de nuestras actuales empresas, porque es muy difícil asistir a una formación continuada del trabajador cuando existe una temporalidad elevadísima, además con una rotación igualmente elevadísima de los contratos y naturalmente debido a ello tampoco se puede evitar que exista una gran cantidad de accidentes laborales. Quiero decirlo ahora y no es demagogia: por muchas medidas que se adopten para intentar impedir los accidentes laborales, la principal sería acabar con la temporalidad porque ello tendría efectos sobre la cualificación de los trabajadores, sobre su formación y la posibilidad de controlar claramente lo que está ocurriendo en la empresa para evitar el problema de los accidentes laborales.

¿Por qué la temporalidad sigue siendo mala para la competitividad en el momento actual? Evidentemente, como he dicho, porque impide la innovación y la formación, pero también porque con todo esto se reduce la calidad de nuestra producción, nuestros productos hechos en base a obra de mano barata...

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Lerma, le ruego vaya concluyendo.

El señor LERMA BLASCO: Voy concluyendo, señor Presidente.

... de subcontratistas que además no tienen ninguna relación de continuidad con la empresa y que se encuentran con muchas dificultades para poder generar calidad en nuestra producción.

Quiero decir además, para terminar, porque así lo requiere el señor Presidente, que cuando existe una elevada tasa de desempleo la temporalidad no incide de una manera tan clara sobre la competitividad porque siempre se puede recurrir a trabajadores temporales formados procedentes del desempleo; cuando éste empieza a disminuir —y hay que estar satisfechos por ello— sucede que comienzan a disminuir también los trabajadores formados y, por tanto, la contratación temporal va en contra de la productividad de las empresas. En definitiva, la contratación temporal supone, es lo que sucede realmente, una forma de gestión de la fuerza laboral de los empresarios españoles que no tienen ninguna justificación que no tengan otros empresarios de otros países europeos para acreditar la elevada temporalidad más que el control de la fuerza laboral. Ésa es una situación que, como digo, afecta negativamente a nuestra economía, afecta negativamente a la capacidad de competir y tiene consecuencias muy directas sobre nuestra balanza comercial deficitaria con países con los que no podemos competir con precariedad, con subcontratación, en definitiva, con una presión sobre la fuerza laboral y no con los beneficios de la innovación lo que supondría tener una fuerza laboral más formada.

Termino diciendo que, aunque éste sea un problema muy importante, seguramente se presta a hacer demagogia, quiero hacer entender que el problema de la subcontratación, de la precariedad, no es exclusivamente un problema entre sindicatos y empresarios, sino que es también un problema macroeconómico grave que hace que la competitividad de este país se vea afectada. Por consiguiente, el Gobierno debería controlar más la causalidad de los contratos e intentar que la innovación sea un requisito fundamental para la empresa y no el competir con precariedad.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Lerma, le ruego concluya.

El señor LERMA BLASCO: Termino, señor Presidente.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Lerma.

Para contestar la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Muchas gracias, señor Presidente.

Señoría, no dudo de su buena fe. Quizá sea ésa una de las diferencias de posición que se pueden encontrar. Yo no dudo de que las actuaciones de anteriores Gobiernos pretendieran también un mercado laboral más eficiente, im-

prescindible para poder competir en una economía internacionalizada; que persiguieran también ese razonable equilibrio que debe existir en las relaciones de trabajo, siempre difíciles, entre esa tensión del capital y de la mano de obra. En modo alguno dudo de que las decisiones se tomaron pensando que serían socialmente justas y económicamente racionales.

Pero como muy bien señalaba usted, España está en una posición compleja desde el punto de vista de la temporalidad. Después de haber conseguido al menos invertir lo que era una tendencia al crecimiento que parecía imparable, ya se ha logrado declinar, retroceder, pero a todos nos parece insuficiente. Éste sería un claro punto de coincidencia.

Todos podríamos coincidir en que una cifra por encima del 30 por ciento es poco deseable para España. Debo indicar que este nivel de consenso es muy alto, es el mismo nivel de consenso que en el año 1997 tuvieron todos los partidos políticos, tuvieron nuestros empresarios y tuvieron nuestros sindicatos.

Dicho esto, tampoco debe uno creer que desde la más remota antigüedad ha sucedido esto en España. Le voy a hacer uno de esos juegos matemáticos que tanto les agradan. Allá por el año 1987, que es el año en que se empieza a medir, de una manera razonable y solvente la temporalidad, España tenía poco más de 15 puntos. Hay que suponer que años anteriores tenía aún menos. Si se hubiesen mantenido esas cifras que hoy me dice usted que son claramente insuficientes, claramente insatisfactorias, estaríamos como el resto de los países de la Unión Europea. Luego algo realmente habrá sucedido entre los años 1987 y 1997 para que más que se doblase la temporalidad en España.

Insisto en que estoy convencido, y lo reitero, de que siempre ha habido un ánimo de buscar las mejores relaciones laborales posibles desde el punto de vista de la equidad social y de que la economía española esté abierta al mundo y sea capaz de competir con todos los países con los que sea menester hacerlo. No lo dudo. Lo que no puedo admitir es, en primer lugar, un discurso del siguiente tenor: Qué bien dicen las cosas los sindicatos, qué buenos son los planteamientos sindicales y, a continuación, desautorizar los acuerdos que alcanzan los sindicatos. Compréndame, no lo sé seguir.

Usted ha hecho un discurso que tiene varios riesgos. Primero, reducir la complejidad de un contrato del mundo de los contratos a una sola dimensión, en este caso a la rescisión, y dentro de ésta a un solo aspecto, cosa que le garantizo jamás hará este Gobierno, y menos aún este Ministro. Un contrato tiene un punto de arranque, tiene una formalización, tiene un nacimiento, tiene una vida y tiene un desenvolvimiento. Yo coincidido plenamente en que es erróneo y que en ese caso difícilmente va a llevar a conclusiones positivas hablar del matrimonio si se empieza por el divorcio, y especialmente por las consecuencias de separación de bienes —eso puede ser una maravillosa tesis sobre el matrimonio que explicaría todo.

Yo creo que el análisis que se hizo el año 1997 entre empresarios y sindicatos —y que ratificó el Gobierno— contemplaba todos los estadios que deben contemplarse en

la relación laboral, y hubo aspectos en los que, indudablemente, había más dificultad de aceptación para los sindicatos, pero también hubo aspectos de muy difícil aceptación para los empresarios. Eso es lo que nos permitió entonces buscar lo que el Gobierno debe perseguir siempre, que es el interés general; no el interés de una parte, sea cual sea la simpatía o antipatía que cause una parte. En la búsqueda del interés general está el diálogo y precisamente por eso seguiremos haciendo todo lo posible, a sabiendas de que no depende sólo de nosotros, a sabiendas de que el éxito o el fracaso del diálogo social no depende solamente del Gobierno, créame.

Yo me puedo quedar con cualquiera de las dos tesis que usted ha expuesto: la tesis de que todo depende de las posiciones sociales o la de que todo depende de un Gobierno. Yo creo que puede haber una conjunción, el tiempo nos ha demostrado que puede haber una razonable conjunción de voluntades y de ánimos y puede llegarse a esa aproximación —la perfección no es humana, pero sí una aproximación al interés general.

Por cierto, este debate —que, insisto, es necesario y en el que yo le pido, además, que mantenga ese ánimo al principal partido de la oposición y, sobre todo, que nos ayude a construir alternativas que son necesarias— no es un debate ideológico. Usted ha pasado muy de puntillas —supongo que porque no era favorable a su tesis— sobre las circunstancias europeas, y simplemente ha dado el dato de que estamos al doble —por cierto, le vuelvo al insistir, no estábamos al doble en el año 1987, ha crecido más el empleo indefinido que el empleo temporal, también conviene recordarlo—, pero si usted quiere hablamos de lo que ha sucedido en Europa para que resistamos todos la tentación de hacer juegos ideológicos. En el período 1995-2000 —período en el que son identificables Gobiernos de distinto signo—, Francia ha aumentado su temporalidad casi tres puntos; Alemania ha aumentado su temporalidad; Portugal —lo ha citado usted como ejemplo— ha pasado del 9,9 al 18,6. Me gustaría que no trasladara este debate a un debate ideológico, no vayamos a llegar a esas bromas de que bajar los impuestos es de izquierdas y subir la temporalidad es de izquierdas; no quiero entrar en bromas pesadas de ese tipo porque, insisto, estoy seguro de que los titulares de los departamentos de trabajo y asuntos sociales de estos mismos países están haciendo todo lo que saben y pueden por crear más empleo y de mejor calidad, de eso no tengo ninguna duda. Y al final, insisto, de la temporalidad se ha hecho otra lectura que no me parece adecuada.

La temporalidad, por definición, es flexibilidad pura, pero yo no quiero que la única flexibilidad del mercado laboral español sea la temporalidad, que es lo que ha venido sucediendo durante bastantes años. Yo deseo que haya alternativas que concilien flexibilidad —esto es, capacidad de adaptación de nuestras empresas a producir bien— con seguridad y con derechos para los trabajadores, que me parece que es algo elemental y es una de las cosas que caracterizan este espacio nuestro llamado Europa, en el que no solamente tenemos capacidad de crear riqueza, sino que también tenemos un sentido de la justicia social a través de

un razonable equilibrio para empresarios y para trabajadores, y ésa es la clave, ésa es, sin duda alguna, la clave.

Las lecturas que pretendan decir que todo lo bueno o todo lo malo del mercado laboral vendrá solamente de su rescisión y de la cuantificación económica de su rescisión están abocados al error, y lo digo desde el conocimiento cierto y real, vivido en las propias carnes de la sociedad laboral española y de nuestro mercado de trabajo. Eso debemos desecharlo y tenemos que buscar ese razonable equilibrio —que hoy no existe— entre los contratos estables y los contratos temporales. Y hoy no existe no solamente por razones de coste económico —siendo evidente que es muy distinto el coste económico de un contrato estable al de un contrato temporal—, sino también de gestión jurídica, de seguridad de dicho contrato, y no olvidemos tampoco que en España hay más de 3.500.000 trabajadores que están sujetos a los contratos temporales y cuya indemnización es cero, que también es un debate que a veces tiende a olvidarse. Le aseguro que no sé a fecha de hoy cuáles son las cantidades exactas, entre otras cosas porque cualquier cifra nace de la arbitrariedad. Le aseguro que decir 20, 21, 25, 32, 48 ó 96 es un ejercicio de arbitrariedad, en este caso de aleatoriedad, pero le puedo garantizar que hay muchas personas que sí que están en unas circunstancias absolutas, esto es, en la absoluta desprotección.

Hay que buscar el éxito en la reducción de la temporalidad —que sin duda se me sigue antojando excesiva, y no me alejo del diagnóstico que han vuelto a hacer empresarios y sindicatos en España—, porque igual que cabe valorar positivamente para el mercado de trabajo español la reforma de 1997 —lo creo, lo ratifico— también cabe pensar que es mejorable. No solamente hay que intentar que no se produzca un vacío, que se produciría por agotamiento, incluso por agotamiento de su vigencia, en la primavera del año 2001, sino que habría que intentar ahondar en una línea que ha conseguido, como antes decía, no solamente frenar sino cambiar una curva que parecía indomable.

Pero creo que, con la insatisfacción que produzca que no haya sido mayor el salto, con las insatisfacciones que produzca que no se haya producido una total homogeneidad no solamente territorial sino también por géneros y también por tramos de edad, sin duda ninguna, cabe pensar que tenemos instrumentos que pueden llevar a cabo este objetivo. Lo he citado antes y lo repito ahora: tenemos que construir alternativas a la temporalidad, porque creo que nadie podrá discutir que España necesita tener una capacidad de adaptación a los cambios de mercado, a los cambios de producción y a la propia internacionalización. Eso espero que no sea ni dogmático ni ideológico. Tiene que haber esa flexibilidad. Tiene que haber un juego de derechos y tiene que haber alternativas a lo que ya hemos visto que no funciona.

Creo que una de las grandes posibilidades que en estos momentos nos ofrece la emulación en lo positivo a Europa sería una utilización más racional del contrato a tiempo parcial, hasta que logremos, como han logrado muchos países de la Unión Europea, que el contrato a tiempo parcial sea un contrato querido, nazca de la voluntariedad de las partes, empresario y trabajador y, desde luego, tenga la

debida proporción e, incluso, los incentivos necesarios de protección social para que no sea considerado de peor calidad y condición y que, desde luego, también la nota dominante de esos contratos a tiempo parcial sea la propia estabilidad, cosa que hoy tampoco sucede en nuestro mercado de relaciones laborales.

Decía también —y es mi deseo— que es un tema en el que quizás no debemos extendernos demasiado, porque lleva presente mucho tiempo en el debate político y en el debate social. Estamos en unos días y semanas importantes. Creo que los agentes sociales españoles han vuelto a dar medida de su sentido de la responsabilidad entrando en lo que es un diagnóstico común —que es el que comparto con su señoría plenamente— sobre que sigue existiendo una temporalidad excesiva en España.

Coincido también con su señoría en que hay áreas de estacionalidad de nuestra economía importantes que tal vez nos van a obligar a estar siempre en una posición incómoda respecto a otros países. No pesan lo mismo las actividades estacionales en España que en otros países de la Unión y usted es de una tierra que lo conoce, aunque habrá visto que se han corregido efectos estacionales. Ese mes de octubre, tradicionalmente malísimo para generar empleo en la Comunidad de Valencia, esta vez se ha podido cerrar con un saldo más favorable. Pero lo deseable —estoy seguro de que también lo comparte— es que esa homogeneidad alcance a los territorios, alcance a los sectores y alcance géneros y personas sin distinción alguna.

Son días importantes en los que creo que junto a esa coincidencia de objetivos es posible y sería más que deseable avanzar en propuestas y formulaciones que, desde luego, también den respuesta inteligente y positiva, como fue la del año 1997. Le vuelvo a insistir en que desde el Gobierno no nos cabe sino impulsar hasta donde sepamos y podamos, en alguna ocasión, como en toda obra humana, con inteligencia y, en otras, con torpeza, pero le puedo garantizar que yo no he regateado nunca, ni voy a regatear las presunciones de buen ánimo y buena fe en esta materia. De hecho, créanme que cuantos más días he pasado en el despacho de Ministro de Trabajo más comprendo las dificultades de todos los anteriores titulares y digo de todos, sin excepción.

Pero también se comprenderá y espero que se entienda que, en ese juego racional de asignación de papeles que nos da la propia Constitución y yo creo que el sentido común, agentes sociales, el Gobierno y la oposición, todos tenemos que intentar actuar en la misma dirección. Y comparto con usted la idea de que en España tenemos una temporalidad que dificulta, no hay duda, muchas de las buenas políticas sociales. Dificulta la formación profesional difícil hacer una política de cualificación cuando no se sabe ni cuántos ni quiénes van a ser los trabajadores en una empresa, coincido con usted en el aserto, son difíciles, sin duda ninguna, las labores no solamente de mentalización sino de formación para la prevención de riesgos y llevarlas a cabo desde ese mismo supuesto, bien que algún día espero que también en esta Cámara podamos, con el concurso de todos, incluidas las Comunidades Autónomas, pacificar las cifras, que a veces no son tan pacíficas, sobre

nuestra siniestralidad, que, siendo malas —no ha ya duda, no estoy haciendo ningún ejercicio de escapismo—, por lo menos, podamos pacificarlas, para que sean una verdadera herramienta de trabajo y no un arma de elusión de responsabilidad.

Pero, insisto, todas esas otras políticas sociales, sin duda ninguna, funcionarían mejor si tuviésemos una mejor estabilidad. Y aquí el reto está en pasar del voluntarismo —insisto, presumo siempre que bien intencionado— a propuestas que demuestren esa eficacia.

¿Es mejorable la reforma del año 1997? Comparto con usted plenamente dicho aserto. ¿Cómo hacerlo? Creo que todavía hay margen y debemos confiar en nuestros agentes sociales, y digo plural y colegiadamente. Para mí, una de las grandes ventajas de la reforma del año 1997 era que fue aceptada y aceptable por quienes al final materializan el empleo, nuestras empresas y nuestros trabajadores. Yo lo deseo, no depende de mi única voluntad, pero no dude su señoría que haré todo cuanto esté en mi mano para que eso se pueda volver a repetir.

Gracias. (*Aplausos.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

¿El Senador interpelante quiere hacer uso del turno establecido en el artículo 87? (*Pausa.*)

Tiene la palabra su señoría por tiempo de cinco minutos. Le recuerdo que posteriormente tiene derecho al turno de portavoces.

El señor LERMA BLASCO: Gracias.

Intervengo con mucha brevedad para agradecer al señor Ministro, el tono de su respuesta, como no podía ser de otra manera, y para insistirle en que efectivamente todos estamos de acuerdo en que lo positivo —y me gusta que lo haya manifestado explícitamente aquí— es dejar que los interlocutores sociales intenten solucionar la cuestión; que no es bueno porque no dará una buena solución, intentar interferir en el debate. No obstante, creo que hay responsabilidades importantes del Gobierno que podrían ayudar a mejorar la temporalidad que, como ya he dicho anteriormente, no se justifica por circunstancias especiales del mercado español, porque la estacionalidad no es mayor que en otros países, ni es mayor en unas regiones que en otras, y muy pocas cosas justifican la flexibilidad excesiva que la temporalidad española da a algunos empresarios españoles. Sería positivo que pudiéramos recabar aquí tendremos ocasión de hacerlo más adelante— algunos sectores específicos de nuestra economía con tasas de temporalidad que no están en el 20, ni en el 30, ni el 40, ni en el 50 por ciento, que a veces llegan hasta el 80 por ciento, y que no es en absoluto una actividad temporal la que están ejerciendo. Eso tiene un nombre diferente al de estacionalidad, y ciertamente ésa es una responsabilidad a la que el Gobierno debería de comprometerse.

Hay industrias que difícilmente pueden competir si no es con esa situación. ¿Por qué es así? Porque hay excesiva falta de formación y porque hay poca inversión en elementos fundamentales como la innovación, la investigación y

el desarrollo. Hay industrias que no pueden aflorar porque no han tenido capacidad suficiente ni la ayuda indispensable del Gobierno para invertir en investigación e innovación, que son elementos fundamentales, y tienen que recurrir a la temporalidad.

A nadie le gusta quedar mal, ni al Gobierno con los trabajadores o con el interés general, ni a los empresarios con sus propios trabajadores, pero si no es así, no pueden competir porque desgraciadamente no les hemos dado otra opción. Ahí hay una responsabilidad clara del Gobierno, y no en el problema de la negociación con los interlocutores sociales, sino en consentir que se produzca la rotación de los contratos temporales cuando es evidente que los contratos temporales son causales y su vigilancia es una actuación que no corresponde a los interlocutores sociales, sino al Gobierno.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Lerma.

Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Intervengo por cortesía y para hacer alguna precisión que me parece oportuna.

Coincido plenamente en que desde el Gobierno se puede y se debe contribuir a la mejora de la estabilidad. Créame que intentaremos, hasta donde sea posible, dar continuidad a lo que entendemos que ha sido un proceso positivo de diálogo social, aunque, insisto, la única voluntad que inequívocamente puedo poner sobre la mesa es la propia. Entiendo que si se repiten básicamente los propios interlocutores, y no hablo tanto de personas sino de instituciones, debería ser posible alcanzar estos grados de entendimiento y, sobre todo, de eficacia en la remisión de lo que ha sido durante bastantes años una de las preocupaciones que parecía tendencialmente imparable del mercado laboral español.

Sí me gustaría aclarar una idea. En ocasiones he oído decir —y por eso le he hablado de los juegos numéricos— que hacen falta muchos contratos temporales para que al final de ese trasiego de contratos quede un contrato estable. Es cierto. Ha mejorado la cifra, pero en períodos recientes de nuestra historia laboral tantos o más contratos no generaban ni un solo contrato indefinido, porque lo que estábamos viviendo en aquellos momentos era un fenómeno de destrucción de empleo a pesar de haber una altísima tasa de contratación.

El índice de rotación —créame— me parece que es de las cosas menos expresivas de la realidad laboral, porque tiene la escasa delicadeza numérica y cualitativa de dividir el total de contratos que se realizan en España por el total de personas contratadas. Esos análisis, que sin duda ninguna pueden tener utilidad para simplificar las materias, como sucede con todo aquello que tiende a la simplificación excesiva, aportan muy poco a las cuestiones de fondo. Coincido con usted en que el análisis debe permitir que las propuestas no creen velocidades tan asimétricas como las

que se han producido en estos últimos años; todas positivas —cabe decirlo con satisfacción—, pero no dejan de ser velocidades asimétricas desde una lectura territorial y un poco menos asimétricas desde una lectura de géneros. Afortunadamente, el empleo femenino empieza a mantener tasas de crecimiento superiores a las del masculino y cifras absolutas superiores a las que venían siendo ofrecidas para varones.

Concluyo diciendo que, afortunadamente, se ha pasado de los debates de resignación —para mí poco deseables—, de los debates en los que simplemente se decía que se intentaría repartir el empleo existente y que las oportunidades de trabajo de los jóvenes pasaban por la retirada laboral, cuando no física, de aquellos de más edad, a los debates de exigencia de calidad a través de la estabilidad y seguridad en el empleo. Ojalá estos debates sigan siendo posibles y se mantengan durante muchos años en España, aunque no hay que ocultar que la base de los mismos hay que buscarla en un crecimiento sano y estable y en una interpretación eficiente de ese crecimiento económico de forma que se traduzca en crecimiento del empleo.

A mi entender, éstas son las claves en las que debemos movernos y en las que debemos buscar, igual que han hecho los agentes sociales, el mayor grado posible de consenso político.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto, el Senador Cámara tiene la palabra.

El señor CÁMARA FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, creo que la interpelación que presenta el Grupo Parlamentario Socialista es oportuna, porque en los medios de comunicación está presente el debate con respecto a los ejes centrales del llamado diálogo social. Me refiero a lo que aparece públicamente y a lo que opinan los agentes sociales con respecto a la disminución del precio del despido —por decirlo de alguna manera—, a la disminución de las cotizaciones sociales y al incremento del gravamen para los contratos eventuales. Éstos son algunos ejemplos de lo que aparece en los medios de comunicación.

Por supuesto, yo no puedo consumir en este debate tan importante un tiempo excesivo, pues es tarea que le corresponde al señor Lerma, pero sí voy a recordar el comportamiento de los trabajadores —es bueno recordarlo— en este tiempo de fuerte crecimiento económico. Ha habido un importante aumento de la productividad individual y colectiva; las jornadas de trabajo no se han disminuido, sino que, en todo caso, han aumentado sobre la base de la disminución del poder de los trabajadores en el marco de la empresa; ha habido contratos a tiempo parcial que, en la práctica, se convertían en contratos completos aunque se pagaban —y se pagan— como contratos parciales; un aumento de las horas extras; una disminución de los derechos laborales de los trabajadores —algo que se puede apuntar

de forma autocrítica el Grupo Parlamentario Socialista por la actuación que llevó a cabo en su etapa de Gobierno, así como el Gobierno del Partido Popular—, y eso se ha producido en el marco de una moderación salarial importante; y una disminución del conflicto social a consecuencia, entre otras cosas, del diálogo social.

Ése es un claro cuadro de situación. Pero desde el año 1984 la eliminación del efecto causal de los contratos se ha utilizado de una forma tan abusiva que ha permitido una eventualización impresionante de esos contratos, y eso es lo que explica las cifras desde 1985 en adelante. El efecto causal de la práctica de los contratos no ha existido y se confunde aquí el término flexibilidad—por cierto, término adulterado que, a fin de cuentas, era la adaptación de nuestro mercado laboral a situaciones específicas para la mejora de la productividad, etcétera— con eventualidad, con temporalidad que, por cierto, nada tiene que ver con el tema de la estacionalidad, pues hay una parte de la economía estacional en nuestro país que es conveniente contemplar, igual que es conveniente contemplar el contrato eventual para aquellos trabajos de carácter eventual y para la actividad permanente el contrato indefinido. Hay que recuperar, por tanto, aquella idea que existía, que no es antigua, que no está en desuso, simplemente es que se ha abusado de forma impresionante.

Para terminar, ustedes saben perfectamente que existen encadenamientos de contratos en las empresas. Hay empresas con el cien por cien de contratos eventuales, que cada mes o cada tres meses renuevan los contratos a los trabajadores. Es lo que está pasando comúnmente en estos momentos. Creo que hay instrumentos para evitar eso precisamente, y además hay adulteración o ilegalización del contrato llamado eventual.

Las distintas reformas que ha habido sinceramente han ido en sentido contrario a los intereses de los trabajadores. Permítanme que, aunque no tenga tiempo para explicarlo más a fondo, al menos haya una voz en este Senado que diga estas cosas. Desde el año 1984 en adelante ha habido reformas que han disminuido los derechos de los trabajadores, es cierto que para evitar el garantismo de las leyes y para dar más poder a la relación contractual entre sindicatos y empresarios, pero creo sinceramente que el poder de los empresarios ha aumentado en el marco de la empresa y el de los trabajadores ha disminuido, porque esta eventualidad o temporalidad de los contratos lo que hace es, ni más ni menos, que la gente tenga menos derechos porque no se atreve a reclamar. Por tanto, el conflicto en el marco de la empresa disminuye pero sobre la base del aumento, insisto, de ese poder en detrimento de los intereses de los trabajadores.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Cámara.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Froilán Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ DÍAZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, señorías, creo que el tono constructivo con que se está llevando el debate de esta interpelación define lo que, al menos en expresiones públicas y espero que también en el fondo, todos queremos, que es dotar de la mayor estabilidad a los puestos de trabajo y conseguir el máximo empleo posible. Lo que hace falta es que eso lo vayamos demostrando con la práctica cotidiana, con la legislación, con las medidas, con los acuerdos, etcétera.

Es verdad que, según se ha dicho y, además, reconoce el Ministro en gran medida, la temporalidad ha disminuido muy poco en los últimos años, a pesar de todo lo que se ha hecho. Es cierto que se ha hecho mucho, no sólo con la reforma de 1997 que llevó consigo la reducción de las condiciones de despido para los contratos indefinidos, sino otras muchas medidas, antes y después de este Gobierno. Pero hay un factor muy importante que aquí se ha tocado muy de pasada y me parece importante recalcar, y es que tenemos que aprovechar este período de bonanza económica para mejorar las condiciones del empleo y de los contratos indefinidos, porque—ojalá el ciclo dure mucho—, parece que todos los indicadores predicen que estamos ya en una fase de estabilización y comienzo del descenso de esta bonanza económica.

Hay un aspecto fundamental que aquí se ha tratado por el Senador Cámara, y es el abuso del encadenamiento y rotación de los contratos temporales, que conducen a una degradación cada vez mayor de las condiciones laborales y a unos mayores índices de siniestralidad laboral. Precisamente en estos días en que se ha estado reuniendo con frecuencia la Comisión especial para la siniestralidad laboral, se ha concatenado, de forma casi indiscutible, la precariedad en el empleo, la excesiva rotación, con el aumento de la siniestralidad laboral.

Hay otros factores fundamentales que también se han citado, como la inversión en formación, sobre todo para dar respuesta a las demandas más actuales; se ha hablado de innovación, de los nuevos yacimientos de empleo, de por dónde va la nueva economía. Hay que formar a los parados, a los nuevos demandantes de empleo para dar respuesta a esa nueva demanda y, además, en condiciones de estabilidad en el empleo, por supuesto, con políticas activas que vayan por ahí.

Por otro lado, también es verdad que la negociación que se está llevando a cabo entre patronal y sindicatos parece que arroja cierto consenso a la hora de redefinir una serie de condiciones para la finalización de los contratos, pero la contrapartida que exigen los sindicatos, que debe ser el compromiso de disminución de la temporalidad, no encuentra suficientes garantías para evitar lo que se produjo a partir de la reforma laboral de 1997, cuando a cambio de la disminución de los costes del despido, se garantizaba una disminución de la temporalidad que no se ha producido. Habría que buscar esa garantía para renegociar todo el conjunto de condiciones, si finalmente se llegara a ese acuerdo, y conseguir el compromiso de disminuir la temporalidad.

Una idea que ya se ha barajado desde muchos medios ha sido la relativa a las indemnizaciones para la rescisión de contratos temporales, a la vez que una posible bajada de los

costos de la rescisión de los contratos indefinidos. Ya se han hecho algunas experiencias, si no me equivoco en el sector de la construcción y en el de los grandes almacenes para fijar unas cantidades, aunque sean mínimas, de indemnizaciones por la rescisión de contratos temporales. Por ahí podría ir una medida, pero todos podemos estar de acuerdo en que tiene que ser una batería de medidas en todos los sentidos, y sobre todo de mutuo acuerdo entre los sindicatos y los empresarios, para que dentro de este clima de diálogo que parece que no se ha roto —y esperemos que no se rompa—, y por supuesto con el control que obligatoriamente debe llevar el Gobierno, no se haga en detrimento de las condiciones legales básicas que todos nos hemos dado.

Esta serie de reflexiones intentan ser simplemente constructivas para colaborar —en la medida en que se ha reconocido, tanto por el portavoz socialista, Senador Lerma, como por el propio Ministro, como una preocupación común que todos tenemos— en la mejora del mercado laboral, y en concreto en la disminución de la precarización o la temporalidad en el empleo.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Rodríguez.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Aurrekoetxea.

El señor AURREKOETXEA BERGARA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, la verdad es que ante un debate como éste, que en realidad es tema de preocupación para todos, es gratificante ver el esfuerzo que se ha hecho por conseguir que se circunscriba a sus justos términos, y la verdad es que el señor Lerma ha conseguido no caer en la demagogia, al plantearlo de una manera razonable y razonada. Como decía, es un problema preocupante para todos y todos asumimos que las reformas que se han ido haciendo en 1994 y 1997 quizá no han dado en este aspecto los frutos que se esperaban: potenciar el contrato indefinido, como el mecanismo más importante a desarrollar. Pero tampoco estamos nosotros para meter el dedo en el ojo, ni mucho menos, y además somos conscientes, por las propias responsabilidades de gobierno que tenemos en nuestro país, de las dificultades que se producen para generar confianza, para conseguir un entorno favorecedor que pueda crear empleo. Muchas veces hablamos de esos elementos psicológicos, intangibles, pero muy reales que están ahí para contrastar, sobre todo por parte del empleador. Vemos el problema, por tanto, desde una preocupación compartida —porque las cifras no son buenas, hay que reconocerlo— y con un ánimo constructivo. Además, la temporalidad en sí no es buena ni mala; lo que quizá se deba plantear es que hay que usarla en su justo término. Creo que es ahí donde hemos de situarnos para conseguir que esa potencialidad que tienen estos contratos se transforme en el futuro en estabilidad en el empleo en todo el Estado.

Por lo tanto, sabiendo, además, que los cambios en esta materia se están produciendo continuamente y que tenemos que ser ágiles en conseguir unas evaluaciones de to-

das estas reformas, de todos estos mecanismos que se han estado implementando, nos sumamos a ello con el fin de buscar esa agilidad, para ver, sin echar la culpa a nadie, qué nos exigen los nuevos tiempos y cómo conseguir modificar lo que haya que cambiar.

Estos días sin ir más lejos hemos podido leer que medidas asumidas por todos, como la propia jubilación anticipada, hoy están siendo cuestionadas, y que todo el mundo está buscando precisamente lo contrario, el retraso en la jubilación, fomentar el trabajo a tiempo parcial, etcétera. Por lo tanto, lo que aquí se nos exige es agilidad en esa evaluación para conseguir implementar medidas adecuadas lo más rápidamente posible.

Así pues, nuestra posición va a ser abierta. Creemos que hay que seguir profundizando en las recomendaciones que ya desde el Libro Blanco de Delors de 1994 se están haciendo en esta materia tan compleja que depende de muchos factores que están a su alrededor. Nosotros vamos a favorecer el desarrollo de las líneas que allí se empleaban como la de fiscalidad, sistema tributario, medidas específicas hacia los más desfavorecidos, etcétera, que al final potencien esa estabilidad para lograr nuevos empleos.

Por tanto, nuestra posición no parte de la crítica sino de sumarnos a trabajar en un diagnóstico que quisiéramos hacer con ustedes, que puede no ser todo lo conveniente que deseáramos para con el Estado. Pero buscando la cooperación en pie de igualdad deseamos llegar a acuerdos con ustedes en una cuestión tan compleja como es la creación de empleo estable y de calidad. Y, además, con una doble visión, intentando que en la búsqueda de esas medidas generales nos unamos para encontrar esos acuerdos entre todos, y logrando que el Gobierno desarrolle los instrumentos que actualmente existen.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Aurrekoetxea, le ruego vaya concluyendo.

El señor AURREKOETXEA BERGARA: Concluyo, señor Presidente.

Debemos intentar que el Gobierno utilice esos instrumentos de una manera activa desde la posibilidad, que nosotros también tenemos, de colaborar en la parte que nos corresponde.

Por tanto, queremos llegar a esa responsabilidad, no solamente alcanzando esos acuerdos generales de intenciones con voluntad, sino aportando también hechos de una manera activa, lo que también redundará en la mejora de los números del propio Estado. En esta materia creemos que todos los esfuerzos son pocos. Por ello, nos sumamos a la voluntad expresada por el Ministro.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra el Senador Molas.

El señor MOLAS I BATLLORI: Gracias, señor Presidente.

Señorías, en primer lugar quiero agradecerle al Senador Lerma que haya planteado este tema de una forma constructiva y abierta en una interpelación, tema para cuya solución seguramente nadie, ni por supuesto el Gobierno, tiene la varita mágica, pero que a todos nos preocupa.

Yo he llegado a algunas conclusiones después de haber escuchado el debate sobre esta cuestión. Por eso, me permitirán que mencione algunas de ellas. La primera se refiere a un cierto acuerdo en que la temporalidad se ha reducido muy poco, y a que es criterio del Gobierno que el 30 por ciento era excesiva. Seguramente es criterio común que más allá de esa cantidad es perjudicial. También se ha reducido muy poco un tema colateral que todo el mundo ha ligado con todo esto, la siniestralidad laboral, aunque no sabemos demasiado bien qué efecto tiene, si directo, indirecto. La conclusión es que eso se ha de estudiar más, pero esto no es una universidad ni un centro de investigaciones científicas. Estudiémoslo, pero esta cuestión se ha de resolver.

En Europa ha aumentado la contratación temporal en los últimos años, lo que pasa es que estaba muy baja. Nosotros tuvimos un ascenso muy rápido, en él nos hemos mantenido, y hoy no hay forma de bajarlo. Ése es el problema. Y seguramente los nuevos tiempos —alguien ha utilizado ya esta expresión— supondrán una tasa de empleo temporal estable más alta de la que gustaría a aquellos que creemos que éste es un elemento de estabilidad muy importante en la casa de cada uno.

Los técnicos dirán que el problema radica en determinar qué es lo que tiene que hacer el Gobierno sobre esta cuestión. Eso es lo que a mí me preocupa porque, aparte de la posición constructiva que siempre tiene el Ministro de Trabajo desde el punto de vista humano, personal y político, no he visto lo que se tiene que hacer. El señor Ministro ha dicho algo muy importante: avanzar en propuestas —evidentemente—, dar alternativas a la temporalidad —muy bien—; que no se puede ser ni dogmático ni ideológico —de acuerdo—, e incluso ha dicho que seamos flexibles —son expresiones del señor Ministro—. ¡Todo el mundo tiene que ser flexible! Y seguramente este tema debe enfocarse así, pero el problema es determinar qué piensa hacer el Gobierno para reducir esta situación, si es que es mala. Si el Gobierno no puede hacer nada debe decirlo; si el Gobierno cree que no le corresponde hacer nada también debe decirlo, y si el Gobierno hace cosas debe decir qué cosas está haciendo.

El señor Ministro sabe que yo soy una persona muy cordial y que soy poco dado a utilizar expresiones duras, pero usted se ha preguntado cómo hacerlo, y la respuesta que usted mismo se ha dado —creo que la he tomado literalmente— es confiar colegiadamente en los agentes sociales. Y los demás, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que confiar también en los agentes sociales? ¿Dios proveerá y una vela a Santa Rita?

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Molas, le ruego con cordialidad que vaya concluyendo.

El señor MOLAS I BATLLORI: Señor Presidente, diré sólo unas frases, para no terminar abruptamente.

Señor Ministro, le pido mayor profundidad sobre qué ha aportado de nuevo la acción del Gobierno además de lo que ya hacen los agentes sociales, los sectores que presentan proyectos, los que plantean alternativas y los que estudian nuevos derroteros.

Como conclusión, debo decir que me ha parecido un magnífico debate sobre esta cuestión, y que creo que ha sensibilizado suficientemente a la Cámara como para que todos juntos intentemos encontrar un mejor horizonte para el empleo en España.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Molas.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el Senador Servià.

El señor SERVIÀ I COSTA: Gracias, señor Presidente.

Evidentemente, tal y como ya se ha planteado el problema, nuestro Grupo está totalmente de acuerdo con la importancia de esta cuestión y en las dificultades para resolverlo. En Cataluña, en el último trimestre, el empleo fijo ha subido un uno por ciento y el empleo temporal ha subido el dos por ciento. Esto quiere decir que no solamente no solucionamos el problema sino que se está agravando paso a paso.

El problema es muy difícil, es complejo —se está viendo en todas las intervenciones—, pero nosotros somos partidarios de, aparte de abordar para el futuro importantes cambios en el mercado laboral, hacer cosas inmediatas. Nuestra sugerencia es, por ejemplo, reducir la cuota empresarial de los contratos fijos o aumentar la de los contratos temporales, es decir, crear unas diferencias que incentiven a las empresas, que constituyen una parte que debe contribuir a solucionar este problema porque están implicadas en que determinadas cosas se estén haciendo mal. Asimismo, se debe incidir de una manera especial en los sectores con mayor dificultad para ser contratados con carácter fijo, como los jóvenes, las mujeres, los mayores de 45 años o incluso los discapacitados.

Si nos comparamos con el resto de Europa vemos que tenemos más del doble de temporalidad que ellos. Esto es grave y no he oído a nadie que explique el porqué, por lo que le ruego que me permita hacer un pequeño análisis.

El sector que contribuye de forma más importante a la temporalidad es el de la construcción. Es un sector muy complejo que funciona como un acordeón. Se ve afectado, evidentemente, por los ciclos económicos; se ve afectado por la inversión pública, que tiene que ver con los ciclos económicos, pero actúa con unos desfases en determinados y diferentes momentos; se ve afectado por la inversión privada ligada a los ciclos económicos, pero a veces también a problemas de desarrollo. La inversión privada en construcción, y concretamente en edificación, en ciertos momentos, especialmente en determinadas zonas, sufre frenazos por problemas de suelo y de programación, y todo esto hace que no haya básicamente estabilidad en el sector. Estabilidad que quizás sí tienen, no perfecta, pero sí mejor, estos países europeos con los que estamos intentando com-

pararnos. Quizá ahí tengamos una pequeña explicación de por qué tenemos esta gran diferencia con ellos. La construcción necesita una programación más estable en todos los sentidos, porque la temporalidad, al menos, está ahí, porque las empresas y los trabajadores, forzados por las circunstancias, hacen contratos mal hechos, sí, pero básicamente porque el sector no puede dar estabilidad.

Permítanme que muestre mi humildad no dando soluciones al problema sino aportando la voluntad de estudiarlo con todos y apuntando una mayor dimensión de futuro sobre el tema. Nosotros nos comparamos con Europa, tenemos que ponernos a su altura, pero es que Europa también tiene un gran problema en este asunto con las empresas modernas, con las empresas globales, con la comparación o rebufo a la que está sometida la economía europea con respecto a la de Estados Unidos. En Estados Unidos los contratos son más fijos, pero también hay una cultura y una costumbre contractual, y no quiero hablar ya de flexibilidad, que es una palabra demasiado prominente, sino de que la contratación en Estados Unidos, que es un país bandera en estas cuestiones, tiene una gran movilidad geográfica, incluso funcional. Estas empresas modernas cambian de sitio e incluso de actividad a la gente que tiene contratos, y éstos son fijos y no tiene que ser temporales, porque la cultura de la costumbre permite...

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Señoría, le ruego que vaya concluyendo, por favor.

El señor SERVIÀ I COSTA: De acuerdo. Muchas gracias.

Creemos, pues, que debemos tratar este tema entre todos para sugerir al Gobierno que haga cosas. No lo vamos a solucionar, pero sí sugiero que mejoremos la situación. Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Servià.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, el Senador Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias.

Intervengo para agradecer a todos sus intervenciones, y especialmente al señor Ministro por su tono.

No solamente he procurado plantear el problema, que por lo demás es de todos conocido, sino que también creo haber apuntado algún tipo de solución. Ahora, en concreto, voy a sugerir una más que creo que estaba implícita en mi intervención.

La flexibilidad que demandan los empresarios o si se quiere, las nuevas formas de producción, tiene un sentido, que es mantener o incrementar los beneficios, y para eso nosotros tenemos que convencer también a una parte de los interlocutores sociales. Lo digo porque he oído al Gobierno, no sé si de primera o de segunda mano, a través de los medios de comunicación, que él asumirá su responsabilidad y que si no hay reforma de los interlocutores sociales, intervendría. También he oído decir que el Gobierno parecía intervenir en favor de hacer todos los

contratos estables, como el contrato actual, es decir, reducir el coste y algunas cosas más, todas negativas con respecto a los contratos estables anteriores, tampoco hay que disimular. E igual que le he oído decir esto, aunque sea de segunda mano, me gustaría también que el Gobierno, para aportar la solución, adoptara otra visión que es la de decir a los empresarios: La excesiva temporalidad supone una dificultad evidente para competir en el sector en el que tenemos que competir hoy, que no es con los países del tercer mundo, sino con los países europeos y con los países desarrollados fundamentalmente, y por lo tanto no tenemos que competir en coste de mano de obra sino en calidad. Y el trabajador, señor empresario, ha de ser considerado como un activo y no como un coste que haya que minimizar, si no también perderemos competitividad y perderá usted beneficios, aunque tenga mucha flexibilidad.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Lerma.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora do Campo.

La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, señorías, los resultados obtenidos durante la última legislatura, y que se extienden a la actualidad, indican que la política de empleo desarrollada por José María Aznar ha seguido el camino acertado. Esta afirmación, expresada por una Senadora del Partido que sustenta al Gobierno, puede resultarles lógica pero llena de complacencia con la política que hace su Partido desde el Gobierno. Más aún: sus señorías pueden pensar que con esta afirmación esta Senadora pretende zanjar el motivo de esta interpelación, y no es así.

Señorías, el camino que ha seguido el Gobierno en materia de política de empleo —y vuelvo a insistir que a nuestro Grupo le parece el acertado—, como tal camino, tiene un inicio y tendrá un fin. De momento el inicio es claro. En 1996 nuestro país no sólo tenía el récord europeo de desempleo, sino también de precariedad laboral: la tasa de temporalidad era tres veces la europea. Pero de las cifras, mejor no acordarse.

Ante esta realidad, se planteó la reforma de 1997, una reforma pensada no sólo desde el Gobierno, sino llevada a cabo desde el diálogo con los sindicatos y los empresarios, que demostraron una gran madurez y responsabilidad que toda la sociedad, y los trabajadores en particular, ha sabido apreciar.

Hoy podemos calificar la reforma de 1997 de éxito, pero también compartimos la opinión del señor Ministro acerca de que es mejorable, porque ahí están los datos. Tres años después, el panorama laboral se ha modificado intensamente. Superamos los 15 millones de ocupados, cifra que, como dijo el Presidente del Gobierno, José María Aznar, en la inauguración del seminario internacional conmemorativo del primer centenario de la Seguridad Social, encierra toda una revolución social, todo un cambio de

mentalidad que probablemente no percibimos hoy en todo su significado.

Pero esta nueva realidad no nos oculta que todavía existen desequilibrios en el mercado de trabajo, y ya han podido ver, señorías, que el señor Ministro ha sido hoy claro con esta Cámara. Somos conscientes de la existencia de una desigualdad entre sexos, no sólo en lo referente a la participación de la actividad en el acceso al empleo, sino también en otros aspectos, como el propio desarrollo de la ocupación, a pesar de que nos tenemos que felicitar por el aumento durante estos tres años de un 21,15 por ciento del empleo para las mujeres.

Somos también conscientes de las diferencias regionales en cuanto al empleo y el paro, y somos más que conscientes del porcentaje de temporalidad del empleo, aun teniendo en cuenta el esfuerzo realizado y el hecho de que desde la última reforma de 1997 éste haya aumentado en 1,3 puntos.

No se nos oculta todo eso, porque la política de empleo de este Gobierno sigue avanzando en el camino de buscar soluciones. Y es de agradecer, señor Ministro, que no nos conformemos con los datos, por muy positivos que éstos sean, porque el objetivo de todos —y hoy ha quedado claro tras escuchar las intervenciones producidas— es que haya más empleo, pero de mayor calidad, más seguro y más estable.

Ello significa que aún tenemos un trecho largo por recorrer, pero en estos momentos es posible pensar que estamos más cerca de conseguirlo. Coincidimos en que el nuevo empleo creado debe ser cada vez más estable, debe reducir las incertidumbres y, desde luego, debe aumentar la confianza de los trabajadores en sus propias capacidades. Y, más que el miedo a perder nuestro propio trabajo, nuestro gran temor debe ser no poder conseguir otro. Tenemos que lograr una sociedad capaz de generar más y mejores oportunidades de empleo. Por ello, señor Ministro, agradecemos su compromiso de que ésta sea una de las prioridades de esas futuras reformas del mercado de trabajo, pendientes, desde luego, de los resultados del diálogo social, que el Grupo Popular considera tan necesario porque la creación de empleo estable requiere el consenso al ser los intereses comunes a los empresarios, los sindicatos y el Gobierno.

Termino diciendo, señor Presidente, que la política de empleo en este país ha empezado a ser lo contrario de lo que se decía. Se han desterrado las grandes promesas incumplidas, la política de empleo de este Gobierno ha demostrado con hechos lo que se comprometió a hacer con palabras y, por ello, desde el Grupo Parlamentario Popular, señor Ministro, seguimos confiando.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senadora do Campo.

Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo.

El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Voy a intervenir con la máxima brevedad pero, al mismo tiempo, con toda la cortesía parlamentaria.

Ciertamente, no sólo tenemos que intentar que haya un crecimiento económico estable y traducirlo de manera eficiente al empleo sino que también esa estabilidad debe alcanzar y traducirse en nuestras empresas. Sólo con empresas sanas y solventes podremos pensar en exigir —como creo que hay que hacer— esa razonable proporción entre la estabilidad de las empresas y de los contratos.

De las intervenciones que se han hecho quiero quedarme con dos o tres aspectos y, en primer lugar, tengo que decir que no me gusta que se hable de desprotección en el caso de esos trabajadores que han pasado de la temporalidad a la estabilidad o que, directamente, han tenido un contrato estable. No creo que quepa hablar —como he oído— de 2.000.000 de españoles desprotegidos o, al menos, no creo que ése sea su propio concepto de la situación laboral que hoy tienen y de la situación humana o de las posibilidades de desarrollo de su proyecto vital; no creo que sea justo hablar de reducción de derechos en el caso de 2.000.000 de personas que no tenían ante sí otra expectativa que no fuese la temporalidad y que hoy, sin embargo, tienen una perspectiva razonable de estabilidad.

Los buenos momentos —como también decía el señor Rodríguez— no son para extasiarse ni para embelesarse viendo las cifras sino para aprovecharlos, y quizá España tiene la amarga experiencia de haber sido capaz de crecer más que otros países de su entorno cuando las cosas iban bien en términos económicos, pero de caer mucho más que el resto de países cuando las cosas se vuelven adversas. Ése es el otro gran concepto de estabilidad que subyace detrás de lo que son las relaciones de contratos y sería muy importante consolidar, en términos de estabilidad, el gran avance que en materia de empleo se ha producido en estos últimos años.

No creo que sea bueno minimizar ese acuerdo y sus efectos porque significa menospreciar lo que fue un enorme acto de responsabilidad de nuestros empresarios y sindicatos. He dicho varias veces que no entiendo muy bien el que tras encendidos elogios a las posiciones sindicales o empresariales venga una desautorización de los acuerdos que éstos alcanzan; me parece que ése no es un debate que pueda llegar a la ciudadanía porque creo que nuestros sindicatos y empresarios, en estos últimos años, han sabido estar a la altura de las circunstancias, y deseo y confío que lo sigan estando.

¿Qué se puede hacer? Fíjese el difícil equilibrio que supone que yo anuncie posiciones del Gobierno pensadas para un supuesto que no deseo y que reciba, inmediatamente, críticas acerbas de que es una injerencia y una intromisión. Este Gobierno tiene como referencia valiosa y positiva la estructura del año 1997, precisamente, y espero que también lo tengan nuestros sindicatos y nuestros empresarios; eso es lo que me oírás decir y espero que no sea especialmente una injerencia en ningún ámbito. Desde luego, también me parece lógico que se perciba que el Gobierno no está dispuesto a fiarlo todo a terceros, aunque sean tan absolutamente respetables —y hasta la fecha tan responsables— como nuestros agentes sociales.

Tanto el señor Aurrekoetxea como el señor Servià han coincidido —si me permiten un tono más distendido— en que muchas de estas materias no son de interruptor, de blanco o negro; son, más bien, materias de termostato, de intentar ir buscando ese punto razonable entre intereses que, a veces, son contrapuestos y, sobre todo, en materias que son extraordinariamente complejas. Con toda sinceridad, tengo que decir al señor Servià que veo muy difícil trasladar esto, porque trasladar una parte sería inadecuado por las grandes diferencias entre lo que es el modelo americano —no solamente productivo sino también cultural- y el modelo europeo. He dicho muchas veces —y lo repito hoy— que Europa no sólo tiene que ser capaz de producir sino también de mantener sus señas de identidad de un modelo de protección social, de cohesión social que creo que es lo que nos caracteriza. Por lo demás, cada vez hay menores diferencias.

Señor Lerma, antes le decía que puede haber, a priori, unas mayores simpatías o antipatías, pero este Gobierno está obligado a tratar a los agentes sociales, a nuestros empresarios y sindicatos con exactamente los mismos derechos y también a aceptar las expresiones —aunque sean críticas— que dirijan al Gobierno. Forman parte de la normalidad, no conozco ningún proceso de negociación que no tenga también sus momentos de tribulación, de discrepancia y dificultad. Ojalá todo esto sea superable e, insisto, nunca concederemos mayor o menor importancia a unas u otras declaraciones, admitiendo que todas son legítimas. Estamos intentando seguir, como es evidente, el mismo método del año 1997, lo cual debería llevarnos a ser más optimistas pero, insisto, la voluntad del Gobierno no es la única que está en juego.

Finalmente, quiero agradecer a la Senadora Do Campo sus palabras porque el apoyo que merezcamos de lo que usted representa, en este caso la mayoría parlamentaria que sin duda legitima la acción del Gobierno, es el aliento necesario para mantener las políticas. Agradezco por tanto que el Grupo Parlamentario Popular en el Senado también exprese su comprensión y su apoyo a las medidas que haya de adoptar este Gobierno en el marco del diálogo social, prolongando una etapa buena no sólo para un Gobierno sino fundamentalmente para la sociedad española. En cualquier caso, reitero mi agradecimiento por su comprensión y por la lectura de unas cifras que, repito, son mejorables pero que difícilmente podían imaginar muchos de los españoles hace escasamente cuatro años.

Como ya he dicho, son debates que nos deben mover a mejorar la calidad, la estabilidad, a evitar los siniestros y no son tal vez los debates de angustia, de simple resignación para intentar conseguir repartir mejor o peor el escaso empleo que entonces existía.

Muchísimas gracias. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

Señorías, se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.

Eran las quince horas.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Buenas tardes, señorías. Se reanuda la sesión.

— DE DON JOSÉ CARRACAO GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS DEFINICIONES DE LA POLÍTICA HIDRÁULICA DEL GOBIERNO EJEMPLIFICADA EN EL FRACASO DE AQUELLA QUE AFECTA A LA REGULACIÓN DEL RÍO GUADIARO Y DE SUS AFLUENTES, ASÍ COMO EN LOS PROYECTOS PREVISTOS PARA LA CUENCA CEDENTE EN LA LEY DEL TRASVASE DEL RÍO GUADIARO AL GUADALETE (6701000034).

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Interpelación de don José Carracao Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las definiciones de la política hidráulica del Gobierno ejemplificada en el fracaso de aquella que afecta a la regulación del río Guadiaro y de sus afluentes, así como en los proyectos previstos para la cuenca cedente en la Ley del Trasvase del río Guadiaro al Guadalete.

Para exponer la interpelación, tiene la palabra el Senador Carracao por tiempo de 15 minutos.

El señor CARRACAO GUTIÉRREZ: Señor Presidente, señor Ministro, señorías, el agua en nuestro país, por su escasez y necesidad, ha sido objeto siempre de litigios, problemáticas y normativas respecto a su regulación, posesión, uso, etcétera. El agua es un factor de producción pero también es un recurso natural, vertebrador del territorio y soporte esencial para la vida y preservación del medio ambiente.

En definitiva, señor Ministro, la política de agua es una política de Estado, y en las democracias sin adjetivos las políticas de Estado requieren para su aprobación y aceptación social el acuerdo mayoritario de las fuerzas políticas y no sólo una aritmética parlamentaria favorable. Los socialistas siempre lo hemos entendido así.

Señorías, nuestra Cámara no debe sustraerse a este debate, que se presenta intenso y apasionado. El Senado debe hacer valer su voz. ¿Por qué no? El Senado puede y debe propiciar grandes consensos. El Senado debe quitar pasión a este asunto y ayudar a darle racionalidad, ayudar a constituir un adecuado instrumento de directrices para la política de agua.

Señor Ministro, éste es un tema muy importante. No tema, no vamos a pagarles con la misma moneda, no vamos a boicotear un debate que es vital para la sostenibilidad de nuestro desarrollo y para el equilibrio del territorio. Los socialistas defendemos un desarrollo sostenible y equilibrado territorialmente para el conjunto de España, una política de agua que sea coherente con el Plan Nacional de Regadíos, con el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración, también con el Plan Director de Infraestructu-

ras y con las orientaciones y directivas europeas en materia de aguas y de desarrollo rural.

Señor Ministro, si no resolvemos adecuadamente este asunto se hipoteca el futuro, pero sí se impone sin un acuerdo básico se creará una dependencia conflictiva de unos territorios contra otros, que será una permanente debilidad para el desarrollo de las cuencas receptoras.

No crea su señoría que me agrada tener que hacer referencia a las desafortunadas manifestaciones de su colega, el Ministro de Agricultura y Pesca, y compañero Senador por la circunscripción provincial de Cádiz, don Miguel Arias Cañete, pero lo hago porque es mi deber denunciar que creo honestamente que reflejan el verdadero talante del Gobierno. No es disculpa el que se hayan hecho de forma privada, es precisamente por eso por lo que tienen su verdadero valor. En público se guardan ciertas formas; cuando se sabe que los micrófonos están abiertos se piensa más lo que se va a decir; es precisamente en privado cuando se dice lo que se siente y lo que se piensa, y ese sentir y ese pensar, que, según parece, se manifiesta también en el Consejo de Ministros, es contradictorio con el ofrecimiento de consenso que su señoría ha formulado. Pero no sólo es el presumible sentir y pensar sobre esta cuestión, sino los hechos objetivos de hacer campaña electoral, que son igualmente contradictorios con el ofrecimiento de consenso, que se formula con boquita de piñón, señor Ministro. La máxima es: a Dios rogando pero con el mazo dando.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos que es necesario alcanzar una solución que combine adecuadamente la racionalidad económica, las exigencias ambientales y los equilibrios entre territorios. Una adecuada política de agua precisa de un análisis de los problemas efectivos y de las técnicas que pueden ayudar a resolverlos. No hemos oído al Gobierno hacer ni una sola mención a la desalación. ¿Dónde están las desaladoras que prometieron en la cuenca de Cataluña y Almería? ¿Dónde la apuesta por la reutilización de las aguas residuales? ¿Dónde el evitar los regadíos ilegales? ¿Dónde las normas para un mejor uso? Y así podría continuar.

Señor Ministro, he observado algún gesto contrariado de algunos de mis compañeros Senadores cuando dije que no le íbamos a pagar con la misma moneda. Me permito recordar que el propio señor Aznar descalificaba cualquier propuesta del PSOE; en Andalucía, en la provincia de Cádiz, la actual Presidenta del Partido Popular y Senadora, doña Teófila Martínez, azuzaba a sus compañeros del Campo de Gibraltar para que se opusieran al trasvase del Guadiaro-Majaceite. Las cuencas de los ríos Guadiaro y Guadalete, aunque son vecinas y comparten divisoria en la zona de la cabecera, presentan unos balances hidrológicos muy diferentes: la del Guadiaro no tiene un aprovechamiento previo, la del Guadalete es claramente deficitaria para atender los riegos y abastecimientos establecidos en la zona occidental de la provincia de Cádiz. Esta situación motivó, coincidiendo con los períodos de sequía, imponer fuertes restricciones al consumo. Así, y a pesar de la prioridad de los usos de abastecimiento sobre los de riego, los casi 800.000 habitantes de

esa zona, que se abastecen del Guadalete, tuvieron que sufrir cortes en el suministro de entre ocho y dieciséis horas diarias. Para corregir esta situación, el entonces Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente proyectó las obras del trasvase Guadiaro-Majaceite. El objeto de ellas era hacer posible la aportación de una parte de los caudales excedentes del río Guadiaro a la cuenca del Guadalete.

Es, señor Ministro, respecto a las transferencias de volúmenes de agua de la cuenca del río Guadiaro a la cuenca del Guadalete, que, como su señoría sabe, fueron aprobadas por la Ley 17/1995, de 1 de julio, y del grado de cumplimiento de las obras, que se declararon de interés general, de lo que quisiera que su señoría me indicase con la expresión de los presupuestos cuándo tiene previsto el Gobierno ejecutar las obras de regulación del río Guadiaro y de sus afluentes, Genal y Hozgarganta, así como las relativas al saneamiento integral de los núcleos urbanos que vierten a este río, la mejora del abastecimiento a los núcleos de la zona norte del municipio de San Roque, al municipio de Jimena de la Frontera y sus núcleos de San Martín del Tesorillo y San Pablo de Buceite y el estudio hidrogeológico del acuífero de la desembocadura. Todos ellos son compromisos que, entre otros muchos, fueron divulgados en un proyecto que elaboró la Dirección General de Obras Hidráulicas, en representación del Gobierno, como contrapartida a la cuenca excedente. Éste es el folleto, señor Ministro; si su señoría quiere ojearlo, tendré mucho gusto en mostrárselo.

Seguramente, el señor Ministro coincidirá conmigo en que, después de los cinco años transcurridos desde que se aprobara esta Ley, los ciudadanos campogibraltareños esperaban algo mejor. Todos los estudios indican que en un horizonte no muy lejano esta comarca será deficitaria en agua, y, sin embargo, la capacidad de embalse y de reutilización no ha aumentado en un solo metro cúbico en los cinco años de gobierno del Partido Popular. Muchas son las promesas en períodos electorales, pero el tiempo ha pasado en vano.

Desde hace algunos años vengo insistiendo con distintas iniciativas parlamentarias para conocer los planes del Gobierno sobre el saneamiento y depuración del Campo de Gibraltar, el proyecto de construcción de las obras para el aprovechamiento del río Hozgarganta, los proyectos de abastecimiento a Jimena y los nuevos depósitos reguladores en la explotación del Campo de Gibraltar. ¿Quiere conocer las respuestas, señor Ministro? Respecto al aprovechamiento del río Hozgarganta, la respuesta que recibí el 3 de septiembre de 1997 fue literalmente la siguiente: En el año 1995 se contrató el expediente de la redacción del proyecto de construcción de las obras para el aprovechamiento del río Hozgarganta, habiéndose certificado hasta la fecha 120,7 millones de pesetas, y se procede a la evaluación del impacto ambiental. Respecto a los proyectos de abastecimiento a Jimena y los nuevos depósitos reguladores en la explotación del Campo de Gibraltar, en la respuesta del 2 de septiembre de 1996 decían: Se encuentran pendientes de aprobación técnica, siendo sus respectivos presupuestos 824 y 984 millones de pesetas. No voy a ago-

tar a sus señorías, porque de ese tenor son todas las demás respuestas.

Pero tengo que preguntarle algo, señor Ministro: ¿Cuándo va a merecer esta zona que se ejecuten esas obras que desde todas las instituciones se reclaman insistentemente y con justicia y que, además, es una obligación recogida en la Ley? No vaya a escudarse su señoría tras los programas ambientales. En el caso de la regulación del Hozgarganta, los socialistas tampoco queremos que se haga a cualquier precio, pero existen alternativas y debe invertirse lo necesario para que en los períodos de estío los habitantes y agricultores que necesitan ese agua puedan disponer de ella. Su señoría sabe que cuando hay voluntad política se buscan otros sistemas y alternativas. No hay por qué construir una macropresa que tenga un impacto ambiental fuerte. Hay sistemas de minipresas, hay otras muchas alternativas que el Gobierno debería haber estudiado en profundidad y haberlas ofrecido ya a esa cuenca cedente como contrapartida a los volúmenes de agua que se cedieron y a los compromisos que adquirió del Gobierno. Su señoría bien sabe que los compromisos que adquiere un Gobierno los tiene que hacer suyos también un Gobierno posterior.

El señor Secretario de Estado de Aguas, don Benigno Blanco, en una comparecencia a petición mía dijo que las dificultades para obtener la declaración ambiental se podían superar, que había que intentar buscar el consenso social, que se estaba trabajando para que Hozgarganta fuese posible. Señor Ministro, espero de su amabilidad que pueda darnos respuestas a este interpelante y a los ciudadanos del Campo de Gibraltar sobre estas cuestiones que le acabo de formular.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Carracao.

Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente.

El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, señor Carracao, en cuanto al principio de su intervención, me encantaría poder entrar y, además, estoy dispuesto, en un debate con usted sobre el borrador de proyecto del Plan Hidrológico Nacional. En cualquier caso, quiero expresarle una vez más nuestra voluntad de poder llegar al máximo consenso posible en un proyecto de estas características, que ha presentado el Gobierno en estos momentos.

Si usted me permite, aunque probablemente no sea el objeto de su interpelación, como usted ha hecho referencia a ello, sí quiero aprovechar la ocasión para decirle que los gestos y la realidad de los hechos a los que usted ha aludido demuestran precisamente cuál es esa voluntad de diálogo, de consenso, y el espíritu que en estos momentos ha llevado al Gobierno a presentar un borrador, a no aprobar un proyecto definitivo bajo ningún concepto y a querer abrir, precisamente, ese gran debate social en el seno del

Consejo Nacional del Agua, desde el diálogo con los partidos políticos, con los gobiernos de las distintas Comunidades Autónomas y con los usuarios y afectados por un proyecto de estas características. En cualquier caso y a grandes rasgos, sin renunciar a entrar con posterioridad en esta cuestión, debo decirle que estoy absolutamente de acuerdo con la mayor parte de los planteamientos que ha hecho al inicio de su intervención. Creo, efectivamente, que este debe ser un proyecto de Estado, que debemos evitar el enfrentamiento de unos territorios contra otros, y que todos tenemos una responsabilidad importante en este cometido.

Respecto a algunas cuestiones puntuales que usted ha tratado y que, probablemente, tienen relación con las infraestructuras hidráulicas propuestas en el propio plan, creo que están contempladas en este borrador. Estoy seguro que usted se ha leído sus 1.500 páginas, a pesar de que por alguna de sus afirmaciones pueda tener alguna duda. En cualquier caso, recibiré las aportaciones que usted crea que no están incluidas en el plan respecto a determinadas obras que se puedan proponer y estudiar en este borrador de proyecto que se ha presentado. Insisto, créame, en que nuestra voluntad es la de aprobar un plan bueno para todos, que pueda resolver un problema que, como usted muy bien ha dicho, tenemos todos en España desde hace muchos años y que, desgraciadamente, no hemos sido capaces de resolver y hoy la sociedad nos exige resolver.

En cuanto al contenido estricto de su interpelación, efectivamente he de recordarle que, como usted muy bien ha dicho, la Ley de 1995, de 1 de julio, sobre Transferencia de Volúmenes de Agua de la cuenca del río Guadiaro a la cuenca del río Guadalete, además de autorizar la transferencia y encomendar a la Confederación Hidrográfica del Sur el control y explotación de la obra de derivación en el río Guadiaro, determinó la necesidad de llevar a cabo un conjunto de obras de regulación, una vez que se hubieran realizado efectivamente estas obras de trasvase.

En el artículo 2 se determina que una parte del canon que se establecerá con ese trasvase se destinará a financiar las obras de ejecución del denominado Plan de Infraestructuras, en el marco de lo que tiene que ser el Plan Hidrológico de la Cuenca del Sur. Y en el artículo 3 se remite a la Comisión de Explotación del trasvase lo que es la supervisión y posterior seguimiento de este plan; una Comisión de Explotación que yo creo que es muy importante y a la que nosotros hemos intentado dar todo el protagonismo en este proyecto.

El desarrollo del artículo 3 se produce con el Real Decreto 1599, de 1999, de 15 de octubre, mediante el cual se crea y se regula la Comisión de Explotación del trasvase Guadiaro-Guadalete, y se le encomendaba ejecutar la coordinación y el seguimiento, insisto, de este Plan de Infraestructuras, elaborado por la Confederación en el marco de lo que es el Plan Hidrológico de Cuenca. Y la citada Comisión celebró su reunión constituyente el día 9 de marzo de 2000. En esta reunión constituyente se distribuyeron los trabajos para el cálculo del canon del trasvase, elemento fundamental y que usted creo que ha omitido mencionar en su interpelación; la determinación del porcentaje del mismo para financiar el Plan de Infraestructuras Hidráulicas.

cas, la determinación de consumos y pérdidas para aplicar los coeficientes de mayoración, etcétera.

En una posterior reunión, celebrada el 20 de octubre pasado, se fijan las normas definitivas de la explotación del trasvase; se hace operativo administrativamente hablando el mismo y, por tanto, la puesta en marcha de esta obra de tanta importancia para los usuarios de la zona y, además, se hace una propuesta de canon de trasvase a abonar por los usuarios, presentando la Confederación una propuesta de obras en la cuenca del Guadiaro. Yo quiero destacar que en la determinación de las normas de explotación se eleva el caudal mínimo del Guadiaro por debajo del cual no se podrá trasvasar de 5 a 6 metros cúbicos/segundo. Yo creo que es una medida que al menos deberíamos aquí resaltar, y también se aprueba el porcentaje del canon que se destinará a financiar este Plan de Infraestructuras del Guadiaro. Se fijó este porcentaje en el 80 por ciento de la componente c) del canon, tal como viene determinado en la Ley del Trasvase.

En estos momentos podemos decir con satisfacción que se ha puesto en marcha la materialización de estas obras, su culminación y por tanto su utilidad para los ciudadanos beneficiados, además de lo que tiene que ser este plan de obras de compensación, en definitiva, para los cedentes del trasvase, tal como se ha hecho en los trasvases ya realizados en otras cuencas y en los propuestos para el futuro.

Después de este período en que se han ido llevando a cabo estos estudios y trabajos necesarios, con la puesta en marcha de la Comisión de Explotación se ha iniciado este proceso de diálogo y consenso con los usuarios para la definición y priorización de estas obras compensatorias. En estos momentos se están manteniendo las reuniones con los distintos usuarios para consensuar las actuaciones necesarias y elevar una propuesta a la Comisión de Explotación, que para nosotros es esencial que sea la Comisión quien, dentro de un consenso y de un diálogo necesarios, pueda establecer esta planificación de actuaciones y naturalmente su financiación.

Debo decirle que dentro de las obras que se le han planteado a esta Comisión de Explotación y a las que usted ha hecho referencia, efectivamente se encuentran las que usted conoce y ha mencionado, el proyecto de trasvase Hozgarganta-Guadarranque, el decrecimiento de la presa del Guadarranque —obras ambas que no forman parte todavía de las obras declaradas de interés general en la Ley de Trasvase aunque sí están previstas en el proyecto del Plan Hidrológico Nacional y en el Plan Hidrológico de Cuenca—, proyectos de mejora de infraestructura hidráulica como son la mejora de los canales de riego, la impulsión, depósito, regulación y conducción de agua bruta para riego urbano de la zona norte de San Roque y proyecto de las conducciones de riego para la zona media y baja del río Guadiaro.

En definitiva, todo ello hace referencia, insisto, a un proyecto que por fin hemos sido capaces de poner en marcha, un proyecto que representa una obra muy importante para la zona y para los ciudadanos beneficiarios de esta obra. Y quiero insistirle, señoría, en el hecho de que la reunión de la Comisión del día 20 ha podido no sólo poner en

marcha este trasvase y tomar las decisiones necesarias para ello, sino establecer compromisos de consenso y de coordinación entre los afectados, y desde el Ministerio de Medio Ambiente, que es la única institución que ha propuesto llevar a cabo estas obras de compensación y de regulación que tienen que beneficiar al resto de los usuarios y que queremos llevar de una forma coordinada y consensuada con los afectados dentro de lo que establece la Ley.

Muchísimas gracias. (*Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor Ministro.

¿Desea utilizar su turno el Senador interpelante? (*Pausa.*)

Pasamos al turno de portavoces.

¿Desea hacer uso de la palabra el representante del Grupo Parlamentario Mixto? (*Pausa.*)

¿Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (*Pausa.*)

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (*Pausa.*)

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra el Senador Ganyet Solé.

El señor GANYET SOLÉ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, el Senador Carracao, en la formulación de la interpelación demuestra conocer a fondo el área definida por el río Guadiaro y sus afluentes Genal y Hozgarganta, su geografía, sus gentes y los graves problemas de suministro de agua a la población del Campo de Gibraltar.

De ese conocimiento se deduce la necesidad imperiosa de ejecutar las obras de regulación del río Guadiaro, así como todas las contempladas para la cuenca cedente en la Ley de Trasvase Guadiaro-Majaceite.

Compartimos con su señoría, como todos los presentes en el hemicycle, la descripción que hace de una buena política hidráulica: racionalidad económica, exigencias ambientales y equilibrio entre territorios. Nos ha explicado las restricciones importantes de suministro de agua, de hasta 16 y 17 horas, a miles de personas de la zona del Campo de Gibraltar en los últimos años. Nos preocupan, asimismo, los incumplimientos de la Ley de 1995 acerca de las obras a ejecutar a que ha hecho mención el Senador Carracao. Deben agradecerse también las apelaciones al diálogo sobre el Plan Hidrológico Nacional que ha hecho el señor Ministro en esta misma sesión. Pero las declaraciones de buena voluntad de los miembros del Gobierno obtienen su máxima credibilidad cuando encuentran acomodo en las partidas presupuestarias. No parece ser el caso de los Presupuestos del ejercicio de 2001 y tampoco hay concreción acerca de cuáles de los siguientes ejercicios van a contener inversiones reales.

El Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés entiende necesarias las obras citadas de regulación y analizará con interés los términos de la moción, si es que la presenta el Senador Carracao.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Ganyet.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el Senador Servià.

El señor SERVIÀ I COSTA: Señor Presidente, señor Ministro, gracias.

He de manifestar mi ignorancia sobre los problemas concretos y agradecer al Senador Carracao la exposición detallada del tema, con lo cual entendemos que hay un problema histórico en esta región, que se han programado soluciones que no se han llevado a cabo y que, por lo tanto, se deben aplicar.

Si yo hubiera hablado después del señor Carracao y antes del señor Ministro, le habría dicho: «Senyor Ministre, estic desencisat.» «Desencisat» significa estar desmoralizado, desmotivado, incluso desencantado. Yo soy nuevo en esta Cámara y lo mejor que me ha pasado hasta ahora es descubrir un día que mi Grupo me daba la oportunidad de participar en los trabajos referentes al Plan Hidrológico Nacional, porque entendí que era una de las cosas más importantes que podían haber pasado por aquí en muchos años.

Si el señor Carracao expone un problema grande y da la impresión de que el Plan Hidrológico Nacional no contempla el problema ni la solución, evidentemente «desencisat». Después de hablar el señor Ministro, y creyéndome todo lo que ha dicho, creo que simplemente lo que hay que hacer es que entre los dos se pongan de acuerdo en que este tema tiene una solución más o menos rápida, más o menos clara, más o menos inmediata. Quiero decir que quedamos enteramente interesados por la interpelación y por la solución final del problema para que cuando yo vaya una vez más a visitar los magníficos pueblos blancos me fije en sus ríos y vea que los problemas están solucionados.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Servià.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Senador Carracao.

El señor CARRACAO GUTIÉRREZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, señorías, en primer lugar quiero agradecer las intervenciones de los Senadores del Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés y del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El interés que han mostrado por la interpelación es de agradecer.

Señor Ministro, puedo creer en su señoría, pero si es sólo un borrador el plan hidrológico nacional, ¿por qué ese interés en crispar a la sociedad? No es entendible. No me haga su señoría tener que repetir frases malsonantes y groseras en este hemiciclo. Mis compañeras Senadoras están preocupadas porque no van a poder participar en este debate, ya que si es una cuestión que se va a llevar a efecto apoyándola en las partes nobles del varón, estamos omitiendo a un 50 por ciento de la sociedad española. La mu-

jer no va a poder participar en este debate por razones obvias.

Permítame el tono irónico y de humor, señor Ministro, porque desde nuestro Grupo de verdad que queremos quitarle pasión a esta cuestión y debatir. Queremos un plan hidrológico nacional, pero que contemple el diseño de una nueva política del agua, una política solidaria orientada a la gestión de la demanda; una política del agua en la que la planificación hidrológica sea una herramienta fundamental que garantice, entre otras cosas, su control público. Ese control es parte inexorable de nuestra posición, señor Ministro.

Yo creo que rectificar es de sabios. Su señoría debe reconsiderar su propuesta y comenzar una negociación seria con todas las fuerzas políticas y con las Comunidades Autónomas para que de verdad España cuente con un plan hidrológico que esté acorde con las políticas de agua para el siglo XXI.

Es un clamor ya, señor Ministro, y no sólo desde posiciones que puedan calificarse contradictoria o negativamente desde presupuestos egoístas. Aragón se opone a este remedo de plan hidrológico nacional. Aragón se ha adelantado, pero ya desde muchos puntos de España se está oyendo ese clamor de que es un mal borrador, señor Ministro, porque no trata los verdaderos problemas de la forma que es exigible en un documento que se formula para el siglo XXI.

Su señoría ha aprovechado su turno para exponer lo que fue el debate de la Ley del Trasvase del Guadiaro-Majaceite. Fui ponente en aquella ley, señor Ministro, conozco todos sus detalles, sé los esfuerzos que tuvimos que hacer para conseguir el consenso en esta Cámara, y tengo que elogiar la labor del Senador Clemente en aquella ocasión para conseguir el consenso y que esta ley fuese aceptada prácticamente por unanimidad de las Senadoras y Senadores. Conozco bien todos sus extremos, pero de lo que su señoría no me ha hablado en absoluto, y espero que lo haga ahora, en el segundo turno, es del cumplimiento de esa ley, porque han necesitado toda una legislatura para poner en marcha una obra total y absolutamente ejecutada durante el período de gobierno socialista. Ustedes se encontraron con la obra absolutamente ejecutada, pero no han sido capaces de trasvasar ni una sola gota de agua hasta pasada una legislatura. En ese caso en el que se encuentran ustedes con una obra absolutamente ejecutada, que necesitan una legislatura para ponerla en funcionamiento, nos preguntamos cuántas legislaturas serán necesarias para hacer cumplir las obligaciones de esa ley, y eso descorazona, señor Ministro.

Vuelvo a insistir una vez más: reconocemos problemas ambientales en la ejecución de las obras para la regulación del río Hozgarganta, pero quisiera saber, el Campo de Gibraltar quiere saber, qué alternativas ofrece el Gobierno de España a ese problema ambiental del Hozgarganta, si es que ofrece alguna alternativa real a la escasez de agua. Hoy no lo hemos oído todavía, pero no pierdo...

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Carracao, le ruego que vaya concluyendo.

El señor CARRACAO GUTIÉRREZ: Termino, señor Presidente.

Sin embargo, no pierdo la esperanza, señor Ministro, de oírle decir qué piensa de verdad el Gobierno respecto al cumplimiento de estas obligaciones.

Gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Carracao.

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señor Presidente.

Señoría, le voy a contestar brevemente.

Quiero insistir en el hecho de que, con respecto al sentido estricto de la interpelación, he intentado explicar lo que se ha llevado a cabo hasta este momento, que son las obras del trasvase, y dejar muy claro aquí, delante de sus señorías, el hecho de que este Gobierno ha realizado el trasvase que la propia ley establecía, y hoy el trasvase está vigente gracias, entre otras cosas, a que hemos conseguido poner dentro de la Comisión de Explotación las normas necesarias para llevarlo adelante.

Es posible, señoría, que cuando usted formuló esta interpelación no estuviera al corriente de esta reunión que se celebró el 20 de octubre. Yo lo comprendo y lo respeto, pero es que en esta reunión que celebra la Comisión de Explotación el 20 de octubre se establece un paso fundamental para esta obra de la que hoy se está tratando aquí. ¿Por qué? Porque en esta Comisión están representadas todas las administraciones, no sólo el Ministerio de Medio Ambiente, sino también la Junta de Andalucía y todos los afectados. Nuestra intención, tal como establece la ley, es acometer este tipo de actuaciones de forma coordinada con las administraciones citadas y con los afectados. ¿Y qué es lo que hicimos en esa reunión del día 20 de octubre? Concretar lo que la ley establece; por tanto, el trasvase ya está operativo y hoy ya se puede realizar.

El trasvase, que era el objeto principal de esta ley, es hoy una realidad gracias a la gestión que ha llevado a cabo el Ministerio, y el que actualmente no se haya producido se debe a dos razones. En primer lugar, a que el río Majaceite tiene más agua de la necesaria para solicitar un trasvase. En segundo lugar, a que, aunque se pidiera el trasvase para dicho río, en estos momentos el río Guadiaro no tiene el caudal mínimo necesario, que como medida medioambiental prudente en esa Comisión elevamos de cinco a seis metros cúbicos por segundo —medida a la que insisto que usted no ha hecho referencia, aunque estoy convencido de que comparte—. Como digo, hemos incrementado el caudal mínimo necesario para hacer el trasvase, el cual repito que está operativo, y del que los ciudadanos de la zona afectada ya se pueden beneficiar.

Por otro lado, la ley establece que las obras compensatorias para realizar este trasvase se financiarán en parte con el canon que se establezca en esa comisión de explotación y que se recaude del trasvase. ¿Y qué es lo que sucede? Que en la reunión de la comisión de explotación del 20 de octubre ha sido el Ministerio de Medio Ambiente, y sólo

éste, el que ha propuesto, para su consenso y coordinación, las obras necesarias para completar la regulación de las cuencas cedentes y, por tanto, realizar las obras compensatorias. Repito que dichas obras se tienen que financiar en parte con el canon que se cobre y, sobre todo, con el acuerdo de la comisión de explotación.

Así pues, dicha comisión recibió el listado de esas obras, en definitiva, la propuesta del Ministerio —a las que usted ha hecho referencia en parte—, y es ella la que tiene que aprobar cuáles son las obras a realizar, en qué parte se financiarán por el canon del trasvase y en qué parte las financiará el Ministerio de Medio Ambiente, lo que no le quepa duda que éste va a hacer. Y como gesto, el Ministerio de Medio Ambiente ha introducido dos obras nuevas de regulación en el proyecto del Plan hidrológico nacional que no fueron declaradas de interés general por la Ley de 1995, para hacerlo ahora y financiarlas íntegramente con cargo a los fondos del Ministerio dentro del proyecto del citado Plan.

Insisto en que existe la voluntad, de que en el seno de la comisión de explotación podamos ponernos de acuerdo con la Junta de Andalucía. Ésta es la propuesta que le hemos hecho, detallando cuáles serán las obras y cómo se van a ejecutar. En cualquier caso, repito una vez más que, afortunadamente, el trasvase hoy está operativo y es ya una realidad.

En cuanto a la segunda parte de su intervención, muy importante, relativa al Plan hidrológico nacional, me parece políticamente comprensible que su señoría haya subido a la tribuna para sacar a colación, con el consiguiente rendimiento, unas declaraciones que, efectivamente, han sido famosas durante estos días. (*El Senador Carracao Gutiérrez hace signos de sorpresa.*) Pero, señoría, sin ánimo de ofenderle, permítame que le diga que me parece injusto que usted quiera poner en tela de juicio lo que ha hecho y hace el Gobierno desde que ha presentado ese borrador del Plan hidrológico nacional y que pida que se lleve a cabo una negociación seria.

Señoría, el Gobierno no ha aprobado un proyecto, sino que ha presentado un borrador en el Consejo Nacional del Agua. Por tanto, a no ser que usted opine que el citado Consejo no es un órgano serio, no entiendo su referencia. Incluso el Consejo Nacional del Agua ha creado una comisión específica permanente formada por todas las Comunidades Autónomas, con las que hoy estamos manteniendo negociaciones —siguiendo indicaciones de su propio Partido en las reuniones que con éste tenemos— tanto en el seno del Consejo Nacional del Agua como fuera de éste. Ocurre exactamente lo mismo con los más de noventa representantes del Consejo Nacional del Agua que representan a sindicatos, a agricultores, a los usuarios, a los regantes, a expertos científicos y, en definitiva, a la sociedad.

Puede que usted no esté de acuerdo con este borrador y, por ello, le sigo emplazando para que me presente una alternativa, me diga cómo se pueden resolver estos problemas, dónde cree usted que falla este plan y que se ha de mejorar o rectificar. Simplemente, le pido eso, que no creo que sea demasiado pero, en cualquier caso, espero que res-

pete, la voluntad que tiene el Gobierno de España de abrir este gran debate social, de mantener estas vías de diálogo dentro del Consejo Nacional del Agua, con las Comunidades Autónomas y, fuera, con los propios partidos políticos e incluso con los Senadores de esta Cámara, con los que, con respecto al proyecto del Plan hidrológico nacional, he tenido ocasión de reunirme.

En cualquier caso, espero que estas palabras sean, insisto, fruto de una rentabilidad política que entiendo y que puedo comprender, más que de un pensamiento serio y, sobre todo, de poner en tela de juicio los gestos porque la realidad de los hechos habla por sí sola de la actitud del Gobierno, de voluntad de diálogo, de voluntad de consenso y de compartir la mayoría de las cuestiones que usted nos plantea basadas en la solidaridad y en las medidas de gestión de demanda porque, como estoy seguro de que usted se habrá leído las 1.500 páginas, habrá visto dónde están estas actuaciones y podrá respetar este proceso y presentar las alternativas que estime oportunas, porque ésta es nuestra voluntad.

Muchas gracias. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor Ministro de Medio Ambiente.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora González Rodríguez.

La señora GONZÁLEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, quiero agradecer al señor Ministro su amplia y clara exposición.

Señor Carracao, con sus continuas alusiones y chanzas no veo ninguna intención de diálogo. Como comprenderá —es lógico— no podemos compartir su enfoque de que es un fracaso porque nos parece algo incongruente.

Estamos hablando de algo que no es nada nuevo. En tiempos, el autor del primer Plan hidrológico, Lorenzo Pardo, ya anunciaba esa carencia estructural y creo que el Gobierno socialista, en su tiempo, tuvo que conocerla también. Durante estos años se han acentuado mucho más porque en nuestra tierra hay escasez de lluvia, los canales están muy deteriorados y, por supuesto, ha habido una pésima —e insisto en lo de pésima— regulación de las cuencas y se ha perdido mucha agua en el mar.

El proyecto del Plan hidrológico nacional, como usted supondrá, lo entendemos como una importante visión de la política hidráulica de España, con un enfoque riguroso en materia de trasvases, regulación de ríos y cauces, modernización de regadíos, construcciones de embalses y pantanos, con garantías —y eso es muy importante— de mantenimiento. Es un proyecto, y así lo entendemos, de futuro para nuestra región y para las demás regiones de España. Cuenta con un presupuesto de tres billones de pesetas, una importante partida para Andalucía de 700.000 millones de pesetas y, para la provincia de Cádiz, de 42.000 millones de pesetas, para poner en marcha 18 proyectos que nos son muy necesarios. Como decimos en nuestra tierra, por fin se

ha abierto el grifo de la inversión que durante 15 años mantuvimos cerrado.

Su señoría conoce la Ley —porque ha hecho referencia a ella— y el Real Decreto de 15 de octubre por el que se crea y se regula una comisión de explotación del Guadiaro, sus afluentes y cuencas cedentes, como ha dicho el señor Ministro en su exposición, en la que ha sido amplio y claro. Usted sabe que parte de esa fecha, 15 de octubre, como también conoce que hemos tenido bastantes problemas para que esta Comisión se terminara de formar porque había una amplia participación, que es lo que se pretende. Por fin, el 9 de marzo se constituye, lo que ha supuesto un paso definitivo puesto que beneficia a 15 municipios de la provincia y a más de 8.000 personas.

El trasvase al que estoy haciendo referencia es el más importante que se ha hecho en Andalucía, antes y ahora, y esto hay que tenerlo en cuenta. Ha tenido un coste aproximado de 8.932 millones de pesetas y ya sólo nos queda esperar —y confiemos en que no suceda lo mismo que con la Comisión— que se pongan de acuerdo con la Mancomunidad de municipios y se sienten a hablar; esto es algo que el Partido Popular viene repitiendo en la provincia de Cádiz y esperamos que se produzca lo antes posible.

Como bien se ha dicho, el 20 de octubre volvió a reunirse la citada Comisión, dando el empuje más importante para la materialización de una serie de obras encaminadas a la regulación de la cuenca del Guadiaro, y determinándose un conjunto de medidas para unos afluentes como el que usted ha citado, el Hozgarganta, para mejorar el abastecimiento de riego de su propia cuenca y la del Campo de Gibraltar, como ya ha explicado el señor Ministro.

En cuanto a la regulación del otro afluente, el Genal, usted sabe que se planificó la construcción de una presa y conoce mejor que nadie que ha habido muchas dificultades para que pudiera ser una realidad; quizá habrían primado los intereses de algún partido político, por supuesto, no el nuestro. No obstante, las actuaciones de recogida en el Plan hidrológico de la cuenca, por tanto, un plan hidrológico nacional, están recogidas y disponen de presupuesto.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senadora González Rodríguez, le ruego vaya concluyendo.

La señora GONZÁLEZ RODRÍGUEZ: El señor Ministro ha realizado una gran exposición en la que no me puedo detener más. Tengo que decirle que nuestras actuaciones no son virtuales, ni mucho menos; prueba de ello es que hace poco el señor Ministro inauguró una presa en nuestra tierra para el arreglo de los cauces. Podemos decir con orgullo y con la boca bien grande que este Gobierno apuesta fuerte y firmemente por la provincia de Cádiz, y como gaditana espero y deseo que alguna vez por fin lo haga la Junta de Andalucía. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

Muchas gracias, señoría.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senadora González Rodríguez.

— DE DON ANXO MANUEL QUINTANA GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS MEDIDAS DISEÑADAS POR EL GOBIERNO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES (670/000031).

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): A continuación, pasamos a la interpelación del excelentísimo señor don Anxo Manuel Quintana González, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas diseñadas por el Gobierno para dar cumplimiento al Plan de Fomento de las Energías Renovables.

Para exponer la interpelación, tiene la palabra el Senador interpelante, señor Quintana, por un tiempo de quince minutos.

El señor QUINTANA GONZÁLEZ: Gracias, señor Presidente.

Señora Ministra, señorías, nuestra intención con la presentación de esta interpelación es conocer las previsiones del Gobierno para el cumplimiento del Plan de Fomento de Energías Renovables y nominalmente en el apartado referido a biomasa. Ésa es nuestra intención, como también lo es que sea el primer paso de una colaboración franca a la que nos brindamos como interesados en un tema de importancia capital, y así lo intentaremos explicar en nuestra breve intervención.

Es de sobra conocido que la Comisión Europea, en su Libro Blanco de las Energías Renovables, asumió el compromiso de que en el año 2010 las energías renovables deben representar el 12 por ciento de la energía primaria que se consumirá en el conjunto de la Unión Europea y, por tanto, en cada uno de sus países miembros. Este ambicioso objetivo se plasmó en la aprobación por parte del Gobierno en el año 1999 del Plan de Fomento de Energías Renovables, en el que se contemplan todas las posibilidades y versiones de este tipo de energía, incluidas la minihidráulica, la eólica, la biomasa, el biogas, la solar o la eufemísticamente llamada valorización de residuos sólidos.

Posteriormente, y sin que reste importancia al Plan, la Comisión Europea, a través de la Dirección General de Energía y por boca de su Comisaria, propuso en el año 2000 una revisión que significaría que la electricidad fuera el vector energético preferente en esa participación porcentual y que en el promedio de la Unión Europea se debía de conseguir que el 22 por ciento de la electricidad fuera de origen renovable. Asimismo, se incluían la media y la gran hidráulica dentro de las energías renovables y en el caso español se proponía que el 29 por ciento de la electricidad fuera de origen renovable.

Debemos tener en cuenta que España consume 115 millones de toneladas equivalentes de petróleo —TEP— como energía primaria. Un tercio se dirige a la producción de electricidad y dos tercios se consumen como combustible de uso directo, siendo uno de ellos los combustibles de automoción.

El Plan de Fomento de Energías Renovables significa la propuesta de un aumento considerable en todas las posi-

lidades de energía renovable antes descritas. Pasaríamos así, según las previsiones de dicho Plan, de la actual producción de 18.856 megavatios por este tipo de energía a una de 30.355 en el año 2010. La diferencia en cuanto a prospección se haría aún mucho más amplia si hablamos en términos de kilotep, ya que pasaríamos de los 3.608 actuales a los 16.639 previstos en el Plan de Fomento para el año 2010. Y dentro de este aumento considerable propuesto en dicho Plan para todas las energías renovables, tiene una especial mención el incremento propuesto para la biomasa. Según recoge el Plan —y cito literalmente—, por su contribución global al consumo de energía primaria el mayor crecimiento previsto es el de la biomasa, con un objetivo de incremento de 6 millones de TEP, de los cuales 0,9 corresponden a usos térmicos en los sectores de consumo final y 5,1 destinados a la generación de electricidad, multiplicando, por tanto, por 30 la actual aportación. Dicha electricidad está pensada para su vertido a la red en lo que constituye el fuerte lanzamiento de una actividad que hoy tiene una presencia puntual, ya que buena parte de la actual generación de electricidad con biomasa corresponde en la actualidad a autogeneradores.

Pues bien, objetivo ambicioso que nosotros compartimos, pero que dudamos que en las actuales circunstancias pueda ser posible. De ahí nuestra interpelación para conocer la política a seguir por el Ministerio para el cumplimiento de los objetivos, que ya conocemos, e intentar disipar nuestras dudas.

En cualquier caso, para poder avanzar realmente y para que los objetivos fueran posibles de cumplir, sería importante que partiéramos de la base de entendimiento de la biomasa como una energía renovable especial, con unas características que la diferencian de todas las demás y que, por tanto, hace necesario una especial política de atención.

Se sabe ya que las plantas de generación eléctrica con biomasa —así lo constatamos en la práctica diaria— deben jugar con dos factores fundamentales para sus sostenibilidad: por un lado, que la central tenga la suficiente generación eléctrica para que pueda ser viable —y ahí nos colocaríamos siempre como mínimo en los 5.000, 7.000 kilovatios hora—; por otro, tener en cuenta que si bien ése puede ser el índice de rentabilidad, tal dimensión supone un consumo de biomasa a veces difícil de encontrar en el entorno, por lo cual ese segundo vector viene normalmente a reducir las previsiones iniciales de cualquier proyecto.

Si observamos las concreciones de los proyectos que hasta ahora se han llevado a cabo, nos daremos cuenta de que la obtención de biomasa —y por lo tanto la obtención de combustible— viene a jugar un papel capital en la concreción final de los proyectos. Ello es porque el precio que en este momento está estipulado para el pago de kilovatio producido hace difícil que la cuenta de resultados nos pueda cuadrar con un mínimo de sostenibilidad.

Si ponemos como ejemplo una central de 7 megavatios por término medio —que serían 6 megavatios netos una vez producido el autoconsumo—, tendríamos una inversión específica no inferior a 200.000 pesetas por kilovatio instalado —siendo optimistas, la práctica está demostrando que en muchos casos nos vamos hasta las 270.000

pesetas por kilovatio instalado—, y ese coste de 2,5 pesetas kilovatio/hora significaría el gasto que habría que hacer para la devolución de los préstamos necesarios para la puesta en funcionamiento de la planta. Una peseta por kilovatio/hora producido se consumiría en el personal de operación necesario para que la planta funcione, y una peseta por kilovatio/hora como mínimo sería suficiente para el mantenimiento de la instalación. Sumados estos parámetros, nos encontraríamos con un costo nunca inferior a 4,5 pesetas por kilovatio/hora, en el mejor de los casos. Se está demostrando que muchas veces los vectores de mantenimiento, personal y amortización de créditos llega hasta las 7 pesetas kilovatio/hora.

Pues bien, con esos costos el ingreso por producción de energía eléctrica al actual precio del kilovatio para este tipo de instalaciones no va a superar nunca las 10 pesetas kilovatio/hora. Por lo tanto, nos queda un índice muy pequeño —de tres pesetas kilovatio/hora— que podríamos destinar al pago de la biomasa necesaria para utilizar como combustible en esa planta, lo cual hace muchas veces imposible la utilización de toda la gama de biomasa que el propio Plan de Fomento establece para este tipo de centrales, a saber: residuos forestales, residuos agrícolas leñosos, residuos agrícolas herbáceos, residuos industriales forestales, residuos industriales agrícolas o cultivos energéticos.

Ésta está siendo una de las causas fundamentales para que no se concreten proyectos de instalación de biomasa y, por lo tanto, a nuestro juicio, puede poner en peligro la concreción de los objetivos marcados en el Plan de Fomento de Energías Renovables, plan que, en el caso de la biomasa, pretende que en el año 2010 estén instalados en todo el Estado 1.987 megavatios de plantas productoras de energía a través de la biomasa, en lugar de los 189 que en este momento disponemos. Por lo tanto, habría que hacer una multiplicación por 30, que estimamos no se producirá si no hay una política específica que modifique la actual situación. Y creemos que esa política específica no puede ser únicamente referida a la prima pagada por cada kilovatio/hora producido, sino que el aumento de esa prima tiene que ir acompañado de una política horizontal, una política que no se concreta sólo en el Ministerio que usted dirige. Cuando se presentó esta interpelación discutimos, dialogamos en algún momento si debía ser contestada por el Ministro de Economía o por la Ministra de Ciencia y Tecnología. Yo me mostré partidario de que cualquier miembro del Gobierno lo pudiera hacer y me considero honrado con que sea usted la que hoy pueda debatir conmigo, pero, en cualquier caso, me manifesté en ese sentido porque creo que el tema que ahora tratamos más propio que del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que lo es, es específico, sobre todo por lo que se refiere a soluciones, de una política horizontal que tendría que abarcar a diferentes Ministerios, y a este respecto, su compañero del Departamento de Medio Ambiente debería jugar un papel importantísimo en esta política que ahora intentamos diseñar.

Si queremos obtener biomasa de residuos forestales, si queremos obtener biomasa de la limpieza de los montes, sólo podremos hacerlo con una política conjunta que lo permita y con la modificación del actual marco de pago de

esta energía. Y haré una pequeña comparación. Hasta el año 1998 el pago de este tipo de energías se regulaba por el Real Decreto 2366/1994. A partir del año 1998 el pago de la energía producida en centrales de biomasa se regula por el Real Decreto de 11 de junio, que significó un empeoramiento de la situación con respecto al marco legal del año 1994. Entre otras cosas, hay que decir que el Real Decreto de 11 de junio de 1998 fija que las centrales de biomasa queden incluidas en el grupo b) y en el apartado sexto, lo que significa las siguientes diferencias respecto al año 1994: desaparece el recargo de bonificación por concepto de discriminación horaria y en el artículo 18 de dicha norma, relativo a primas para la instalación de energías renovables no consumibles derivadas de la biomasa y biocarburantes, la biomasa adquiere un trato claramente discriminatorio, puesto que se fija una prima de 4,97 pesetas kilovatio/hora para las energías eólica, geotérmica e hidroeléctrica y, en cambio, para la biomasa únicamente se fija una prima de 4,26 pesetas/kilovatio. Por tanto, hay una diferencia ostensible que al final significa que de lo que se venía pagando con el Decreto del año 1994, que rondaba...

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Quintana, le ruego que vaya concluyendo.

El señor QUINTANA GONZÁLEZ: Acabo inmediatamente, señor Presidente.

Entonces rondaba las 13 pesetas y hoy estamos en las escasas 10 pesetas por kilovatio/hora producido.

Con esos márgenes, y según nuestras previsiones, en los próximos diez años sólo sería posible dar cumplimiento —y para eso hay márgenes muy estrechos— a las centrales de biomasa pensadas para la valorización de los residuos olivateros y, en cualquier caso, con ese tipo de centrales como mucho nos colocaríamos en los 400 megavatios instalados. De ahí hasta los 1.800 previstos tiene que ser con cultivos energéticos y residuos forestales y esto, desde luego, queda muy por debajo del umbral no ya de rentabilidad, sino de sostenibilidad en el actual marco.

Por ello, estaremos expectantes ante las medidas que su Departamento adopte a este respecto y seguiremos dialogando sobre la materia.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Quintana.

Para contestar la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora Ministra de Ciencia y Tecnología.

La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán): Gracias, señor Presidente.

Señoría, tal como solicita, procuraré exponer los pasos fundamentales dados en el marco del Plan de Fomento de las Energías Renovables con carácter general, en particular para la biomasa, sin perjuicio de que, si es necesario, posteriormente pueda dar más explicaciones de detalle. Así pues, le voy a comentar los pasos dados, las medidas tomadas y las previstas para los años 2001 y sucesivos.

Empezaré con una breve valoración —porque coincido con usted— de la trascendencia del plan, de las características y sus objetivos, y además le agradezco su predisposición porque el actual Plan Nacional de Fomento de las Energías Renovables, que fue aprobado el pasado día 30 de diciembre de 1999 por el Consejo de Ministros, responde al compromiso que emana de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y que está en consonancia, como no podía ser de otro modo, con el Libro Blanco de las Energías Renovables de la Comisión Europea y con las medidas a las que usted hacía referencia.

Este plan, que tiene la condición de planificación indicativa y en el marco preciso de un contexto de liberalización creciente, recoge los principales elementos y orientaciones que deben considerarse relevantes precisamente en la articulación de una estrategia que involucra a actores públicos y privados para que el crecimiento en cada una de las áreas de las energías renovables, y en concreto en la biomasa, permita que cubran en su conjunto al menos el 12 por ciento de consumo de energía primaria para el año 2010.

El plan está a la altura de los compromisos medioambientales adquiridos por el Gobierno en materia de emisiones de gases de efecto invernadero y es un plan ambicioso, pero armónico ya que está consensuado con los agentes afectados, y en este sentido es realista y viable. El plan es ambicioso no sólo desde el punto de vista cuantitativo, como usted decía, sino que para que ello sea realidad lo tiene que ser también desde el punto de vista cualitativo.

Desde el punto de vista cuantitativo pretende pasar del 6,2 por ciento de contribución de las energías renovables en el año 1998, según las bases sobre las que se hicieron las cifras, al 12,3 por ciento en el año 2010, y esto supone más que duplicar dicha contribución, teniendo en cuenta que hablamos de porcentajes respecto a una demanda de energía primaria para la que se preveía en el momento del plan un notable incremento en el período 1998-2010, aunque ralentizado respecto a su tendencia porque se contempla una intensificación con relación al pasado de las medidas en materia de deficiencia energética que se han ido tomando a lo largo de las últimas décadas.

Desde el punto de vista cualitativo es también ambicioso, ya que pretende modificaciones en los usos para los que hasta ahora se ha empleado, y en este caso se persigue que el principal uso de la biomasa sea precisamente la generación de energía eléctrica. Por tanto, señorías, coincido con lo que decía el Senador. Además, el Plan de Fomento, que está consensuado con todos los agentes del sector, le da en su momento como tal plan, y posteriormente en su ejecución, las garantías de viabilidad y lo hace realista.

En la elaboración del plan han participado asociaciones del sector, ecologistas, fabricantes de equipos, sindicatos, entidades financieras, las diversas administraciones públicas, expertos, en definitiva un conjunto de agentes que dan garantía no sólo de esta viabilidad sino de su realismo, y en este sentido, en el área de la biomasa es precisamente en la que mayor número de estudios previos se han realizado y mayor número de expertos han participado.

En cuanto a la viabilidad del plan, la financiación de las inversiones debe realizarse (está previsto que así sea) a través de los mecanismos de libre mercado. Para ello es necesario disponer de apoyos públicos destinados a impulsar tecnologías que aún no son totalmente maduras y que no lo son en términos de competencia económica y, al mismo tiempo, no ha de continuar sustentándose en el futuro sólo en estos apoyos públicos, sino que se han de promover instrumentos financieros que movilicen los recursos económicos privados necesarios. En este sentido, el Plan no pierde de vista la conexión de las posibilidades técnicas y de mercado con los esfuerzos económicos y de inversión que requiere el crecimiento de las energías renovables hasta los objetivos previstos.

Para el cumplimiento del Plan es necesario, en primer lugar, eliminar barreras a la introducción de las nuevas fuentes de energía, ya sean normativas, estructurales, tecnológicas o económicas. En particular, yo destacaría la necesidad de incentivar el mercado de promotores y el propio mercado financiero para ayudar a alcanzar estos niveles mínimos de rentabilidad, oportunidad, estabilidad y dimensión de los recursos a invertir. Se parte de un conocimiento profundo de estas necesidades, así como del estado de las tecnologías de generación eléctrica de aprovechamiento de las fuentes de energías renovables, de los previsibles desarrollos futuros y de su viabilidad comercial. En el caso de la contribución de la biomasa a la generación eléctrica, que representa más de un 60 por ciento del objetivo total de generación eléctrica con energías renovables en el año 2010, significa que es un sector clave para el cumplimiento de los objetivos del Plan, y somos conscientes de ello.

En este sentido, los objetivos energéticos para el final del período del año 2010, que su señoría ya ha mencionado, requieren instrumentalizar un esquema de ayudas públicas con la activación de fondos europeos, considerar la adecuación de la normativa, abordar actividades de promoción y comunicación e incentivar la propia inversión privada. A menos de un año desde la aprobación el pasado día 30 de diciembre del Plan por parte del Consejo de Ministros, las principales actuaciones que se han llevado a cabo con la finalidad de lograr el cumplimiento de los objetivos del Plan y, en concreto, de los objetivos relativos al desarrollo de la biomasa energética, son las siguientes.

En primer lugar, se han diseñado un conjunto de instrumentos y actuaciones dirigidos a la aplicación de fondos. En este sentido, los fondos de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 transferidos al IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, para la ayuda a la incentivación, desarrollo y actuaciones del Plan de Fomento de las Energías Renovables y de la eficiencia energética, se han orientado claramente a la promoción tecnológica de sistemas avanzados que permitan crear un soporte innovador en esta nueva fase de desarrollo. De esta forma, se potencia la posición industrial española en este sector para alcanzar cotas crecientes en los mercados de bienes de equipo. Estos fondos ya han sido consignados en tres programas gestionados por el IDAE; programas de ayuda con los que se subvencionan parcialmente los gastos

ocasionados en la preparación de propuestas al V Programa marco de la Unión Europea. El objetivo de este programa es fomentar el número de proyectos españoles presentados a dicho programa marco, incentivando la investigación y desarrollo en España y atrayendo fondos europeos a nuestro país.

En segundo lugar, se han aplicado a una línea de financiación ICO-IDAE para inversiones en proyectos de energías renovables y eficiencia energética; una cantidad significativa de 2.200 millones de pesetas irá destinada a la biomasa y otra de 1.200 millones de pesetas a un programa dirigido a la energía solar térmica de baja temperatura. Asimismo, en los presupuestos del IDAE para el año 2000 está prevista la ejecución de una inversión específica en proyectos de biomasa y biocarburantes de 1.300 millones de pesetas.

Por otro lado, hay que tener en cuenta las actuaciones de carácter tecnológico, entre las que quiero citar algunas. El lanzamiento de proyectos significativos de biomasa desarrollando tecnologías eficientes para su utilización energética. Incentivación de la conexión a la red de instalaciones fotovoltaicas, así como su integración en edificios a través de proyectos de demostración que permitan la maduración tecnológica industrial de la energía fotovoltaica y proyectos emblemáticos como el que el pasado 29 de septiembre se inauguró en los jardines del complejo de La Moncloa con una pérgola fotovoltaica. Desarrollo de aerogeneradores eólicos, de media y alta potencia, y promoción del uso de biocombustibles obtenidos a partir de semillas o materiales linoceulósicos.

En este sentido, en junio de 2000, como conoce su señoría, se creó la Comisión Interministerial para el estudio del uso de los biocombustibles, prevista precisamente en el Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, tras un análisis de las implicaciones fiscales, medioambientales y económicas derivadas de la utilización de dichos combustibles, que tiene por objetivo proponer las medidas de promoción de su uso a las actuaciones en materias de I+D+i, dirigidas a conseguir la reducción de los costes de producción. Hay otras medidas, en las cuales no incidiré, dentro de lo que serían las actuaciones de carácter tecnológico.

En tercer lugar, están las actuaciones de desarrollo y actualización de normativa energética. De éstas quisiera destacar las del Real Decreto de 29 de septiembre de este año, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión, por el que se establecen las condiciones técnicas y administrativas de la conexión a la red de baja tensión, facilitando y agilizando el trámite. Sabe que se han hecho una serie de actuaciones y los informes pertinentes para la directiva europea sobre la promoción de las energías renovables en el mercado interior de la electricidad, de modo que se reconozcan los beneficios del sistema de incentivación de las energías renovables, esto es, el régimen especial del año 1998.

En cuarto lugar, están las actuaciones de seguimiento y control del plan.

En quinto lugar, la coordinación con las Comunidades Autónomas. Usted sabe que tiene especial significado la Comisión Consultiva de Ahorro y Diversificación Energé-

tica, que es el órgano de asesoramiento del propio IDAE, integrada por representantes de todas las Comunidades Autónomas, y en la que se tratan a través de grupos de trabajo específicos todos los temas relacionados con la política y planificación energética, especialmente aquellos en que las Comunidades Autónomas tienen competencias.

En sexto lugar, están las actuaciones de difusión y promoción de las nuevas tecnologías. Entre ellas destacan claramente las que ya se han realizado este año, los días 6 y 8 de junio en Sevilla, en la primera Conferencia Mundial de Biomasa y, asimismo, el pasado 31 de octubre en las jornadas celebradas en Madrid, organizadas también por el IDAE, sobre la biomasa en España, a las que asistieron centenares de representantes, de fabricantes, asociaciones, entidades financieras, Administración, promotores, empresas de ingeniería, tanto españolas como de otros países europeos, en realidad todo un conjunto de agentes interesados del sector.

Es cierto que en las instalaciones de biomasa hay que tener en cuenta una serie de aspectos, algunos de los cuales ha mencionado su señoría. En primer lugar, considero importante señalar la relevancia que tiene la disposición de instrumentos de financiación adaptados a las necesidades, que en este caso es la intensidad de capital que requieren dichos proyectos, así como los amplios horizontes temporales de amortización. En este sentido, está previsto que se mejore un plan conjunto de actuaciones, con el convencimiento desde el Ministerio de que hay que actuar para mejorar los sistemas de acceso a la financiación con elementos de reducción del riesgo y, por tanto, del coste. Tenemos que conseguir, porque creo que hoy es una asignatura pendiente, que este conjunto de aplicaciones sea atractivo para los mercados de capitales a largo plazo. De todos modos, hemos dado ya un paso para avanzar en esta dirección, y es la línea de financiación de proyectos de energías renovables que le mencionaba en cuanto a facilitar la financiación, pero hemos de conseguir vías adicionales para que sea el sector privado, de modo dinámico, el que vaya entrando en estos proyectos.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Señora Ministra, le ruego que vaya concluyendo.

La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán): También creo que en este caso hay otros factores que afectan al avance de la biomasa y, considerando el marco retributivo actual, es necesario que se profundice en la realización de convenios entre, los agentes involucrados: centrales, suministradores de biomasa, transportistas, de manera que, conjugando los parámetros de precio del combustible, precio de venta de energía eléctrica y subvenciones que puedan sumarse al proyecto, hagan el mismo viable. En este sentido creo que hay factores que nos permiten tener una postura optimista hacia estas alternativas energéticas, porque aunque tengamos mucho camino en el que trabajar, la disponibilidad cada vez mayor de superficies cultivables donde los productos no alimenticios pueden suponer una alternativa de nuevos ingresos a los agricultores, creando empleo y garantizando

un desarrollo sostenible, junto con las ventajas de nuestro propio clima en el crecimiento acelerado de estos cultivos y junto a la conciencia creciente a favor del reciclaje de todo tipo de residuos, creo que nos va a permitir avanzar en la dirección esperada.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señora Ministra de Ciencia y Tecnología.

Senador Quintana, tiene la palabra, bien por el turno de portavoces o en virtud del artículo 87.

El señor QUINTANA GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señora Ministra, señorías, yo venía hoy dispuesto aquí a no discutir con usted, y no lo voy a hacer, pero habremos de hacer un esfuerzo, por lo menos —ya que obligados por el Reglamento tenemos que hablar en el mismo idioma—, para hablar también de las mismas cosas, si no, va a ser difícil ese diálogo. (*La señora Presidenta ocupa la Presidencia.*)

Yo conozco y entiendo todos los mecanismos que usted acaba de mencionar para dar cumplimiento a los objetivos que se marcan en el Plan de Fomento de las Energías Renovables. El propio Plan de Fomento no está compuesto sólo por cuatro cuadros grapados; todas las medidas que usted mencionó se encuentran en este Plan, como no podía ser de otra manera, pero lo que aquí traemos a debate es la realidad de la concreción de ese Plan y de esas medidas, en un campo muy concreto que es el de la biomasa.

Hay otros objetivos de algunas energías renovables sobre los que podemos ser cuidadosamente optimistas para su cumplimiento. Está demostrado que la minihidráulica, no digamos la hidráulica o mismamente la eólica, por no hablar de la eufemística valorización de residuos sólidos, tienen unos índices de rentabilidad que están suponiendo que hoy mismo haya un sector privado pujante que está invirtiendo y trabajando en el sector; quizá el problema en esos apartados no sea que no haya sector privado que actúe, sino que en función de los objetivos marcados en el Plan de Fomento yo soy de los que creo que sería necesario afinar para regular esa participación y que no se esté produciendo la instalación de parques eólicos o la concesión de aprovechamientos hidroeléctricos claramente desmesurados y fuera de lugar. En cualquier caso, eso estaría en otro ámbito de discusión, y por supuesto la concreción de esos proyectos nos hace sentir optimistas respecto de los objetivos marcados en el Plan para esas energías, pero no es el caso de la biomasa, señora Ministra, y usted lo sabe, sencillamente porque coincidimos todos en que si queremos que este Plan se ejecute utilizando los mecanismos que en el mismo se disponen, será necesaria la participación ingente de la iniciativa privada para su cumplimiento. Usted lo acaba de decir y comparto totalmente su afirmación. La iniciativa privada no está para hacer altruismo, todos lo sabemos; está para actuar dentro de la economía de mercado con unos márgenes económicos de rentabilidad, y dando cumplimiento a unos objetivos que el sector público tiene determinados.

Yo le hice antes los números y créame que es así —usted lo sabe—. Le puedo hablar desde la perspectiva de los estudios que hay al respecto y desde mi conocimiento personal directo porque padezco también la gestión de una central de biomasa desde el sector público.

Si tenemos un pago de energía de 10 pesetas kilovatio/hora y producir ese kilovatio/hora nos cuesta 11 pesetas, difícilmente la iniciativa privada va a poder participar en ese ámbito, y eso es lo que está sucediendo hoy. La demostración evidente es que la mejor manera de borrar mis dudas y mis tribulaciones sería que usted pudiera subir ahora a la tribuna y decirme que estuviese tranquilo porque en el año 2000 se pusieron en funcionamiento una serie de plantas y está previsto que en el año 2001 se pongan en funcionamiento otra serie de ellas. Por lo tanto, mal será que de aquí al año 2010 no alcancemos el objetivo, pero es que desgraciadamente no podemos hablar de proyectos concretos en ese apartado porque la situación es la que es.

Yo decía que no quiero discutir con usted porque el Ministerio hizo lo que en principio había que hacer, pero como todo programa debe estar sometido a la concreción y al examen de la concreción práctica de ese proyecto. Y sólo será posible cumplir los objetivos de 1.800 megavatios instalados en el año 2010 a través de la biomasa si se cumplen, por lo menos, dos parámetros: uno, que la energía producida por biomasa, dentro del decreto de 1998, u otro que se haga al efecto, pueda tener unas primas superiores, aunque en algunos casos serviría con equipararlas a la prima para otro tipo de energía renovable, como la fotovoltaica; y dos —y yo no soy de los que piensa que todo se soluciona pagando más el kilovatio—, que se considere que la producción eléctrica a través de la biomasa, como energía renovable, es una política horizontal, no una política sólo de un departamento.

En Galicia, por hablar de lo que más conozco, se calcula que en este momento el 70 por ciento de la superficie agraria útil de algunas comarcas, como es la provincia de Orense, está abandonada. Tenemos un campo ingente para la obtención de combustible susceptible de ser utilizado en una central de biomasa para la producción eléctrica. Lo que sucede es que el costo de llevar esa biomasa hasta la central no estaría nunca por debajo de las siete pesetas por kilovatio/hora producido, pero no podemos imputar sólo a la central de biomasa —y por tanto al proyecto de energía renovable— la posibilidad de pagar esas siete pesetas, porque la obtención de esa biomasa, con la limpieza de los montes, con la obtención de residuos forestales, con el riego de superficies forestales, servirá sobre todo como objetivo medioambiental y, por lo tanto, debe tener su financiación también en ese campo, y por eso es necesario que haya una política horizontal que comunique y que interrelacione las acciones de su departamento con los otros departamentos y, sobre todo, que eso se repita en todas y cada una de las Comunidades Autónomas en las que esta competencia está adscrita.

Ésa es la reflexión que yo quería manifestar y me brindo para el diálogo que usted considere oportuno. Yo tengo que solicitarle que, independientemente de lo que diga el libro, utilizando un término que se utiliza en po-

lítica y en otros aspectos, no vayamos sólo por el libro; vayamos por el conocimiento de la realidad que usted conoce igual que yo. Dialogue usted con aquellos promotores que tienen hoy en marcha plantas de biomasa y le explicarán, seguro que con toda suerte de detalles, lo mismo que yo le he explicado aquí; le explicarán cómo, cada vez que se ejecuta un proyecto de biomasa, no sólo estamos provocando un proyecto de energía renovable y, por lo tanto, disminuyendo la producción de energía eléctrica adscribible a los fósiles finitos, sino que también estamos provocando un proyecto de desarrollo, casi siempre en el medio rural, necesitado de este tipo de proyectos.

Nunca es comparable la cantidad de puestos de trabajo y generación de economía que provoca una central de biomasa con cualquier otro tipo de proyecto de energía renovable. En ese campo es en el que debemos dialogar, en ese campo es en el que debemos encontrar soluciones y aquí queda manifestada mi propuesta y mi disposición para ello.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Quintana.

¿Desea intervenir, señora Ministra? (*Pausa.*) Tiene su señoría la palabra.

La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán): Señora Presidenta, Senador, señorías, yo no le he remitido a medidas teóricas sino a las que habíamos llevado a cabo, no ya en el año 2000, sino a algunas de las que ya están previstas para el año 2001 y a un tipo determinado de políticas en cuanto a aspectos claves como es el de la financiación.

Está claro que en el Plan reconocen a la biomasa —así está establecido y acordado— como una fuente alternativa para la energía eléctrica, y que, por lo tanto, tiene este carácter horizontal. El Plan no es sólo del Gobierno, y está consensuado, como decíamos antes, sino que, además, está gestionado, como conoce bien, por el IDAE, con la presencia de diversos agentes pero, en particular, de los ministerios directamente afectados, y en este caso tanto el de Medio Ambiente, como el de Economía y Hacienda, como el de Ciencia y Tecnología. Incluso en este año 2001, el presupuesto del IDAE recibe transferencias de Ciencia y Tecnología y de Economía y Hacienda por el lado que hace referencia a su carácter horizontal en el asunto de las energías renovables, y una parte va dirigida a los proyectos de biomasa.

Dije a su señoría que había una base para el optimismo en algunos de los elementos que usted mencionaba, incluso al hacer referencia al caso de Galicia, hablando de la disponibilidad de tierras que, con una serie de ventajas, tendrían usos alternativos, en este caso para la propia biomasa, con incidencia clara sobre el desarrollo. Coincidimos, Senador.

Lo que creo es que aquí hay una serie de aspectos. Es cierto que la viabilidad económica, durante un tiempo, es difícil, y por lo tanto se requieren ayudas públicas, se re-

quieran mejoras en cuanto a tecnología, y se está trabajando en este sentido. También existe mayor atracción, interés y conocimiento del sector financiero, pero hay aspectos claves que también tenemos que abordar, y opino que debemos hablar sobre todos ellos, pero sobre algunos aún con más intensidad.

Antes de entrar en éstos, me referiré brevemente a las conclusiones de esta jornada celebrada en España sobre la biomasa. Una de ellas ha sido que la biomasa es claramente competitiva con los combustibles tradicionales y hay que trabajar para lograr la garantía de suministro de biomasa a largo plazo. Para esto hay que llevar a cabo una serie de cuestiones para asegurar el correcto funcionamiento, en este caso de la central de energía eléctrica. Para ello también es necesario contar con unos precios estables que puedan ser pagados por la central, ya que, en estos momentos, ésta tiene fijados el precio de venta de su producto.

Ya he hablado de que considero clave que entre los distintos agentes involucrados se avance en conjugar las necesidades del sector, no sólo en lo que se refiere a los parámetros del precio del combustible, el precio de venta de la energía eléctrica y las ayudas y subvenciones, sino también a la estructura del propio sector, es decir, a cómo se asignan estos costes a cada uno de sus integrantes. Entiendo que es necesario hacer un claro esfuerzo en este sentido, debido a la inexistencia o actual debilidad de canales de distribución de esos combustibles capaces de asegurar a medio plazo la necesaria continuidad del suministro, a la vez que garanticen esa continuidad en términos de calidad, cantidad y una cierta estabilidad del propio precio.

Es necesario que se constituya, ya sea mediante sistemas de agencias, franquicias, u otros, por todos los oferentes dispuestos a ello un determinado tipo de contratos que estructuren el sector y concedan cierto grado de solidaridad a los compromisos de sus integrantes, de manera que se pueda mantener una determinada política de precios teniendo en cuenta las centrales de distribución de biomasa. En muchos casos las responsabilidades más directas de éstas corresponden a las autoridades autonómicas para promoverlas y apoyarlas institucionalmente, pero tendrán el soporte del Gobierno, del propio IDAE y, en particular, de esta Ministra.

Soy consciente de los altos costes de inversión, pero ya estamos adoptando un conjunto de medidas al respecto. En este sentido, no sólo existen préstamos en condiciones muy favorables para el desarrollo de proyectos de biomasa, sino que el propio IDAE está haciendo inversiones directas y participa en la promoción de instalaciones de biomasa a través de distintas modalidades, como la financiación por terceros, aportando el IDAE el cien por cien de la inversión —bajo esta modalidad ya se han realizado tres proyectos—, o mediante la participación en el capital y el asesoramiento técnico, en su caso, en siete sociedades. Pero este camino necesita reforzarse y una mayor estructuración para la participación del sector privado.

Hay que tener en cuenta que para el año 2001, y con cargo a los fondos públicos, hay previstos varios programas que fomentan la innovación tecnológica no sólo en el

área de las energías renovables, sino de la biomasa en particular, como es el Programa de fomento de la investigación técnica, el Profit, 2000-03. También se cuenta con los recursos correspondientes al quinto programa marco de la Comisión Europea en su programa de energía.

En cualquier caso, en el ejercicio de 2001 el IDAE recibirá una transferencia, una vez terminado el trámite parlamentario correspondiente, de 2.726 millones de pesetas de la Secretaría de Estado como transferencia directa —ya sabe que tiene un efecto multiplicador alto—, y de 3.676 millones del Ministerio de Economía. Este efecto multiplicador es de más de cuatro veces, y al mismo hay que añadir 25.000 millones de líneas de crédito del ICO, de los cuales, como sabe, hay una partida importante destinada a la biomasa.

Además, el IDAE pretende destinar a proyectos de inversión directa, acompañando al propio sector privado, un importe de 3.700 millones de pesetas, de los cuales una parte significativa corresponderán a las biomásas si somos capaces de estructurar conjuntamente la participación de los distintos agentes intervinientes para que el peso relativo del sector privado vaya siendo cada vez mayor.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ DÍAZ: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señora Ministra, señorías, estamos hablando hoy de un tema por el que Coalición Canaria tiene una gran sensibilidad, debido a la preocupación por los aspectos medioambientales y energéticos, quizá por nuestra situación insular y de gran dependencia de materia prima externa. No hemos venido aquí hoy, según hemos deducido de la interpección, a hablar de las energías alternativas en general sino, en concreto, de un aspecto, el de la biomasa. En este sentido, me parece que desde las instituciones públicas, y también desde la iniciativa privada, debemos procurar aprovechar todos los recursos alternativos, sobre todo a los carburantes o a los recursos energéticos fósiles porque son escasos, tienen fecha de caducidad y, además, porque todos los recursos alternativos son complementarios entre sí y aunque los utilicemos todos, ahora mismo, con la tecnología existente, nos resultan absolutamente insuficientes para el grado de consumo de nuestra sociedad.

De todas maneras, quizá por entrar en el debate concreto que nos trae aquí, parece que nos movemos entre dos posibles alternativas para abordar con éxito la utilización rentable de la biomasa como recurso energético, como fuente de energía: por un lado, las empresas del sector hablan fundamentalmente de pago de primas para la utilización de biomasa; y, por otro lado, desde los organismos oficiales —fundamentalmente desde el IDAE— se habla de que hay que apostar por el desarrollo tecnológico y mejorar la logística. Ese desarrollo tecnológico viene contem-

plado en el famoso libro del plan de fomento de las energías renovables y contempla facetas de investigación, de aplicaciones y de equipos para dicho desarrollo tecnológico.

Está claro —y en eso coinciden todos los expertos— que, a pesar de las dificultades técnicas que aún existen para la utilización y la explotación óptima de la biomasa, repito en que todos coinciden en reconocer el alto potencial que tiene la biomasa de cara a un futuro inmediato. Quiero dejar claro en mi intervención que no sólo estamos hablando de residuos forestales; creo que tendríamos que empezar ya a hablar de otras alternativas, como las producciones agrícolas específicas destinadas, sobre todo, a zonas deprimidas o de secano. Últimamente se está hablando de algunas especies vegetales concretas, como el cardo y —si mis informaciones son correctas— creo que en la provincia de Burgos ya hay algunas experiencias en este sentido. Por supuesto, esto requiere no sólo de apoyos económicos sino de apoyo tecnológico e investigador por parte de las administraciones públicas.

En definitiva, para estimular cualquier nuevo yacimiento —en todos los sentidos— ya sea de empleo, energético o económico, en general, por un lado hay que estimular la competitividad de un sector nuevo, emergente, que encuentra muchas dificultades y reticencias y, por otro lado, hay que garantizar la eficacia y la sostenibilidad de esa producción. En este caso, es una sostenibilidad que puede ir en simbiosis con la agricultura y luchar, en ese sentido, contra la crisis que en muchas zonas pasa el sector agrícola.

Además he de añadir que tendríamos que hablar no sólo de productos agrícolas, de los residuos forestales o de la energía eléctrica, sino de otros productos químicos derivados de determinados procesos químicos que la biomasa puede permitir y producir, que en la industria química se conocen como productos químicos verdes, ecológicos.

Está bastante claro que hay tres aspectos que en cualquier nuevo desarrollo y sobre todo con los criterios que hoy día se barajan deben primar y que son: primero, el balance medioambiental; segundo, la calidad de los productos y, tercero, unos precios equivalentes a los existentes en otras fuentes de energía, en el caso que hoy nos ocupa.

Considero que está demostrado el mejor balance medioambiental que implica la utilización de la biomasa y habría que garantizar la calidad de los productos, en este caso, de la energía eléctrica; sólo faltaría el tercer factor, que es conseguir precios equivalentes a los de otras energías presentes en el mercado.

Por tanto, por un lado es un asunto que compete a las administraciones públicas no sólo con apoyo económico y tecnológico, también con el normativo, y como ha dicho la señora ministra, se está avanzando en ese sentido, pero aún queda bastante camino por recorrer. Queda mucho por hablar y más aún por hacer porque estamos empezando, pero no por ello podemos quedarnos tranquilos diciendo que todavía es un camino incipiente, una energía que está todavía en embrión, sino que tenemos que poner manos a la obra y trabajar desde la responsabilidad de cada uno a fin de conseguir la utilización de la biomasa en todos los aspectos;

además, aún se sigue investigando pues la Unión Europea tiene varios programas que se han ido sucediendo en los últimos años, fundamentalmente en la última década, con varios proyectos diferentes que han ido abundando en la idea de una utilización racional, rentable y ecológicamente sostenible de la biomasa y, repito, no sólo de la forestal. Como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, señor Quintana, puede ser una alternativa de desarrollo sostenible para el medio rural, quizá él piense, desde la perspectiva de Galicia, en ambientes de producción forestal, pero lo mismo puede suceder en otros ámbitos como en ambas Castillas u otras zonas que no conozco muy bien; estaríamos hablando de cultivos agrícolas alternativos para la producción de energía o de productos químicos.

Por este camino van dirigidas las tendencias en la actualidad y deberíamos hacer, repito, desde la responsabilidad de cada uno, un esfuerzo para seguir investigando, para seguir apoyando estas líneas también en el ámbito económico porque en definitiva cuando empieza a emerger cualquier sector económico necesita de un apoyo inicial hasta hacerlo que sea competitivo. Igualmente debe recordarse a los sectores económicos interesados que ese apoyo económico no puede ser permanente, sino simplemente hasta que dicho producto sea rentable dentro de la sociedad de mercado en la que estamos inmersos.

Para concluir, he de decir que debemos seguir hablando porque aún queda mucho por hacer, pero sobre todo trabajemos más los aspectos concretos de desarrollo de este tipo de energía que, de acuerdo con las tendencias actuales de la sociedad no sólo van a ser rentables, no sólo tienen un balance medioambiental positivo, sino que cuentan con una opinión pública cada vez más favorable y más propensa a su utilización tanto en lo referido a la energía como a los productos derivados químicos, plásticos o de cualquier otro tipo.

Reitero mi felicitación tanto al Senador Quintana por haber introducido un debate nuevo y muy interesante, como también a la señora Ministra por el interés —a pesar del poco tiempo que lleva en el Ministerio— con el que sabemos se está tomando estos asuntos que, quizá por su formación anterior, no sean su especialidad, pero cualquier persona con su capacidad seguro que será capaz de desarrollar, apoyar y estimularlos en estos próximos años.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Rodríguez.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Albistur.

El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señora Presidenta.

Yo también tengo que insistir —ya se lo dije personalmente hace unos días al Senador Quintana González— en la oportunidad de haber presentado esta interpelación, que espero que prospere y culmine en una moción, porque su contenido, particularmente en esta Cámara, es significativo, ya que afecta fundamentalmente a las Comunidades Autónomas, que están utilizando sus recursos —los cuales terminan siendo energéticos, de carácter agrario, eólico o

hidráulico— para precisamente contribuir a una transformación de la producción de energía eléctrica en el territorio español de forma más barata y mucho más satisfactoria para el precio final que recibe el consumidor.

Por ello, nuestra posición es favorable a que esta interpelación, tras el debate hoy iniciado, y de alguna forma bien establecido entre las dos partes, tanto la interpelante como la del Gobierno, debería convertirse en una moción que estimulase, precisamente, el impulso de estas actividades. Cualquier acción de Gobierno, tanto de Comunidades Autónomas como del Estado, debería de ir sumada al incremento de los objetivos de instalación de los 1.700 megavatios. Hay Comunidades Autónomas como la de Navarra o la de Valencia, que ya están impulsando cantidades aproximadas al 50 por ciento de esta cifra, lo que quiere decir que es posible que el esfuerzo realizado desde iniciativas de carácter puramente local —desde el punto de vista estrictamente geográfico en este caso y no municipal— contribuyen a introducir en los mercados eléctrico y energético una energía más barata y mucho más asequible para los consumidores directos, dado que el destino final de este consumo es, precisamente, el consumidor, que no se ve afectado por otro tipo de medidas, incluidas en las leyes energéticas.

Por tanto, nosotros apoyaremos cualquier iniciativa que avance en esta dirección y animamos al proponente de esta interpelación a la presentación de la moción.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Albistur.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el Senador Aleu.

El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señora Presidenta, señora Ministra.

En primer lugar, como han hecho mis compañeros, quiero agradecer al Senador Quintana la posibilidad de debatir este asunto.

Yo voy a intentar no repetirme. Me ha parecido una excelente interpelación y he encontrado falta de concreción en la respuesta de la señora Ministra, pero yo quiero presentar un aspecto complementario al que ha expuesto el Senador Quintana, pero que influye en el desarrollo de las energías alternativas.

La Ley 54/97, del Sector Eléctrico, fijó un marco nuevo en el Estado español de las relaciones entre producción, distribución y transporte de energía eléctrica. Debían ser sectores distintos los que hiciesen las tres funciones. Dentro de la misma Ley, el Capítulo Segundo del Título IV habla del régimen especial de la producción eléctrica. Con posterioridad, el día 23 de diciembre del 998 apareció el Real Decreto 2818, el cual —lo dice en la exposición de motivos— impulsa el desarrollo de instalaciones de régimen especial, mediante la creación de un marco favorable, sin incurrir en situaciones discriminatorias que puedan ser limitadoras de una libre competencia. Posteriormente, este Decreto define claramente cuál es el modelo de desarrollo concreto de las energías alternativas. Y puede ser bueno; es el modelo que se está aplicando en la mayoría de los

países europeos, con mayor o menor dotación, con mayor o menor precio el kilovatio —siempre será discutible—, pero en estos momentos en España el sector eléctrico tiene una característica, que es que las empresas distribuidoras, que son las que compran la energía a las productoras y la venden al consumidor final, no tienen la facultad de fijar el precio final. Éste viene fijado por las tarifas que anualmente determina el Gobierno, y, por tanto, carecen de una de las facultades más importantes, cual es fijar el precio de venta, pues el precio de venta de la energía eléctrica ya está fijado. Se me puede argüir que hay consumidores cualificados, pero para el consumidor habitual no es así. Por tanto, las empresas distribuidoras asisten a una subasta diaria, hay quien dice horaria, del precio de la energía y compran allá donde es posible comprar más barato. Hay centrales que no se pueden poner en marcha durante la noche porque la producción de electricidad les cuesta más dinero y, por tanto, el precio de la noche, que suele ser más barato, les impide entrar en el mercado de la electricidad.

En ese contexto, el Decreto dice que las instalaciones de producción especial de energía, de producción de energía a partir de fuentes renovables, tienen una serie de derechos, fundamentalmente el de vender la energía a un precio fijado, lo que les permite garantizar una rentabilidad. Pero no se ha contemplado la posición de la empresa distribuidora, la cual está legitimada a hacerse la pregunta de por qué tiene que comprar la energía fotovoltaica —y pongo el ejemplo más exagerado— a 60 pesetas si puede comprar la energía nuclear a 90 céntimos, o a dos pesetas; o por qué tiene que comprar la energía proveniente de biomasa a 10 pesetas si puede comprar la energía nuclear a dos pesetas. ¿Y qué hace? —La Ley obliga a que compre—: Poner todas las dificultades técnicas para que esta obligación de compra sea difícil. ¿Dónde tiene la empresa suministradora la posibilidad? En la conexión y en las dificultades de la conexión.

Es un turno de portavoces y me voy a quedar aquí. Resta otro tema pendiente, el de la propiedad de las empresas productoras de energías alternativas, muchas veces con un accionariado primo hermano o el mismo que el de las empresas distribuidoras de energía. Y estos factores inciden en la viabilidad del desarrollo de las energías alternativas.

Como, repito, mi turno es sencillamente el de portavoces y el titular de la interpelación es el Senador Quintana, sólo he señalado este aspecto complementario, al tiempo que manifiesto mi coincidencia con lo que el Senador ha expresado sobre el tema de la biomasa.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Aleu.

En nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra su portavoz, el Senador Marimon.

El señor MARIMON I SABATÉ: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señora Ministra, señorías, como los anteriores portavoces, quiero resaltar no sólo la actualidad sino la importan-

cia de la interpelación presentada por el Senador Quintana y me referiré básicamente a algunos aspectos —espero no ser repetitivo— que creo que son colaterales pero que especialmente para nuestro Grupo y este Senador, en particular, tienen relevante importancia.

El señor Quintana manifestaba que la biomasa es una energía renovable diferente a las demás y en cierta manera la señora Ministra también se ha referido a ello y es evidentemente así.

Curiosamente, los españoles tenemos la percepción de que España no es un país forestal o arbolado. Sin embargo, tengo que decirles que nuestra media es la misma que la del resto de países europeos, es decir, el promedio de los países europeos tiene un 25 por ciento de superficie arbolada y España tiene también ese 25 por ciento, aunque no se reparte por igual en todas las Comunidades. En nuestra Comunidad es el 43 por ciento y en otras es superior.

El señor Quintana se refería a ello. ¿Qué ha sucedido en los últimos años, especialmente en las décadas de los setenta a los noventa? Que la superficie forestal o arbolada se ha incrementado en cerca de un 20 por ciento —en el caso de Cataluña, el bosque ha ganado 230.000 hectáreas—. Pero ¿qué ha sucedido con la biomasa que producen estos árboles? Que ha aumentado no un 20 por ciento, sino casi un 52 por ciento. En el momento en que la sociedad deja de usar combustible vegetal para utilizar combustible de carácter fósil, evidentemente el bosque empieza a ganar biomasa de una manera espectacular. Recordemos que estudios científicos demuestran que en España el conjunto de bosque (evidentemente no es lo mismo un bosque mediterráneo que uno pirenaico o que uno de carácter alpino) produce de término medio tres toneladas de materia seca al año y que lo que entendemos por superficie forestal, que incluye no sólo la arbórea sino lo que es el matorral o las superficies que con el tiempo serán forestales, producen una tonelada de materia seca por hectárea y año.

Esto se puede plantear de dos maneras: por una parte, es una fuente de energía renovable, pero por otra, recordémoslo bien, es una fuente de problemas importantes para este país y para el conjunto de las autonomías. Los incendios forestales que sufrimos así nos lo demuestran. El abandono de suelos productivos y el incremento de la biomasa están creando una problemática. Para mí es muy importante que se cumpla el Plan de fomento de las energías renovables y me ha parecido que la intervención de la señora Ministra era muy decidida en este sentido, quizá algo falta de concreción, pero yo entiendo que en el escaso tiempo del que dispone hay que manifestarse genéricamente, y también muy positiva. En todo caso, para este Senador y para su Grupo, que se cumpla el Plan de Fomento de las energías renovables es deseable, óptimo y evidentemente apostamos por ello, pero conseguir que nuestros bosques se mantengan en un estado adecuado es en este sentido prioritario.

El Senador Aleu ha definido bastante bien el problema, y el señor Quintana también. El señor Quintana decía que no era problema de precio de kilowatio/hora, sino que es problema de un conjunto de medidas. Yo estoy de acuerdo

con él, pero en todo caso voy a incidir en que en buena parte sí es problema de precio kilowatio/hora.

Usted sabe que hay diferentes fuentes de biomasa, y no sólo hay la biomasa vegetal, sino también está la procedente de origen animal. ¿Qué sucede en estos momentos? No sé si en el resto de España, pero en Cataluña sucede que las empresas se están peleando —evidentemente en términos económicos y administrativos— para conseguir construir estas centrales de utilización de la biomasa de origen animal.

¿Qué sucede cuando usted, señora Ministra, dice que necesitamos ayudas públicas, modificaciones de normativa e inversores? Evidentemente, los inversores que en este momento acuden en tropel a las centrales de cogeneración tendentes a disminuir la problemática de los purines, estos mismos inversores, si fuera rentable, también acudirían. Cuando usted dice que hay que buscar inversores o que hay que buscar capital económico, hay que dar las condiciones para que esto suceda. Entendemos que en estos momentos no ocurre así.

Estoy de acuerdo en que hay que apoyar un conjunto de medidas de carácter horizontal —algunas ya existen— y en que hay que ayudar a la construcción de estas centrales de biomasa. Recordando una anterior etapa de Consejero, que evidentemente no puedo olvidar, y unos problemas importantes de fuego en nuestra Comunidad, les diré que desde la Generalidad de Cataluña estábamos dispuestos, no voy a decir a subvencionar el cien por cien de estas centrales de biomasa, pero casi, pero también les diré que luego la cuenta de explotación —y lo manifestaban igualmente los señores Aleu y Quintana— no sale, y si no sale la cuenta de explotación, el inversor, a pesar de que se le facilite la inversión inicial, no arriesga dinero, pues en todo caso lo que no quiere es que el balance de cada año le diga que tiene que ir añadiendo equis dinero. Por tanto, yo entiendo que habría que estudiar en profundidad este tema y que evidentemente habría que modificar la tarifa que se aplica a la energía obtenida a través de este sistema. Creo que conseguiríamos un bien común muy importante.

Usted ha dicho antes que uno de los principales objetivos de este Plan de Fomento de las Energías Renovables era evitar el efecto invernadero. Yo creo que la adopción de medidas en el sentido de la interpelación que estamos debatiendo hoy ayudarían de una forma extraordinaria, porque, evidentemente, el mejor agente preventivo del efecto invernadero es el árbol, que tiene una gran capacidad de fijación de dióxido de carbono. Puede parecer incongruente si uno piensa que lo que se pretende es quemar árboles para producir energía, pero ustedes saben que no es así. Existe una biomasa que crece cada año; una importante biomasa de carácter residual —a la que se ha referido alguno de los intervinientes— que proviene de aprovechamientos agrícolas, forestales o de cultivos de carácter herbáceo. En el caso de nuestra Comunidad, estimamos la existencia de una biomasa forestal de más de 600.000 toneladas por año y de unas 240.000 de biomasa residual, lo que quiere decir que una sola Comunidad española produce cerca de un millón de toneladas de biomasa. Imagínese la cantidad de combustible que tenemos a nuestra dis-

posición, y, por ello, entiendo que debemos promover una utilización adecuada del mismo.

Finalmente y antes de acabar, quiero citar una frase —no viene al caso, pero que a mí me encanta— de un poeta que decía que el árbol nos acompaña desde la cuna al ataúd. Mi intervención manifiesta un interés básico por el Plan de Fomento de las Energías Renovables, pero en el caso de la biomasa de ámbito forestal tiene un interés específico para preservar nuestros bosques, que forman no sólo parte de nuestro paisaje sino también de nuestra vida cotidiana, y valga como ejemplo la cita del poeta.

Muchas gracias, señora Presidenta, por la generosidad del tiempo que me ha brindado.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Marimon.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Romero.

El señor ROMERO CALERO: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señora Ministra, señorías, quiero sumar la felicitación de mi Grupo al Senador Quintana por la oportunidad de esta interpelación y por los términos en los que ha sido presentada.

Utilizo este turno de portavoces para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista, y, por ello, voy a referirme a dos cuestiones que considero introductorias del asunto que nos ocupa. En primer lugar, trataré de definir cuál es el marco energético en el que nos desenvolvemos. Quiero resaltar nuestra valoración positiva del Plan de Fomento de las Energías Renovables; nos parece que es un magnífico documento técnico y una excelente herramienta, aunque tenga ciertas lagunas e inexactitudes. El propio plan prevé en un escenario de ahorro base de consumo de energías primarias un incremento del 1,2 por ciento hasta el 2010; el incremento tendencial del escenario que contempla el plan es algo superior al 2 por ciento y el incremento real que se está produciendo está por encima del 4 por ciento. Por tanto, la primera cuestión que se plantea es la necesidad de la corrección del consumo tendencial, porque si queremos mantener el objetivo previsto en el plan del 12 por ciento del consumo de energías primarias, tendrán que incrementarse de manera sustancial las cifras absolutas a no ser que se produzca un ahorro importante de energía en los próximos años, lo que, a nuestro juicio, es contradictorio con algunas actuaciones que ha adoptado el Gobierno como, por ejemplo, el desmantelamiento del programa de gestión de la demanda.

Otra cuestión que, a nuestro juicio, sitúa también en su conjunto el tema de las energías renovables es el de la cogeneración. La cogeneración supone un ahorro de energía primaria sustancial, y nosotros creemos que se debe producir una revisión de las actuales políticas de cogeneración. Señora Ministra, señorías, quiero decirles que hoy día los grupos eléctricos no consideran una amenaza la cogeneración. Hace un tiempo consideraron que efectivamente era un elemento que incidía de una manera muy directa en su cuota de mercado; hoy las compañías eléctricas

no lo consideran así, y es porque se está produciendo una paralización, una ralentización de la obtención de energía eléctrica a partir de la cogeneración que, a nuestro juicio, es un elemento fundamental en el objetivo final de una mayor eficiencia de los consumos energéticos.

Deteniéndonos ya en aspectos concretos de las energías renovables, y por no repetir cuestiones que se han planteado y que nosotros apoyamos sin ningún tipo de reservas, quiero señalar específicamente en el tema de la biomasa, que el plan de fomento prevé que casi el 75 por ciento del incremento en toneladas equivalentes de petróleo de las energías renovables hasta el año 2010 van a proceder de la biomasa. Pero eso está en contradicción con el tratamiento que el Decreto 2818/1998, al que se han referido anteriores oradores, da a la biomasa. No es realista pensar que casi el 75 por ciento del incremento en toneladas equivalentes de petróleo de las energías renovables se va a producir en España a partir de la biomasa, tanto primaria como secundaria, si el tratamiento que se le da en el decreto de primas es el actual. No voy a repetir las cifras que se han dado, pero están ahí y no son cuestionables.

El plan prevé una generación de energía solar termoelectrónica de 200 megavatios. La señora Ministra se ha referido a que hay una necesidad de madurar la tecnología de conexión de las instalaciones fotovoltaicas a la red. Personalmente, creo que es una tecnología bastante experimentada y que no necesita maduración, sino ponerla en marcha y aplicarla. En cuanto a la energía solar termoelectrónica de media temperatura, es una tecnología que está experimentada desde los años ochenta y que permite, por ejemplo, que en un lugar de los Estados Unidos nueve centrales solares termoelectrónicas de media temperatura estén generando a pleno rendimiento en torno a 40 megavatios cada una, por encima de los 350 megavatios. Es una tecnología suficientemente experimentada y contrastada. Respecto a la energía solar termoelectrónica de altas temperaturas, está suficientemente contrastada y, mientras el plan prevé una asignación de 200 megavatios a esta fuente de energía, sin embargo, el decreto de primas al que nos hemos referido antes no recoge ningún tipo de ayuda o incentivos a este tipo de generación. Enumera exhaustivamente la generación fotovoltaica, biomasa, las distintas generaciones alternativas, pero no se refiere a la solar.

La señora PRESIDENTA: Senador Romero, le ruego que vaya concluyendo, por favor.

El señor ROMERO CALERO: Termino enseguida, señora Presidenta.

Por último, en este turno que necesariamente tiene que ser muy conciso, creo necesario señalar que hay un problema de financiación de las energías alternativas. Se ha puesto antes de manifiesto la necesidad de unificar criterios, que en este momento están dispersos, y es lógico que así sea a partir de diferentes Ministerios. Pero fíjense ustedes que ocurre una cosa muy sintomática, mientras la producción tradicional tiene una canalización de ayuda muy concreta, muy específica, y absolutamente dirigida y uni-

taria, que son los CTC, las energías renovables tienen una maraña de ayudas de diferente naturaleza.

Yo creo, señora Ministra, que ustedes —y no voy a discutir ahora ese asunto— consideran que el déficit cero es una cuestión fundamental, y como yo creo que se trata de una cuestión de apoyo económico, realmente en el estado actual de la cuestión no es algo de carácter tecnológico, sino fundamentalmente de apoyo económico, que tiene aspectos tecnológicos pero no son los fundamentales, yo le sugiero que transformen los costes de transición a la competencia, que están varados en Bruselas, porque es muy difícil que finalmente se reciban como tales en costes de transición a las energías renovables. (*El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.*) Con eso conseguiríamos un gran apoyo a este tipo de energías.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Romero.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el Senador Rodado.

El señor RODADO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señora Ministra, señorías, intervengo no sólo por cortesía parlamentaria, sino porque es mi deseo que mi primera y breve intervención en esta Cámara la inicie transmitiéndoles, en primer lugar, el respeto y la consideración que sus señorías se merecen, y en segundo lugar, mi sincera y leal colaboración.

Señorías, sin pretender restar la más mínima importancia a los diferentes temas que a iniciativa de los grupos parlamentarios vienen a esta Cámara para su estudio y debate, el que hoy nos ocupa reúne todos los ingredientes para ser considerado de máximo interés, pues se trata, nada más y nada menos, que de la búsqueda y fomento de energías alternativas. En este caso de energías renovables, que además contribuyen a una disminución sustancial de los impactos ambientales, es decir, a un medio ambiente más limpio.

El Gobierno del Partido Popular es plenamente consciente de la gran importancia, que no sólo para la Unión Europea, sino para España tiene un crecimiento considerable de las fuentes de energía renovables, circunstancia que hace unos momentos acababa de corroborar la señora Ministra de Ciencia y Tecnología, y como consecuencia y dentro del marco de la política energética nacional comunitaria, elaboró el plan de fomento de estas energías que, al ser presentado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE, destacó la energía producida a través de la biomasa, fijando un objetivo razonable y posible de alcanzar en el año 2010, de acuerdo con la ley del sector eléctrico; es decir, que las fuentes de energía renovables cubriesen al menos el 12 por ciento de la demanda de energía en España, en el horizonte del 2010 y siempre desde el escenario del ahorro base, y además con la implicación, junto al Gobierno, de las Comunidades Autónomas, entes locales e iniciativa privada.

No me cabe duda —como el Senador Quintana ha indicado— de que sus señorías conocen que éste es el objetivo globalmente fijado para la Unión Europea en el Libro Blanco de las Comunidades Europeas, y además que este objetivo general en términos relativos supone la práctica duplicación de la participación actual de las energías renovables en España. Estamos en el 6,3 por ciento de consumo de energía primaria desde 1998, también como había indicado anteriormente la señora Ministra.

Señorías, estamos inmersos en una sociedad en constante y vertiginosa evolución industrial y tecnológica, que obliga a los gobiernos responsables a poner en marcha políticas eficientes, en materia energética, respetuosas con la protección del medio ambiente, y el Gobierno del Partido Popular las viene aplicando en nuestro país con notable éxito, y viene demostrando que las cosas se hacen razonablemente bien. En relación con esta cuestión un ejemplo claro de esta visión de modernidad y de futuro fue la acertada decisión del Presidente Aznar de modificar el organigrama de su Gobierno, y que entre las novedades estuviera la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuya responsable está siendo ahora interpelada en esta Cámara.

Ya tuvimos la satisfacción, señora Ministra, de asistir a la Comisión de Ciencia y Tecnología, donde usted explicó las líneas básicas y proyectos de su Ministerio a corto y medio plazo, comparecencia que motivó el agradecimiento de los portavoces de los grupos parlamentarios y, al mismo tiempo, la esperanza del cumplimiento de su ambicioso programa desde la línea de diálogo y consenso que usted ofreció.

Señora Ministra, no dudamos o, mejor dicho, estamos seguros de su gran preparación, de su capacidad de trabajo y de su talento en busca del diálogo y el consenso, pero tiene retos muy importantes que lograr porque la sociedad española ya se los está demandando.

Nos complace conocer que su Ministerio ha tomado cuantas medidas han sido posibles y necesarias para el cumplimiento de los objetivos que han motivado esta interpelación, y pensamos que al Senador Quintana le habrá tranquilizado —aunque pienso que no es muy fácil hacerlo—, al mismo tiempo que demuestra que el Gobierno del Partido Popular cumple sus compromisos.

Nada más y muchas gracias. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor VICEPRESIDENTE. (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Rodado.

La señora Ministra de Ciencia y Tecnología tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán): Gracias, señor Presidente.

Señorías, les agradezco el tono y la voluntad de avance en un tema que creo que es clave, como es el Plan de Fomento de las Energías Renovables y, en particular, en lo que significa su apartado de la biomasa. Creo que ha quedado claro en este debate —que entiendo que ha sido de un gran nivel— que hay una buena base, constituida por el Plan de Fomento

de las Energías Renovables, consensado y realista, pero precisamente al ser también ambicioso y que cuenta con la participación de múltiples actores públicos y privados, de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas, en algunos casos de las administraciones locales y también los mercados financieros, es imprescindible que avancemos para mejorar incluso las líneas marcadas en el plan.

Disponemos del organismo y del marco necesario, como es el Consejo consultivo del IDAE, y creo que correspondería profundizar en uno de los grupos de trabajo específicos para avanzar en un plan con las propuestas que aquí han sido tratadas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señora Ministra de Ciencia y Tecnología.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

— DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS FISCALES URGENTES DE ESTÍMULO AL AHORRO FAMILIAR Y A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 3/2000, DE 23 DE JUNIO). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000002) (C. D. 121/000004).

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Punto tercero del orden del día: dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.

Dictamen de la Comisión de Hacienda en relación con el proyecto de ley por el que se aprueban medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa (procedente del Real Decreto-Ley 3/2000, de 23 de junio). Se tramita por el procedimiento de urgencia.

La Comisión no designó a ningún Senador para la presentación del dictamen y, en consecuencia, procede comenzar con el debate de totalidad.

¿Algún grupo parlamentario quiere hacer un turno a favor? (*Pausa.*)

¿Turno en contra? (*Pausa.*)

Tiene la palabra el Senador Lerma por un tiempo de diez minutos.

El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor Presidente. Será más que suficiente con diez minutos.

Quiero expresar en este turno en contra que se trata de un proyecto de ley que, como ya dijimos en la tramitación en aquel caso del Real Decreto-ley, que nos parece improcedente haberlo llevado adelante como tal, fundamentalmente porque las medidas no entraban en vigor hasta el ejercicio siguiente, es decir, hasta el año 2001. Se trata de

una mala utilización del Real-Decreto-ley, y se crea también una cierta confusión en cuanto a la entrada en vigor de esta ley una vez que sea aprobada, puesto que las medidas entrarán en vigor, no en el momento de su aprobación, sino a continuación. Esto se produce en el ejercicio siguiente, y parece que puede debilitar algunas posiciones inversoras, y no parece razonable —repito una vez más— que se haya tramitado como proyecto de ley, violentando, desde mi punto de vista, la Constitución, haciendo uso de esta medida extraordinaria que no va a entrar en vigor hasta seis meses después. Creo, por tanto, que es poco razonable la presentación como proyecto de ley. Y a su vez, esta tramitación como proyecto de ley significa, naturalmente, una cuestión que no viene sino a abundar en la actual situación.

Quiero también decir que nos parece que es poca la elevación de lo que se considera pequeña y mediana empresa. Cuando el Gobierno parece dispuesto a intentar llevar adelante un proceso innovador en todas las empresas, y particularmente en las pequeñas y medianas empresas españolas, que es fundamental desde el punto de vista de la competencia, parece razonable que el ámbito de la aplicación de este proceso de innovación y, por tanto, de las exenciones a que hubiera lugar para llevar adelante este proceso, fuera lo más amplio posible. Lejos de eso, el Gobierno ha dejado en este proyecto de ley, en el Real Decreto, la posibilidad de la consideración de pequeña y mediana empresa y, por tanto, de las que se pueden acoger a estas exenciones fiscales, que en el proyecto de ley no se explicitan, en un ámbito demasiado reducido desde nuestro punto de vista. Solamente una facturación de hasta 500 millones de pesetas expresados en euros. Eso significa, en nuestra opinión, que la necesaria modernización y el consiguiente apoyo oficial a ese proceso de innovación y modernización no va a llegar más que a un ámbito reducido, por una parte, porque se excluyen las empresas de más de 500 millones de pesetas, por otra, porque este Gobierno ha decidido que tampoco las empresas que tributan en módulos puedan acogerse todavía. Parece, cuando no va a entrar en vigor hasta el ejercicio siguiente, que ha decidido que esto pase a través de la ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado. ¿Qué razón hay, si de todas formas la entrada en vigor va a ser prácticamente similar? Hagámoslo ahora y evitaremos esa frustración de miles de empresas que no pueden contar con los beneficios que supondría la aplicación de esta ley en exenciones fiscales para la utilización de nuevas tecnologías.

Por otra parte, la propuesta que se hace para el tratamiento de los incrementos patrimoniales no nos parece bien. Nos parece que los incrementos patrimoniales pequeños quedan expuestos a la misma tributación que los grandes incrementos patrimoniales y, por lo tanto, hemos presentado enmiendas que a continuación explicaré. En cualquier caso, nos parece que igualar los pequeños incrementos patrimoniales con los grandes incrementos que se producen, especialmente en algún tipo de operaciones, no nos parece razonable sino, por el contrario, que los pequeños incrementos patrimoniales deberían estar exentos y los grandes incrementos patrimoniales deberían tributar al

mismo tipo que el Impuesto sobre Sociedades, es decir, como todos los demás.

Además, nos parece que, puesto que se está apostando por hacer posible que la inversión de tecnología de información y de comunicación es la propuesta del Gobierno, debería ser bastante más generoso con ella, puesto que la forma real de competir —hemos tenido ocasión de verlo esta mañana— es precisamente con innovación, con tecnología de la información y de la comunicación y no con precariedad laboral. Por eso poner exclusivamente una deducción del 10 por ciento y no de la cuota por los gastos de inversión es cicatero e insuficiente, como también nos parece insuficiente que no se establezca ninguna deducción para la utilización de las nuevas tecnologías de fabricación.

Para terminar, deseo añadir que, por un lado, cuando se hace un esfuerzo para intentar que los cónyuges, ya sean hombres o mujeres, que no tiene ingresos o que éstos son pequeños, puedan también deducirse de la base imponible del Impuesto las aportaciones a planes de pensiones, lo que no podemos hacer es poner una deducción tan pequeña que el plan de pensiones que se esté pagando lleve al beneficiario a ser un pobre después de la jubilación. Como esta medida nos parece insuficiente, no podemos aprobarla.

Tampoco podemos aprobar la cuestión más confusa de todas las que ha producido ese Real Decreto-ley, y es que no queda claro que las plusvalías generadas en España tributen aquí a la hora de valorar las plusvalías que se han producido en el intercambio de acciones entre unas empresas de comunicación y otras. Parece sorprendente, cuando el Gobierno insiste reiteradamente en que esas plusvalías tributen aquí, que a partir de la aprobación de ese Real Decreto-ley en el mes de junio haya habido un cúmulo de ventas a través de ese tipo de procedimiento de empresas de comunicación. Si no hay ningún beneficio fiscal evidente más que el aplazamiento de cinco años y no la exención de la tributación, no parece razonable que eso haya ocurrido precisamente en ese corto período de tiempo, cuando antes del mes de junio no se había producido prácticamente ninguna operación de ese estilo.

Por todo ello, consideramos que este proyecto de ley, consecuencia del Real Decreto-ley citado, es insuficiente en lo que se refiere al tratamiento de los beneficios fiscales para la innovación y da un mal tratamiento a los incrementos patrimoniales. Por tanto, no votaremos a favor del mismo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Lerma.

Abrimos turno de portavoces.

¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? (*Pausa.*)
En consecuencia, pasamos al debate del articulado.

Voto particular número 5, del Grupo Parlamentario Mixto, correspondiente a las enmiendas números 12 a 21, originariamente presentadas por el Senador Quintana González, y números 22 a 58, originariamente presentadas por los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares.

Para la defensa de este voto particular, en primer lugar, tiene la palabra el Senador Cámara.

El señor CÁMARA FERNÁNDEZ: Gracias, señor Presidente.

Señorías, voy a darles una alegría, porque al defender conjuntamente las 36 enmiendas que he presentado a este proyecto de ley, al igual que va a hacer el Senador Quintana con las suyas, vamos a ahorrar mucho tiempo. Y creo que eso está bien, en primer lugar, porque les ahorraremos cansancio, pero también porque tengo la sensación de que estas enmiendas no van a ser admitidas una a una ni tampoco globalmente. Sin embargo, al menos por mi parte existe la obligación de expresar la filosofía y la concepción que me han movido a presentarlas.

Hay que decir que detrás de este proyecto de ley y del Real Decreto-ley que en su momento dio cuerpo a esta iniciativa de medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa se encuentra un objetivo: la desfiscalización con carácter general de las rentas del capital en nuestro país.

La fiscalidad en nuestro país es cada vez más regresiva; desde luego, muchos sectores no lo ponen en duda. Se trata de una fiscalidad según la cual una parte fundamental de los ingresos tiene lugar como consecuencia del Impuesto sobre el Valor Añadido, de los impuestos indirectos en general, y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en particular siempre en favor de una cada vez menor fiscalidad de los impuestos que tienen que ver con los beneficios.

En el debate de los Presupuestos Generales del Estado para el 2000 se plantearon algunas cuestiones que quisiera ahora refrescar para dar cuerpo y sentido a lo que acabo de comentar. Se decía que los ingresos por impuestos directos que recauda el Estado se estimaban para el año 2000 en 8.000 millones de pesetas; un 7,8 por ciento de aumento nominal sobre el presupuesto del año 1999, que se reducía en un 4 por ciento si la comparación la efectuásemos con el avance de liquidación que nos ofrecían los Presupuestos Generales del Estado. Hoy no he mirado la liquidación de los presupuestos para el año que viene pero, lógicamente, estarán en esa línea.

Las estimaciones oficiales cifraron el impacto de la reforma del IRPF anterior en una disminución media del tributo del 11,1 por ciento y otros estudios, como el del BBV, estima un impacto final similar a 748.000 millones de pesetas. Por tanto, los impuestos indirectos —según previsiones— también supondrían 8.557 millones de pesetas en el año 2000, lo que supone un aumento nominal del 13,7 por ciento.

Nosotros planteábamos entonces, de forma justificada, que los impuestos directos suponen, sobre el total de ingresos impositivos, el 51,5 por ciento en 1998, el 49,3 por ciento en 1999 y el 48,3 por ciento en el año 2000; y, al final, creo que se ha fijado algo parecido.

El IRPF sobre el total de impuestos directos representa el 66,9 por ciento en 1998, el 66,3 por ciento en 1999 y el 64 por ciento en el año 2000. Por tanto, es evidente la basculación de la carga tributaria hacia la imposición indi-

recta, acentuando la agresividad del sistema tributario y la menor presencia del IRPF en la recaudación, lo que afecta —en mi opinión— a la progresividad del sistema fiscal en su conjunto.

Esta línea de actuación, señorías, efectivamente estaba en el compromiso electoral del Partido Popular y en el propio discurso del Presidente del Gobierno en su investidura —esto hay que reconocerlo porque es así—, pero entonces se mantenía una posición más equilibrada pues estas medidas eran parte de un conjunto dentro de otras y, así, nos dijeron que no solamente tenían que ver con el ahorro de los que más tienen sino también de los que obtienen su renta a través de un salario; es decir: reforma del impuesto sobre la renta con una rebaja adicional de los tipos impositivos, un mejor tratamiento fiscal a las familias e incentivos más favorables al ahorro, etcétera.

Está claro que esa línea, que globalmente no compartimos, era en todo caso más equilibrada, pero la que se nos presenta ahora es mucho más parcial y más representativa de la filosofía fiscal que quiere aplicar este Gobierno y la mayoría política de las Cámaras en este país.

En la legislatura pasada, a tenor de la reforma del sistema fiscal, ya se trataba bastante bien a las rentas del capital y se las sigue tratando muy bien con las medidas que se nos presentan. En esta reforma se segrega el impuesto de plusvalías del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, haciendo que esta parte del impuesto no sea progresiva sino proporcional y que tenga un tipo del 20 por ciento. No contentos con que haya una clara discriminación con relación al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los asalariados, ahora rebajan aún más los impuestos sobre las plusvalías, con un tipo del 18 por ciento y un período de tiempo menor al que existía con anterioridad. Esta medida favorece, claramente, a unos en relación al conjunto de la población de nuestro país.

Además, se nos presenta una propuesta que beneficia a los fondos de pensiones. En la referida sesión de investidura tengo que recordar que esta medida se planteaba como un tema muy importante a negociar en el Pacto de Toledo y con esta iniciativa se segrega de dicho pacto y se pretende aprobar al margen del diálogo y de la negociación social que, por cierto, ha sido tan cacareada continua y permanentemente por nuestro Gobierno.

Se decía que la revisión del Pacto de Toledo tenía que inscribirse en el diálogo social para avanzar al ritmo y al consenso que todos queríamos, algunos añadieron que había que adoptar medidas que ayudaran a la creación de empleo, a la reducción de la temporalidad, etcétera. Planteaban en este marco una revisión de las prejubilaciones, una subida de las pensiones más bajas y, lo que es muy importante, los sistemas complementarios de previsión social; era una oferta en la negociación del Pacto de Toledo.

Todo ello es para afirmar que esta línea de actuación es una confrontación clara con la política de diálogo anunciada por la mayoría política de esta Cámara y del Congreso de los Diputados de este país. No se cumple lo que se dice y lógicamente se inscribe en una línea de introducción de elementos parciales para segregarlo de la negociación global y de esta forma se permiten otros avances, entre co-

millas, en detrimento de los intereses de la mayoría de la sociedad. Además, se adoptan nuevas medidas en relación con el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre el Patrimonio que, insisto, no afectan a la mayoría de este país, así como otras que aparecen en el texto que se nos presenta.

Por tanto, no compartimos que la forma de apoyar y favorecer a la pequeña y mediana empresa sea continuar con una regresión fiscal en relación con las empresas propiamente dichas. El conjunto de estas medidas tiene un coste fiscal para todos los españoles y creemos que no compensa el beneficio que se pueda obtener y, sobre todo, no está relacionado con el empleo y con el equilibrio social y territorial.

El apoyo a la pequeña y mediana empresa se debería centrar básicamente en la política sectorial en aquellos sectores que dinamizan al conjunto de la economía que tengan una capacidad de creación de empleo, que favorezcan el equilibrio territorial y que puedan favorecer también la política de sostenibilidad y de medio ambiente.

Por último, el nivel de fiscalidad de nuestra pequeña y mediana empresa es comparable al del resto de la Unión Europea, y no creo que necesite incentivos a través de mayores beneficios fiscales de los que ya ha habido en la legislación anterior.

No estamos de acuerdo, señorías, y por eso se presentan 36 enmiendas, como he dicho antes, a todos los títulos de este proyecto de ley que pretenden reponer en algunos casos medidas que estaban mejor en normativas anteriores y en otros casos avanzar en la progresividad fiscal cada vez más alejada de la política fiscal de este país. Además, esas propuestas no están ligadas en absoluto a otros debates, como los referidos a la creación de empleo o la precarización laboral o a un sinnúmero de aspectos más, por lo cual continúa y permanentemente ese desequilibrio entre las rentas del trabajo y las rentas del capital siempre va en perjuicio del conjunto de la mayoría de la sociedad, lo que no quita que estemos de acuerdo con algunas iniciativas que favorecen a la pequeña y mediana empresa, pero desde luego no mediante la vía de una disminución de la imposición fiscal haciendo más rentable unas cosas y menos otras para el conjunto de este país y la mayoría de la sociedad.

Por tanto, doy por defendidas en su conjunto las enmiendas que presento en este Pleno.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Cámara.

Tiene la palabra el Senador Quintana.

El señor QUINTANA GONZÁLEZ: Gracias, señor Presidente.

Señorías, para la defensa de las enmiendas presentadas por el Bloque Nacionalista Galego es necesario hacer una valoración previa del propio proyecto y he de decir que desde nuestro punto de vista la estrategia del Gobierno de introducir profundos cambios normativos por medio de instrumentos legislativos de carácter urgente, junto con la

utilización abusiva de leyes de acompañamiento, la tan reiterada reforma del IRPF, está siendo empleada para producir una profunda modificación del sistema tributario estatal consistente en la reducción drástica de su grado de progresividad y en la primacía de la imposición indirecta sobre la directa.

Así, últimamente todas las medidas de carácter fiscal fueron orientadas cara a una reducción de la imposición directa sobre las rentas más altas y un aumento de beneficios fiscales de las grandes empresas, al tiempo que se hace bascular el sistema fiscal cara a los impuestos indirectos.

La resultante de esta política en la pasada legislatura fue el incremento de la presión fiscal global, más la insistente propaganda de rebaja de impuestos. Por primera vez, durante la pasada legislatura, la recaudación por imposición indirecta fue más alta que la obtenida por imposición directa. Y no podemos perder de vista que ésta se caracteriza porque es soportada por todos los contribuyentes, en función de su consumo y con independencia de su nivel de renta individual.

En las medidas concretas que contiene este proyecto de ley se reducen, tanto el plazo de integración de plusvalías a un año en la base imponible del IRPF, como el tipo impositivo máximo de las ganancias y pérdidas patrimoniales al 18 por ciento, lo que supondrá que las rentas obtenidas en un mismo período impositivo tendrán un tratamiento fiscal claramente diferenciado, saliendo beneficiadas las derivadas de ganancias y pérdidas patrimoniales frente a los rendimientos del trabajo.

De manera gráfica significaremos que mientras los contribuyentes tienen rentas de trabajo, asalariados en general, en el período anual tributarán según una escala progresiva, que aumente en función de las rentas obtenidas. En el caso de aquellos que tengan plusvalías en el mismo año el título impositivo es lineal, fijándose en el 18 por ciento. Asimismo, dentro de este estímulo a la competencia, las empresas que realicen inversiones en el extranjero podrán deducir de la base imponible el Impuesto sobre Sociedades, hasta un máximo de 5.000 millones de pesetas. En términos profanos, no tendrán que tributar por estas cantidades.

Evidentemente, esta extraña medida va dirigida a recompensar a también extrañas pequeñas y medianas empresas del Estado, que realizan grandes inversiones en el extranjero. Digo extrañas empresas porque dentro de ellas se incluirán: Telefónica, Repsol, Endesa, Fenosa, etcétera.

En cuanto al ahorro familiar propiamente dicho, únicamente se incluyen mayores deducciones por aportaciones a planes de pensiones privados, profundizando así en el favorecimiento de la previsión social privada, a la que sólo tienen acceso las personas con rentas más altas.

En conclusión, se aprovecha la coyuntura económica al inicio de la legislatura para dar una vuelta más al sistema fiscal, presentando un proyecto de ley que supondrá un mejor tratamiento fiscal de las grandes empresas, de las plusvalías obtenidas por las ganancias y pérdidas patrimoniales y, en general, de las rentas más altas.

Con este análisis hemos presentado diez enmiendas particulares, que paso a justificar con brevedad.

En cuanto a la enmienda de supresión al artículo 4, propone que se suprima el inciso, «... incluso cuando el uso de los mismos por los empleados se puede efectuar fuera de lugar y horario de trabajo.» Esta enmienda se sustenta en que no puede incluirse como gasto de formación en nuevas tecnologías la adquisición de material informático para el uso de los trabajadores en su domicilio particular y, por tanto, deducible por las empresas, puesto que puede ser utilizado como bienes de consumo particular por los propios empleados, que no deben dar lugar, a nuestro modo de entender, a deducción.

La enmienda número 13 es de modificación del artículo sexto, número 1, párrafo primero, y propone que se sustituya la expresión «segundo año» por la de «tercer año». Es evidente que la ampliación de la exención parcial por las rentas obtenidas por la transmisión de acciones y participaciones en el capital de las empresas por parte de las sociedades de capital-riesgo a partir del segundo año es un beneficio fiscal que afectará a las grandes empresas y corporaciones financieras y que beneficiará fiscalmente a aquellas sociedades y fondos de capital-riesgo que más especulan.

La enmienda número 14 sustituye la expresión «con más de un año de antelación» por la expresión «con más de dos años de antelación» y su justificación, al igual que para la enmienda número 15, en la que se suprime el artículo decimoquinto, está recogida en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales».

En consecuencia y en coherencia con las enmiendas anteriores y para dar continuidad lógica al texto, se presentan las enmiendas números 16, 17 y 18.

De la misma manera —y acabo así mi intervención—, las enmiendas números 20 y 21 proponen la adición de un nuevo artículo vigésimo segundo y un nuevo artículo vigésimo tercero, respectivamente. El texto de estos artículos obra en el «Boletín Oficial de las Cortes» y la justificación de su inclusión, desde nuestro punto de vista, es evidente.

En el caso de la enmienda número 20, se propone la supresión del Impuesto sobre Actividades Económicas a los pequeños comerciantes, compensando para ello a los ayuntamientos. Se trata de una medida reclamada por ese sector que sí afecta a las pequeñas y medianas empresas, en general, y que debe ser acometida de inmediato, puesto que el IAE es un impuesto regresivo desde el punto de vista de equidad fiscal al gravar una actividad por el mero hecho de que exista de manera independiente a la evolución de los resultados de la misma.

En el caso de la enmienda número 21, por la que se propone la adición de un nuevo artículo vigésimo tercero, cuyo texto obra en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», se sustenta esta enmienda en considerar que se debe proponer reducir de inmediato los índices y módulos del IRPF correspondientes a actividades ganaderas, agrícolas y del comercio al por menor, así como revisar el IVA aplicable a estos productos para compensar fiscalmente a los mismos de las pérdidas de rentas derivadas del incremento de los carburantes y de las medidas liberalizadoras de los horarios comerciales.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Quintana.

Pasamos, a continuación, al voto particular número 3, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y que corresponde a las enmiendas números 1 a 3.

Para su defensa, tiene la palabra el Senador Albistur por tiempo de cuatro minutos y medio.

El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.

El Decreto origen de este proyecto de ley tuvo como objetivo introducir modificaciones que mejoraran la fiscalidad de la implantación e inversión de empresas en el extranjero, entre otros objetivos, que después, en el turno de portavoces, comentaremos.

Nuestro Grupo reconoce los avances efectuados en el proyecto de ley dado que éste trata de incentivar la inversión efectivamente realizada para la adquisición de participaciones mayoritarias en sociedades residentes fuera del territorio del Estado. Pero nuestro Grupo entiende que el texto que se presenta para su aprobación resulta de alguna manera limitativo y discriminatorio para las empresas que invierten en otros territorios europeos o adquieren participaciones en otro territorio europeo.

Me refiero a la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que es la que se refiere específicamente al artículo 20 quáter, letra c). Los datos indican que la acción inversora directa de las empresas es precisamente el mercado y las empresas europeas. Este objetivo, que resulta ser prioritario, y yo creo que difícilmente discutible, en la inversión de las empresas del territorio del Estado, en el proyecto queda perjudicado y de alguna manera desacreditado ya que se equipara la inversión en empresas residentes en Europa con la inversión en empresas con residencia en paraísos fiscales en lo que se refiere a la negativa a la deducción fiscal, tema que queda oscuro en ese artículo.

La enmienda que nuestro Grupo presenta pretende acompañar con apoyo de beneficios fiscales la actuación empresarial en Europa y por supuesto alejar de forma clara y precisa cualquier comparación con actuaciones irregulares en paraísos fiscales. Se precisa claridad e incentivar los objetivos prioritarios del destinatario de las ayudas y apoyos que pretende, el proyecto de ley: la Pyme, inversora y tomadora de participaciones en empresas europeas. El objetivo de la deducción propuesta es impulsar la inversión e implantación de empresas en el extranjero, los países de la Unión Europea constituyen en este sentido un objeto prioritario para las empresas españolas y carece de sentido denegar la deducción cuando la implantación de empresas tiene por destino esa Unión Europea.

Nuestra enmienda número 2 tiene como objetivo atender las actuaciones de la pequeña y mediana empresa. El Grupo que sostiene este texto olvida habitualmente, y en particular en este proyecto, que sin embargo su flamante titulación introductoria va dirigida precisamente a pretender la mejora fiscal de la pequeña y mediana empresa.

El artículo vigésimo segundo modifica el régimen de las entidades de tenencia de valores extranjeros, am-

pliando su alcance, reduciendo los requisitos de acceso al régimen y ampliando la posibilidad de aplicar el tratamiento de la doble imposición aunque ésta no exista. Nuestro Grupo, que propone la supresión del párrafo segundo, tiene la intención de que se permita a las empresas de tenencia de valores en el extranjero disfrutar de una exención aun no existiendo una participación del 5 por ciento en la entidad no residente, lo que implica, en contra de la filosofía de ese régimen, que inversiones de carácter especulativo se beneficien de un tratamiento destinado a fomentar la participación de las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, en filiales extranjeras. Y no sólo eso, sino que también la sustitución del requisito de participación por una cifra alzada de seis millones de euros evidentemente sólo ha de beneficiar a las grandes empresas, lo que convierte a la medida en claramente regresiva.

Una observación que me hacía el portavoz del Grupo de Convergència i Unió era que quizás el no mantener la referencia a una cantidad como ésta puede prestarse a un cierto equívoco, es decir, puede que aquellas que no alcancen el 5 por ciento queden de alguna forma perjudicadas si no hay una referencia al dinero, concretamente a una cifra alzada. A nuestro modo de entender, seis millones de euros para una pequeña y mediana empresa nos parece excesivo. Podría ser una cantidad inferior que podría situarse como mínimo en torno al millón de euros. Nuestra enmienda debía haber explicitado eso y por eso lo hago en esta intervención.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Albistur, ha terminado su tiempo.

El señor ALBISTUR MARIN: Sí, señor Presidente, termino enseguida, que no cunda el pánico. (*Risas.*)

Nuestro Grupo ha presentado una tercera enmienda en relación precisamente con las entidades de tenencia de valores extranjeros, dado que se trata de un régimen con características muy delicadas en su aplicación y en su composición y que precisan de conocimiento en su operatividad y actuaciones de las autoridades económicas. Nuestra propuesta en la enmienda pretende introducir rigor en la gestión y administración de valores representativos de fondos propios de entidades no residentes en territorio del Estado. Tampoco se puede plantear que introducimos algo parecido —aunque pueda sonar semejante, no es así— a una propuesta intervencionista desde la Administración. Estamos lejos de ese espíritu. Consideramos —y termino con esto— que en esta materia y teniendo en cuenta la índole de las entidades a las que nos estamos refiriendo y el delicado tratamiento que deben tener la Administración de Hacienda debe tener conocimiento de las empresas que optan por las entidades de tenencia de valores extranjero no por comunicación sino mediante la previa solicitud, que no debería encontrarse con traba alguna o con largos plazos burocráticos.

Nada más. En el turno de portavoces ya nos explayaremos sobre los criterios que nuestro Grupo mantiene sobre esta Ley. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Albistur.

Se ha presentado una propuesta de modificación del dictamen por parte del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. Para su defensa, el Senador Gibert tiene la palabra por un tiempo de tres minutos.

El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor Presidente.

Antes de nada, quiero agradecer la cortesía de todos los grupos parlamentarios al consentir la tramitación de esta enmienda que nuestro Grupo tenía la intención de mantener, aunque finalmente no pudo hacerlo en tiempo y forma. Nuestra enmienda es de supresión y se refiere al tratamiento fiscal que el Decreto-ley objeto del debate otorga a los seguros conocidos con el nombre de «unit linked». No estamos de acuerdo con el tratamiento tributario que se le da, y por esa razón suprimimos este aspecto.

Lo cierto es que este tipo de seguros ha adquirido un peso notable en materia de ahorro y en los mercados financieros, y no tenemos ninguna duda —por eso, lo proponemos en la alternativa— de que muy pronto volveremos a abordar este tema, a iniciativa del propio Gobierno, dado que el tratamiento previsto se manifestará como no adecuado y, además, está siendo objeto de estudio en la Unión Europea. Creemos que es un problema de carácter general —y a ello me referiré al defender la enmienda— y no sólo relativo a los «unit linked». Pensamos que no hay que hacer retoques fiscales permanentemente en función de coyunturas volátiles, de grupos de presión o de cualquier otra cosa, porque así el Gobierno nos está conduciendo a preguntarnos, como los clásicos, «qui prodest». Demasiado a menudo nos surge la pregunta de a quién beneficia tal retoque o medida. Es verdad que un cierto dinamismo en los parámetros en función de situaciones cambiantes es necesario y que a veces hay que usar estímulos fiscales para canalizar el ahorro, pero hay que hacerlo con criterios generales. Es decir, se puede canalizar el ahorro primando el riesgo —me parece razonable— o el largo plazo frente al corto, pero nunca primando a productos concretos, porque eso conduce a situaciones en las que los productos financieros dejan de serlo para convertirse en productos fiscales, algo que ocurre demasiado a menudo. Por supuesto, a veces hay que hacer retoques puntuales y oportunos para corregir situaciones discriminatorias, pero no se debe hacer permanentemente.

La fiscalidad debe tener como norma la neutralidad, y esto no sólo lo dice el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés sino que también lo ha hecho la Fundación de las Cajas de Ahorros. Recientemente ha aparecido una información en prensa que decía: Funcas denuncia que, tras este decreto, la fiscalidad sigue condicionando, el destino del ahorro y ha reclamado una reforma que acabe con la falta de neutralidad fiscal en las inversiones. Creemos que debe tender a la neutralidad y que esto no impide primar determinadas canalizaciones, pero hay que hacerlo de manera genérica y no primando productos concretos.

Los retoques deben tener objetivos claros y resultados inmejorables y verificables, pero además deben tender a la equidad entre los impuestos...

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Gibert, le ruego que vaya concluyendo.

El señor GIBERT I BOSCH: Termino, señor Presidente.

Deben tender a la equidad entre impuestos comparables y no generar una casuística que pueda tender a la discriminación. En ese sentido, creemos que nuestra enmienda debería ser aprobada y tratar este tema con más calma en otro momento.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Gibert.

A continuación, corresponde pasar al voto particular número 1 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, correspondiente a las enmiendas comprendidas entre la número 59 y la 86.

Para su defensa, tiene la palabra el Senador Cambra.

El señor CAMBRA I SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió respecto al proyecto de ley que estamos tramitando está globalmente de acuerdo con la orientación y los objetivos que se persiguen. Entendemos que son una serie de medidas que, como en su momento con el Real Decreto del mes de junio, insisten en la línea de política económica de los últimos cuatro años, y ya hemos manifestado reiteradamente que por parte de nuestro Grupo apoyamos la línea que ahí se refleja. Por tanto, ya antes de entrar a comentar la presentación de enmiendas por parte de nuestro Grupo, anuncio que nuestro voto en la votación global del dictamen del proyecto de ley será favorable.

Ya en el Congreso de los Diputados nuestro grupo parlamentario presentó una serie de enmiendas, 14 de las cuales en su texto literal o a través de transacciones están ya introducidas en el dictamen que actualmente estamos tramitando aquí en el Senado. Todas ellas han sido enmiendas en las que se ha procurado ampliar algunos de los supuestos que se contemplan en el proyecto de ley, o introducir algunas otras modificaciones o incentivos fiscales al proyecto. En ningún caso se ha tratado de enmiendas que tiendan a modificar o eliminar aspectos que contenía el proyecto original.

En esta misma línea están las enmiendas que nuestro Grupo mantiene aquí en el Senado. El hecho de que insistamos en 18 de las enmiendas que ya se presentaron en el Congreso de los Diputados e, incluso, hayamos introducido diez nuevas enmiendas, lo que totaliza las 28 que defiende en este trámite, es porque consideramos que la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley del mes de junio es la ley, para este año 2000 y de cara al 2001, en la que básicamente se van a introducir novedades y modificaciones en el ámbito fiscal. Para apoyar este criterio

me remito al proyecto de ley que el Gobierno ya ha presentado y se está tramitando, precisamente hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, en el que respecto a cualquiera de los años anteriores su contenido de tipo fiscal es mucho menor de lo que era habitual. Y es lógico porque está ya en su recta final de trámite parlamentario un proyecto de ley con un contenido claramente de tipo fiscal. Es por ello que nuestro Grupo entiende que aquellas iniciativas en la línea de mejorar los objetivos que se persiguen hay que presentarlas a este proyecto de ley, unas iniciativas que, probablemente, otro año hubiéramos presentado en forma de enmiendas al proyecto de ley de medidas, cosa que lógicamente haremos o no en función de cuál sea la votación que se produzca de aquí a unos minutos en esta Cámara.

Entrando ya propiamente en el contenido de las enmiendas, y sin detenernos en el detalle de 28 enmiendas para no cansar a sus señorías, aunque la Presidencia me ha concedido un tiempo que evidentemente no voy a consumir, voy a hacer una defensa intentándolas agrupar por los objetivos que se persiguen con su presentación. Un primer bloque lo compondrían las enmiendas números 59, 83 y 64, que básicamente pretenden aclarar o ampliar aspectos que se contienen ya en el proyecto de ley. Uno de los importantes es el artículo cuarto que hace mención a la deducción por gastos de formación del personal en el uso de las nuevas tecnologías, y con la enmienda que aquí presentamos pretendemos ampliar el alcance de las personas que pueden acogerse a esta deducción a todo el colectivo de trabajadores autónomos y profesionales, no haciendo mención exclusiva, como hace actualmente el texto, a los empleados.

El caso de la enmienda número 83 es curioso porque persigue ampliar los incentivos para el uso de las nuevas tecnologías a aquellas empresas más pequeñas, que tributan por el régimen de estimación objetiva. Esta enmienda ya fue presentada en el Congreso de los Diputados y no fue aprobada allí por el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular. La presentamos ahora aquí, pero en el texto de la ley de medidas, que está actualmente en el Congreso de los Diputados, a través de una disposición adicional se incluye literalmente el texto de esta enmienda.

Por tanto, nos alegramos de que finalmente se vaya a aprobar. No entendemos por qué se ha elegido la ley de medidas cuando procesalmente esta ley se tramita con anterioridad, y si la medida es buena lo lógico es que se apruebe cuanto antes, y además porque está en relación directísima con este proyecto de ley y con su título. Estamos hablando de incentivar el uso de nuevas tecnologías en las más pequeñas empresas; por tanto, por coherencia, entendemos que lo lógico sería que se votara afirmativamente esta enmienda aquí, con lo cual no tendría sentido que se mantuviera en la ley de acompañamiento; eso sería lo lógico. En cualquier caso, nos alegramos de que se vaya a aprobar esta medida, aunque sea a través de la ley de medidas.

Continuando con nuestras enmiendas, voy a referirme a continuación a la enmienda número 61, que también es

para nosotros un viejo tema. Fue defendido ya en esta Cámara por nuestro portavoz, el Senador Marimon, a través de una propuesta alternativa a una proposición de ley que había presentado la Entesa Catalana de Progrés, y hace referencia a facilitar a las familias y a los hogares la posibilidad de adquirir material informático y la conexión a Internet. Nosotros ya comentamos que habíamos propuesto una desgravación al IVA soportado, con una cantidad equivalente a 50.000 pesetas, simplemente en forma de enmienda y, ya que se está tramitando un proyecto de ley que hace mención a la ayuda a las pequeñas y medianas empresas en el uso de las nuevas tecnologías, insistimos en un tema en el que creemos realmente, por lo que reiteramos nuestra posición presentando esta enmienda 61 a este proyecto de ley.

Las enmiendas números 62 y 63 hacen referencia a los seguros de rentas diferidas. Con ello lo que queremos es evitar que se desincentive la contratación de ese tipo de seguros, ya que actualmente la tributación efectiva de las rentas diferidas es muy superior a la tributación conjunta de un capital encadenado a una renta inmediata. Creemos que con esta situación se está desnaturalizando el contrato de seguro de rentas diferidas, que es el producto más adecuado para el establecimiento de esquemas de previsión social para la jubilación. Se propone que al rendimiento a distribuir en las rentas se le aplique previamente los porcentajes de reducción establecidos para las prestaciones en forma de capital.

Por lo que hace referencia al bloque de enmiendas que forman los números 65, 72 y 66, lo que pretendemos es introducir algunas medidas o puntualizaciones que mejoren el tratamiento que está dando el proyecto de ley a las ayudas de incentivación de la internacionalización de la pequeña y mediana empresa. Concretamente, lo que queremos es facilitar la internacionalización de las empresas reduciendo del 5 al 3 por ciento el porcentaje de participación en el capital social de las entidades no residentes, que dan derecho a las exenciones y deducciones, para evitar la doble imposición internacional.

En la enmienda número 67 abordamos también un tema que ha sido motivo de debate en reiteradas ocasiones y en años sucesivos en esta Cámara, cuando fue introducido, que es lo que hace referencia a la Ley de la Prorrata en relación con la devolución o no del IVA cuando una entidad recibe subvenciones. Lo que aquí pretendemos en concreto es excluir del cómputo de la prorrata en el IVA las subvenciones para entidades representativas sin ánimo de lucro que vayan destinadas a financiar la propia estructura de esta entidad o las labores de interés para las propias sociedades de la entidad. Creemos que en este caso debería excluirse el cómputo de la prorrata del IVA para estas entidades.

En cuanto a las enmiendas números 68 y 69 lo que pretendemos es introducir nuevos incentivos fiscales. Parece que la idea fue bien acogida por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, aunque luego no fueron admitidas a través de la votación estas enmiendas; pero aunque hoy tampoco sean admitidas a través de la votación, sería bueno que aquel criterio expuesto

por el Diputado Martínez Pujalte se mantuviera, porque es importante incentivar, de alguna forma, que las empresas hagan inversiones destinadas a mejorar, por un lado, la seguridad laboral, y por otro, a reducir el consumo de agua y a mejorar el medio ambiente.

Se trata de temas importantes y creemos que hay que arbitrar medidas para favorecerlos, que es lo que fundamentalmente se contiene en nuestras enmiendas números 68, 69 y, de alguna forma también, en la número 81.

Por otra parte, es posible que en años anteriores las enmiendas números 74, 79, 80, 82, 84 y 85 las hubiéramos presentado a la ley de acompañamiento pero, dado que procesalmente se está tramitando con anterioridad este proyecto de ley, hemos optado por presentarlas ahora. Hacen referencia a temas diversos pero siempre en la línea de incentivar y favorecer la actividad de las pequeñas y medianas empresas. En concreto, la enmienda número 74 pretende permitir la amortización de los fondos de comercio implícitos en las adquisiciones de participaciones, que es la manera natural en la que se manifiestan hoy en día en el tráfico comercial. Con ello se elimina la discriminación fiscal existente entre adquisiciones de fondos de comercio vía la compra de negocio o a través de la adquisición de una cartera de valores.

Con la enmienda número 79, que ya se presentó en el Congreso de los Diputados —esta cuestión la hemos comentado ya con el portavoz del Grupo Popular—, pretendemos algo que se arregló con la Ley de acompañamiento del año 1998, que es la posibilidad de recuperar el IVA por parte de una empresa que tiene un saldo incobrable. Se trata de establecer que el plazo mínimo para poder recobrar el IVA desde que se produjo la operación comercial, que actualmente es de dos años, se acorte a un año cuando ello sea posible por el hecho de haberse cumplido ya el resto de requisitos necesarios para que se lleve a efecto la devolución de este IVA. Entendemos que un año sería suficiente, aunque creemos que ya fue una mejora concretar en dos años esta medida cuando se aprobó a finales de 1997.

La enmienda número 80 pretende clarificar la interpretación de la Ley de Fundaciones y de Incentivos Fiscales al objeto de posibilitar que las fundaciones constituidas por las cajas de ahorro puedan deducir las donaciones que perciben de las propias cajas de ahorro cuando sea a través de aquellas fundaciones en que diversas cajas llevan a cabo una obra social. Es una medida muy concreta y entendemos que debemos proponerla a este proyecto de ley que es el proyecto de ley fiscal de este ejercicio.

Por lo que hace referencia a la enmienda número 84, pretendemos corregir lo que se origina a partir de la entrada en vigor del artículo 8.º y de la disposición transitoria del Real Decreto-ley 7/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes en el Sector de las Telecomunicaciones, que hace referencia a la liberalización de los servicios de Inspección Técnica de Vehículos. Entendemos que este sector no debería soportar mayores costes ni sacrificios de los que se han impuesto a otros sectores que han sufrido procesos similares a éstos. La sustitución o conversión de los títulos concesionales por autorizaciones ha sido una prác-

tica seguida en otros sectores de nuestra actividad económica; no obstante, en todos ellos siempre se ha introducido algún mecanismo que permite mantener, desde el punto de vista del contenido material de la concesión, una cierta protección temporal que limite, al menos en parte, las graves consecuencias económicas que puede comportar si no se tiene en cuenta esta situación.

La enmienda número 85 va en la línea de favorecer el uso de carburantes menos contaminantes. Es un tema que se ha debatido sobradamente en otras iniciativas en esta Cámara.

Por último, la enmienda número 86 pretende modificar el sistema de retenciones a profesionales, ya que muchos tienen que mantener una estructura laboral, por lo que entendemos que sería más adecuado establecer, en lugar de un tipo único de retención, una escala de tipos de retención en función del número de trabajadores que un profesional tiene a su cargo, ya que pensamos que hoy la retención global del 18 por ciento puede crear situaciones ilógicas cuando ahí hay una actividad realmente empresarial —entre comillas— que queda claramente demostrada con el personal contratado que tiene este profesional.

El último bloque de enmiendas está formado por cuatro: las números 75, 76 77 y 78. Todas ellas hacen referencia a la problemática de la empresa familiar, tema de actualidad en esta Cámara. Hace algunas semanas se aprobó en este Pleno la constitución de una Ponencia para el estudio específico de estos problemas. En aquel debate, la exposición que hizo en nombre del Grupo Parlamentario Popular el Senador Gamero, a nuestro grupo le pareció que estaba muy en la línea de lo que hemos venido defendiendo durante años de favorecer y tener en cuenta la importancia de este tipo de empresas. Pero creemos que hay cuestiones muy concretas y que, además, derivan de disposiciones ya vigentes aprobadas en los últimos años que han sido y están siendo claramente beneficiosas para este tipo de empresas, pero que necesitan alguna modificación, porque la aplicación que se está haciendo de estas normas está generando situaciones no deseadas por la propia norma.

En la enmienda 77 en concreto, la exención actualmente existente por el Impuesto sobre el Patrimonio de aquellos activos vinculados a la actividad empresarial en que se cumpla una serie de requisitos como la vinculación del sujeto pasivo a la empresa, el que más del 50 por ciento de sus ingresos estén vinculados a la empresa, etcétera, y que exige hoy una mínima participación a título individual del 15 por ciento y del colectivo familiar con relación directa del 20 por ciento, hoy, con estos parámetros, está generando unas discriminaciones no queridas por la norma —no era ése el objetivo— y que, si se redujera este 15 por ciento exigido como mínimo de participación individual al 5 por ciento, se corregirían. Es una enmienda que nuestro grupo —y concretamente este Senador— defiende en esta tribuna por tercera vez. Lo hicimos los dos años anteriores a través de dos enmiendas a la Ley de acompañamiento, y seguimos insistiendo en ello. Quizá dentro de pocas semanas volveré a defenderla. Pero creo sinceramente que es algo que debe resolverse. Espero que se reflexione sobre ello para dar una solución. Afecta a empresarios en mu-

chas Comunidades Autónomas. Hay empresas familiares, ya de una cierta dimensión, en cuarta o quinta generación, y hoy participaciones individuales de un 15 por ciento son muy elevadas para ese tipo de empresas. Nos parece que el Grupo Parlamentario Popular debe reflexionar sobre esta cuestión. Además, quiero dejar constancia de que, en las dos ocasiones anteriores que nuestro grupo defendió en esta Cámara esta enmienda, recibimos el apoyo mayoritario —entre comillas— del resto de los grupos, excepto el del Grupo Parlamentario Popular. Por eso me dirijo concretamente a dicho grupo para que reflexione sobre esta cuestión.

La otra enmienda dentro de este grupo relativo a la empresa familiar es la número 75. En este caso, la norma vigente es la exención del 95 por ciento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Para poder disfrutar de esa exención se exige al beneficiario un mantenimiento de un mínimo de 10 años de este activo que le ha sido transferido. Creemos que hoy, tal y como evolucionan la economía y el mundo de la empresa, el plazo de diez años es excesivo. Un plazo de cinco años sería suficiente para evitar cualquier duda de especulación por parte de este beneficiario y, por tanto, propone reducir este plazo de diez a cinco años. Quiero decir que tanto el contenido de la enmienda 77, que he defendido anteriormente, como el de la 75, que es la que hace referencia al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en la medida en que sus competencias se lo han permitido, la Generalitat de Catalunya ya ha aprobado estas medidas. Es decir, actualmente la exigencia mínima del 5 por ciento en el caso del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ya está vigente en Cataluña y afecta a la recaudación de la Generalitat. Por tanto, somos coherentes con lo que aquí estamos solicitando, en la medida en que en este caso existe una competencia clara por parte de la Generalitat de Cataluña.

En cuanto a las enmiendas números 76 y 78, afectan a otros aspectos quizá de menor trascendencia, por lo que para no extenderme más y tampoco cansar a sus señorías las doy por defendidas en sus propios términos, al igual que el resto de las enmiendas de las que no he hecho mención concreta.

Señor Presidente, reiteramos el mantenimiento de nuestras 28 enmiendas para someterlas a votación y, en cualquier caso, me remito al turno de portavoces en función de lo que manifieste el portavoz del Grupo Popular.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE, (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Cambra.

Pasamos al debate del voto particular número 2, del Grupo Parlamentario Socialista, correspondiente a las enmiendas números 87 a 104.

Para su defensa, tiene la palabra el Senador Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Gracias, señor Presidente.

Paso a defender conjuntamente, y con la mayor brevedad posible, las enmiendas números 87 a 104. Como ustedes saben, este proyecto de ley tiene su origen en un conjunto de reales decretos que permitían, de acuerdo con el

Gobierno, liberalizar la economía española, rebajar impuestos y dar un mejor tratamiento fiscal al ahorro. Y aunque de hecho ya lo habíamos indicado en algunas ocasiones, ha sido ahora la propia OCDE la que ha venido a certificar que este Gobierno es el que más rápidamente ha aumentado la presión fiscal en la última legislatura y, al mismo tiempo, con sus medidas contradictorias ha llevado a que el ahorro se encuentre bajo mínimos en estos momentos. (*La señora Presidenta ocupa la Presidencia.*)

Además, estas constantes medidas de cambio permanente de la situación de la fiscalidad inducen a pensar que el Gobierno intenta beneficiar o dar trabajo a los asesores fiscales y volver locos a los ahorradores, que van persiguiendo el mejor tratamiento fiscal. Por tanto, aun a riesgo de valorar excesivamente nuestra opinión, desde aquí quiero recomendar al Gobierno que procure estabilizar el tratamiento fiscal del ahorro, porque de lo contrario la gente no podrá planificar adecuadamente su inversión, lo que irá en detrimento del objetivo perseguido, de acuerdo con las declaraciones del propio Gobierno, que en definitiva consiste en mejorar el tratamiento fiscal del ahorro a medio y largo plazo y procurar hacer un traje a la medida de la economía española, traje que se nos había quedado pequeño, tal como el propio señor Vicepresidente Segundo del Gobierno manifestó en la presentación de los llamados decretos de liberalización.

Las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista tratan de posibilitar la aplicación de esas medidas a las inversiones y gastos que se efectúen en el presente año 2000. En este sentido, creo ocioso recordar que, pese a aprobarse dichas medidas mediante un decreto-ley, tal como he dicho en mi anterior intervención, todas aquellas modificaciones que afectan a nuevas deducciones verán demorada su entrada en vigor, por las propias previsiones de la norma, hasta el próximo período impositivo, el año 2001. Como ya he indicado antes, esto pone de manifiesto la extralimitación del Gobierno en el uso excepcional del instrumento legislativo, e implica además otra cuestión: el riesgo evidente de paralización de las decisiones de inversión. No hay más que intentar demostrar este extremo considerando que si, a partir del próximo 1 de enero de 2001, las inversiones en equipos informáticos y de acceso a redes de comunicación darán derecho a una deducción en la cuota del Impuesto sobre Sociedades, la consecuencia lógica de cualquier empresario o inversor será que, hasta dicha fecha, pospondrá la correspondiente inversión. A ello también tenemos que unir la inseguridad jurídica de unas medidas aprobadas por decreto-ley, que no entrarán en vigor hasta el año 2001, pero que los ciudadanos creen que, en este momento, una vez aprobado el decreto-ley en el mes de junio, ya están en vigor. Por tanto, nosotros entendíamos que en nuestras enmiendas debíamos intentar garantizar la inmediata entrada en vigor de los nuevos incentivos relativos a las denominadas empresas de reducida dimensión.

Respecto a los concretos estímulos e incentivos fiscales para dichas empresas, el Grupo Parlamentario Socialista entiende que el proyecto excluye, en razón del nivel máximo de facturación fijado, a una gran parte de las peque-

ñas y a la práctica totalidad de las medianas empresas y, en consecuencia, proponemos elevar el límite del importe neto de la cifra de negocios a 1.000 millones de pesetas. Ese límite está, como ustedes saben, en 500 millones de pesetas en el proyecto y, anteriormente, en 300 millones de pesetas; por tanto, es verdad que el Gobierno ha subido la facturación pero, en cualquier caso, de una manera insuficiente para acogerse a los beneficios de este proyecto de ley y, anteriormente, del real decreto. A su vez, pretendemos que se eleve a 3.000 millones de pesetas en el caso de las empresas industriales, dado que las empresas industriales, en principio, tienen una mayor facturación aunque los beneficios sean, lógicamente, menores.

También proponemos elevar del 10 al 20 por ciento el impuesto de la deducción en cuota por inversiones en gastos en tecnologías de la información y de la comunicación, que es algo que —como ya he dicho anteriormente— parece normal. Si tenemos que apoyar decididamente la innovación, desde luego, debemos hacerlo adecuadamente y no de una manera miserable, tal y como se propone aquí. Además, proponemos establecer una nueva deducción del 25 por ciento para las inversiones y gastos relacionados con la utilización de nuevas tecnologías en la fabricación.

En materia de tributación de las denominadas ganancias y pérdidas patrimoniales, nuestras enmiendas tratan de articular una alternativa a la regulación del Gobierno, que más adelante pasaré a pormenorizar.

Proponemos el otorgamiento de una deducción general de 100.000 pesetas anuales para aquellos rendimientos del capital mobiliario no susceptibles de otro tipo de reducciones. ¿Por qué? A este respecto recordaré que la nueva ley del IRPF suprimió la reducción que, con carácter, general y por importe de 29.000 pesetas anuales, existía para la determinación de los rendimientos netos del capital mobiliario. Es más, en el caso concreto de cuentas y depósitos bancarios, también se suprimió la posibilidad de deducción de los gastos de administración, lo que ha determinado que en multitud de ocasiones se esté tributando por un beneficio que no es tal, pues el hipotético rendimiento es, con creces, inferior a los gastos de la cuenta que la correspondiente entidad de crédito ha cargado ya al contribuyente. Tal situación, claramente contraria al principio de capacidad económica, afecta especialmente a los contribuyentes con bajos ingresos por este concepto impositivo, que tributan por cantidades que realmente no han percibido. Además, razones de simplificación del impuesto y de alivio de las obligaciones de los contribuyentes aconsejan, igualmente, el establecimiento de la reducción.

Por último, las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista están orientadas a asegurar durante el ejercicio del año 2000 la tributación de importantes plusvalías procedentes de determinadas operaciones de canje o permuta de acciones entre empresas que, a nuestro entender, no quedan garantizadas actualmente, así como a mejorar también la situación de los planes de pensiones de los cónyuges que no tengan ingresos por cuenta ajena o los tengan menores de 1.200.000 pesetas anuales.

En cuanto a la propuesta del nuevo tratamiento fiscal de las ganancias y pérdidas patrimoniales en el IRPIF, enten-

demostremos que el actual régimen, pese a intentar presentarse como un sistema que favorece a todos los contribuyentes, constituye en realidad un sistema injusto e inequitativo que infringe además los principios constitucionales de capacidad económica y progresividad, pues contribuyentes de muy distinta capacidad económica ven gravadas sus rentas de igual forma; por ejemplo, un contribuyente que obtiene una ganancia patrimonial de 50.000 pesetas al año paga de impuestos el mismo 18 por ciento que el que obtiene una ganancia patrimonial de 100 millones al año. Ello quiere decir que para rentas bajas y ganancias patrimoniales moderadas el sistema es radicalmente injusto, pues contribuyentes con tipos medios efectivos de gravamen en IRPF inferiores al 18 por ciento ven gravadas sus ganancias patrimoniales a dicho tipo fijo y único.

No podemos olvidar tampoco que el Gobierno del Partido Popular ha eliminado cuantas medidas favorables existían con anterioridad para los incrementos de cuantía moderada y, por tanto, el sistema aparece así como claramente perjudicial para rentas bajas, beneficiando exclusivamente y de forma desorbitada a aquellos perceptores de mayores ingresos. A todo lo anterior sumamos el hecho de que no existe ninguna presión que favorezca y estimule de forma real el ahorro a medio y largo plazo, pues basta el mero transcurso de un año para que todas las rentas tengan el mismo tratamiento fiscal.

Por último, no cabe duda de que someter cualquier ganancia patrimonial, por pequeña que ésta sea, al tipo del 18 por ciento complica a su vez la gestión del impuesto y además las cargas indirectas de los contribuyentes. Naturalmente, por tanto, el régimen fiscal que establece necesita una profunda corrección que, respetando los principios constitucionales de nuestro ordenamiento tributario, restablezca la equidad del sistema tributario y beneficie a la mayoría de los contribuyentes; mayoría que pensamos no debe pagar los elevadísimos beneficios fiscales sólo otorgados a los perceptores de las rentas más altas.

Por ello, hemos articulado una propuesta en las enmiendas que suponga una oferta suficientemente atractiva para que no se produzca deslocalización en las inversiones, y en esta materia hemos propuesto, como ustedes ya conocen perfectamente por mi intervención anterior, que queden exentas aquellas ganancias patrimoniales inferiores a un millón de pesetas, que las ganancias superiores de un millón hasta 25 millones tributen al 18 por ciento y que para 25 millones de pesetas anuales en adelante el tipo que se aplique sea, como he dicho anteriormente, el mismo que para todos los demás, el 35 por ciento, que es el que pagan las sociedades, y naturalmente ello contribuiría a mejorar la visión que la gente tiene de esta proposición. Además, para aquellos elementos patrimoniales adquiridos con más de cuatro años de antelación a la fecha de transmisión, la cuota resultante de la aplicación de los anteriores tipos quedaría reducida al 50 por ciento. Pensamos que la nueva propuesta de tributación que hemos establecido a través de las enmiendas llegaría a beneficiar a más del 99 por ciento de nuestras empresas, de acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria, lo que evidentemente contribuiría a dar una mayor legitimación social a la actual propuesta y, por su-

puesto, al objetivo fundamental, que es mejorar la situación económica que ya empieza a dar unos ciertos síntomas de debilidad; está quedando patente en los últimos tiempos con cierta claridad que hemos perdido competitividad con la zona euro, no precisamente debido al aumento de los precios del petróleo, sino a la falta de competencia y a la liberalización real de la economía que proponía el Gobierno en su actuación y que a través de esta cuestión no ha hecho más que enmascarar.

Nada más. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Lerma.

Corresponde ahora un turno para defender el voto particular número 4, del Grupo Parlamentario Popular, que podría acumular al turno en contra.

Tiene la palabra en ambos casos el Senador Sánchez Sánchez-Seco.

El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: Muchas gracias, señora Presidenta.

Efectivamente, quiero acumular ambos turnos.

El pasado día 6 de noviembre se reunió la Ponencia y posteriormente la Comisión de Hacienda, que aprobaba la tramitación para su debate en este Pleno del proyecto de ley por el que se aprueban medidas fiscales urgentes, como ya se ha dicho, de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa.

Dicho proyecto de ley —como de sobra es sabido— nos llega al Senado tras su aprobación inicial por el Gobierno como Decreto-ley y, posteriormente, en el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados se ha visto —como ya ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió— enriquecido con la aprobación de diversas enmiendas que, sin duda, han contribuido a mejorar y perfeccionar el sentido inicial que, desde el Gobierno de la Nación, se pretendía desarrollar con su aprobación, como es el apoyo a las empresas y familias, así como el fomento del ahorro y de la inversión.

Por tanto, nos encontramos ante un proyecto de ley verdaderamente importante para los ciudadanos de nuestro país y que forma parte de un conjunto —como ya se ha dicho— de cinco decretos-leyes aprobados por el Gobierno el pasado mes de junio, cuyo objetivo fundamental es profundizar en la liberalización de nuestra economía y consolidar el crecimiento económico y del empleo, que se ha registrado en España en los últimos años y actualmente sin signos claros de debilidad.

En ese sentido, yo recordaba el pasado día 6 en la Comisión de Hacienda, que ya en 1996, nada más tomar posesión del Gobierno don José María Aznar, también se adoptó un conjunto de medidas liberalizadoras, algunas de ellas novedosas en el ámbito de nuestra economía, y pudimos escuchar diversas y duras críticas, aventurando incluso —decía— negras expectativas económicas y sociales para nuestro país.

Afortunadamente, el tiempo y los años han demostrado que aquellas medidas se tomaron en el momento y direc-

ción adecuados y España ha crecido ininterrumpidamente por encima del 3 por ciento del producto interior bruto desde entonces —actualmente incluso por encima del 4 por ciento—, creándose más de 2 millones de puestos de trabajo y casi 2 millones y medio de altas en la Seguridad Social.

Por tanto, señorías, con este positivo balance parece lógico y conveniente que, ante el inicio de una nueva etapa de Gobierno, tras las elecciones del pasado día 12 de marzo, éste apruebe un conjunto de nuevas medidas que, en el caso que hoy nos ocupa, vayan dirigidas al estímulo del ahorro familiar y al apoyo a la pequeña y mediana empresa.

Yo creo que todos los grupos estamos de acuerdo —y ya se ha dicho aquí— que con este proyecto de ley se incide en ese apoyo a la pequeña y mediana empresa como principal columna vertebral de nuestra economía. Por una parte, ampliando el concepto de empresa de reducida dimensión en la aplicación del régimen fiscal especial de gravamen al tipo del 30 por ciento en el Impuesto sobre Sociedades y, por otra, elevando el límite del volumen de negocio, desde 250 a 500 millones de pesetas, es decir, a 3 millones de euros. Esto ya supone una importante medida, que permite duplicar el ámbito de aplicación de este régimen fiscal especial. Y hay algunas enmiendas —ya se ha dicho aquí— que han propuesto —al igual que se hizo en el Congreso de los Diputados— que se amplíe el concepto de pequeña y mediana empresa al límite de la cifra de negocios de 1.000 ó 3.000 millones de pesetas, según se trate de empresas industriales o no.

Asimismo, se ha presentado otra enmienda por parte de Izquierda Unida, proponiendo lo contrario, que el régimen especial de la pequeña y mediana empresa se reduzca a dos millones de euros, es decir, a 332 millones de pesetas aproximadamente.

Pues bien, el régimen de las pequeñas y medianas empresas, como ya he dicho, incorpora un importante beneficio fiscal y un grado significativo de flexibilización de las normas generales del Impuesto sobre Sociedades, y, además, de las deducciones que se incorporan en este mismo proyecto de ley, que se orientan a aquellas empresas que en el marco de nuestro sistema económico se entienden como verdaderamente pequeñas o medianas.

El límite propuesto en las enmiendas por parte de Entesa y el Grupo Socialista supondría que más del 98 por ciento de los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades pasarían a tributar por este régimen especial y, por tanto, perdería, precisamente, esa condición especial de esta propuesta. Lo contrario ocurriría con la propuesta de Izquierda Unida, cuyo límite propuesto supondría simplemente una mera actualización del que ahora existe, cuando lo que se pretende con esta medida es ampliar significativamente el ámbito del régimen para que un mayor número de empresas —60.000, concretamente, según cálculos del propio Ministerio de Hacienda— puedan beneficiarse de estas ventajas especiales de la pequeña y mediana empresa.

Algo parecido ocurre respecto al establecimiento de una nueva deducción del 10 por ciento que se recoge en el

texto del proyecto de ley por la adquisición de equipos y activos que impliquen una innovación tecnológica, así como por la formación del personal en el uso de las nuevas tecnologías, y respecto de lo que se han presentado enmiendas para su incremento, hasta el 15 por ciento en los gastos de formación por parte del Grupo de Convergència i Unió y hasta el 20 por ciento para ambos casos por parte de los Grupos Entesa y Socialista.

Hasta ahora no existía ninguna deducción por estos conceptos y se establece precisamente a través del proyecto de ley y antes en el Decreto-ley la novedad de esta deducción, no de forma caprichosa, sino tras un estudio serio que permita aplicar esta importante ventaja a las pequeñas y medianas empresas españolas. Sin embargo, se plantea, como si de una subasta se tratase, un importante incremento de estas deducciones, sin ningún tipo de argumentación y justificación seria en las enmiendas presentadas a este respecto.

La aplicación de este 10 por ciento de deducción, como decía, no es caprichosa. Se trata de una deducción de una cuantía significativa y fijada en coherencia con los restantes incentivos fiscales que se contemplan en el Impuesto sobre Sociedades. Por ello, la elevación de estas deducciones obligaría a replantear los porcentajes aplicables a otras deducciones existentes en el Impuesto sobre Sociedades para conservar dicha coherencia de los incentivos.

Se presenta también otro conjunto de enmiendas por parte del Grupo de Convergència i Unió que, a nuestro juicio —y lo hemos señalado particularmente—, son verdaderamente interesantes e importantes. De hecho, lo planteado en dos de ellas, las números 59 y 83, referidas a que se extienda la deducción de fomento de las nuevas tecnologías y gastos de formación a los autónomos y a las empresas sujetas a la estimación objetiva, ya se han incorporado, como hemos comentado previamente a este debate, al anteproyecto de Ley de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, o Ley de acompañamiento para el año 2001, como se la conoce más popularmente, y muy pronto tendremos la oportunidad de que se puedan aprobar precisamente en esta misma Cámara.

En lo que se refiere a la enmienda número 68, respecto al establecimiento de una nueva deducción para inversiones en prevención de riesgos laborales, nos parece importante, como ya se dijo en el Congreso de los Diputados, y, sin duda, habrá de tenerse en cuenta en el futuro de cara a tratar de conseguir una mayor sensibilización en todo lo que afecta a la seguridad en el ámbito laboral. Pero esta medida necesita, a nuestro juicio, de un estudio más sosegado, en el que participen también los agentes sociales como principales y directos factores de la medida.

Igualmente ocurre con la enmienda número 69, donde se propone el incremento del 10 al 25 por ciento de la deducción para inversiones medioambientales que supongan una mejora y aprovechamiento más racional del uso del agua. La verdad es que la deducción vigente en la actualidad del 10 por ciento se trata de una deducción de cuantía ya significativa y fijada también, como decía anteriormente, en coherencia con los restantes incentivos fiscales, por lo que ahora es complicada su modificación. Sin em-

bargo, se trata de una propuesta que paralelamente al debate del Plan Hidrológico, recientemente presentado y del que se ha hablado hoy mismo en esta Cámara, y a través de las negociaciones que se están desarrollando con el sector agrícola, podría estudiarse en un futuro.

Nos ha parecido muy interesante y positiva la enmienda número 61, que propone una subvención a todos los ciudadanos por la adquisición de equipos informáticos y software de conexión a Internet en el importe coincidente con el IVA soportado o el límite de 50.000 pesetas. Hemos estudiado esta propuesta y es muy complicada su aplicación desde el punto de vista técnico conforme al contenido establecido por la VI Directiva del Consejo en materia del Impuesto sobre el Valor Añadido, todo ello además del evidente elevado coste que ello supondría y que requiere un análisis más sereno para el futuro.

Respecto al grupo de enmiendas relacionadas con la empresa familiar, se acaba de constituir, como ha dicho ya el portavoz de *Convergència i Unió*, en el seno de la Comisión de Hacienda, una Ponencia que va a estudiar de manera específica y expresa todo aquello relacionado con este tipo de empresas, y nos parece que en base a ello debe ser precisamente en el marco de esa Ponencia donde se deben analizar todos aquellos aspectos que de una u otra manera mejoren la fiscalidad, determinen cuáles deben ser los porcentajes de participación significativos para un grupo familiar, o qué número de años es el más adecuado para asegurar la continuidad de la empresa tras beneficiarse fiscalmente en la transmisión.

Existen, por otra parte, otras enmiendas del Grupo de Entesa y del Grupo Socialista, relativas a la propuesta de incrementar y ampliar la deducción para el fomento del uso de las nuevas tecnologías de fabricación en lo que se refiere a empresas de actividades industriales y cuyo ámbito de aplicación resulta difícil de delimitar por la indefinición de algunos conceptos que se utilizan en el texto de la enmienda respecto a las deducciones a aplicar.

Además, lo que se pretende a través de este proyecto es concentrar el esfuerzo de la pérdida recaudatoria en las empresas que a nuestro juicio precisan de mayor incentivo y que son las pequeñas y medianas empresas, ello sin considerar que la configuración de incentivos exclusivamente en el sector industrial, como se propone en las enmiendas, resulta incompatible con la normativa comunitaria sobre ayudas del Estado.

Pero a este proyecto de ley que hoy debatimos también se incorporan importantes novedades que tratan de favorecer al conjunto de los ciudadanos a través del fomento del ahorro. La reducción a un año del plazo para la tributación de las plusvalías a un tipo fijo y su reducción del 20 al 18 por ciento permiten favorecer y facilitar la movilización de las inversiones y homologar el sistema fiscal español al existente en otros países. A este respecto, como ya se ha dicho, se han presentado varias enmiendas por parte de los Grupos Parlamentarios Entesa Catalana de Progrés, Socialista y Mixto (Izquierda Unida), en las que se propone una escala de dos tramos con un mínimo exento, aumentando al 20 por ciento el tipo aplicable a las plusvalías. En ese sentido, tenemos que reconocer que nos satisface que al-

gunos grupos hayan modificado algunos de sus planteamientos respecto a hace unos años, cuando planteamos también, como novedad, un tipo impositivo único del 20 por ciento frente al marginal y por ello, tras un largo debate, nos llevaron al Tribunal Constitucional.

Hoy, en esta reconversión impositiva que parece que se ha producido en los planteamientos de los grupos socialistas, se admite, y nos alegramos por ello, esta reducción de impuestos que desde el Partido Popular se ha venido realizando y que seguirá realizándose en el próximo futuro, al igual que en lo que se refiere al Impuesto de Actividades Económicas, ya que se ha presentado una enmienda del Senador Quintana en el sentido de limitar la condición del sujeto pasivo del impuesto a aquellas actividades cuya cifra de negocio sea superior a 20 millones de pesetas. Tenga la seguridad, Senador Quintana, de que ésta es una de las principales propuestas electorales de nuestro partido, que se llevará a cabo a lo largo de la presente legislatura y que está perfectamente estudiada y valorada. En cualquier caso, no parece adecuado que se haga en función del mayor o menor volumen de negocios de una empresa, tal y como usted propone, porque esto podría limitar las expectativas de muchos pequeños empresarios; lo ideal sería, y así se hará, a través de la no sujeción o exención de determinadas actividades.

Respecto a las enmiendas presentadas sobre el tipo impositivo único, al que me refería anteriormente, tengo que decir que con la reducción al 18 por ciento se pretende seguir con la rebaja de la imposición directa iniciada desde el Gobierno en 1996 y en 1998 tratando, además, de fomentar el ahorro y conseguir que España tenga un tipo competitivo en este aspecto frente al resto de los países de nuestro entorno.

Por otra parte, la propuesta de gravar las rentas que se integren en la parte especial de la base imponible a dos tipos diferentes no conseguiría el objetivo de mantener la progresividad del impuesto, porque ésta debe valorarse en su conjunto y no únicamente por la tributación de las ganancias a largo plazo, y menos aún solamente con dos tramos de la escala de gravamen. Además, dificulta uno de los objetivos de la propuesta: la sencillez en la tributación, que es lo que se consigue con el tipo único.

Otro de los aspectos importantes de este proyecto de ley se refiere a la mejora de la fiscalidad de los seguros de vida con el aumento introducido en la reducción de los rendimientos derivados en forma de capital y el refuerzo de la previsión social complementaria ampliando el límite de aportación a planes de pensiones y, en especial, la extensión a los cónyuges con rentas más bajas o que, como las amas de casa, no pueden trabajar. Así, se recoge una recomendación del defensor del contribuyente.

No entendemos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista respecto a la petición de supresión de la elevación de los coeficientes reductores aplicables a los seguros de vida, cuando se trata de una medida de incentivo al ahorro de previsión —y nos decía el señor Lerma que teníamos que hacer una previsión del ahorro a largo plazo— y se incorporan las prestaciones por invalidez permanente. Menos todavía entendemos las enmiendas números 36 y

58 de Izquierda Unida, que pretenden reducir la posibilidad de aportación de los cónyuges que no trabajan a los planes de pensiones, al igual que la limitación de las aportaciones para las personas mayores de 52 años y personas con minusvalías.

Precisamente, y aquí se ha hablado de ello, a través del Pacto de Toledo se estableció como una de las conclusiones básicas el fomento de los sistemas complementarios de previsión social. En la prensa de hoy podemos leer cómo el Gobierno alemán, formado por socialistas y verdes, aprobará hoy mismo en el Consejo de Ministros su nuevo Plan general de jubilaciones atendiendo a una previsión futura social importante. En concreto, el Pacto de Toledo establecía como conclusión básica la flexibilidad en el régimen de aportaciones de los trabajadores que accedan a tales sistemas en edad avanzada, y, por extensión, esta elevación debe tener su reflejo en el régimen de personas con minusvalías.

La extensión del régimen fiscal de los planes de pensiones a cónyuges con rentas bajas o que no trabajan es una medida que implica un claro apoyo al ahorro familiar y, sobre todo, responde a una demanda social existente en la actualidad. Ése es, precisamente, el espíritu de este proyecto de ley: tratar de favorecer y ayudar al conjunto de los ciudadanos. Con ese espíritu, en el trámite parlamentario del Congreso de los Diputados se incorporaron nuevas iniciativas para mejorar los planes de pensiones de los discapacitados o establecer un plan de ahorro para deportistas profesionales que les facilite su integración en la vida laboral una vez finalizada su, por lo general, corta vida deportiva.

El tercer aspecto fundamental que se recoge en el proyecto de ley se refiere al establecimiento de diversas medidas de estímulo a la inversión de nuestras empresas en el exterior, continuando así el proceso ya iniciado en 1996, y que ha supuesto que en tan sólo cuatro años la inversión bruta española en el exterior haya pasado de 600.000 millones a 8 billones de pesetas. Con este objetivo se mejoran los mecanismos para eliminar la doble imposición económica internacional por las actividades empresariales desarrolladas en el extranjero, ya sea a través de filiales o con establecimientos permanentes. De esta forma las plusvalías generadas en España pagan sus impuestos en España, pero quedan exentas las generadas en territorio no español, siempre que ese territorio no sea paraíso fiscal y grave con impuestos similares a los existentes en España. Por tanto, se pretende mejorar la presencia de las empresas españolas en el exterior, porque con ello contribuimos a la mejora competitiva de nuestro país.

En ese sentido, una de las novedades que presenta el proyecto de ley es añadir al criterio porcentual tradicional del cinco por ciento, el establecimiento de un nuevo criterio relativo a la cuantía absoluta de participación mínima de las entidades de tenencia de valores extranjeros en entidades no residentes por importe de seis millones de euros, es decir, 1.000 millones de pesetas a efectos de su exención por los dividendos o rendimientos obtenidos de la participación en dichas entidades. A este respecto se han presentado enmiendas de supresión de este nuevo criterio

por los grupos parlamentarios Socialista y de Senadores Nacionalistas Vascos.

La implantación de este nuevo criterio obedece precisamente al propósito al que antes me refería, y que determina el espíritu de este proyecto de ley, que es favorecer, facilitar la presencia de las empresas españolas entre el accionariado de las grandes corporaciones extranjeras, cuya cifra de capital hace inalcanzable una participación del 5 por ciento, pero en las que, aun por debajo de ese límite, se obtiene un grado de presencia relevante en función del volumen absoluto de la inversión. La cuantía mínima de la inversión se ha fijado en seis millones de euros, con la voluntad de no establecer umbrales de participación que sólo están al alcance de las mayores empresas de nuestro país. De esta manera también las empresas medianas y pequeñas, pero especialmente las medianas, pueden adquirir en condiciones fiscales competitivas participaciones relevantes en entidades extranjeras. Por otra parte, la cuantía es congruente con la que está establecida en otros países de la zona euro, como Bélgica, Alemania y Luxemburgo. Junto al objetivo de apoyar las iniciativas de internacionalización de nuestras empresas, también se trata en el proyecto de ley de facilitar la movilidad de los trabajadores españoles en el extranjero, y de simplificar sus obligaciones fiscales relativas al tratamiento de las rentas obtenidas por su trabajo en el extranjero.

Por último, en el proyecto de ley también se abordan otras medidas de gran calado y trascendencia económica y social para el conjunto de los ciudadanos, como la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio de la vivienda habitual del contribuyente cuando su valor fiscal no exceda de 25 millones de pesetas. También en este sentido existe una enmienda de Izquierda Unida que propone que se reduzca esa exención a los 15 millones de valor de la vivienda. La verdad es que es una medida claramente favorecedora para el conjunto de los ciudadanos, ya que en la mayoría de las capitales españolas el precio medio a pagar por una vivienda está en torno a la cantidad fijada en el proyecto de ley.

Se han presentado varias enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista sobre el momento de la entrada en vigor de esta ley, considerando que debe entenderse con efectos desde la publicación del Real Decreto-ley que da origen al proyecto de ley que hoy debatimos. Esto supondría que las novedades introducidas deberían aplicarse en el período impositivo en curso, dando origen a la coexistencia de dos regímenes tributarios diferentes durante el mismo período impositivo. La eficacia de los incentivos depende de su capacidad para ordenar conductas futuras en los contribuyentes, lo que justifica que su contenido se aplique exclusivamente a los hechos y actos que tengan lugar a partir de su aprobación, pero no antes.

En definitiva, en el Grupo Parlamentario Popular entendemos que nos encontramos ante un proyecto de ley que, tras su paso por el Congreso de los Diputados, se ha completado con numerosas enmiendas que han mejorado notablemente el objetivo prioritario del Real Decreto-ley, que es contribuir a fomentar el ahorro y la inversión de las familias y las empresas españolas.

Por ello, en este trámite, desde nuestro Grupo presentamos un conjunto de 16 enmiendas que fueron aprobadas en Ponencia y en Comisión, que vienen a tratar de mejorar, desde el punto de vista técnico y de redacción, el texto de la exposición de motivos y del articulado del Real Decreto-ley, junto con las enmiendas que se introdujeron en el Congreso de los Diputados, además de incluir a través de la enmienda número 106 una rebaja del período de mantenimiento de las inversiones en bienes muebles a tres años, a efectos de las deducciones aplicables en el Impuesto sobre Sociedades, todo ello en línea con lo establecido también en el Real Decreto-ley 10/2000, de apoyo al transporte por carretera. También se introdujeron algunas aclaraciones respecto al ámbito de aplicación de las entidades de tenencia de valores en el extranjero, en los términos que eviten la doble imposición en el régimen de fusiones.

Por otra parte, ya en este trámite en el que nos encontramos, se propone un voto particular para que, de acuerdo a como quede el contenido definitivo del proyecto de ley en estos momentos, se realice una reordenación del conjunto del articulado en los términos propuestos en el voto particular; es decir, la exposición de motivos o preámbulo, en los términos aprobados en la Ponencia, modificándose el Título III, para que pase a denominarse Medidas Relativas a las Ganancias y Pérdidas Patrimoniales y al Tratamiento del Ahorro y la Inversión; se crea también un Título V, que se denomina Medidas Relativas al Sistema de Pagos a Cuenta, y el articulado queda estructurado a través de cinco títulos y 39 artículos, que aglutina y recoge los 26 artículos anteriores más el décimo bis, así como doce disposiciones adicionales, permaneciendo dos de las que estaban ya incluidas, además de las cinco disposiciones transitorias, dos derogatorias y dos finales.

Completamos así una reordenación del articulado que pensamos mejora sustancialmente la sistemática de la ley, facilitando además su comprensión. Se trata por tanto de un conjunto de normas que contribuye, como decía anteriormente, a que España siga avanzando por la senda del crecimiento y el empleo, facilitando al conjunto de contribuyentes y a las pequeñas y medianas empresas españolas que se adapten en las mejores condiciones a las innovaciones tecnológicas, a la formación de su personal, reduciendo la carga fiscal impositiva, y ofreciendo un nuevo impulso al ahorro y a la inversión, a la vez que se mejoran las condiciones para una mayor internacionalización de nuestras empresas.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Terminado el turno en contra, comienza el turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (*Pausa.*)

¿Por parte de Coalición Canaria? (*Pausa.*)

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Albistur.

El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señora Presidenta.

Trataré de ceñirme al tiempo que se me ha asignado, fundamentalmente para, habiendo escuchado al representante del Partido Popular en cuanto a la contestación a las enmiendas y la defensa de su enmienda número 121, indicar que nuestro Grupo no va a referirse a ella porque consideramos que se debería haber incorporado al dictamen anteriormente, y para realmente plantear la opinión general que tenemos sobre este proyecto de ley.

Debatimos un proyecto de ley que tiene una buena intención, pero que termina incorporando una serie de medidas que más parecen un cajón de sastre con remiendos fiscales, cuyo origen era reducir el impacto de la inflación en familias y en pequeñas y medianas empresas, y facilitar la generación de ahorro, necesario todo ello para dotar de estabilidad a las familias ante próximos cambios de coyuntura, sostener la presencia internacional y el acceso a la tecnología de nuestras pequeñas y medianas empresas. Todos ellos objetivos loables y que apoyamos, pero que nos parecen insuficientes por resultar medidas limitadas, como antes he explicado, y realizadas mediante un método, el decreto-ley, no suficientemente justificado salvo por razones de estricto oportunismo político.

En el Congreso ya denunciábamos este método no justificado porque no se centró el tema político en atender a familias y pequeñas y medianas empresas —colectivos con recursos medios y limitados, objeto preferente de atención de cualquier Gobierno que se precie de ejercer una función social— y porque se introdujeron, aprovechando el desarrollo del real decreto en un proyecto de ley, medidas de carácter fiscal que benefician a grupos económicos, empresas, individuos y familias con relevantes recursos patrimoniales y financieros, favorecidos ya por la coyuntura económica actual y por la actuación privatizadora del Gobierno. Me refiero a los títulos relativos al régimen de tenencia de valores extranjeros, a las exenciones por compra de participaciones en el extranjero y a determinadas deducciones por aportaciones elevadas a fondos de pensiones, aunque consideramos que algunas de ellas sí deben ser aprobadas pero quizá teniendo en cuenta la realidad sociológica de nuestra sociedad.

Hay dos conclusiones claras. Este decreto-ley reconoce por el Partido Popular y por el Gobierno que Europa no es el extranjero. Invertir y tomar posiciones en Europa, sobre todo posiciones empresariales, es como hacerlo en cualquier territorio de Comunidad Autónoma pero con la diferencia de que en Europa hay que salvar enormes dificultades, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas que quieren consolidarse y afincarse en su mercado natural e inmediato. Si no se apoya este objetivo empresarial prioritario todo planteamiento es utopía e ineficacia de los beneficios fiscales, y todos sabemos cuáles son las incertidumbres existentes en otros mercados, como los de América Latina, los de Extremo Oriente o los del Norte de África.

Además de ser limitativa y discriminatoria esta actuación, plantea más limitaciones para la futura ampliación de la Unión Europea. ¿Qué pasará con los esfuerzos de acuerdos empresariales, aperturas del mercado o inversiones conjuntas que nuestros empresarios hacen actualmente en

Polonia, Chequia, Hungría, Eslovenia, etcétera, o que hagan en un futuro? ¿Qué va a pasar con ello? ¿Lo que hoy vale mañana, por el acuerdo de adhesión de estos países, desaparece? ¿Se encarece la acción empresarial entonces? ¿Se introduce de alguna manera una cierta trampa al empresario? ¿Ya ha pensado alguien de este Gobierno en estas consecuencias que, sin embargo, en la ley van a quedar mantenidas?

La segunda conclusión es que, según el Ministerio de Hacienda, para obtener deducciones fiscales efectivas para el bolsillo y ahorro de las familias e individuos, hay que tener un mínimo respetable de años, 65, y ser rico. ¿Cuántos jubilados del Estado pueden realizar una dotación anual de dos millones y medio de pesetas a un fondo de pensiones y cuántas familias de la sociedad española? ¿Se trata de un fomento del ahorro y del ahorro-pensión que es la mejor opción posible con carácter general o universal o sólo aplicable a un grupo selecto de la sociedad? Nuestro Grupo no lo ve nada claro.

Finalmente, terminaré esta parte con un pequeño comentario. No hay un incentivo fiscal movilizador del ahorro e impulsor de la actividad empresarial de la pequeña y mediana empresa fundamentalmente. Se favorecen fiscalmente unas determinadas operaciones y se beneficia a determinado tipo de empresas y personas físicas que ya están beneficiadas por la coyuntura favorable actual y se produce, a nuestro modo de entender, un detrimento de los ingresos públicos con un escaso influjo social.

El texto ha experimentado un número considerable de cambios. No hay un parecido entre el decreto-ley aprobado en junio, el proyecto entrado en el Congreso, el proyecto debatido en el Congreso, el proyecto salido del Congreso, el proyecto entrado en este Senado y el proyecto que va a salir del Senado actualmente. Aquí hay un auténtico travestismo jurídico o, más bien, un auténtico monumento a la falta de criterio político e improvisación política realizada desde el Gobierno y su partido. De las veintiséis páginas que tiene el documento, veintiuna son nuevas. En realidad hemos debatido aquí un nuevo proyecto de ley que consideramos que era necesario acomodar a la cambiante realidad y adecuar a los problemas que el decreto dejaba fuera o que, mediáticamente, han sido denunciados por la sociedad. ¿Pero por qué no se ha hecho todo esto habiendo negociado con la oposición? ¿Es que la oposición, en este Senado, no tiene ideas? Es una pregunta que dejo bien clara porque me parece muy grave. No se ha admitido una sola enmienda.

Este proyecto sale sólo con las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. A nosotros este tema nos parece muy grave. Quizás a ustedes le valga con aprobar este limitado proyecto de ley que, por otra parte, no aporta soluciones para mejorar las condiciones de ahorro de las familias ni contribuye a impulsar efectiva y eficazmente la actividad de la pequeña y mediana empresa. ¿Cómo van a medir ustedes los resultados de este proyecto? ¿Cómo nos los van a demostrar? Ustedes actúan en función de un oportunismo político, a nuestro modo de ver de cortas miras. Aplican su mayoría. Eso es algo que pueden hacer legítimamente, pero les recordaré también otro asunto que

afecta al equilibrio que ustedes han roto también en esta ley.

El Grupo Parlamentario Popular sabe que el 18 de enero del presente año se firmó un acuerdo entre el Gobierno central y las administraciones vascas con el fin de evitar conflictos cruzados en materia fiscal. No hace falta recordar que hay cinco Haciendas en el Estado español: la alavesa, la navarra, la guipuzcoana, la vizcaína y la del resto del Estado. Cada una con sus competencias exclusivas en materia impositiva. La coordinación y el acuerdo entre ellas son necesarios. Así lo establece también el Estatuto y el concierto económico. Cuando no se respeta el pacto fiscal, cuando no se informa a las instituciones correspondientes, vascas o navarras, de sus intenciones en los temas tributarios, se adoptan las medidas y luego se pone el grito en el cielo si las Haciendas forales correspondientes no hacen un seguimiento de sus medidas, se producen conflictos innecesarios. Hay que ser más respetuoso con lo que establece el Estatuto de Autonomía y el propio concierto económico. Si ustedes eximen del pago de impuestos —legalmente, por supuesto— a una empresa que opera en cifra relativa de negocios, es decir, que opera en territorio vasco en este caso y en territorio común, sus decisiones afectan a las arcas vascas, y eso es muy serio. Parece lógico que, respetando el pacto fiscal, las administraciones tributarias se pongan de acuerdo antes de que ninguna medida entre en vigor, cosa que no se hace en este proyecto de ley. Respeten señorías, nuestras competencias en materia tributaria y no toquen el bolsillo de los ciudadanos vascos, al menos sin que ellos lo sepan previamente.

Terminaré reconociendo una acción positiva que se refiere fundamentalmente a la supresión de las limitaciones en el derecho a deducir en el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto General Indirecto Canario en los supuestos de percepción de subvenciones para actividades de investigación, desarrollo o innovación tecnológica. Ustedes han acertado, pero es la quinta vez, desde el año 1995, con Presupuestos del PSOE, que nuestro Grupo presenta esta misma enmienda. Era una demanda importantísima de los centros de investigación para proyectos no competitivos. Era un absurdo que se estaba produciendo en nuestra sociedad y en el medio empresarial, sobre todo en el mundo de la pequeña y mediana empresa, que proyectos que recibían subvención tuvieran una importante carga en materia de IVA. Absurdo porque la subvención concedida por organismos públicos quedaba diluida. Éste es un elemento verdaderamente incentivador. Se lo reconozco, y nuestro Grupo también lo hace porque lo ha defendido con resultados negativos hasta el presente. Ustedes se llevan hoy día la medalla, y lo reconocemos. Nos parece que debe ser así, porque verdaderamente éste sí que es un elemento que contribuye a mejorar una situación de adquisición tecnológica por parte de la pequeña y mediana empresa. Hagan muchas cosas de éstas y nos tendrán con ustedes.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Albistur. Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el Senador Gibert.

El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señora Presidenta, señorías.

En mi anterior intervención creo haber puesto de manifiesto nuestras discrepancias en un aspecto concreto de este proyecto de ley, pero la verdad es que, además de esos que se referían a una enmienda concreta, tenemos más problemas.

Por ejemplo, tenemos problemas de procedimiento. Y me explico. Cuando se utiliza el sistema legislativo de decretos se supone que hay una verdadera urgencia en hacerlo y que lo que se quiere lograr está meditado por el Gobierno. Pero no parece que haya urgencia en este caso, ya que varias de las medidas —no todas— no entran en vigor hasta el 1.º de enero de 2001; por tanto, no parece que su adopción fuera urgente en junio. En condiciones normales se hubiera utilizado la ley de acompañamiento, y aunque no se trata de que ahora defendamos determinados usos de dicha ley —usos que hemos criticado varias veces—, no consideramos adecuado que si realmente no hay urgencia se sustituya un procedimiento que no es el correcto —como es incluir en la ley de acompañamiento un gran número de medidas— por el de establecer dichas medidas a través de decretos. Lo adecuado, si hay tiempo para ello, es tramitar proyectos de ley desde el principio. Y repito que, por lo menos en lo que afecta a parte de la ley, no existía tal urgencia.

Tampoco parece que éste sea un tema meditado, porque el Gobierno tramitó este decreto-ley urgente en el mes de junio, pero el propio Grupo Popular presentó en el Congreso 34 enmiendas, que no son pocas, y 16 ó 17 en el Senado —no estoy seguro del número—, que son bastantes. Y la paradoja se produce porque la oposición fuerza la tramitación de dos de los seis decretos como proyectos de ley, y sin dicha tramitación el Grupo Popular no hubiera tenido ocasión de presentar todas esas enmiendas, que configuran otro proyecto de ley porque se han incluido toda clase de retoques y parches fiscales —como ha ocurrido otros años en la ley de acompañamiento— utilizando esa percha. Por tanto, repito una vez más que, de no existir urgencia, no nos parece el procedimiento adecuado. Además, se ha utilizado el rodillo, porque parece improbable que alguna de las enmiendas que han presentado los grupos de la oposición merezca como mínimo el interés de su estudio y discusión.

Pero tenemos más problemas. Me limitaré en este apartado a dos cuestiones concretas de contenido, para no extenderme demasiado. La primera de ellas se refiere al límite al tamaño, en cifras de negocio, de las empresas beneficiarias de estímulos a incentivos fiscales, principalmente las de innovación tecnológica. En este sentido, algún día tendremos que ponernos de acuerdo sobre qué es o no una PYME, porque, como decía el señor Lerma, un límite fijado en 500 millones no solamente excluye a muchas pequeñas empresas, y prácticamente a todas las medianas, lo que es cierto, sino que, con cualquier fuente estadística que usemos, establece el límite en empresas de menos de 10 trabajadores. Pero si verdaderamente se quiere estimular la innovación tecnológica habrá que contemplar entre los incentivos a más empresas y al tipo de

empresas que realmente está en condiciones de innovar, por lo que se debe abarcar a empresas de mayor tamaño y no sólo a las microempresas que recoge el proyecto.

El señor Sánchez decía en su intervención que tal como se presentan las enmiendas se abarcaría al 98 por ciento de las empresas, pero no es así; se abarcaría solamente a las empresas que innovaran, que es lo que se supone que se pretende, y que probablemente no sean el 98 por ciento, aunque si lo fueran, tanto mejor.

Un segundo concepto de contenido que no consideramos adecuado se refiere a la forma de incentivar las inversiones en informatización. Y haré dos consideraciones al respecto. En primer lugar, creo que entre todos debemos educar lo más rápidamente posible, y a cuantos más ciudadanos mejor —y, por supuesto, a todos los jóvenes y niños— en las habilidades informáticas, y probablemente lo demás venga por añadidura. Pero hagámoslo bien, porque, como creo que también ha dicho acertadamente el señor Lerma, paradójicamente, este decreto está generando retrasos en algunas inversiones. En efecto, puesto que los beneficios tendrán lugar a partir del 1.º de enero de 2001, hay empresas que pueden beneficiarse que en estos momentos están posponiendo sus inversiones en equipos informáticos hasta el 1.º de enero, y no sabemos cuáles son las ventajas de esa situación.

Finalmente, y por lo que se refiere al tratamiento fiscal de las ganancias patrimoniales en el IRPF, queremos hacer constar una vez más que un solo tipo del 18 por ciento, sin considerar en absoluto la magnitud de las plusvalías, no nos parece justo. Pensamos que debería haber como mínimo dos tipos, como hemos sostenido muchas veces. Tampoco nos parece estimulante el actual sistema para el ahorro a medio y largo plazo, y debería haber un tipo reducido para bienes patrimoniales adquiridos con más de cuatro años de antelación a la fecha de trasmisión, si es que de verdad se pretende estimular también en líneas generales el ahorro a medio y largo plazo.

Por lo tanto, por razones de procedimiento de carácter general —como ya he dicho antes— y también por cuestiones concretas, estamos en desacuerdo con muchas de las prescripciones de este decreto-ley, y votaremos consecuentemente con esta posición.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Gibert.

En nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Cambra.

El señor CAMBRA I SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.

Voy a intervenir muy brevemente para contestar al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el Senador Sánchez Sánchez-Seco, que ha hecho mención concreta a dos de las enmiendas que hemos presentado.

En relación con la enmienda número 83, ya lo he dicho antes en la tribuna, el hecho de que después se apruebe en la ley de medidas es positivo para nosotros porque se habrá aprobado algo que consideramos importante pero, sin acritud, permítame que le haga una refle-

xión de tipo formal. En esta Cámara se ha criticado alguna vez, por parte de algún grupo de la oposición, el que en la ley de medidas se aprobaran disposiciones que modificaban leyes que aún no habían entrado en vigor y dentro de pocas semanas batiremos este récord porque, en el Congreso, se están votando hoy en la ley de medidas asuntos sobre leyes que aún no se han aprobado, como es el caso de este proyecto de ley, del que estamos hoy en pleno trámite. Nos cuesta entender esto porque, además, creemos que se hace en perjuicio de los afectados por el proyecto de ley; es mucho más sencillo saber cuál es el alcance de una disposición y a quién afecta si se encuentra contenida en un único proyecto de ley que si hay que consultar dos proyectos de ley. Concretamente, los textos de la enmienda 83 y de la disposición adicional que contiene la ley de medidas que está actualmente en el Congreso hablan de que la disposición contemplada en el artículo tercero del Título I de este proyecto de ley también afectará a las más pequeñas empresas que están sometidas al régimen de módulos.

Es evidente que para el ciudadano es más fácil saber que el alcance de una determinada medida se contiene en un único proyecto de ley que no decirle que, posteriormente, habrá otra ley que va a modificar ésta, que todavía no hemos aprobado.

Desde un punto de vista formal, no lo entiendo. Si se debe a que es más efectiva una medida si tiene como origen un proyecto que va a elaborar el Gobierno, que si se introduce a través de una enmienda que presenta otro grupo que no es el mayoritario, tengo que decir —como ha hecho antes el señor Albistur— que para nosotros no es una cuestión de medallas; quédense la medalla para ustedes, pero voten la enmienda y facilitemos que el ciudadano entienda cómo se tramitan las leyes en una Cámara y, por prestigio de las Cámaras legislativas, no introduzcamos una misma medida a través de dos proyectos de ley. Me parece que no es racional y aunque, en cualquier caso, estaremos contentos de que se haya aprobado, no nos parece, formalmente, la mejor manera de hacerlo y, además, no encuentro una explicación lógica.

En cuanto a la enmienda número 77, tengo que decir que la votaron en contra hace dos años y medio, lo cual es lícito y democráticamente ustedes pueden hacerlo, pero no apelen a que hay una ponencia creada al efecto porque no hace ningún bien a la Cámara. El Senado ha ganado prestigio constituyendo comisiones especiales y ponencias de estudio sobre temas concretos. Sin embargo, hay un dicho popular en el ámbito genérico de la empresa, de las asociaciones y las entidades según el cual cuando alguien no quiere resolver algo, lo que hace es encargar su estudio a una comisión, y espero que este dicho popular no se aplique nunca al Senado.

Por tanto, respetamos que ustedes no estén de acuerdo con la medida que proponemos, voten en contra, pero no apelen a que se ha creado una ponencia porque ello no beneficia en nada al Senado ni a la creación de la ponencia.

Nada más y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cambra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Gracias, señora Presidenta.

Intervengo con mucha brevedad para decir que en este proyecto de ley el Grupo Parlamentario Popular ha batido, como decía ahora mismo el representante de Convergència i Unió, un récord. Ha dejado tramitar un Real Decreto-ley como proyecto de ley para, a continuación, no aceptar ninguna enmienda. Además, no se han conformado con eso sino que se han enmendado a sí mismos en el Congreso y, a la vez, en el Senado, y no con pocas enmiendas. Parece que, como mínimo, el Gobierno había sacado un paquete liberalizador con los reales decretos-leyes que no había estudiado y, ciertamente, improvisar en materia fiscal es, cuando menos, arriesgado.

Además, y es muy importante, un Gobierno que se enmienda a sí mismo exclusivamente y no admite ninguna enmienda de los demás, desde luego tiene poca sensibilidad social; probablemente yo iría más lejos. En cualquier caso este Gobierno, como mínimo, ha pecado de improvisación en esta cuestión, cuando no de algún olvido involuntario, de algún interés que quería representar. Lo cierto es que los reales decretos de liberalización en el caso concreto de Hacienda estaban poco estudiados si nos atenemos a la realidad, que es que el Gobierno se ha enmendado a sí mismo tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado y no ha aceptado ninguna enmienda más. Parece que ha hurtado un debate importante a la sociedad porque además esto ha sido tramitado por el procedimiento de urgencia y no ha habido ocasión de tener un debate social.

Por tanto, señores del Gobierno, no utilicen más el real decreto-ley para asuntos que no tienen ninguna justificación o si lo hacen, no lo tramiten después como proyecto de ley si no van a aceptar ninguna enmienda. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

Nada más. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Lerma.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Sánchez.

El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: Gracias, señora Presidenta.

Ya he manifestado en mi anterior intervención que el conjunto de enmiendas que formularon los distintos grupos parlamentarios prácticamente eran idénticas a las que se presentaron en su momento en el Congreso de los Diputados. Por otro lado, también en mi intervención analizaba aquellas enmiendas que en su conjunto pudieran tener una mayor incidencia en el espíritu del proyecto de ley que estamos debatiendo.

Hay que tener en cuenta que se trata de 120 enmiendas presentadas en el Senado que pasaron por una primera instancia, que fue la Ponencia, aunque algún Senador no pudo asistir a la misma, y posteriormente por la Comisión de Hacienda. Ahora en esta Cámara hemos tenido la oportunidad de debatirlas.

Siento sinceramente si he dejado de contestar a algunas de las enmiendas y de explicar el motivo por el que no han sido aceptadas, pero pienso que ha primado fundamentalmente el interés del conjunto del proyecto de ley. Creo sinceramente también que esta ley se ha analizado de forma profunda y que ha enriquecido y completado muy adecuadamente las enmiendas incluidas en el Congreso de los Diputados. El señor Lerma afirmaba que no se ha aceptado ninguna enmienda y no es cierto, se han aceptado bastantes, como decía el portavoz de Convergència i Unió en el Congreso de los Diputados, donde se ha enriquecido de manera notable este en principio Real Decreto-ley y ahora proyecto de ley.

Con nuestras enmiendas nuestro Grupo ha pretendido mejorar técnicamente lo que ya en su momento se había aprobado en el Congreso de los Diputados, y especialmente la redacción de algunos flecos que no quedaron definitivamente completos en la Comisión en que se debatió en esa Cámara, proponiendo una nueva exposición de motivos que recogiera el espíritu concreto del proyecto de ley y una reordenación de su articulado, ya que tras las enmiendas y novedades introducidas precisamente en el Congreso había quedado un tanto deslabazado el conjunto del proyecto de ley; ello quiere decir que se habían aceptado numerosas enmiendas y por eso precisamente había quedado así.

En definitiva, pensamos que se trata de un proyecto de ley con numerosas aportaciones para el ahorro y la inversión del conjunto de la sociedad española. Puede existir alguna pequeña discrepancia, concretamente el portavoz de Convergència i Unió afirmaba que se podía haber incluido lo relativo a las deducciones de la estimación objetiva singular o módulos. La verdad es que ha coincidido el debate del proyecto de ley con la ley de acompañamiento. Hay que tener en cuenta que la ley de acompañamiento se presentó en el Congreso de los Diputados el 30 de septiembre y que se publicó el 13 de octubre en el Boletín. Pero insisto en que se presentó el 30 de septiembre y ya figuraba este artículo que ha coincidido con la enmienda de Convergència i Unió. La verdad es que lo de menos es si se incluye aquí o en la ley de acompañamiento. Pensamos que lo importante es que se va a dar cobertura a las pequeñas y medianas empresas, concretamente a los autónomos y a los empresarios en estimación objetiva singular a fin de que puedan acogerse a estas deducciones de innovación y formación de su personal.

Y respecto a la ponencia relativa a la empresa familiar, me ha sorprendido que su señoría diga que se puede crear una ponencia para no resolver nada. Entiendo que precisamente la ponencia se ha creado para intentar una serie de iniciativas a la empresa familiar, al tiempo que resolverá algunos de los aspectos que después pueden incluirse ya sea en la próxima ley de acompañamiento, ya sea en cualquier otro proyecto de ley que se debata, en tanto en cuanto se aprueba este proyecto de ley.

Por último, en contestación al portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, he visto que tiene un tono un tanto agresivo, como ya lo tuvo también el otro día en la Comisión, donde se equivocó —y lo

siento— respecto a la ponencia, si bien nos alegra que, en conjunto, como ha manifestado, reconozca que con este proyecto de ley se avanza de forma importante en el estímulo del ahorro y la inversión en las pequeñas y medianas empresas. Aunque ha dicho que no abarcaba a muchas, lo importante es que se aplica para un importante conjunto de empresas pequeñas y medianas de nuestro país un régimen especial por el que van a tributar al 30 por ciento en el Impuesto sobre Sociedades y un conjunto de deducciones de las que se podrán beneficiar en el futuro.

Y respecto a que no toquemos el bolsillo de los ciudadanos vascos, la verdad es que el bolsillo de los ciudadanos vascos para todos nosotros tiene tanto valor como el bolsillo de todos los ciudadanos de España y lo importante es que se vean beneficiados y favorecidos todos los españoles, sean estos vascos, gallegos, catalanes o andaluces.

Nada más y muchas gracias. *(Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)*

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

Llaman a la votación, por favor. *(Pausa.)*

Vamos a proceder a votar el dictamen de la Comisión de Hacienda en relación con el proyecto de ley por el que se aprueban medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa.

Las votaciones comienzan por las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, separadas en dos bloques.

Primer bloque, enmiendas números 12 a 21.

Comienza la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 189; a favor, nueve; en contra, 130; abstenciones, 50.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Segundo bloque de enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, de la número 22 a la número 58.

Comienza la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 190; a favor, tres; en contra, 129, abstenciones, 58.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos en un solo bloque, de la 1 a la 3.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 190, a favor, 57, en contra, 124; abstenciones, nueve.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.

Votamos ahora la propuesta de modificación del dictamen que propone la supresión del artículo 11, que tiene el número de registro 8.294.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 189; a favor, 58; en contra, 131.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la propuesta de modificación del dictamen.

Las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió las vamos a votar en tres bloques.

Primer bloque, números 61, 64, 68, 69, 77, 83 y 85.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 192; a favor, 59; en contra, 124; abstenciones, nueve.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el primer bloque de enmiendas.

Segundo bloque presentado por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, enmiendas números 67, 79, 80, 84 y 86.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 192; a favor, seis; en contra, 124; abstenciones, 62.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

El tercer bloque de enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió sería todo el resto de sus enmiendas.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 192; a favor, siete; en contra, 176, abstenciones, nueve.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista en dos bloques. En primer lugar, las números 96, 98, 100, 101, 102 y 104.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 192; a favor, 58; en contra, 131; abstenciones, tres.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas anteriormente citadas.

Votamos, ahora, el resto de enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 191; a favor, 59, en contra, 124; abstenciones, ocho.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Finalmente, vamos a votar la enmienda número 121 presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 191; a favor, 129; en contra, 62.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la enmienda número 121.

Por último, votamos el texto del dictamen con la incorporación de la enmienda que acaba de ser aprobada.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 191; a favor, 128; en contra, 56; abstenciones, siete.

La señora PRESIDENTA: Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.

Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las diez horas con el Informe del Defensor del Pueblo.

Eran las veintiuna horas.